

Presentación

La primera revolución libertadora en América Latina fue la de los esclavos de la colonia francesa en la isla de Santo Domingo, en lo que hoy es Haití. Los Jacobinos Negros, dirigidos por Toussaint Louverture, derrotaron a los colonialistas, causaron cien mil muertos a los ingleses que trataron de sustituir a los franceses en esa riquísima colonia, aplastaron a los ejércitos franceses del Directorio y construyeron un Estado. Cuando Simón Bolívar, enfermo y derrotado, recurrió a su ayuda, el presidente Pétion lo curó, le dio armas, alimentos y una nave para su expedición, apoyó poderosamente la lucha por la libertad de las colonias de España en América del Sur.

Haití –sus masas pobres, populares, sus intelectuales– están en los orígenes mismos de la libertad y la independencia latinoamericana.

Sin embargo, dos siglos después, el país de Louverture ha sido repetidamente ocupado por Estados Unidos, empobrecido, explotado, y se ha transformado en uno de los más pobres del mundo y en el más pobre, en todos los órdenes, de nuestro continente, tras sufrir en el último siglo la terrible dictadura de los Duvalier padre e hijo y sus Tonton Macoutes y, después, la sangrienta transformación del gobierno de Aristide y su movimiento Lavalas (el Alud, en créole). Hoy, en plena crisis mundial del sistema capitalista y cuando asistimos a los intentos de debilitar al máximo los Estados nacionales, el pueblo haitiano –bajo la ocupación militar, nuevamente, pero esta vez de las Naciones Unidas– debe intentar crear, a contracorriente, un aparato estatal viable y creíble y dar un cauce democrático a la sociedad civil sumida en la miseria y el caos.

La solidaridad material de algunos países –como Cuba, con su asistencia sanitaria y en el campo de la educación, o Venezuela, que subsidia los combustibles y los programas sociales haitianos– no basta para ello: es necesario también un aporte intelectual militante que ayude a sacar a Haití del aislamiento y el olvido, bases eternas del pesimismo y la desesperación.

Ese es el sentido profundo del Primer Seminario Internacional “Las dinámicas de la construcción democrática en América Latina,

el Caribe y Haití”, realizado en septiembre de 2007 en Puerto Príncipe, con los auspicios del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Fundación por una Europa de los Ciudadanos, con motivo de la inauguración de la Fundación Gérard Pierre Charles.

Como en la Italia de posguerra, después de la derrota militar y la caída del fascismo, para discutir la reconstrucción del Estado y del país se reunieron en este seminario todas las corrientes del pensamiento político constitucional, excluyendo sólo a quienes se habían comprometido con las dictaduras, de modo que entre los materiales que aquí publicamos se encuentran tanto intervenciones de conocidos políticos neoliberales como contribuciones de diferentes tipos de demócratas hasta llegar a pensadores revolucionarios.

Haití ha sufrido demasiado el intervencionismo y el paternalismo: el país debe decantar un pensamiento y una orientación con sus propias fuerzas y capacidades, que son muchas, y debe hablar con su voz, no por bocas ajenas. Nuestros calificados lectores sabrán juzgar las distintas opiniones y ser interlocutores de los autores haitianos que más les interesen. La posición cubana a este respecto, que aquí publicamos, pensamos que es fructífera y muy respetable: tomar conciencia de la importancia geopolítica de la región y ayudar en lo posible a su liberación, retribuyendo al apoyo de los Jacobinos Negros al libertador Simón Bolívar.

Dada la gran importancia que tuvo el seminario, cuyos trabajos comenzamos a publicar en este número, hemos superado en mucho el tamaño habitual de la sección *Debates* y nos hemos visto obligados a postergar las intervenciones en dicho evento relativas a otras regiones o problemas latinoamericanos, que reservamos para la misma sección, en el próximo número.

Como puede observarse, también por razones de espacio, hemos reestructurado nuestro temario publicando en *Experiencias de los movimientos sociales* un artículo sobre la UNISUR, universidad de indígenas y para las diversas etnias indígenas mexicanas del estado de Guerrero, que es un aporte a la autonomía de los pueblos indígenas, a la construcción y reconstrucción de su papel cultural en la historia del país y al aprendizaje de la autogestión además de una importante experiencia en el campo de la educación popular. En la misma sección presentamos un artículo sobre el I Concurso Latinoamericano de Documentales Otras Miradas.

Asimismo, publicamos una entrevista a Jorge Eduardo Rulli, incansable luchador contra los monopolios sojeros y coordinador del Grupo de Reflexión Rural (GRR), en la cual analiza la influencia negativa de ese cultivo monopólico sobre el ambiente, la demografía y la situación social de los campesinos en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.

Por último, dadas las movilizaciones populares y campesinas en México contra los efectos deletéreos del Tratado de Libre Comercio norteamericano y contra las medidas privatizadoras gubernamentales, hemos decidido dar a conocer los pronunciamientos de los diversos componentes de los movimientos sociales, uniéndolos en un dossier que, pensamos, posee valor informativo (y anticipatorio). También y al igual que en el número anterior, se incluye en este un excelente video: se trata en este caso de *Hartos Evos aquí hay. Los coccaleros del Chapare*, dirigido por Héctor Ulloque Franco y Manuel Ruiz Montealegre, premiado en el I Concurso Latinoamericano de Documentales "Otras Miradas" organizado por el Programa de Comunicación Audiovisual de CLACSO.

Este número de *OSAL* aparece con el mismo Comité de Redacción pero con otro Director —el que suscribe— ya que Maristella Svampa, la Directora de muy alto nivel y grandes cualidades personales que antes tenía esta publicación, ha debido alejarse de este cargo, al igual que José Seoane, que por años tuvo a su cargo la revista. Al mismo tiempo que lamentamos su decisión, agradecemos calurosamente sus importantes y valiosos aportes respectivos y esperamos poder mantener el prestigio del *OSAL* logrado en el anterior período.

Guillermo Almeyra

Director de la revista *OSAL*

Seminario Internacional

«Las dinámicas de la construcción democrática en América Latina, el Caribe y Haití»

Inauguración de la
Fundación Gérard Pierre Charles
26, 27 y 28 de septiembre de 2007

Entre el 26 y el 28 de septiembre de 2007, en la ciudad de Puerto Príncipe, Haití, tuvo lugar el Seminario Internacional “Las dinámicas de la construcción democrática en América Latina, el Caribe y Haití”, promovido por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Fundación por una Europa de los Ciudadanos, con motivo de la inauguración de la Fundación Gérard Pierre Charles. El encuentro contó con la presencia de Suzy Castor, viuda de Gérard Pierre Charles y directora del Centre de Recherche de Formation Economique et Sociale pour le Développement (CRESFED), Emir Sader (Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO) y reconocidos intelectuales e investigadores abocados al análisis de la realidad latinoamericana tales como Guy Duval (México), Anthony Phelps (Canadá), Camille Chalmers (Haití), Raquel Sosa (México), Hérold Jean François (Haití), Milagros Martínez (Cuba), Max Jean Zines (Francia), Darío Salinas Figueredo (México), Johanna von Graffenstein (México), Rosny Smart (Haití), Nilsa Medina (Puerto Rico), Néstor Sánchez (República Dominicana), Armando Fernández (Cuba), Francisco Cueto (República Dominicana), Cary Hector (Haití), Carlos Figueroa Ibarra (México), Fritz Deshommes (Haití) y Mario Serrano Marte (República Dominicana), entre otros.

En un emotivo acto de apertura, familiares y amigos de quien fuera uno de los más destacados intelectuales haitianos, homenajearon su trayectoria recordando sus principales contribuciones al campo políti-

co y académico, destacando su lucha inquebrantable por la democracia y la justicia social en el Caribe. El acto contó con la participación de más de 400 representantes de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones políticas y movimientos sociales del país. Asimismo, se hicieron presentes representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Justicia de Haití y de las embajadas de Chile, Cuba, Brasil y México. Buscando afianzar el intercambio y los lazos de cooperación entre Haití, los países del Caribe y el resto de la región, el Seminario abordó el tratamiento de un conjunto de temáticas clave para el análisis de nuestras realidades. Las tensiones entre gobernabilidad y democracia; las formas y procesos de la mundialización capitalista; los déficit y desafíos de la integración regional; las características de las dinámicas evidenciadas por los procesos democráticos latinoamericanos; el medio ambiente y la integración regional; las nuevas configuraciones de la organización y la movilización social; la pobreza y los desafíos de la construcción democrática, fueron algunos de los principales debates.

Tal como lo expresara enfáticamente Suzy Castor, esta iniciativa inédita ha adquirido una relevancia sumamente significativa para la consolidación de canales de comunicación y puentes de interacción entre Haití y el resto de América Latina. Es la primera vez, en las últimas décadas, que se reúnen en este país tantos intelectuales latinoamericanos y latinoamericanas, así como de Europa, para discutir las actuales perspectivas para la construcción democrática. Haití forma parte del escenario latinoamericano pero ha tradicionalmente vivido a espaldas y de espaldas a él. Por su parte, América Latina y Europa han observado la realidad haitiana con indiferencia y un silencio cercano al desprecio. El conocimiento de las problemáticas evidenciadas y las alternativas experimentadas tanto en el Caribe como en el resto de los países de la región constituye, sin lugar a dudas, una pieza fundamental para la profundización y la complejización de los debates haitianos. Pero, además, la visibilización de la realidad haitiana constituye un elemento central para el análisis de las perspectivas de la integración regional. Vínculos de esta naturaleza resultan de vital importancia para el establecimiento de propósitos y líneas de acción conjuntas que propicien la construcción de alternativas democráticas y de un horizonte de igualdad y dignidad para nuestros países.

No tendremos una América Latina democrática mientras la población haitiana continúe siendo víctima del hambre, la injusticia, la opresión y la humillación. Procesos negados y silenciados por las élites políticas de la región, o reducidos a mero problema militar, a ser resuelto por la vía autoritaria y represiva. La denuncia de esta situación constituye una tarea ineludible para el pensamiento crítico latinoamericano. La presen-

cia de las tropas extranjeras en Haití socava cotidianamente la soberanía de su pueblo. La refundación haitiana requiere un profundo replanteo y una ambiciosa elaboración de alternativas que abarquen las diversas dimensiones de la vida económica, política y social del país. El reestablecimiento de estructuras institucionales que definan los marcos para el funcionamiento social, el desarrollo económico orientado hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población y el establecimiento de alianzas regionales, constituyen algunos de los principales desafíos para la consolidación de un pueblo dueño de sí mismo y artífice de su propio futuro.

Sin lugar a dudas, el legado de Gérard Pierre Charles, mediante la Fundación que hoy lleva su nombre, nos permite vislumbrar algunos atisbos hacia este camino. El Seminario Internacional que acaba de terminar en Puerto Príncipe es solamente un momento ínfimo, aunque fundamental, para la construcción de este futuro de solidaridad y compromiso con la justicia y la lucha por la emancipación.

Emir Sader

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO

Florencia Stubrin

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO

Algunas opiniones sobre el Seminario

“Este Seminario que se hace con motivo de la inauguración de la Fundación Gérard Pierre Charles tiene para nosotros un significado muy importante, ya que siempre fue una de nuestras preocupaciones esenciales establecer puentes permanentes entre América Latina y Haití. Y hoy asistimos a un encuentro histórico donde el intercambio de experiencias sobre los procesos de construcción democrática en diversos países enriquece enormemente nuestras reflexiones. La discusión en torno a problemas teóricos amplios debe estar acompañada por debates sobre la realidad latinoamericana. La gran mayoría de los intelectuales latinoamericanos que participaron de este congreso es la primera vez que visitan nuestro país. América Latina forma parte del espacio haitiano y, de hecho, estamos viviendo casi de espaldas.

Por otra parte, cabe mencionar que es la primera vez que, como ha ocurrido hoy por la mañana, estudiantes haitianos tienen la posibilidad de interpelar a representantes gubernamentales en un espacio colectivo y plural de debate y reflexión. El peor de los analfabetismos es el analfabetismo político. Combatirlo debe ser el primer paso para consolidar los horizontes de la construcción democrática en Haití.

Haití no puede estar aislada de América Latina y América Latina no puede desconocer a Haití. Yo estoy convencida de que los lazos se establecen cuando hay contactos de esta naturaleza, donde algo que es teórico o hipotético se vuelve un hecho de la realidad presente. Los necesarios procesos de edificación institucional y de promoción del desarrollo económico en pos de la satisfacción de las necesidades básicas de la población haitiana requieren una estrecha colaboración con nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños que viabilice la construcción de vínculos de integración regional alternativos.

Este gran esfuerzo que hemos iniciado junto a CLACSO y la Fundación Europa para los Ciudadanos es un primer paso en esta dirección. En nombre de Gérard y honrando su memoria quiero brindarles mis más sinceros agradecimientos por aventurarse a compartir con nosotros estos desafíos”.

Suzy Castor

Viuda de Gérard Pierre Charles, directora del CRESFED

“Es la primera vez que en el ámbito político académico se reúnen tantas personas de tantos países de la región para discutir alrededor de una problemática que concierne profundamente a Haití, como es el tema de la construcción democrática. La inauguración de la Fundación Gérard Pierre Charles es una de las mejores maneras de sacar a Haití de su aislamiento, dando a conocer cómo pensamos los académicos haitianos y generando un intercambio que se perpetúe en el tiempo. Gérard ha sido un verdadero portavoz de Haití en América Latina y en el mundo. Su figura representa una profunda voluntad de integración, una palabra de progreso y de crítica que hoy se expresa y sale a la luz.

Las fuerzas políticas haitianas están inmersas en una especie de inmediatez que imposibilita el cumplimiento de su papel. Los partidos son débiles, están escasamente institucionalizados y se ven completamente incapaces de asumir sus responsabilidades. Es sumamente necesario avanzar hacia la consolidación de fuerzas políticas democráticas que puedan disputar el poder para definir e implementar programas y acciones

de carácter público en función de los intereses manifestados por el conjunto de la sociedad haitiana. Haití es uno de los países más afectados por el hambre, la miseria y la desesperación. Por eso, los desafíos son mayores”.

Sabine Manigat

Profesora de la Universidad Quisqueya,
editora del periódico *Le Matin*

“La realización de un Seminario sobre América Latina y el Caribe con Haití como uno de sus actores principales es un hecho sumamente significativo porque nuestro país ha estado, a lo largo de las últimas décadas, completamente marginalizado del resto del continente latinoamericano. Por otra parte, la vertiginosa dinámica de la coyuntura política reciente nos ha dejado muchas veces sin la oportunidad de tomar la necesaria distancia crítica para la reflexión. Tener la oportunidad de escuchar lo que sucede en otros países del continente enriquece nuestros análisis sobre la realidad política, económica y social.

Haití vive una transición bloqueada desde hace muchos años. Por lo tanto, nuestra prioridad hoy es pensar cómo refundar un Estado que se ha derrumbado y cómo avanzar hacia la construcción de instituciones políticas efectivamente democráticas. En el Seminario se han manifestado diferentes diagnósticos y enfoques acerca de lo que pasa y acerca de lo que debería pasar para lograr la mencionada reconstrucción del Estado haitiano. Espacios como estos resultan sumamente necesarios para propiciar la crítica y la reflexión sobre nuestra realidad. Por eso celebro esta iniciativa y felicito y agradezco enormemente a sus organizadores”.

Rosny Smart

Ex Primer Ministro del gobierno de René Préval

“Recordar y homenajear a una personalidad como Gérard Pierre Charles nos da a todos una gran alegría y un enorme entusiasmo, porque se trata de un hombre con el que compartíamos la lucha por la reivindicación de los ideales de justicia e igualdad y el sueño del progreso democrático.

Yo conocí a Gérard y estuve con él en varias oportunidades durante el exilio y puedo afirmar, fervientemente, que además de un intelectual brillante y un activista que manifestaba un compromiso militante incomparable se trataba de una excelente persona. La dimensión internacional que ha adquirido este Seminario es la mejor manera de rendir culto

a un hombre que fue la expresión más acabada de la conciencia latinoamericana e internacionalista.

Quiero destacar además que el carácter multidimensional de los temas abordados durante el Seminario y la autenticidad de las manifestaciones culturales que tuvieron lugar en su inauguración expresan de forma fiel la constante preocupación de Gérard Pierre Charles por la unidad del pensamiento y la acción. La reflexión y construcción de conocimientos críticos deben responder a los fines de la transformación social si queremos, al igual que Gérard, ser intelectuales consecuentes y revolucionarios. Este coloquio debe ser el punto de partida para la consolidación de espacios de debate tanto a nivel nacional como en los ámbitos latinoamericano e internacional donde la reflexión, al servicio de la acción, den continuidad (u origen) a la construcción de un nuevo Haití, de una nueva América Latina y de un nuevo mundo”.

Yves Wainwright

Profesor de la Universidad del Estado de Haití

Nota biográfica

Gérard Pierre Charles (1935-2004)

Nacido en la ciudad de Jacmel, Haití, Gérard Pierre Charles, cientista social y economista de profesión, se convirtió en uno de los principales referentes intelectuales y políticos del Caribe. Su legado y su obra representan, sin lugar a dudas, una de las más importantes contribuciones para el pensamiento crítico en la región.

Perteneciente a una familia numerosa de clase media baja, comenzó a participar desde niño en los movimientos de acción cultural de su ciudad natal. Gérard quedó huérfano a los diez años de edad y al poco tiempo contrajo una seria poliomielitis, enfermedad que lo obligó a usar muletas el resto de su vida. Durante la adolescencia, ya radicado en Puerto Príncipe, trabajó como obrero en una usina de cemento, donde se inició en la militancia política mediante la activa participación en un grupo de la Jeunesse Ouvrière Catholique (Juventud Obrera Católica) y la conformación del sindicato del sec-

tor. En 1957 fue cofundador de la Union Intersyndicale d'Haïti (Unión Intersindical de Haití), personificando la defensa de los derechos laborales durante el inicio del régimen dictatorial de François Duvalier. Persiguiendo la concreción de una revolución nacional democrática y antiimperialista que acabase con los vínculos feudales en Haití, hacia fines de la década del cincuenta, participó de la fundación del Parti d'Entente Populaire (Partido de la Concertación Popular, PCP), que años después se fundió con otras organizaciones para dar origen al Partido Unificado de los Comunistas Haitianos (PUCH).

En 1960, cuando el recrudecimiento de la represión del régimen de Duvalier se hizo insostenible, Gérard debió partir hacia el exilio junto a su familia y se radicó en México, donde permaneció por más de veinticinco años dando clases de economía y ciencias sociales en El Colegio de México y escribiendo lo que sería buena parte de su obra. *Radiografía de una dictadura*, uno de sus principales escritos, describe y repudia de forma dramática y contundente la crueldad del totalitarismo duvalierista. Fue, además, director del Departamento de Estudios del Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Luego de la caída de Duvalier, en 1986, Gérard retornó al país para internarse de lleno en el proceso de democratización y, rompiendo con el PUCH, apoyó la candidatura presidencial del sacerdote Jean Bertrand Aristide quien, electo en 1990, fue depuesto al año siguiente por una nueva dictadura militar. Luego de haber contribuido a la formación del movimiento Lavalas, que propició la vuelta de Aristide al poder, Pierre Charles y un conjunto de militantes se escindieron del mismo repudiando fuertemente las políticas implementadas por el otrora líder democrático. Entonces se conformó la Organización del Pueblo en Lucha (OPL), principal organización de la Convergencia Democrática, frente de oposición al gobierno de Aristide. Durante esos años, grupos simpatizantes del presidente saquearon y quemaron la residencia de Gérard y el centro de estudios que había construido junto a su esposa Suzy Castor. El clima institucional del país poco tenía que ver con los principios democráticos defendidos por las fuerzas políticas revolucionarias de fines de los años ochenta. Durante el segundo mandato de Aristide, la situación política y social de Haití se tornó aún más dramática. En el año 2003, fuerzas opositoras se levantaron en todo el país para exigir su renuncia, al tiempo que Pierre Charles era propuesto por varios organismos extranjeros como candidato para el Premio Nobel de la Paz. Poco después, el presidente fue secuestrado por militares estadounidenses y los cascos azules ocuparon el país.

Mientras nuevas esperanzas de emancipación invadían algunos corazones haitianos, el 10 de octubre de 2004, a los sesenta y ocho años de edad, Gérard Pierre Charles falleció en un hospital de La Habana.

La transición haitiana: entre los peligros y la esperanza

Suzy Castor

Socióloga. Doctora en Historia. Directora del CRESFED.

Resumen

El artículo desarrolla la tesis de que, para completar la tarea encargada a las fuerzas militares de la ONU en Haití, es necesario reforzar y reconstruir el Estado y reorganizar la policía nacional para que exista seguridad.

Abstract

The article develops the thesis that, to complete the task charged to military forces of UN in Haiti, it is necessary to reinforce and rebuild the State and reorganize the national police to ensure the existence of security.

Palabras clave

Institucionalización; Estado; Policía; Consenso; Seguridad; ONU.

Keywords

Institutional policy; State; Police; Consensus; Security; NU.

Cómo citar este artículo

Castor, Susy 2008 "La transición haitiana: entre los peligros y la esperanza" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

Tres fines de siglo turbulentos han marcado etapas importantes en la historia de Haití. Pese a su alejamiento en el tiempo y las contradicciones y objetivos diversos que los han caracterizado desde el siglo XVII, tres comienzos de siglo se encuentran entrelazados con la presencia de tropas extranjeras que desempeñaron un papel importante en la evolución del proceso histórico de Haití.

A fines del siglo XVIII la sublevación general de los esclavos en 1789 puso en marcha una de las revoluciones más complejas de los tiempos modernos con sus características racial, antiesclavista, anticolonial y social, con repercusiones excepcionales en tres continentes. Después de una lucha titánica contra 60.000 veteranos de las conquistas napoleónicas, los ex esclavos sacuden el yugo colonial en 1804, a principio del siglo XIX, y proclaman la independencia. La revolución se basaba en un consenso sobre la abolición de la esclavitud, la consolidación de la independencia y la construcción de un nuevo país, el cual no excluía de ninguna manera intereses múltiples y contradicciones en la naciente sociedad. La coexistencia se imponía frente a los peligros que representaban las metrópolis colonialistas, racistas y esclavistas.

Una gran coherencia era necesaria para afrontar de manera simultánea las tareas de defensa de la libertad, de la independencia, del desarrollo y de la integración de una nación en gestación.

A fines del siglo XIX, en la república oligárquica consolidada durante dicho siglo, el sistema poscolonial empieza a dar signos de agotamiento. Se enfrenta a las dificultades de crecimiento y busca, en medio de muchas contradicciones, consolidar un Estado capaz de asegurar la modernidad exigida por la segunda revolución industrial en el campo internacional. La falta de hegemonía y las limitaciones estructurales y sistémicas constituían factores de freno al desarrollo económico y de la sociedad toda. Esta crisis se manifestó con acuidad a principios del siglo XX en un momento en que el imperialismo naciente lleva a los Estados Unidos a considerar a toda América Latina como su zona de expansión natural y al Caribe como su patio trasero. Así, en 1915, el desembarco de los *marines* estadounidenses inicia la ocupación más larga (1915-1934) de la zona Caribe-Centroamérica. La crisis de hegemonía se resuelve de facto y la modernidad buscada se traduce en el orden establecido por el ocupante, a partir de un reacomodo del poder político con el ejército, recién creado, como columna vertebral.

Este modelo, después de tres decenios de funcionamiento, entró en crisis. Para mantener el statu quo, la dictadura duvalierista de carácter personalista y oscurantista implementó un sistema de poder basado en la violencia institucionalizada y el terrorismo de Estado. Con el

refuerzo de los mecanismos tradicionales de control, Duvalier “formalizó la crisis”, según la expresión de Michel-Rolph Trouillot.

Por último, a finales del siglo XX, la larga y tenaz lucha del pueblo haitiano desembocó en 1986 en la extensión de un movimiento antidictatorial sin precedentes que obliga a los aliados nacionales e internacionales del régimen a deponer a Jean Claude Duvalier para salvaguardar sus intereses. Esta nueva etapa abrió una larga transición que cubre el fin del siglo XX y el naciente siglo XXI. Una vez más, la misma se desarrolla con la presencia de una fuerza multinacional en el país.

La transición: del consenso a la polarización

En este proceso de ya 22 años, se ponen al desnudo, como jamás quizás en nuestra historia, las contradicciones y antagonismos que atraviesan la sociedad haitiana. La crisis no resuelta desde principios del siglo XX, los 20 años de solución impuesta de la ocupación estadounidense y los 30 años de un poder absoluto llegan a expresarse en forma dramática. Marcan la vida del pueblo con consecuencias no sólo políticas sino también económicas, sociales, culturales, psicológicas e incluso en las pautas de comportamiento de la población.

La transición post duvalierista tuvo un costo enorme para el país. En sus expresiones pluridimensionales, se pueden distinguir cuatro fases que marcaron este proceso histórico.

- De la caída de los Duvalier en 1986 a la elección de Jean Bertrand Aristide en 1990, los militares, herederos del régimen, trataron de reconstituir un duvalierismo sin Duvalier. Las luchas reivindicativas y la movilización del pueblo y de la sociedad civil en general contra el neodualismo crearon antagonismos crecientes. Los militares reprimieron pero fueron incapaces de dominar al movimiento democrático y popular que, en combates difíciles, marcados por avances y retrocesos, llegó a romper el empate en las elecciones del 16 de diciembre de 1990, derrotando al ejército y al sector duvalierista.
- La segunda fase comprende el gobierno de Aristide, de diciembre de 1990 a septiembre 1991, fruto del gran movimiento social. Por primera vez desde la ocupación norteamericana, el ejército ya no es fuente de poder y la clase política tradicional está desplazada. Los excluidos entran en escena por la vía real: el sueño de participación política se conquista con la legitimidad po-

pular y constitucional en elecciones crebles. La crisis de hegemonía parece hallar formalmente una salida. Durante estos 7 meses se realizan algunos progresos desde el punto de vista legal pero muy poco en lo que respecta a la mejoría de las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, la sensación –no la realidad– de acceso a la ciudadanía y a la soberanía representó un potencial que podría haberse convertido en una palanca para avanzar en la construcción de una nación por fin integrada.

La experiencia reveló rápidamente ser una ilusión con el violento golpe de Estado militar realizado por un ejército cada vez más gangsterizado. Pese a la brutal represión, la resistencia popular se reforzó. En plena época de posguerra fría, el ejército perdió sus aliados tradicionales. Tropas estadounidenses procedieron a reponer en el poder al presidente constitucional.

- La tercera fase corresponde al restablecimiento en el poder de Jean Bertrand Aristide y de la *Fanmi Lavalas* (octubre de 1994- febrero de 2004). El regreso del “sacerdote de los pobres” trajo nuevas ilusiones y oportunidades pero también rupturas, derivas y perversiones. La disolución de hecho del ejército constituyó uno de los avances significativos de esta etapa. Sin embargo, el contenido populista del discurso presidencial y la ausencia de proyecto afectaron la legitimidad del régimen. Al pretender poner el aparato de Estado al servicio de un hombre, el gobierno desembocó en la reproducción de todos los viejos esquemas del pasado: abusos de poder, corrupción, clientelismo, autoritarismo, y acentuó las deformaciones económicas y sociales del sistema. La desinstitucionalización rompió todos los diques de contención en el seno de la sociedad y del poder, y condujo a una desagregación social creciente, a una situación socioeconómica cada vez más deteriorada y a la desarticulación de la sociedad. Se asistió a la incapacidad de gestión del poder Lavalas, Jean Bertrand Aristide-René Préval-Jean Bertrand Aristide, con un juego de alianzas cada vez más reducido, una disminución creciente de la capacidad de movilización, una perversión sistemática de grandes sectores ayer entusiastas. Esto tuvo graves

consecuencias que se reflejaron en la desilusión y la desesperación de amplias capas de la población.

- La cuarta fase comprende la salida de la transición (marzo 2004-febrero 2011). Muchos se preguntan si el nuevo período abierto con la salida de Jean Bertrand Aristide del poder no podría considerarse como la última etapa de la transición. El gobierno interino de Alexandre Boniface-Gérard Latortue tenía como objetivo poner en marcha y hacer funcionar el aparato del Estado completamente destruido, realizar las reformas indispensables para reforzar la institucionalidad y combatir la inseguridad de manera que el próximo gobierno, con toda la legitimidad que le conferirían las elecciones, encontrase un camino allanado para poner al país en los rieles de la modernidad y de la justicia social. No cumplió con su misión. Sin embargo, pese a irregularidades evidentes que hay que deplorar, en las elecciones de febrero de 2006 llegó a instalar con toda legitimidad al presidente René Préval y al Parlamento.

El actual gobierno Préval-Alexis tiene que cumplir la agenda no realizada por el gobierno interino. La población cansada espera entrar en la etapa de construcción, habiendo brindado un período de gracia de ya más de dos años al nuevo gobierno que está gobernando, de manera inédita, sin oposición.

Elementos básicos para la comprensión del proceso

No se pueden explicar las dificultades encontradas sin referirse a algunos factores que constituyen el telón de fondo del transcurso de esta transición.

En primer lugar habría que referirse a la acentuación del deterioro socioeconómico. Son conocidos los índices que hacen de Haití el país más subdesarrollado del continente, el modelo amenazante a no seguir: alrededor del 56% de la población por debajo de la línea de pobreza absoluta; una esperanza de vida de 58,1 años; 39% de analfabetismo; 49% de niños sin escolarización; 75% de la población sin acceso a agua potable. En el medio rural, solamente el 13,1% de los habitantes llega a satisfacer adecuadamente sus necesidades de alimentos. De hecho, tal situación resulta de la extensión del sistema de exclusión de las mayorías y de la debilidad estructural del aparato productivo, que se manifiesta en el carácter arcaico de la estructura agraria, la desestructuración del mundo rural y la expulsión del campesino hacia las ciudades o al exterior como

«La desintegración económica se vuelve general y golpea a todos los sectores sociales, beneficiando sólo a ciertos círculos, cada vez más reducidos»

boat people, sin el crecimiento concomitante de otro sector económico. Si el sector agroindustrial no ha podido desarrollarse, tampoco se ha logrado promover la industria maquiladora, la actividad turística, la artesanía o la producción agrícola orientada hacia el mercado interno o hacia el exterior.

En la última década del poder Lavalas, nuevos factores facilitaron la circulación monetaria y permitieron la supervivencia del país: la ayuda internacional bilateral o multilateral, remesas de divisas de los emigrados, tráfico de drogas, contrabando y especulaciones de toda clase. Sin embargo, una realidad se impone cada vez más: *el país no produce*, mientras aumenta el consumo.

La desintegración económica se vuelve general y golpea a todos los sectores sociales, beneficiando sólo a ciertos círculos, cada vez más reducidos. Importantes sectores de la burguesía tradicional están desplazados; la clase media, ya muy reducida, está aplastada y las condiciones de vida de los sectores populares se tornan cada vez más inhumanas. Cabe destacar el aumento de los ingresos fiscales y el equilibrio macroeconómico señalados por el Fondo Monetario Internacional como índices muy positivos de crecimiento durante los dos últimos años. Sin embargo, estos no se han traducido en un impulso significativo a proyectos de inversión pública, ni en las condiciones de vida de la población que asiste cotidianamente a su empobrecimiento. Esta situación contiene en sí misma una violencia que podría estallar en cualquier momento.

Al mismo tiempo, en relación a las etapas anteriores, esta transición ofrece mayor complejidad y novedades. En efecto, la *multiplicidad de los actores* que entran en el escenario, o por lo menos que adquieren cierta visibilidad, "complica" la vida política tradicional. El campesinado, que desde la ocupación de EE.UU. había sido excluido del escenario político; la población de los nuevos barrios marginales, surgidos

en los últimos años; las clases medias; los habitantes de las provincias se enfrentan a los actores tradicionales debilitados, que son minoría. La Iglesia católica, bajo el empuje de la *petite église*, de las comunidades eclesiales de base, se había convertido, al final de la dictadura, en lugar de reivindicación y de acción democrática. En los primeros años de la transición retrocedió en sus tomas de posiciones. Tiene que enfrentarse además a la fuerte competencia de los cultos reformados. Se divide y se debilita. El ejército, columna vertebral del sistema, derrotado políticamente desde 1990, sobre todo después de su absurdo golpe de Estado en 1991 contra un presidente democráticamente elegido, fue disuelto en 1994 y desapareció del escenario político. Y, por último, el actor internacional adquirió una dimensión aplastante en su influencia en las tomas de decisión políticas, lo que hace desaparecer la misma noción de soberanía nacional.

Los excluidos reclaman su participación

En Haití se codean dos mundos, dos modos de vida, articulados sin embargo entre sí en la dinámica de funcionamiento del sistema social. La existencia de uno se explica por la presencia del otro. Sin embargo, por vez primera, los excluidos pretenden su inclusión no sólo social sino también política. Esta pretensión, muy novedosa en el panorama político, dificulta sobremanera la transición.

Las dos reivindicaciones que atraviesan esta época, dignificar al hombre y cambiar el Estado, aunque utilizadas de manera confusa, acarrear un contenido claro. Por una parte, el respeto de la dignidad del hombre y el derecho a la ciudadanía para todos y, por la otra, la exigencia de un sistema político donde las reglas del juego y las leyes sean respetadas y de una nueva institucionalidad que permita la realización de un proyecto nacional y favorezca la participación real de todas las capas sociales.

Los sectores de la burguesía y la clase política tradicional no llegan a vislumbrar las mutaciones que se están operando en el seno de la sociedad. En este contexto de una permanente y casi unánime contestación, los métodos de contención, de cooptación, de dominio y aun de represión de la elite dominante pierden su eficacia. Frente a las demandas de estos nuevos actores colectivos, el régimen político se debilita y pone al desnudo su incapacidad de gobernar, de responder a las exigencias de participación y de bienestar de la población, así como de mantener la cohesión social y su propia legitimidad.

La *marcada polarización de esta etapa* que nace de las contradicciones y confrontaciones que sacuden esa sociedad de carencia se caracteriza por una lucha política sumamente aguda que no deja de

ser pacífica y está marcada por la prioridad de lo político. Sin embargo, los incontables asesinatos políticos o de carácter colectivo, el constante desplazamiento interno de población, la emigración masiva de *boat people* o de profesionales explican la gran polarización social que caracteriza al país.

El arcaísmo del sistema y la incapacidad del Estado para cumplir con sus funciones nacionales promueven, de manera cada vez más evidente, la búsqueda de una solución a una crisis total. Esta, precisamente por su carácter histórico-estructural y su grado de madurez, dificulta toda tentativa de recomposición. En efecto, se da, por una parte, la difícil renovación del sistema socioeconómico y político por parte de la vieja oligarquía y la muy reciente clase política. Por la otra, pese a las luchas sociales renovadas, con avances notorios y retrocesos no menos considerables, el movimiento social, potente en su esencia pero débil en lo organizativo y en sus manifestaciones, carente de recursos, sin el motor de partidos políticos y agrupaciones estructuradas de la sociedad civil, no llega todavía a dar el paso para una nueva estructura capaz de brindar una solución. Ningún sector social o político llega todavía a consolidar una dirección política y económica capaz de llevar adelante un proyecto nacional ni tampoco de resolver la cuestión de la hegemonía.

El peso del factor internacional: la MINUSTAH

Cabe referirse de manera particular al peso del *factor externo*. La comunidad internacional ha adquirido tal presencia y fuerza en cada etapa de esta transición que se ha convertido en un actor ya imprescindible en el panorama haitiano. Es cierto que hoy la cooperación entre los países del Norte y del Sur se desarrolla en un mundo cada vez más determinado por una lógica unipolar. Pero en Haití hay que reconocer que ésta asume otra dimensión, ya que la influencia internacional es sobredeterminante en las decisiones nacionales al asegurar con la ayuda externa casi el 68% del presupuesto nacional, además de la presencia de 7.200 soldados, 1.500 policías y un número incontable de expertos civiles.

La resolución 1529 de febrero de 2004 adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó, para estabilizar Haití, el despliegue inmediato de una fuerza rápida interina seguida de una fuerza multinacional para asegurar una intervención a largo plazo. Esta misión internacional de mantenimiento de la paz, la MINUSTAH, era la sexta desplegada en Haití en el lapso de un decenio. Teniendo en cuenta que el problema de la seguridad en Haití constituye “una amenaza para la paz y la seguridad internacional así como para la estabilidad en el Caribe”, se considera prioritario el objetivo de asegurar un contexto de seguridad capaz de contribuir a la normalización de la vida pública, al restablecimiento del Estado de derecho

y al apoyo del proceso constitucional y político promoviendo los principios de gobiernos democráticos y el desarrollo de las instituciones.

No hay duda alguna de que la presencia de esta misión de estabilización tiene un contenido diferente de las tradicionales intervenciones militares en el continente y en Haití durante el siglo XX. Esta fuerza de paz, en el momento de su entrada en escena, había ejercido un poder de contención que impidió por lo menos el caos programado por el derrochado régimen anarcopopulista de Jean Bertrand Aristide.

De todas maneras, cualquiera sea su signo, es claro que la realidad del peso de la presencia militar no solamente condiciona nuestro presente sino que también, al mismo tiempo, orienta el futuro a mediano plazo. En el marco de este encuadramiento supranacional es necesario reconocer una gran disminución de la capacidad de los principales protagonistas nacionales y del ejercicio de la soberanía. Pese a ello, de vez en cuando se elevan voces que hablan de la necesidad de una verdadera ocupación en forma clásica o la puesta bajo tutela sin tapujos alegando la incapacidad de los haitianos.

Es interesante señalar que por primera vez los países de América Latina se han comprometido militarmente en un papel importante en el continente. Esto, sin embargo, corresponde a una tendencia general de las Naciones Unidas. De todas maneras, para asegurar lo más pronto posible el regreso a la normalidad, la presencia de la MINUSTAH tiene que contribuir principalmente al establecimiento de la seguridad y a la profesionalización de la policía.

La seguridad y el indispensable desarme

En coordinación con las fuerzas de la Policía Nacional Haitiana (PNH), la MINUSTAH debe llegar a desarrollar una estrategia eficaz para combatir la inseguridad y llegar al desarme. Esta problemática se ha convertido en uno de los puntos más importantes en la actual coyuntura. No nos referimos a una situación de inseguridad, característica de la vida urbana contemporánea, ni al problema crónico del pequeño bandidismo debido en gran parte a la miseria y el deterioro del país. Consideramos aquí más bien una situación que empezó desde septiembre 2004, circunscrita primero a Puerto Príncipe y que ya se extiende a las principales ciudades de provincia.

Los actores son diversos. Primero están los *chimères* partidarios de Jean Bertrand Aristide. Han evolucionado hacia una estructura propia y ocupan las principales zonas de tugurios y ciertas partes de la zona metropolitana, transformándolas, durante mucho tiempo, en zonas *fuera de ley*. A ellos se agregaron otros actores con móviles no precisados en los que se entrecruzan intereses a la vez económicos, políticos y mafiosos. Aquí

hay que mencionar de manera especial los delincuentes condenados por la justicia de EE.UU. y en menor medida canadiense, los cuales sistemáticamente, al salir de prisión, son deportados hacia Haití, su país de origen. Es inútil subrayar las consecuencias de estas presencias en un país que sufre la ausencia de infraestructura para la recepción de estos criminales, a menudo peligrosos y muy sofisticados en sus métodos.

En el transcurso de estos cuatro años estos grupos se han consolidado, introduciendo nuevas formas de inseguridad tales como el secuestro, hasta entonces desconocido en Haití. La impotencia y desesperación que agobian a amplias capas de la población crean un círculo vicioso; aumentan el sentimiento de inseguridad abriendo más camino a los secuestradores al cerrar un círculo de psicosis: violencia-inseguridad-impunidad-violencia. La MINUSTAH, al revelar su incapacidad para combatir de manera eficaz esta inseguridad, llevó al cuestionamiento de la pertinencia de su presencia en el país y alimenta la sensación de tarea no cumplida.

La segunda tarea de la MINUSTAH, considerada también una prioridad, se refiere a *la urgente estructuración y profesionalización de una policía nacional* al servicio de la sociedad. Es evidente que, mientras la policía nacional no llegue a asumir verdaderamente su papel, será difícil para la nación recuperar su plena y entera responsabilidad de la cosa pública y programar la retirada de las fuerzas militares de la MINUSTAH.

No corresponde narrar aquí la historia de la PNH, surgida después de la disolución del ejército por Jean Bertrand Aristide en 1994. Una vez disuelto el ejército, la constitución de la policía gozó de una gran popularidad y de un apoyo entusiasta de los jóvenes y de la población en general. La formación de una policía profesional al servicio de la población fue un intento fallido en 1995 y conllevó en su evolución las vicisitudes y taras de su génesis. Rápidamente dicha policía fue pervertida, por una parte, por la sobrepolitización a partir del poder y, por otra, por la lucha mafiosa que se libró para controlarla. El reclutamiento favoreció las esferas de influencia existentes y consolidó otras provenientes de las estructuras del antiguo ejército y de los nuevos gobernantes.

Así, después del 29 de febrero de 2004, se explica el verdadero derrumbe de esta institución como consecuencia de la politización, la corrupción, la desinstitucionalización y la presencia de grupos mafiosos. Una de las prioridades de este momento fue la profesionalización de la PNH. La opacidad con la cual el gobierno interino y la MINUSTAH realizaron la reforma no hizo avanzar ni la reestructuración ni la depuración que el país esperaba.

Hoy el enderezamiento de la policía nacional, pese a la presencia de policías honestos, capaces y animados, con buen espíri-

tu de cuerpo, debe afrontar dificultades tales como el antagonismo militares-policías, los resabios de comportamientos del antiguo ejército, la existencia de cuadros corruptos, las rupturas de las cadenas de mando, la disfunción de la justicia haitiana, las carencias materiales, la lentitud de la depuración, etcétera. Desde la llegada del gobierno Préval-Alexis, se tomaron ciertas medidas para responder a la urgente estructuración de la PNH. Hay que esperar los resultados.

«La MINUSTAH, al revelar su incapacidad para combatir de manera eficaz esta inseguridad, llevó al cuestionamiento de la pertinencia de su presencia en el país y alimenta la sensación de tarea no cumplida»

Frente a esta situación, regresa de manera reiterada la cuestión de la reconstitución del ejército. En estos tiempos de inseguridad, la población, sufriendo de amnesia en relación al comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas, las ve como las únicas capaces de asegurar el orden. Esta consideración tan compleja gana más y más terreno. Se ha olvidado rápidamente

que el ejército en Haití tenía de hecho un 10% de funciones militares y un 85% de funciones de policía. Es cierto que se impone estudiar en el seno de la PNH la presencia de unidades especializadas para la vigilancia fronteriza, así como para combatir la gran delincuencia. Sin embargo, la reconstitución del ejército, además de sus implicaciones políticas y relativas a los derechos humanos, representaría un regreso al pasado y una carga económica tan pesada que no dejaría de repercutir sobre cualquier proyecto de desarrollo nacional. De allí la urgente necesidad de un acuerdo nacional sobre este tema. Con el fin de reforzar la seguridad pública, se impone esa profesionalización de la policía, evitando los errores de un pasado todavía reciente.

Desde su llegada al poder, el gobierno Préval-Alexis y gran parte de la opinión pública haitiana consideran que una redefinición de la misión y de la orientación de la MINUSTAH hubiese sido conveniente.

Pese al peligro de retorno a bolsos de inseguridad y de *no man's land*¹ en ciertos puntos de Puerto Príncipe, Haití no es un país en guerra o

en situación de posconflicto. Sería importante cambiar este enfoque de la misión así como reducir las fuerzas militares de la MINUSTAH y reemplazarlas por policías. Naturalmente este punto, más allá de las consideraciones haitianas, puede no entrar en la rutina de la propia estructura administrativa de las Naciones Unidas.

En esta misma perspectiva, con las consideraciones de reconstrucción democrática y de contribución efectiva al desarrollo económico y social de Haití expresadas en la resolución 1542 del 30 de abril de 2004, la presencia de las tropas tendría que desembocar en una operación de solidaridad de amplia visión susceptible de acompañar a Haití, nación pionera de la emancipación continental, en su empresa de institucionalización y desarrollo duradero. Las sumas considerables dedicadas al mantenimiento de la paz tendrían que orientarse en gran parte hacia la construcción de la nación y hacia un apoyo y una ayuda estructurantes.

Los desafíos del nuevo gobierno Préval-Alexis

El gobierno actual se enfrenta a un desafío gigantesco: realizar al mismo tiempo la modernización institucional del Estado y del sistema político, el desarrollo económico, la justicia social y la ciudadanía para todos en el contexto de la presencia extranjera. El gobierno tiene que sortear los obstáculos y crear las condiciones de la reconstrucción democrática, la satisfacción de las necesidades de la población y de la solución de los problemas de la soberanía, la inseguridad, la impunidad, la corrupción, etcétera.

Con mucha angustia surge la siguiente pregunta: ¿estará el gobierno a la altura de tal proyecto histórico? Después de dos años en el poder de este nuevo equipo gubernamental esta pregunta encierra muchas incertidumbres, pero a la vez permite conservar alguna esperanza frente al futuro.

Se evidencian algunos avances. En efecto, diversos documentos tratan de plantear las líneas de acción del gobierno, tales como el "Document de Strategie Nationale pour la croissance et la reduction de la pauvreté 2008-2010". Se puede señalar también la no utilización de la represión para combatir a los adversarios o como medio para mantenerse en el poder, arma política muy común hasta hace poco, lo cual tiene un enorme impacto positivo en la población. Todavía más, el recurso a un gobierno plural, con ministros de otras formaciones políticas, aun cuando no llega todavía a plasmarse en un equipo gubernamental coherente y a reflejarse en la realidad, muestra la búsqueda de un nuevo camino. Este hecho representa una ruptura con las actitudes tradicionales de nuestros gobernantes, aun cuando se manifiestan en el funcionamiento del gobierno los defectos del presidencialismo, que tiene gran resistencia en nuestro país.

La formación de comisiones presidenciales sobre algunos problemas nacionales para incluir la participación de la sociedad civil, pese a su indefinición y su eventual duplicación de los ministerios, tiende a incluir a importantes sectores no estatales alrededor del gobierno. Ya han pasado dos años de gobierno, estamos todavía en un principio, y en una espera.

En efecto, grandes peligros se ciernen sobre este fin de transición, sobre todo al considerar la voluntad política existente en relación con las capacidades reales de acción o la eficacia para abrir nuevos senderos. Es imposible emprender la reconstrucción nacional y enfrentar la urgencia económica en una situación de atonía. Sin embargo, ésta ha durado ya demasiado tiempo durante estos dos años. La población no experimentó mejorías en sus condiciones de vida y, lo que es más grave, asiste a su empobrecimiento acelerado. En diversas ocasiones el gobierno ha reiterado su incapacidad para resolver este problema. La multiplicación de recriminaciones de toda clase y las protestas en contra de la carestía de la vida, si no son atendidas, pueden desembocar en la desestabilización del poder con consecuencias graves.

En realidad, se ha recorrido un largo camino durante la transición. Gracias a la conciencia de la gravedad de la situación nadie reclama la magia de una solución inmediata pero sí se exige el primer paso que dé confianza para emprender el camino —por cierto largo— hacia la solución. Se puede adelantar que parece existir un acuerdo tácito en este aspecto en el seno de todos los sectores sociales.

Se exige la manifestación de una dirección política que proyecte el cambio. Y allí se manifiesta una ausencia que da pie a todos los interrogantes. La resolución de la problemática de la dirección política adquiere un peso insospechado en las circunstancias actuales. El arcaísmo del sistema político y la incapacidad del Estado para cumplir sus funciones proyectan de manera evidente la necesidad de la modernización del Estado y del sistema político. Esto se debe no solamente al papel que siempre ha tenido el Estado en la estructuración de nuestra sociedad, sino también al hecho de que la salida de esta crisis pasa por el reforzamiento de las estructuras del Estado, la institucionalización, el funcionamiento de los partidos políticos, la organización de la sociedad civil, la existencia de la ciudadanía para todos y la voluntad política necesaria para emprender las reformas indispensables para la construcción de la nación. Si bien es cierto que la institucionalización no puede constituir el único elemento para promover el desarrollo, el Estado tiene que poner en marcha el cambio. Tiene que ser la locomotora y evitar que la comunidad internacional lo sustituya.

Por ello el tema de la refundación nacional se ha transformado en uno de los conceptos clave de este período. Pese a las interpre-

taciones o las posiciones muy diversas sobre las causas y la naturaleza de los problemas, así como sobre las alternativas para resolver la problemática del anacronismo social, económico y político en una renovación necesaria y urgente de las bases de las naciones, un acuerdo tácito parece existir en el seno de los sectores sociales.

En este momento cargado de todos los peligros pero también de todas las esperanzas, el futuro dependerá de la respuesta a los desafíos del presente.

Bibliografía

Castor, Suzy 2006 "La difficile sortie d'une longue transition" en Shamsie, Yasmine y Thompson, Andrew S. (eds.) *Haiti for a fragile state* (Toronto: Wilfrid Laurier University Press).

Notas

1 Zonas sin control estatal.

Las desventuras de la democracia en Haití

Rosny Smart

Economista. Ex primer ministro de Haití (1996-1997).

Traducción: Gabriela Cabantous.

Resumen

El autor analiza la falta de correspondencia entre los partidos y los movimientos sociales y el desafío planteado por las tradiciones de militarismo y obediencia que dan base a populismos de derecha.

Abstract

The author discusses the lack of correspondence between parties and social movements and the challenge posed by the traditions of militarism and obedience which permit the foundation of right wing populism.

Palabras clave

Transición; Democracia; Militarismo; Partidos; Movimientos Sociales.

Keywords

Transition; Democracy; Militarism; Parties; Social Movements.

Cómo citar este artículo

Smart, Rosny 2008 "Las desventuras de la democracia en Haití" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

Febrero de 1986, caída de Duvalier. Euforia popular, festín democrático. El movimiento popular es la pieza maestra, el actor principal. (Una pequeña digresión: utilizaré indistintamente los términos movimiento popular, movimiento democrático o, más frecuentemente, movimiento social). Frente al movimiento popular se encuentran los militares, con la vieja oligarquía en segundo plano, que negoció con Duvalier y se benefició ampliamente con el régimen. En segundo plano está también la Internacional con los estadounidenses a la cabeza, decididos a supervisar la transición y garantizar que sea pacífica, sin destrozos. Ahora bien, comienza el *déchoukage*¹ de los partidarios de Duvalier, entonces el objetivo de una transición pacífica enfrenta dificultades. Pero más allá de estas acciones revanchistas y anarquistas, ¿qué quería el movimiento? ¿Cuál era su intención?

Con la caída de Duvalier, cayeron los referentes políticos y la política entró en crisis. El antiguo régimen autocrático parecía agotado y no había forma de asegurar su supervivencia. De todas formas, frente a este desmoronamiento, los referentes para la instauración de un régimen democrático eran muy débiles, la historia política del país estaba principalmente constituida por dictaduras.

Surgieron fuertes reclamos de orden ético, de bien común y se identificó a toda la política con "estafas", muertes, violaciones, asesinatos, etc. Como veremos más adelante y como comúnmente se dice: "Se tiró el agua sucia de la bañera con el bebé adentro".

El movimiento social intentaba revolucionar el campo político; había que dar vuelta todo, había que cambiar la política, una verdadera revolución en el sentido amplio del término, algo inédito. Pero, ¿cuáles eran los instrumentos, las herramientas para alcanzar dicho objetivo? Claramente, no las tenían. El gran movimiento social haitiano no tenía contorno, dirección, vanguardia, estructura ni organización, era una especie de gelatina. El movimiento tendía a la horizontalidad perfecta, rechazando toda jerarquía, toda verticalidad. En este marco suscito surge la democracia como alternativa política mundial y regional. De hecho, todos se decían demócratas, sin saber demasiado qué querían decir.

Todo cambio se identificó con la democracia; por lo tanto, en cierto sentido, la revolución con la que soñaban y se ilusionaban era de orden democrático. Se hablaba de movimiento democrático metiendo a todo el mundo en el mismo paquete de la democracia.

Muchos soñaban con una democracia popular, pero de un nuevo tipo, un poco como la revolución cubana o, más aún, como la sandinista, pero aquí el sueño era romper aún más con los caminos trazados.

Ahora bien, lo que tenía fuerza, lo que constituía la nueva referencia política mundial y regional, y que, en cierto sentido se nos imponía,

era un sistema político de democracia representativa, tomando como punto de referencia los grandes países industrializados del mundo occidental.

A partir de este marco global, de esta nueva situación, de este nuevo paradigma, surge la Constitución de 1987 que instauró un sistema político de democracia representativa, limitó el poder del Ejecutivo creando un poder ejecutivo con dos cabezas, reforzó el poder legislativo e introdujo un fuerte acento de descentralización en el sistema político haitiano.

En pocas palabras, se puede decir que para el gran movimiento social, movimiento popular o movimiento democrático, la Constitución era demasiado de derecha. En general, las aspiraciones de un mundo justo y equitativo no aparecían con demasiada fuerza. Queríamos una democracia sustancial. Por el contrario, para los militares y sus aliados que querían refundar el viejo sistema autocrático, era demasiado de izquierda. Las exigencias de derecho y justicia eran decididamente demasiado fuertes. Del mismo modo, la reducción del poder del ejecutivo y concretamente del poder del presidente de la República no lograba conseguir la adhesión de sectores de derecha. De todas formas, históricamente este sector siempre aplicó el adagio que dice: "*Constitution se papye, bayonètse fè*"². Por lo tanto, se podría decir que la Constitución no respondía a los deseos de los principales actores de la escena política. Es cierto que la Constitución se votó masivamente el 29 de marzo de 1987, pero fue más por defecto que por convicción. De hecho, para el movimiento social, una vez elaborada la Constitución, la mejor alternativa era votarla, ya que contenía ciertos artículos que respondían a sus deseos, como el que excluía a los duvalieristas activos de la escena política durante diez años y aquellos relativos a la reforma agraria.

Pero, además, la Constitución transformaría a los partidos políticos en actores de peso del sistema político. De allí, el decreto del Consejo Nacional de Gobierno reglamentando los partidos políticos y dándoles ciertas prerrogativas. Un hecho casi inédito en la historia del país.

Sin embargo, los partidos políticos son débiles y no tienen mucha influencia en el conjunto de la población. No tienen prácticamente historia. La coyuntura del '86 les dio la oportunidad de hacer sus primeras armas públicamente. Pero no hay que engañarse: el gran movimiento social que derrocó a Duvalier se desarrolló paralelamente a los partidos y a los líderes políticos, muchos de los cuales vienen del exterior. Los partidos y los líderes coexisten con el movimiento social, pero no llegan a impregnarlo. El actor principal del sistema democrático establecido por la Constitución con la aparición de los partidos políticos es inclusive ignorado por el gran movimiento social del '86. Por lo tanto, de alguna manera, el sistema de representación cayó en una trampa desde el principio.

«Para adaptarse a la nueva situación política, al nuevo paradigma definido por la Constitución, la mejor fórmula era instaurar de entrada un poder populista, ni revolucionario, ni democrático, algo intermedio»

Los cinco primeros años se caracterizaron por los intentos de refundar el viejo sistema político por parte de los militares. El movimiento social dio fuerte batalla contra estos intentos dando lugar a cinco años de gran inestabilidad política con tres golpes de Estado y elecciones frustradas y ensangrentadas. Finalmente, el movimiento social gana la batalla y llega al poder en las elecciones de 1990, con Aristide.

El golpe de Estado de 1991 y la caída de Aristide siete meses después de subir al poder es todavía el resultado del enfrentamiento entre dos visiones opuestas acerca del futuro del país. El retorno de Aristide tres años después, acompañado de una fuerza militar extranjera, estadounidense, de 20 mil hombres, bajo la bandera de las Naciones Unidas, anuncia la derrota de las fuerzas conservadoras representadas por las Fuerzas Armadas haitianas. En

los hechos se destruyó el ejército y posteriormente un decreto del presidente Aristide concretó su desmantelamiento. Parecía abrirse el camino al movimiento social y a las fuerzas llamadas democráticas para poder llevar a cabo la transición dentro del marco establecido por la Constitución de 1987.

Pero, como afirmamos, el movimiento popular en su conjunto estaba más a la izquierda del marco definido por la Constitución. Aunque estaba de acuerdo con los grandes principios del régimen democrático: respeto de las libertades fundamentales como el derecho de expresión, libertad de asociación, derecho a la vida, etc., quería reformas mucho más profundas. Quería sobre todo terminar con las flagrantes desigualdades sociales y para ello aspiraba a un régimen político entre comillas "revolucionario". Para adaptarse a la nueva situación política, al nuevo paradigma definido por la Constitución, la mejor fórmula era instaurar de entrada un poder populista, ni revolucionario, ni democrático, algo intermedio. Aristide encarnaba bien este nuevo po-

der populista. Tenía la osamenta de los grandes caudillos populistas. Con sus palabras proféticas, podía galvanizar la energía popular y preconizar la integración de las masas populares dentro de la vida de la nación.

En efecto, no existen contradicciones insalvables entre populismo y democracia. El primero se desarrolla dentro de la segunda, sin llegar de alguna manera a sofocarla, dado que existen serios riesgos de una desviación autoritaria clásica, es decir, un poder dictatorial, por no decir totalitario. Y es lo que ocurre con el régimen de Aristide, segunda versión.

Conviene aclarar que la dictadura de Aristide sale de los moldes tradicionales caracterizados por la presencia de los militares como brazo armado, para hacer del movimiento social de carácter popular su instrumento de golpe y de represión. En vez de una dictadura militar de carácter oligárquico, estamos en presencia de una dictadura de carácter populista. Es verdad que la historia haitiana está llena de casos en los que la movilización popular estuvo al servicio de causas personales, pero en este caso la utilización de las masas no tuvo un carácter coyuntural, parcial, sino que respondió a una estrategia de conjunto, de clausura del espacio público.

Las clases populares urbanas marginales, más específicamente las organizaciones llamadas populares, fueron el instrumento privilegiado de esta estrategia de violencia, una violencia madurada, preparada. Duvalier también las utilizó para asentar su poder totalitario, pero no aprovechó una movilización popular, un movimiento social. Duvalier simplemente reclutó agentes violentos dentro del medio urbano y también rural para formar su cuerpo paramilitar de Tonton Macoutes. Fignolé fue quien tuvo el liderazgo del movimiento social urbano, principalmente en la capital, Puerto Príncipe.

En el caso que nos concierne, en un primer momento, los mandos del movimiento Lavalas se organizaron en forma de guerrillas urbanas en ciertos barrios populares, con incursiones en diversos puntos de la ciudad, fusilando y saqueando negocios, almacenes y demás. Inmediatamente, se transformaron en verdaderas bandas criminales cuyo objetivo fue sobre todo extorsionar a la clase media y la burguesía, obtener directamente de estas clases sociales una renta en dinero mediante los secuestros.

Una especie de redistribución forzada, violenta. Una de las características del populismo es lo que se ha dado en llamar "distribucionismo". En general, el poder populista utiliza los ingresos provenientes de un recurso natural que le proporciona una renta –ya sea el suelo o el subsuelo: la tierra, el petróleo, las minas– para distribuirla entre su clientela. En general, la distribución no se hace a partir de un superávit logrado con el trabajo humano. En el caso de Haití, podemos plantear la hipótesis de que el Estado no poseía un ingreso para hacer dicha distribución; los secuestros

fueron un sustituto que se obtuvo a partir de la extorsión a las clases sociales con ingresos más altos.

En este caso, más que una distribución hay una redistribución. De ser así, podemos pensar que los secuestros tenderán a perpetuarse. Obviamente, un programa de inversiones en los barrios populares dista de resolver el problema, ya que no responde a las exigencias del "distribucionismo", que consisten en aumentar rápidamente los ingresos y el poder de compra de las clases marginales.

De cualquier modo, se puede afirmar que el movimiento social que derrocó a Duvalier y puso en el poder a Aristide y después a Préval continúa avanzando a su ritmo a pesar de su deriva, sus avatares, sus fracasos y de las crisis reiteradas que ha suscitado. En efecto, Lespwa, más que un partido político, es un movimiento social que reagrupó las fuerzas dispersas del movimiento Lavalas en vista de las elecciones de 2006.

El hecho de que las elecciones de 2006 hayan sido ganadas de nuevo por el movimiento social plantea un problema de fondo, el de la incapacidad de los partidos políticos, no de modernizarse, como muy frecuentemente se repite, sino de "proletarizarse" en cierta forma, de acercarse a los sectores sociales subalternos. Como se mencionó anteriormente, el problema del paralelismo entre partido político y movimiento de masas surgió a partir de 1986. Antes del '86, los partidos políticos no existían legalmente. Una vez más, las elecciones de 2006 reflejaron una neta preferencia de los electores por el candidato del movimiento social.

Los partidos políticos hicieron un pobre papel. No obstante, se registraron avances modestos en su inserción. Cuatro o cinco partidos pudieron obtener una presencia apreciable en el Parlamento y dentro de las colectividades territoriales.

A pesar de estos signos positivos, en general el problema persiste. Mientras los partidos políticos, estructuras de mediación entre la población y el poder del Estado, no estén en condiciones de enquistarse en la población y ganar su confianza, mientras no haya articulación entre el movimiento de masas y las organizaciones políticas, es difícil imaginar que la política pueda hacerse de manera más racional y que podamos salir del campo de las irracionalidades caracterizadas por el mesianismo, el ejercicio personal del poder, la no-búsqueda de consenso para gobernar bien la ciudadanía y la repetición constante de la crisis.

La historia de los partidos políticos en Haití es reciente. Más allá de la multitud de lo que llamamos partidos de notables, partidos-candidatos, se realizaron serios esfuerzos para estructurar y democratizar la vida interna de ciertos partidos políticos. La democracia haitiana deberá

contar con estos esfuerzos. De este trabajo minucioso, paciente, surgirán las condiciones de la democracia.

No obstante, en las elecciones de 2006 los partidos mejor estructurados no fueron capaces de superar sus intereses electoralistas de corto plazo. La población espera de los partidos, y, en general, de los hombres y mujeres políticos de este país, actos de grandeza en compensación por la historia de la política en Haití. Sólo con esta condición los demócratas de este país podrán convencer a la población de sus buenas intenciones. De lo contrario, la atracción populista seguirá siendo muy fuerte y la democracia se convertirá en un ideal lejano, hecho sobre todo para “los países grandes”.

No se puede terminar esta reflexión sin decir algo sobre la situación actual. En general, estamos en una situación política relativamente estable. Las instituciones son débiles, pero funcionan. No hay persecuciones políticas y el clima general es de calma. No obstante, conviene aclarar lo siguiente:

- A partir de las elecciones del año 2006, el presidente de la República, sin duda preocupado por las múltiples crisis de su primera administración, ha considerado prudente integrar al gobierno los cinco partidos políticos con representación en el Parlamento. Al hacerlo, decididamente ha garantizado cierta estabilidad al aparato del Estado, pero sin corregir el personalismo del poder. Por el contrario, esto parece darle más legitimidad para gobernar solo, como dueño y señor. Una vez más, el poder es personalizado. Además, el gobierno parece disperso, desmembrado y sin dirección.
- Un Parlamento de carácter plural, sin mayoría de partidos o de bloques que formen el poder legislativo, tiene un acento contestatario que reivindica su derecho de controlar al Ejecutivo, lo que evidentemente es bueno para la democracia, pero, por falta de conocimiento, por confusión de papeles, por la existencia también en el Parlamento de un estilo populista y debido al estallido de varios escándalos relativos a algunos miembros del cuerpo legislativo, la consolidación de la legitimidad parlamentaria a los ojos de la población parece estar comprometida. Debemos decir que el desparramo y el desorden parlamentario se deben en parte a la indiferencia del Ejecutivo con respecto a la búsqueda de una mayoría parlamentaria para dirigir, como en toda

- democracia. La presidencia y el gobierno parecen estar más cómodos con este tipo de relaciones que les dan más libertad y más posibilidades de maniobrar, pero también están sujetos a un mayor riesgo de crisis.
- La violencia disminuyó; no obstante, la situación con respecto a la seguridad sigue siendo frágil. Ya se habla de un recrudescimiento de los secuestros.
 - La lucha contra la corrupción apenas comienza y deberá calmarse la preocupación de muchos acerca de su carácter tendencioso, si se quiere que sirva realmente a la democracia y no como revancha.
 - No puede descartarse el peligro de tener que recurrir a la movilización de masas para resolver los conflictos inter-institucionales, como pasó en la tarde del 14 de febrero de 2006 cuando la movilización popular le torció el brazo al Consejo Electoral Provisional (CEP) y lo obligó a cambiar el sistema de recuento de resultados para que Préval fuera elegido en la primera vuelta haciendo surgir repentinamente amenazas contra el Parlamento.

Hablando de transiciones en la región, existen dos fenómenos en particular que caracterizan la tentativa haitiana: se hizo con el apoyo de un movimiento social y no de un partido político como en la mayoría de los casos; y las crisis reiteradas dieron lugar a dos grandes afrentas a nuestra soberanía y nuestro orgullo como pueblo libre: dos invasiones en un lapso de diez años, aunque hayan sido bajo la bandera de las Naciones Unidas.

Conclusiones y perspectiva

Se ha querido realizar la transición haitiana bajo el signo de la anti-política. Hubo una especie de revancha de la sociedad civil (si se puede llamar así) contra la sociedad política. Históricamente podemos decir que tuvimos al Estado contra la sociedad. A partir de 1986, hubo un viraje: de alguna forma, la sociedad se volvió contra el Estado, lo que condujo al desmoronamiento de este último. De la reconciliación de estos dos polos aparentemente opuestos llegará la victoria.

La sociedad política sola desemboca en la monstruosidad de las dictaduras clásicas. La sociedad civil sola es el reino de la libertad desquiciada, del caos y la anarquía. Y, como desafortunadamente sabemos, "echad a los políticos que vuelven al galope"; su regreso será bajo la imagen deformada de una máscara con una mueca de crueldad y no con las bellas máscaras de Jacmel.

Intelectual y militante, gracias a su gran sensibilidad social, Gérard pudo comprender la realidad de nuestro país. Con coraje, se retiró de su partido, el PUCH³, para insertarse en el movimiento social haitiano con el propósito de lograr la unión entre lo social y lo político, y lo consiguió en parte al fundar la OPL⁴. A él debo mi militancia en este partido. Te doy gracias Gérard. El mejor homenaje que podemos hacer a Gérard es el de continuar con su obra, tratando de buscar en ambos lados la articulación entre los partidos políticos y el movimiento social. Se han logrado adelantos en este sentido. La sociedad haitiana comenzó a comprender el sentido de la organización política y los políticos comenzaron a salir de sí mismos. Pero el tiempo apremia. Tenemos que galopar y, como decimos en creole, *à tout boulin*⁵.

Notas

1 N. de la T.: En lengua créole significa "arrancar de raíz".

2 N. de la T.: "La Constitución es de papel, las bayonetas de acero".

3 N. de la T.: Partido Unificado de Comunistas Haitianos.

4 N. de la T.: Organización del Pueblo en Lucha.

5 N. de la T.: a todo galope.

Haití: cambio democrático y tradiciones

Hérolde Jean-François

Economista de la información. Posgraduado en Relaciones Internacionales. Periodista y analista político.

Traducción: Gabriela Cabantous.

Resumen

El autor analiza el peso del pesimismo cuya fase está constituida por las tradiciones de inmovilismo político y de debilidad de la sociedad créole, y plantea la necesidad de instaurar el Estado de derecho.

Abstract

The author discusses the weight of pessimism, made up of the traditions of political paralysis and the weakness of the Creole society, and plants the idea of the need to establish the rule of law.

Palabras clave

Tradiciones; Transición a la Democracia; Polarización Social; Estado de Derecho.

Keywords

Traditions; Transition to the Democracy; Social Polarization; State of Right.

Cómo citar este artículo

Jean-François, Hérolde 2008 "Haití: cambio democrático y tradiciones" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 23, abril.

En nuestro país, Haití, escuchamos desde la adolescencia hasta la edad adulta una cantinela familiar: "¡Este país no cambia más!", o una frase fatalista cargada de decepción: "Parece que voy a morirme sin ver el cambio".

Cuando somos jóvenes, con la determinación que caracteriza a la juventud, nos rebelamos contra esta visión de las cosas y nos comprometemos a demostrar lo contrario, ¡vamos a cambiar este país! Pero los escépticos saben de qué hablan, han visto generaciones de empecinados romperse la cabeza contra un muro impermeable a todo cambio.

Cuando más adelante caminamos por el costado oscuro de la edad, la realidad de los hechos, los intentos, los fracasos y los reinicios hacen que empecemos a dudar nosotros también, y nos sorprendemos sumando nuestra voz al coro del pesimismo y la fatalidad.

En Haití, a fuerza de integrar los valores negativos asociados a la imposibilidad de cambio, a veces nos sorprendemos actuando de acuerdo con esta realidad de resistencia al cambio. En nuestro país existe todo un ejército de hombres al servicio de la resistencia al cambio. Todas sus acciones tienen como objetivo complicar la labor de los que intentan hacerlo posible. Encontramos toda clase de excusas y justificaciones para rechazar el cambio o dejarlo para el año verde. Nos inventamos una coraza por la que se escurra cualquier veleidad para innovar.

Cuando se inició la era democrática en febrero de 1986, la clase política, nuevamente organizada y con permiso para ejercer, presentó nuevas ideas, tomó iniciativas, protestó, rechazó las teorías de poder, se manifestó en las calles y propuso una nueva visión de la sociedad, imprimiendo un nuevo ritmo a lo cotidiano. A menudo se escuchaban, y aún hoy se escuchan, personas que justifican la represión salvaje del poder, metiendo todo en una misma bolsa: "Esto no va con nuestras costumbres y tradiciones". Pero, ¿qué costumbres y qué tradiciones? Cuando nos saquemos eso de la cabeza, aparecerán nuevos moldes para imponer una nueva visión de ruptura.

La dificultad más grande del cambio democrático en Haití proviene de la persistencia de una inflación de visionarios al mando del Estado. Es más fácil reproducir el sistema que transpirar todos los días para aplicar métodos de cambio. Y seguimos haciendo lo mismo de siempre, improvisamos según nuestra tradición de hacer mal las cosas o de "esforzarnos dentro del mal", para citar a Anténor Firmin. Esto significa que seguimos acumulando atraso en todos los campos, nuestros dirigentes no asumen las exigencias de su función, no se realizan intervenciones públicas, el país espera respuestas a los problemas y el pueblo librado a sí mismo se las arregla con los medios a mano para sobrevivir; el resultado está allí en el cuerpo de nuestras ciudades. El abandono del Estado, la indiferencia

de las élites, los malos gobiernos acumulados se traducen en índices de subdesarrollo que ubican a nuestro país en el último lugar de todas las clasificaciones. Otra dificultad no menos preocupante es la incapacidad de los partidos políticos de posicionarse como opción viable de poder para tomar el mando y aplicar su visión de modernización del Estado.

En febrero de 1986, con la caída de la dictadura duvalierista, los herederos del poder salidos del régimen depuesto no habían manifestado ninguna intención firme de ruptura. La transición había comenzado mal. En lugar de hacer un cambio radical, una refundación para instalar las nuevas estructuras dictadas por la Constitución del 29 de marzo de 1987, improvisamos como siempre. En vez de cambiar la tela por una nueva, preferimos remendar el trapo podrido. Dejamos pasar todas las oportunidades de cambiar para mejor, adoptando los valores universales ligados a la elección del nuevo sistema político. Es cierto que esta situación tiene que ver con el hecho de que durante las casi tres décadas de dictadura el país no tuvo ninguna estructura política viable capaz de representar una alternativa de poder. El duvalierismo había sido un poder vitalicio basado en un partido único; cualquier paso en falso del régimen implicaba un vacío político que solo las fuerzas militares podían llenar objetivamente.

Ya que, según la visión de ciertos líderes, el poder en Haití emana de los militares, hemos asistido a un desfile de cortesanos y hombres de uniforme: no se puede pedir más. Una vez más, la tradición va a hacer que el cambio sea nuevamente complicado.

La apertura de la transición democrática trajo a escena, junto con quienes lucharon contra la dictadura, a un importante séquito de actores de toda índole. Estaban aquellos que dejaron el país durante sus hermosos años de juventud llevándose con ellos las más bellas ilusiones revolucionarias y que traían en la valija las costumbres adquiridas al vivir la mayor parte de su vida en democracia, pero también toda su desilusión. La generación 46/57 dejó su marca en África, Norteamérica y Latinoamérica, en Europa occidental y oriental, y en el Caribe. Este grupo tenía la necesidad de servir y de ser útil. Es, a pesar suyo, la generación perdida. Había además jóvenes cargados de diplomas y títulos universitarios que, como los primeros, llevaban en su cuerpo el estigma de inviernos rigurosos y que juraron quedarse a toda costa. ¡Aunque "a toda costa" podría significar también perder los escrúpulos!

La resistencia del sistema al cambio iba a dar a la transición el aspecto característico de muchas de las etapas de la historia de nuestro país. Complots, golpes de Estado, tentativas de derrocar al poder, asesinatos de opositores, arrestos, bastonazos, exilios, asilos en las embajadas, como si la misma historia de Haití fuera incapaz de cambiar los hechos

«La débil convicción de algunos de nuestros ‘demócratas’ no pudo resistirse a un puesto de ministro, rector de la universidad con vacaciones dobles o a otros puestos»

de una época a otra. La fatalidad del no-cambio nos persigue, iacá también!

Los demócratas de ayer que se pasaron del otro lado, al servicio de regímenes anacrónicos y grotescos, desfilan frente a sus camaradas con los que hicieron parte del camino. La transición democrática en Haití está colmada de estas imposturas o de estos impostores que nos han hecho perder tanto tiempo en la ruta del progreso y del cambio verdadero. La débil

convicción de algunos de nuestros “demócratas” no pudo resistirse a un puesto de ministro, rector de la universidad con vacaciones dobles o a otros puestos como el de interventor, miembro del gabinete privado, asesor especial, encargado de una misión, etc. ¡Estas situaciones desfilan delante de nosotros con sólo hacer memoria y estamos seguros de que se le puede poner un nombre a

cada uno de esos puestos! Fueron miembros del gobierno de salvación nacional, rueda de auxilio en el golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991, parlamentarios en las elecciones fraudulentas e impugnadas.

Es cuestión de marcar la diferencia entre los decepcionados y los infatigables. Los decepcionados son los que se volvieron oportunistas o perdieron toda esperanza de cambio o los que, ya con los nervios de punta, se volvieron “realistas” y “pragmáticos”. Estamos ante la tentación de la experiencia del poder, para ver cómo se vive del otro lado. Dar un “pequeño golpe”, ganar un dinerillo, tener un vehículo de funcionario, vales de gasolina, *viáticos* abundantes, hacer todos los platos a nuestro estilo y ¡esta vez sí, de verdad, de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones!

Los infatigables son los que son incapaces de transigir dejando de lado sus principios y que resisten contra viento y marea. Son los que protestan contra toda situación anormal, los que se comprometen a resolver las crisis, los que están en todos los acuerdos, en todas las movilizaciones, en todos los

debates, para salvar la transición y ofrecer al país una perspectiva distinta a la política tradicional con su séquito de desgracia y represión. Entre los infatigables están también los que dieron un mal paso, se desviaron un poco, pero por suerte se echaron atrás a tiempo.

Desgraciadamente, la larga transición democrática de nuestro país se tragó a una gran cantidad de infatigables. El paso del tiempo los obligó a partir sin ver el cambio por el que se desvivieron. Ellos son el ejemplo claro de la fatalidad haitiana de vivir mucho tiempo y morir sin ver el cambio, lo que refuerza una convicción tan antigua como la nación, la imposibilidad de cambio para Haití. Y como si esta fatalidad no fuera suficiente, los infatigables pagan periódicamente un pesado tributo por negarse a transigir. Son aquellos que son arrestados por complot contra la seguridad nacional, aquellos a los que no les dan trabajo, a los que les incendian las casas o las sedes de sus partidos como represalia grosera, entre otros horrores.

El desafío de cambiar

Ahora bien, tenemos el desafío de trabajar sin descanso para conseguir el cambio. Todos aquellos que, desde el nacimiento de nuestro país, se fueron o cayeron sin ver asomar el cambio, no lo buscaron, en general, para ellos mismos. La mayoría eran pudientes. El sueño del cambio que existe desde Jean Jacques Dessalines es a favor de la mayoría. Esta mayoría está allí, inmutable en su postura de víctima de nuestra sociedad.

Más que nunca aspira al cambio. Le debemos este cambio, no sólo para honrar a los que dedicaron su vida a provocarlo, sino por ella misma, para hacerle justicia. Al mismo tiempo, tenemos que entender, sin rodeos, que no habrá cambio en Haití con una masa mayoritaria sin conciencia crítica. Tenemos la obligación de educar a esta masa para formar su conciencia. Mientras nos neguemos a educar a la mayoría, ésta seguirá siendo un freno para el cambio al que aspira legítimamente y un freno para el cambio de la nación toda. Tenemos que entender la urgencia que existe en democratizar el saber y el conocimiento, para contribuir al nacimiento de la mayor cantidad posible de agentes de cambio.

Para que el cambio se concrete, hay que romper con un conjunto de tradiciones. Instalar las estructuras para entrar en un Estado de derecho, poniendo fin a una sociedad de injusticias y desigualdades. Cuando alguien va contra la corriente en Haití, se escucha el clásico comentario: "Está loco, piensa que puede cambiar el país él solo". El cambio no llegará, tampoco, por sí solo. Llegará cuando todos hagamos algo de nuestra parte para que salga a la superficie. Es el conjunto de esta República de individuos el que debe agitarse para dar a luz y construir finalmente la nación.

Frente a estos bloqueos estructurales y estructurantes, los defensores del cambio deben desarrollar un modelo de comportamiento que llegue a influir en el resto de la sociedad. Deben asumir su diferencia, creer en ella y actuar de acuerdo a esta creencia de que el cambio es posible, aun si los demás no lo creen todavía.

A lo largo de la transición democrática no conseguimos salir del sistema político tradicional basado en la impunidad. Esta incapacidad debilitó al Estado a tal punto que volvimos al estado natural, con la producción de una realidad de no-derecho. La decisión fatal de despedir al ejército sin formar una fuerza de seguridad capaz de hacer frente a la nueva realidad social y a toda la evolución contraria puso en riesgo la soberanía nacional con la desafortunada toma del mando por parte de la comunidad internacional. Ninguna sociedad puede vivir sin fuerzas de seguridad regulares para hacer frente a la delincuencia, reprimir el bandolerismo y garantizar la seguridad de vida y bienes. Desde este punto de vista, abandonar la tradición fue terrible para nuestro país, ya que dejó instalar en sus costumbres el bandolerismo, los secuestros, los asesinatos, los ajustes de cuentas por medio de ejecuciones sumarias sin consecuencias. A la fuerza, nos dimos cuenta de que vivir sin fuerza de seguridad nacional, llámese o no ejército, de ninguna manera está de acuerdo con nuestras tradiciones! Para salir de la transición democrática y avanzar hacia la consolidación del proceso democrático haitiano, los dirigentes de nuestro país deben hoy tomar medidas para crear una fuerza de seguridad nacional con un pliego de cargos claro, teniendo en cuenta las confusiones y errores del pasado en cuanto a la misión del ejército. Ninguna fuerza extranjera sabrá ejercer esta función de soberanía de forma permanente en nuestro país. El país debe movilizarse para obtener un compromiso claro del poder público, en el sentido de recuperar la soberanía nacional, lo que solamente es posible mediante el establecimiento de estructuras endógenas de seguridad que sustituyan gradualmente la presencia extranjera que representa el fracaso de la nación, sus élites y su pueblo.

Romper con la tradición

A partir del 7 de febrero de 1986, vivimos en otro país desde todo punto de vista. Este hecho se puede ilustrar de manera negativa o positiva. Debemos decir que el cambio está allí, aunque imperceptible a simple vista. Los que en las emisiones de *Tribuna libre* sugieren una vuelta al pasado con las mismas figuras de la dictadura no se dan cuenta de que están utilizando una herramienta del cambio, la libertad de expresión, para proclamar una marcha atrás hacia un lugar donde existían trabas para las libertades públicas. Frecuentemente caemos en la trampa de medir el

cambio con la misma vara que el costo de vida, olvidando fácilmente todo el paquete que lo conforma. Los acontecimientos que movilizaron al país desde las elecciones impugnadas del 21 de mayo de 2000 hasta la apertura el 29 de febrero de 2004 son un indicio claro de esta evolución social en cuanto a la nueva opción de la sociedad haitiana. Los anacrónicos eran los que pretendían imponer al país las prácticas políticas tradicionales frente a los defensores del cambio que no pensaban volver atrás y que mostraron con determinación que en este país no alcanza con llevar las riendas del poder para imponerse por la fuerza al resto de la nación. Pero esta evolución no siempre es perceptible cuando se le contraponen los índices del costo de vida antes de febrero de 1986 e inclusive inmediatamente después, durante todo un período irresponsable de decisiones económicas catastróficas por las que todavía estamos pagando y que se conoce con el título de "festín democrático".

Otro ejemplo del avance del cambio con respecto a la tradición se refleja en el siguiente hecho. Durante los veintinueve años de transición democrática en Haití, la experiencia democrática pudo cada vez seguir adelante no obstante los que trataron de obstaculizarla. Nos hicieron perder tiempo que nos hubiese servido para avanzar y construir; sin embargo insistimos porque el cambio es un camino de una sola mano por el que es imposible volver sobre nuestros pasos. Las demoras, de hecho, deben ser consideradas como puestos de control que hacen el itinerario más largo. Sabemos algo de barricadas y rutas cortadas. La ventaja en el periplo de la ruta hacia el cambio es que nuestra costumbre y tradición de tomar atajos no sirve. Hay una sola opción, sólo se puede ir por la ruta principal!

En conclusión, recordemos que la búsqueda del cambio es una constante en la historia de nuestro país. Esta reivindicación es incluso tan vieja como la nación. Haití nació de la voluntad de los esclavos de cambiar la realidad colonial para vivir en libertad, igualdad y fraternidad. Desde este punto de vista, la obra de la Independencia debe completarse sobre la base del principio de igualdad. La sociedad haitiana de hoy tiene prácticamente las mismas características que la sociedad santo-dominguense. Un pequeño grupo de privilegiados que tienen todo y son capaces de integrarse sin problemas a sociedades más desarrolladas como ciudadanos del mundo del siglo XXI en paralelo con una mayoría que no tiene nada y que vive como en la Edad Media, con las reacciones y los instrumentos de labranza de la Edad Media.

Nuestro desafío como sociedad reside en lo siguiente: ¿Queremos reconocer hoy que fue más fácil para nuestros ancestros vencer el sistema colonial para darnos este país que para nosotros vencer nuestras propias barreras y llegar a transformarlo y hacerlo un lugar agradable en el

que todos podamos vivir? La victoria a la que aspiramos hoy la debemos ganar nosotros mismos y contra nosotros mismos. ¿Nuestras propias barreras son más inquebrantables que las fuerzas expedicionarias de Santo Domingo, que eran invencibles?

Si las tradiciones que tanto nos gusta evocar consisten en complotar para derrocar un poder legítimo, sobornar para distraer fondos del tesoro público, no pagar nuestras obligaciones fiscales y robar al Estado, que no es robar, *degaje pa peche*¹; si consisten en garantizar la impunidad general, lo que asegura la reproducción del sistema haciendo imposible toda perspectiva de cambio; si consisten en desconocer el derecho de la oposición a existir montando farsas grotescas para detener o eliminar a los opositores; si las tradiciones a las que nos aferramos tanto consisten en asumir el poder e imponerse por la fuerza, con golpes de Estado, elecciones fraudulentas, rechazo de la libertad de expresión, censura de prensa; si nuestras tradiciones son violar los derechos de los ciudadanos, negar a las mujeres los mismos derechos que tienen los hombres, corromper la justicia a favor del reino de la impunidad; si nuestras tradiciones son buscar el poder para disfrutarlo y no para gobernar y transformar la realidad social, etc., etc., etc., entonces tenemos que cambiar de tradiciones urgentemente. La mejor opción frente a la comprobación de las malas tradiciones que sólo han producido un país estéril, un país de injusticia que no da respuesta a los problemas de la población, es tener la inteligencia suficiente para romper con todas aquellas que representan un obstáculo para el progreso de nuestra sociedad. Debemos avanzar hacia la adopción de los valores universales del Estado democrático, el Estado de derecho cuyas virtudes admiramos en las sociedades que nos hacen soñar y que frecuentemente mencionamos como modelos.

Notas

1 En créole significa "no es pecado".

Perspectivas de la reconstrucción democrática en Haití (2004-2011)

Cary Hector

Doctor en Filosofía. Politólogo, UNDH-Haití. Profesor de la
Universidad de Quebec.

Traducción: Gabriela Cabantous.

Resumen

El autor expone el problema creado por la necesidad de una verdadera construcción de un Estado de derecho a partir de la actual disolución estatal.

Abstract

The author discusses the problem created by the need to build a genuine rule of law from a starting point of current state dissolution.

Palabras clave

Transición; Democracia; *State Building*.

Keywords

Transition; Democracy; State Building.

Cómo citar este artículo

Hector, Cary 2008 "Perspectivas de la reconstrucción democrática en Haití (2004-2011)" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

Comentarios preliminares

Desde 1986 hasta la actualidad, existen dos frases sobrecogedoras que fueron acogidas de manera instantánea y casi inagotable: “la transición interminable” (variante: “esta transición que no termina nunca”, puesta en circulación por Pierre Raymond Dumas del periódico *Le Nouvelliste*) y, más recientemente “la democracia difícil de conseguir”, subtítulo de la obra publicada en 2002 por el sociólogo Laënnec Hurbon, *Pour une sociologie d’Haïti au XXIe siècle*, por editorial Karthala. Yo mismo retomé ambas frases en una síntesis que redacté en abril de 2003 y que fue publicada en diciembre de 2004 por la revista *Itinéraires* de CREHOS (Hector, 2004).

Hoy, en el año 2007, el restablecimiento de un nuevo poder constitucional, con vocación de poner en marcha el proyecto democrático, exige repensar este concepto. ¿Por qué? Para ir a lo esencial, permítanme primero recordar brevemente algunos hechos que tuvieron consenso en nuestra evaluación de la situación de febrero de 2004, a saber:

- La institucionalización democrática desfalleciente;
- la fragilidad, casi desvanecimiento puro y simple del Estado de derecho proyectado desde 1987;
- instrumentalización reiterada de elecciones como modo casi guerrero de acceso al poder;
- profundización acelerada e insostenible de las desigualdades socio-económicas; a tal punto que el Banco Mundial la denominó, en abril de 2006, como la “trampa conflicto-pobreza” –*conflict-poverty trap* (World Bank, 2006)– que necesitamos imperativamente romper so pena de implosión socio-política;
- la debilidad del sistema de representación y de partidos políticos, como así también de la sociedad civil.

Esta situación consolidó, en general, la introspección de una trayectoria prácticamente circular desde 1986-1987 hasta 2004, alrededor de la matriz original de nuestra transición post-autoritaria. ¿Cuál es esta matriz? Es la construcción de un orden liberal-democrático, postulado desde el 25 de febrero de 1986 por el Consejo Nacional de Gobierno (CNG), posteriormente ratificado solemnemente como tal por la Constitución, que se sometió a plebiscito el 29 de marzo de 1987.

Creo que hoy, gracias al esclarecimiento histórico de los últimos veinte años, podemos afirmar: ni “transición interminable, ni “democracia difícil de conseguir”, y hacer valer en cambio el despliegue de una dinámica de golpe tras golpe, muchas veces caótica y violenta, una dinámica

de doble transición. Lo explico: desde un punto de vista diacrónico, nuestra primera transición habrá durado de 1986 a 2004, pero desde uno sincrónico, tuvo una censura cualitativa desde 1996-1997, censura caracterizada por un derivar hacia un nuevo régimen híbrido, que el presidente Jean- Bertrand Aristide en vano trató de arraigar, o consolidar, a partir de 2000-2001.

Esta dinámica de doble transición permite observar dos resultados lógica y empíricamente coherentes en sí. La primera transición habría sido, en efecto un *non-lieu* (no lugar)¹, por eso la percepción falsamente cuantitativa de su duración interminable. En cuanto a la “democracia difícil de conseguir”, se revistió más bien de una figura inesperada: la de la “democracia *iliberal*” (Zakaria, 2003), es decir una democracia que se instala dentro del aparato formal-constitucional del Estado democrático, pero que se dedica a subvertir y a pervertir progresivamente ese Estado, mediante prácticas de poder antidemocráticas, incluso abiertamente autoritarias y represivas.

Llamo, entonces, segunda transición al período que comienza con el advenimiento del gobierno interino de transición después del 29 de febrero de 2004 y que se extiende hasta el mandato del nuevo gobierno constitucional (2006-2011). Tanto el gobierno interino Alexandre-Latortue como el nuevo gobierno constitucional Préval-Alexis deberán tomar como norte la matriz original de 1986-1987, el primero para enderezar, corregir y taponar las brechas y las derivas institucionales acumuladas hasta febrero de 2004, el segundo para comprometerse totalmente con la reconstrucción del proyecto democrático, comenzando por el mismo Estado, y en particular con el Estado de derecho.

De aquí surge el texto de mi presentación que voy a desarrollar, esencialmente en dos partes: del gobierno interino de transición (2004-2006) al gobierno constitucional (2006-2011); y el gobierno Préval-Alexis y la reconstrucción democrática.

El gobierno de transición interino (2004-2006)

En esta sección, trataremos de delimitar los objetivos de este gobierno, coyunturalmente determinados e identificados, como así también los resultados obtenidos dentro de este período.

Objetivos

No creo que sea necesario retomar la laboriosa trayectoria del establecimiento del nuevo gobierno. Será suficiente con recordar que luego de la instalación del nuevo primer ministro Latortue (17 de marzo de 2004), se elaboró y adoptó (4 de abril de 2004) el documento conocido como “Consenso de transición”, comúnmente llamado “Acuerdo del 4 de abril”². Este fue adoptado como hoja de ruta del gobierno y firmado en el Palacio

Nacional por representantes de la sociedad civil, los partidos políticos y el Consejo de notables. En la sección “Misión del gobierno de transición”, establece un abanico de dieciocho puntos relacionados con aspectos coyunturales y estructurales de la transición, tales como: seguridad pública, reactivación económica, preparación de las próximas elecciones generales, descentralización, etcétera.

Estos puntos fueron retomados y formalizados sistemáticamente en el programa oficial del gobierno sancionado en julio de 2004 como Marco de Cooperación Interino (MCI)³.

El MCI fijó, a partir de entonces, la “orientación estratégica” del gobierno sobre cuatro ejes principales: garantizar un mejor gobierno político y promover el diálogo nacional; consolidar el gobierno económico y contribuir al desarrollo institucional; favorecer la reactivación económica; y mejorar el acceso a los servicios públicos.

Dicho esto, es importante conocer igualmente qué funciones estatales paralelas o conjuntas se confiaron a la Misión de Naciones Unidas para la Estabilidad de Haití (MINUSTAH), desde su creación por Resolución 1542 (30 de abril de 2004) del Consejo de Seguridad y retomados en el punto 14 de la Resolución 1702 (del 15 de agosto de 2006). En esencia son las siguientes: reestablecimiento y mantenimiento del Estado de derecho, la seguridad pública y el orden público; control, reorganización y consolidación del ámbito de la justicia, entre otras. En pocas palabras, se trata de los “dieciocho puntos” del “Acuerdo del 4 de abril”, de la “orientación estratégica” del gobierno de transición y de la “misión de estabilización”, confiada a la MINUSTAH; todas esas funciones remiten fundamentalmente a un mismo desafío estratégico: la reconstrucción del orden liberal-democrático preconizado en 1987 y puesto en peligro durante la “primera (falsa) transición”. Premisa ineludible de esta reconstrucción: organización y celebración de elecciones “libres, honestas y democráticas” a todo nivel. Así, el MCI del gobierno de transición afirmaría con razón: “la transición política se hará realizando elecciones libres, creíbles y transparentes”. No es de sorprender que el mismo *Livre Blanc* del gobierno de transición (editado a pedido del ex primer ministro Latortue) ubica este logro a la cabeza de doce realizaciones positivas dentro de su balance, señalando que las elecciones “democráticas e inclusivas” permitieron “pasar del caos al orden constitucional” (Latortue, 2006).

Resultados

No es este el lugar para realizar un balance general del gobierno interino de transición (2004-2006), teniendo en cuenta el énfasis puesto sobre la temática de la reconstrucción democrática. Por otro lado, dicho balance debería también incluir las misiones asignadas a la MINUSTAH. En ambos ca-

sos, para obtener datos puntuales y hechos relativos a las funciones soberanas del Estado, puede consultarse el Libro *Livre Blanc* y los informes anuales de la Secretaría General de las Naciones Unidas, respectivamente, que contienen un discurso justificativo e institucional.

Debemos atribuirle al gobierno interino de transición y al acompañamiento técnico, logístico y de seguridad de la MINUSTAH el mérito de la realización de las elecciones presidenciales y legislativas

«Debemos atribuirle al gobierno interino de transición y al acompañamiento técnico, logístico y de seguridad de la MINUSTAH el mérito de la realización de las elecciones presidenciales y legislativas (7 de febrero de 2006) que hicieron emerger un nuevo gobierno legítimo, reconocido y consagrado por la Comunidad Internacional»

(7 de febrero de 2006) que hicieron emerger un nuevo gobierno legítimo, reconocido y consagrado por la Comunidad Internacional.

Sin embargo, conviene al mismo tiempo subrayar que este resultado, es decir, la proclamación de un vencedor en la primera ronda, sólo se pudo obtener mediante el recurso conocido como “solución belga”, el cual consiste en repartir los votos en blanco (un total de 85.000) entre los 34 candidatos, prorrateando el porcentaje de sufragios. De allí que la mayoría absoluta de 51,21% en primera ronda fue acordada al candidato en primer lugar de la carrera electoral: René Préval. Es

de conocimiento público que este recurso fue sugerido por el Embajador de Brasil, con el acuerdo de los países implicados en la misión de Paz y de los funcionarios de la MINUSTAH, en particular del área electoral de la Misión (Brigagão y Fernandes, 2004).

Evidentemente se trató de una decisión supranacional deliberada, tomada por decreto electoral nacional –por razones arbitradas probablemente de acuerdo al capítulo VII de la carta de Naciones Unidas–, incertidumbre de segunda vuelta, anticipación de un recrudescimiento del caos institucional, etc. En esta situación, se puede admitir que el acortamiento consensuado a nivel supranacional facilitaría la consolidación de la etapa de Democracia electoral en la que Haití se encontraba otra vez comprometida, especialmente des-

pués de las “elecciones fundadoras” del 16 de diciembre de 1990 y la serie de inconvenientes electorales concatenados entre 1994 y 2004⁴.

En el plano institucional interno, concretada esta etapa de la democracia electoral, no faltaron repercusiones directas en la tarea de la reconstrucción del proyecto democrático haitiano. De tal forma, por ejemplo, en cuanto al registro de electores, el Estado haitiano dispone hoy de una base de datos de 3,5 millones de electores digitalizados y registrados –la mayoría de los cuales se convirtieron y fueron reconocidos como *ciudadanos* por primera vez en su vida adulta. Podemos agregar la consolidación de la institución electoral –el Consejo Provisional Electoral (CPE)– que se volvió técnicamente más eficiente. Sin embargo, tironeada por mucho tiempo en el plano interpersonal y político, corre el riesgo de desaparecer antes de la realización de las próximas elecciones indirectas, incluso aunque haya tenido a su cargo la organización y realización de las elecciones locales del 3 de diciembre de 2006.

El gobierno Préval-Alexis y la reconstrucción democrática Dos premisas o ventajas favorables desde un principio

El análisis cartográfico de las elecciones presidenciales según los resultados oficiales determinados por el CEP⁵ demuestra, para sorpresa de más de uno, que el nuevo presidente electo disponía de un *capital de legitimidad democrática a escala nacional*. Hay tres indicadores que sirven para medir este capital: la mayoría simple: 106 comunas sobre 133; la mayoría absoluta: en 43 comunas sobre 45 que votaron en primera vuelta; y la popularidad de los tres principales candidatos: Préval supera ampliamente a los dos candidatos que le siguen más cerca.

En consecuencia, se entiende que el presidente electo no es un presidente por defecto. ¿Por qué? Por un lado, porque las diferentes encuestas preelectorales confirmaron –en su mayoría– su avance en la elección de los votantes. Por otro lado, porque esta elección no es ajena a la orientación dominante de la comunidad internacional en la coyuntura post-Aristide.

En efecto, una vez superado el período de fuerte movilización ciudadana (2003-2004), la comunidad internacional manifestó de distintas formas sus preferencias por un interlocutor presidencial de enlace (siguiendo el ejemplo de otras situaciones comparables de transición) más que un interlocutor presidencial de ruptura, que hubiese podido ser fuente de nuevas incertidumbres en cuanto al objetivo prioritario de estabilización política.

Entonces, la empresa de reconstrucción democrática puede ser formateada, tanto en la convergencia necesaria con la orientación preferida por la comunidad internacional, como con los parámetros institu-

cionales convenidos o a convenir en el marco de la MINUSTAH, en cuanto instancia de acompañamiento supranacional.

El “quinquenio de la esperanza” y el programa de gobierno

Inserto en la dinámica de la segunda transición, cuya primera etapa de puesta en marcha instrumental el gobierno interino (2004-2006) acaba de concluir, el nuevo gobierno electo prolonga, por decreto, la existencia del MCI hasta septiembre de 2007. En la “Conferencia Internacional para el desarrollo económico y social de Haití (Puerto Príncipe, julio de 2006), un Documento de Trabajo fue presentado a sus socios en este sentido, bajo la doble consigna “Retorno al orden institucional, ventana a la oportunidad” y “Haití: un país por construir”. Este Documento de Trabajo comprende dos partes: las grandes obras (con un número de ocho); y el Programa de Gobierno (julio de 2006-septiembre de 2007).

Pero existe una tercera tarea directamente focalizada en la misión estratégica que se espera del nuevo gobierno en el marco de la reconstrucción democrática, es decir, la reingeniería institucional del Estado haitiano, primeramente y antes que nada en cuanto a las funciones soberanas de base. Se trata entonces del *State Building*, preocupación estratégica en el seno de las políticas internacionales dominantes a partir del final de la guerra fría (1999), en particular frente a Estados supuestamente débiles o desfallecientes⁶. Una lectura convergente permite insertarlo en el documento titulado “Buena gobernanza y reforma del estado: Programa-esquema de modernización del Estado del quinquenio de la esperanza (2006-2011)”, preparado por Antoine Ambroise.

Debido al desmoronamiento que caracterizó al Estado haitiano entre 2000 y 2003 provocado por una maraña de causas complejas, en especial la fragmentación política extrema, la corrupción política generalizada, el narcotráfico, la violencia del Estado, las bandas armadas, etc., la empresa haitiana del *State Building* debe entenderse, desde un comienzo, como una doble tarea simultánea: recuperar la existencia del “monopolio de la violencia legítima” sobre el territorio nacional (en el sentido weberiano); y reestablecer las instituciones estatales legítimas en su razón de ser y su eficiencia funcional (policía nacional, servicios públicos, justicia, aduanas...)⁷.

El programa confirma que el Estado sigue siendo el principal actor del gobierno y el principal motor del desarrollo futuro. Este Estado será un Estado estratega (rol normativo de orientación e impulsión del desarrollo); un Estado descentralizado (rol activo de las colectividades territoriales en el desarrollo de las respectivas regiones); un Estado de derecho (que asegure en todo momento y en toda circunstancia la protección

de los ciudadanos contra toda forma arbitraria); un Estado que incite el surgimiento de un sector privado activo en la creación de empleos durables; y finalmente un Estado promotor de una sociedad civil capaz de influir sobre las decisiones estratégicas, etcétera⁸.

Organizado alrededor de horizontes secuenciales ad hoc, el programa se extiende a corto plazo (2006-2007) hasta terminar el primer año del quinquenio; a mediano plazo (hasta principios de 2009) con un Plan de acción, especialmente instauración del Estado de derecho; y a largo plazo, los dos últimos años del quinquenio y de 2011 en adelante.

Esta sería la proyección estática-programática del *State Building*. Una proyección dinámica (complementaria) debería tomar en cuenta las relaciones de fuerza actuales y potenciales, favorables o no a la puesta en práctica de esta programación, en particular en las relaciones entre el poder ejecutivo y el parlamento (adopción de leyes, sanción de proyectos gubernamentales, control de la acción gubernamental, etc.) sin contar los escenarios alternativos relacionados con el financiamiento de proyectos —el presupuesto nacional, que depende de aportes de la ayuda pública internacional en una proporción de 60%. Sea como sea, el primer ministro Alexis, en su balance presentado a la Asamblea Nacional el 11 de junio de 2007, se mostró bastante confiado, especialmente en su revisión de las acciones e iniciativas relativas al refuerzo de las capacidades del Estado. Para juzgar a ciencia cierta, sin duda, habrá que esperar el próximo balance a fin del primer año del quinquenio.

A modo de conclusión: ¿reconstrucción y/o refundación del Estado?

En la esfera del pensamiento crítico, el énfasis está puesto más sobre la “refundación” que sobre la “reconstrucción” del Estado; esta última comprende una tarea histórico-estructural voluntarista destinada al “reequilibrio” del Estado mediante la reinsertión activa de las mayorías excluidas desde 1804, en el funcionamiento y la finalidad del mismo.

En este sentido, debe señalarse la aparición casi simultánea de dos obras importantes en 2006 y 2007 respectivamente, basadas en la problemática de la refundación necesaria del Estado. Se trata de *Haiti: le naufrage de l'État. Quelle sortie?* (Cadet, 2006) y *L'enigme haitienne. Échec de l'État moderne en Haïti* (Etienne, 2007).

A partir de métodos de autor opuestos (el primero, un ensayo-testimonio, el segundo, una tesis académica weberiana), los dos coinciden en un diagnóstico severo y convergente del desmoronamiento estatal haitiano, para seguidamente proponer el camino de la “refundación” del Estado, tal como se lo conceptualizó anteriormente. Mientras que Etienne rechaza, como politólogo, toda sugerencia de “vías y medios” —el cómo, según él, es

tarea del “tecnócrata” o del “experto en ingeniería política”, Cader, geógrafo-economista, no se priva de señalar todo un abanico de pautas en los diversos dominios –a elección justamente de quien toma la decisión política.

Para mí, lo esencial es, en primer lugar, que la supuesta dicotomía entre “reconstrucción y “refundación” del Estado no es más que aparente y, sobre todo, que no está analíticamente fundada en la razón, dado que procuramos tener en cuenta las condiciones históricas concretas de su puesta en marcha respectiva y complementaria. Sin duda, “la reconstrucción” podría, en determinadas condiciones de liderazgo político, confinarse deliberadamente al marco tecnocrático de concepción y de ejecución (esta habría sido, por ejemplo, la ilusión del primer ministro interino Latortue). Por otro lado, es muy probable que la “refundación del Estado” quede relegada a un campo ideológico cerrado, impermeable a toda preocupación por el arraigamiento institucional (por ejemplo, “la militancia antes que la competencia”, con Aristide).

En la coyuntura actual de la segunda transición bajo la égida del nuevo gobierno legítimo, ni la reconstrucción, ni la refundación del Estado son posibles sin la interacción de, al menos, tres incentivos: la ampliación sistemática y orientada de los márgenes de autonomía de quienes toman las decisiones nacionales frente a las presiones de la “soberanía compartida”, cuya gestión deben asumir a corto y mediano plazo; el incremento significativo de la capacidad de representación de los partidos políticos, no sólo como engranaje indispensable de la reconstrucción democrática, sino también como refugio ideológico y funcional de toda voluntad de refundación del Estado; y la capacidad del “quinquenio de la esperanza” para establecer políticas públicas proactivas y movilizadoras de la participación ciudadana, a nivel nacional ciertamente, pero sobre todo a nivel regional y local.

Una interacción positiva entre estos tres factores podría hacer frente favorablemente al escollo de la reconstrucción democrática del Estado y a la tentación de la refundación discursivo-ideológica de éste sin transcripción empírico-institucional.

Bibliografía

- Brigagão, Clovis y Fernandes, Fernanda 2004 “Politica externa brasileira e o Haiti”, mimeo.
- Cadet, Waner 2006 *Haiti: le naufrage de l'État. Quelle sortie?* (Dakar: Panafrica).
- Carothers, Thomas 2002 “The end of the transition paradigm” en *Journal of Democracy*, Vol. 13, N° 1, enero.

- Étienne, Sauveur Pierre 2007 *L'enigme haïtienne. Échec de l'État moderne en Haïti* (Montreal: Presses de l'Université de Montréal).
- Fukuyama, Francis 2004 *State building. Governancia y orden mundial en el siglo XXI* (París: La Table Ronde).
- Hector, Cary 2004 "De la transition interminable à la démocratie introuvable" en *Itinéraires* (CREHSO) diciembre.
- Journal of Democracy* 2007 "The debate on 'sequencing'", Vol. 18, N° 3, julio.
- Latortue, Gérard 2006 *Livre Blanc du Gouvernement de Transition* (Florida: Educa Vision).
- O'Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe (eds.) 1986 *Transitions from authoritarian rule: tentative conclusions about uncertain democracies* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press).
- World Bank 2006 "Haïti/Social resilience and state fragility in Haïti. A country social analysis", 27 de abril.
- Zakaria, Fareed 2003 *The future of freedom. illiberal democracy at home and abroad* (Nueva York : W.W. Norton).

Notas

- 1 Para una discusión sobre la transición como "no lugar" ver Thomas Carothers (2002: 5-21).
- 2 El "consenso de transición" está publicado con ese título en el *Livre Blanc* (Latortue, 2006) en un número especial y único (13 de mayo de 2006) del gobierno de transición.
- 3 *Cadre de Coopération Intérimaire* (CCI) 2004-2006, *Rapport de synthèse*, julio de 2004. Publicado por la República de Haití bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, la Comisión Europea, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
- 4 "Elecciones fundadoras" en el sentido de O'Donnell y Schmitter (1986).
- 5 Ver Eric Gaillard, en *Le Matin*, 6 de marzo 2006.
- 6 Ver especialmente Fukuyama (2004).
- 7 Ver al respecto el debate reciente en el *Journal of Democracy* (2007), en situaciones comparables a las de Haití en 2004-2006.
- 8 La formulación de los diferentes atributos de este Estado está tomada *verbatim* del documento citado.

Reformas económicas y estratégicas de lucha contra la pobreza: desafíos y apuestas de la democracia haitiana

Wilson Laleau

Economista.

Traducción: Gabriela Cabantous.

Resumen

En la primera parte el presente texto intenta demostrar que las reformas económicas aplicadas en los últimos 30 años en Haití de ninguna forma tuvieron como objetivo la disminución de la pobreza o la promoción del desarrollo humano sostenible, sino garantizar el mantenimiento de los dirigentes en el poder, es decir, el mantenimiento del statu quo. En esta parte se verá, en efecto, que estas reformas redujeron la autonomía de los actores económicos. La segunda parte demostrará que el hecho de que los distintos gobiernos hagan el duelo del voluntarismo político perjudica la estabilidad de la democracia en Haití. Esta imposibilidad, que se dice comprobada, de cambiar el destino de la nación no es más que una estafa y no hace más que traducir lo que Jean-Paul Fitoussi llama la retórica de la resignación. La tercera parte, para concluir la exposición, presenta consideraciones de orden general.

Abstract

The first part seeks to show that the economic reforms implemented over the past 30 years in Haiti have in no way been aimed at poverty reduction and the promotion of sustainable human development, but to ensure that leaders remain in power, maintaining the statu quo. This part demonstrates that, in effect, these reforms reduced the autonomy of economic agents. The second part shows the fact that the various governments mourning political voluntarism harms the stability of democracy in Haiti. This impossibility, which is claimed to be proven, to change

the destiny of the nation is nothing more than a scam and merely translates what Jean-Paul Fitoussi called the rhetoric of resignation. The third and final part offers considerations of a general nature.

Palabras clave

Reformas Económicas; Pobreza; Desarrollo Humano; Democracia; Agricultura; Políticas Públicas.

Keywords

Economic Reforms; Poverty; Human Development; Democracy; Agriculture; Public Policies.

Cómo citar este artículo

Laleau, Wilson 2008 "Reformas económicas y estratégicas de lucha contra la pobreza: desafíos y apuestas de la democracia haitiana" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

Las reformas económicas haitianas recientes

Charles Cadet en su libro titulado *Crise, marginalisation et pauperisation dans L'Haiti contemporaine (Crisis, marginalización y empobrecimiento en Haití contemporáneo)*, publicado en 1996, hace bien en resaltar que, a diferencia de la experiencia latinoamericana, la de Haití se explica mejor por las causas internas de la misma economía nacional. Gastos suntuarios del poder público basados en anticipos de un crecimiento no concretado (debido también a un contexto económico mundial en una época muy difícil) complicaron las finanzas públicas y debilitaron la capacidad de las autoridades haitianas de defender la paridad de la moneda nacional. Se sucedió una primera serie de reformas, en 1982, que hicieron depender los ingresos del Estado de los impuestos internos (IVA e impuestos directos) más que de los impuestos aduaneros. En efecto, la tentativa de "industrialización a toda marcha" que se inició con la adopción de la estrategia de sustitución de las importaciones redujo la agricultura al rol de sustento del desarrollo industrial.

Haití, como todos los países latinoamericanos, está alieneado, desde principios de los años cincuenta, en un corpus elaborado por los primeros teóricos de la dependencia y del intercambio desigual, quienes postulaban que el desarrollo de los países especializados en la producción de bienes primarios estaba trabado porque los términos del intercambio no eran favorables para ellos. Entonces, la relación entre agricultura y cre-

cimiento económico global fue desviada hacia una creencia que establecía la primacía de la industrialización sobre el desarrollo agrícola. Todos los recursos (inclusive los agrícolas) fueron orientados a favor del desarrollo industrial por medio de subvenciones directas, tasas de interés preferenciales, impuestos indirectos, precios insignificantes para las materias primas de origen agrícola, tipo de cambio sobrevaluado, etc. A la agricultura se le asignó el rol de proveedora de bienes y mano de obra baratos; divisas extranjeras, ahorro interno y productos alimenticios, todo fue destinado a activar la industria local. La agricultura rural orientada al consumo local fue sencillamente abandonada en favor de la agricultura de productos para la exportación. Sin embargo, en 1973, un informe de la DEA hizo sonar la alarma sobre la necesidad de mejorar los ingresos agrícolas para evitar la quiebra del sector. Sectores de producción como el del café fueron considerados amenazados. Se le propuso al Estado revisar el sistema fiscal haitiano para hacerlo menos dependiente de los impuestos aduaneros, lo que fue fundamentalmente una política absurda con efectos prácticamente irreversibles.

Este tipo de política estaba perfectamente de acuerdo con la necesidad de mantener la dominación de la ciudad sobre el campo, donde sin embargo viven más de dos tercios de la población. Lo que ocurre es que las protestas urbanas son las que provocan los golpes de Estado y las revoluciones. Todas las élites adquieren legitimidad política en la ciudad. Esto conforma un círculo vicioso: con precios agrícolas que se mantienen bajos artificialmente, el poder urbano arruina a los campesinos más vulnerables cuya única riqueza por lo general consiste en poder contar con precios agrícolas subvencionados, obligándolos al éxodo que los hacina en las villas miserias. Cuando sabemos, por medio de la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Haití 2001 (ECVH) que los más pobres invierten más del 53,4% de sus ingresos en alimentos, y que cerca de la mitad del consumo urbano consiste en productos alimenticios, podemos notar no sólo lo absurdo del sistema sino también su irreversibilidad. Como dice Daniel Cohen en *Richesse du monde, pauvreté des nations (Riqueza del mundo, pobreza de las naciones)*, "las ciudades se llenan de vagabundos y de indigentes que se convierten en los 'carboneros' de una política de la que fueron las primeras víctimas". Cada vez se hace más difícil romper el engranaje; las protestas urbanas sancionarán severamente a los gobiernos que lo intenten.

En este contexto se pusieron en práctica políticas de reforma económica a comienzos de los años ochenta. En primer lugar se trataba de conseguir la estabilización de la economía, es decir, sanear las cuentas públicas reduciendo los gastos, en general aquellos relacionados con las clases sociales más dóciles. De esta forma, la parte del gasto público destinada a sectores clave como la agricultura, la educación y la salud quedó

muy debilitada y bajó a niveles inferiores a la media en países comparables. La segunda serie de medidas abarcó políticas estructurales. Por éstas entendemos un amplio dominio de intervenciones públicas y no sólo económicas, destinadas a actuar sobre los fundamentos de la sociedad con vistas a resultados macroeconómicos. Como ejemplo de dichas políticas podemos considerar la liberación comercial, la liberación de las cuentas de capital, la liberación del mercado de cambios, la reforma de las empresas públicas, la reforma de la administración y la reforma del sistema educativo.

No puedo entrar aquí en detalles sobre estas políticas. Para resumir, digamos qué defectos en su concepción y/o en su puesta en marcha hicieron que la mayor parte de estas políticas agravaran el mal que debían curar. En realidad, padecieron tres problemas principales.

El primero fue considerar a la economía como si procediera de una especie de ontología propia, de una verdad trascendental despojada de todo parásito normativo, una especie de *deus ex machina* situada fuera de la sociedad con la que lo social no tiene nada que ver.

El segundo es la total contradicción que existe entre la economía de los libros y la política económica aplicada aquí. En primer año de economía enseñamos que, cuando hay recesión, hay que reactivar. Naturalmente esto no se puede hacer sin conocer la naturaleza de la crisis que sufre la economía y las modalidades de esta reactivación. Nunca el objetivo puede ser profundizar la recesión. Los políticos de Haití en los últimos años no hicieron otra cosa que acarrear la destrucción de la riqueza, sin resolver de manera duradera la inflación, lo cual era su meta principal. Es cierto que existió el problema de la inestabilidad política y también existe el problema de la esencia de estas políticas.

El tercer problema consiste en dejar siempre para el día siguiente la satisfacción de necesidades básicas. Esta creencia ciega en un mañana mejor sólo condujo a aceptar todo tipo de sacrificios, como el de las inversiones a futuro que son la educación y la salud.

A modo de ilustración, permítanme dar un solo ejemplo: el de la política monetaria. Desde principios de los ochenta, la política monetaria estuvo determinada por la preocupación por mantener la estabilidad de los precios. Tres cambios importantes caracterizaron la política en este campo: la liberación de la tasa de interés y la subsiguiente modificación de los instrumentos de la política monetaria y creación de los "bonos BRH"; la liberación del tipo de cambio; y la liberación del mercado de crédito, lo que implicó prácticamente la supresión del crédito orientado, sobre todo, hacia actividades agrícolas. Era cuestión de que el gobierno controlara el crecimiento de la oferta de moneda para ponerlo en línea con los objetivos de la inflación estipulados en los acuerdos de estabilización aprobados con el FMI

y de que la tasa de interés real se tornara positiva para alentar el ahorro interno. Asimismo, con la liberación del tipo de cambio se buscaba mejorar la competitividad de la economía nacional tanto en las importaciones como en las exportaciones. La liberación del mercado de crédito debería profundizar este último resultado, orientando el crédito hacia sectores de mayor valor agregado, lo que a la larga favorecería la reducción de costos unitarios y la dominación de la inflación. La realidad no tuvo nada

«La realidad no tuvo nada que ver con lo que se esperaba. El gobierno entró en una especie de ‘trampa monetaria’»

que ver con lo que se esperaba. El gobierno entró en una especie de “trampa monetaria”. Se hizo difícil el arbitraje en términos de políticas públicas para reorientar la cartera de crédito de los bancos comerciales (lo que consistía en actuar directamente sobre el volumen de la masa

crediticia o indirectamente a través de tasas de interés sobre los bonos). Frente a la falta de elasticidad de la demanda de bonos con respecto a las tasas de interés, el Banco Central intentó en 2005 reducir el volumen de la masa monetaria a 6,3% de la liquidez del sistema contra 7,3% en 2003 y 9,2% en 2001. El resultado fue el deterioro neto de la calidad de las carteras bancarias si nos atenemos a los índices de rentabilidad ROA (retorno de acciones) 0,8% contra 1,94% y ROE (rendimiento del activo) 15,1% contra 35%. El informe 2006 cuenta con una ligera mejora de los índices, pero mientras tanto la emisión de bonos aumentó. A pesar de que las tasas de interés bajaron alrededor de 8 puntos porcentuales, los bancos prefirieron colocar el capital que tenían en bonos BRH, prácticamente sin riesgo aunque a una rentabilidad más baja, que financiar el mejor proyecto de inversión. Los recursos de la economía fueron desviados en detrimento del sector productivo. Además, las tasas de interés se dispararon alcanzando umbrales casi usurarios. La competencia esperada entre los operadores del sistema –que debería haber tenido un efecto reductor de los precios– fue corta y la batalla por la captación del ahorro implicó aumento de costos de recaudación mientras que el crédito se repartió entre

un número muy reducido de clientes aumentando el costo unitario de la gestión. La diferencia entre las tasas deudora (pagada por los tomadores de crédito del sistema) y acreedora (recibida por los tenedores de depósitos) llegó a ser una de las más elevadas del mundo. Solamente 25-30% de los fondos captados por el sistema bancario se transformaron en crédito frente a 60-65% en República Dominicana. En definitiva, estas políticas acarrearón la masificación de la pobreza con una población cada vez más dependiente de las transferencias de la diáspora para financiar el consumo de bienes, la mayor parte de ellos importados. En veinte años, la parte de los salarios en el valor agregado perdió 7 puntos mientras que la de las utilidades aumentó 9 puntos y representa aproximadamente 68%. Esta situación no tiene equivalente en ninguna parte del mundo.

El papel de la democracia

Ahora bien, ¿cuál es el papel de la democracia en todo esto? ¿Puede decirse que el desarrollo lleva a la democracia o es a la inversa? O, mejor dicho, ¿los resultados de la economía están ligados a las decisiones políticas, o las decisiones políticas condicionan los resultados de la economía? Aunque los países desarrollados son, en su mayoría, democracias en la actualidad, el vínculo entre desarrollo y democracia no está tan claro. Fue después de la Segunda Guerra Mundial que la relación entre la teoría económica y la democracia dio un giro decisivo. Schumpeter publicó en 1942: *Capitalismo, socialismo y democracia*. Los trabajos de Bergson (1930) y Samuelson (1947) mostraron que el modelo económico queda incompleto si se sostiene la hipótesis de que el primer objetivo del soberano (gobierno, dictador, poder, etc.) es maximizar el bienestar colectivo. El programa de trabajo consiste en encontrar reglas de comportamiento óptimas para el Estado.

No obstante, desde el siglo XVIII, el interés de los economistas clásicos por la cuestión del Estado y su rol en la economía era evidente. Emma Rothschild, en "The debate on economic and social security in the late eighteenth century: lessons of a road not taken" (publicado en la revista *Development and Change*, 1996, Vol. 27, N° 2), muestra bien que, para los autores clásicos como Smith, Turgot, Condorcet, el desarrollo social no se oponía, sino que más bien era una condición para el desarrollo económico y el comercio. Debemos recordar que el siglo XVIII dio nacimiento a la democracia (liberalismo político), pero alentó el desarrollo de la economía capitalista (liberalismo económico). Aunque ambas comparten el individualismo metodológico, abarcan dos realidades diferentes. Según Tocqueville, en la democracia reinará la pasión por la igualdad. Mientras que el capitalismo no es para nada igualitario. En él domina el ideal meritocrático. Los individuos, al reaccionar ante diversos estímulos, alcanzarán resultados diferentes.

La búsqueda de la eficacia del sistema justifica que la sociedad aliente a los mejores, sin perjuicio de encarar medidas sociales correctivas para ayudar a los que se quedan en el camino. Salvo raras excepciones, las de aquellos que consideran a la democracia un fin, en general el término democracia no está definido por economistas, que sólo la ven como un principio de organización de la sociedad que permite alcanzar una cantidad de objetivos deseables. La idea que se vuelve central en los debates es la de gobernanza. Su utilización abusiva parece reflejar insatisfacción en el análisis de la democracia tradicionalmente desarrollado en economía. Los trabajos empíricos sobre las relaciones entre democracia y desarrollo económico no proporcionan pruebas claras.

No queda duda de que un sistema capaz de mantener la paz civil, de hacer respetar los derechos sobre la propiedad, especialmente los de los inversores, favorecerá más el crecimiento. La historia económica reciente como los *success stories* (casos exitosos) asiáticos o los resultados más recientes de la economía de Malasia, después de la crisis financiera de 1997, parecen demostrar, sin embargo, que las políticas a favor del crecimiento pueden a veces negar en su esencia el objetivo democrático.

No obstante, aunque el vínculo entre democracia y desarrollo no sea unívoco, las desigualdades evidentes perjudican la estabilidad política e impiden que el desarrollo y la democracia se instalen sobre una base durable. Creo que lo que le faltó a Haití durante este largo período de transición supuestamente democrática es un debate estructurado sobre orientaciones estratégicas que permitieran arribar a verdaderas doctrinas ideológicas de manera de aclarar cuál es la elección que se les ofrece a los ciudadanos.

A pesar del pulular de tantos partidos políticos que reivindican todos lo mismo, la modernización del país, es indignante constatar en la actualidad que las causas del mal aún no se conocen en profundidad, no hay un buen diagnóstico. La reiteración de crisis cada vez más violentas, que Gérald Chery en una frase que le pertenece califica de "crisis permanente", es un testimonio impactante de esto. Nuevos paradigmas (sobre economía, relaciones internacionales, Estado) comienzan a aparecer en círculos universitarios o en las oficinas de organizaciones internacionales, y son adoptados aquí sin una evaluación crítica. Si es insuficiente el conocimiento de la naturaleza de los problemas y los desafíos que enfrenta la nación, las soluciones sólo pueden ser erradas.

Para terminar mi exposición quisiera hacer dos propuestas y recordar cierto número de desafíos a los que, en mi humilde opinión, Haití debe enfrentarse para escapar de las garras de la pobreza y la inestabilidad política.

En primer lugar, no se conocen ejemplos de países que hayan alcanzado progresos económicos y sociales significativos negando al actor principal que es el Estado.

En segundo lugar, la modernización de la economía nacional exige, reclama una profunda reevaluación de las estrategias de ayuda internacional (cualquiera que sea la forma aceptada, con respecto a su gestión, pero también por los efectos de los comportamientos de sus actores: síndrome holandés). No se habla de liberalismo con respecto a los NPI (países de reciente industrialización) asiáticos más que con relación al papel fundamental que tuvo el mercado mundial en la validación de las estrategias seguidas. El actor principal no fue sólo el mercado, sino el mercado en el marco del Estado. (Pero un Estado educador, responsable, más allá de los partidos).

Desafíos para el futuro

Un desafío es un obstáculo a superar. Observo una cantidad de desafíos para la reactivación de la economía haitiana. Voy a quedarme con los siguientes que me parecen insoslayables.

- Mental: pensar con fuerza y coraje que no existe la fatalidad haitiana como no existió para Corea del Sur hace apenas unos cuarenta años, o para Malasia más recientemente. El elemento esencial aquí es la construcción de un consenso nacional sobre el desarrollo de la nación. El desarrollo es un proceso voluntario, no puede realizarse en frío. Hay que hacer un llamado a la ética, la solidaridad y la responsabilidad nacionales. Hay que resucitar la nación. El modelo de desarrollo haitiano debe ser concebido en Haití por los haitianos y es necesario asumir que hay que rechazar las recetas que no siguen el sentido del desarrollo socioeconómico del país, no importa de donde vengan. La liberación del mercado de capitales implica inestabilidad macroeconómica y quiebra la unidad nacional (demasiados indigentes).
- Institucional: se origina en dos antecedentes. La nación tiene necesidad de cambiar de montura institucional para embarcarse en esta aventura. El país está sub-administrado. Sobre todo está mal administrado. Los resultados de los países en el contexto de la globalización provienen no tanto de los resultados de sus empresas como de las administraciones nacionales (H. Syriex). Este mal funcionamiento encarece los costos de las

transacciones e interfiere con los sistemas de estímulo de la economía. El mal funcionamiento es fuente de despilfarro y corrupción y debilita la autoridad del Estado que dicta una norma y desarrolla o alienta prácticas para no aplicarla. Los modelos de crecimiento endógeno muestran cómo un cambio de estímulo puede cambiar en forma permanente los índices de crecimiento de la economía (Romer, Easterly).

- Tecnológico: los economistas del desarrollo como Nurkse y Rodan concibieron la idea de la ventaja del retraso de ciertos países. El costo de adopción de novedades tecnológicas es débil porque estas no tienen que reemplazar a las antiguas. W. Easterly destaca que "la prosperidad no se arraiga hasta que todos los actores responden a estímulos sanos". Esta se hace realidad cuando el gobierno es incitado a apoyar la adaptación tecnológica, la inversión productiva y el auge de una educación de calidad, y cuando es posible reemplazar las políticas tomadas mediante presiones de grupos con intereses antagónicos. El Banco Mundial calcula en alrededor de 236 y 331 millones de dólares el monto necesario en cinco años para alcanzar la escolarización universal en el año 2011. ¿Está realmente fuera de nuestro alcance un esfuerzo estrictamente nacional? Otros países no mucho más ricos que nosotros como Uganda y Tanzania lo han logrado.
- Estratégico: se plantea el problema de en qué áreas se utilizan o cómo se administran los recursos estratégicos del país. Nuestros recursos son los paisajes, la juventud de la población, nuestra ubicación geográfica, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra diáspora. ¿Cuál es la política nacional para cada uno de estos temas? ¿Quién la define?
- Técnico: revisar las decisiones tomadas en el pasado sobre las modalidades de financiamiento de la economía, sobre el modo de inserción en el comercio internacional, etc. Este es el papel de la diplomacia haitiana.
- Ético: considerar fuera de la ley a la pobreza que condena a las personas a la mendicidad (utópico, pero realizable). Existen experiencias al respecto. Naturalmente los cambios que esto exige en la sociedad están a la

altura de los sacrificios a los que se sometieron los padres de la patria contra la esclavitud. En pocas palabras, ¿somos capaces? La cuestión queda planteada.

Desarrollo comunitario y crisis agraria: metamorfosis del movimiento campesino haitiano

Jean Anil Louis-Juste

Economista, sociólogo.

Traducción: Gabriela Cabantous.

Resumen

El artículo traza una historia de los diferentes tipos de organización campesina en las diversas etapas del desarrollo nacional. Hace un particular hincapié en las transformaciones del desarrollo comunitario y plantea el nexo que existe entre la necesidad de una reforma agraria pro campesina y la movilización de las masas urbanas en pro de la libertad.

Abstract

The article outlines the history of different types of peasant organizations at various stages of national development. It particularly emphasizes changes in community development and raises the issue of the link between the need for land reform for peasants and the urban mobilization of the masses in favor of freedom.

Palabras clave

Derecho a la Tierra; Desarrollo Local; Iglesia Católica; Centro de Acción Comunitaria; Mercado; Movilizaciones Sociales; Tet Kole; Cooperativas.

Keywords

Land Rights; Local Development; Catholic Church; Communitary Action Center; Market; Social Mobilizations; Tet Kole; Cooperatives.

Cómo citar este artículo

Louis-Juste, Jean Anil 2008 "Desarrollo comunitario y crisis agraria: metamorfosis del movimiento campesino haitiano" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

Nuestros ancestros, los esclavos y los "marrons"¹ de Santo Domingo eran más humanos y más dignos que nosotros, porque sabían que la mujer y el hombre no habían sido creados para vivir en el servilismo, mientras que nosotros no dejamos de pedir limosna al capital –hoy internacionalizado–, y nos complacemos en la dependencia.

Nuestros ancestros, los esclavos y los "marrons" de Santo Domingo eran más inteligentes que nosotros, ya que sabían dar respuestas concretas adecuadas a los problemas reales de explotación, dominación y humillación que vivieron en las plantaciones, mientras que nosotros nunca dejamos de agachar la espalda ante las exigencias de las nuevas personificaciones del capital.

Introducción

En esta presentación consideraremos al movimiento social como expresión de un modo de vida y de trabajo en la lucha política con vistas a la conservación o transformación de las relaciones sociales dentro de un espacio y tiempo determinados. En su génesis, el movimiento campesino haitiano expresó el deseo de emancipación de los descendientes de esclavos de Santo Domingo, explotados, dominados y humillados en el sistema capitalista dependiente de Haití. La proclamación de la "República pro-campesina" de Goman (1807-1820) y la insurrección campesina de 1843 son emblemáticas en este sentido: el libre desarrollo de todos los campesinos representa el horizonte de su lucha, la que reivindica el derecho a la tierra, a la educación escolar de los niños campesinos y a la justicia social en el intercambio comercial. La organización comunitaria de la solidaridad revela el deseo de realización, de libertad y de igualdad por parte del movimiento social.

En cambio, con la introducción del proyecto de desarrollo comunitario como forma de trabajo y de acción comunitaria (absorción de capital y difusión de tecnología apropiada dentro del marco de la revolución verde), el movimiento social campesino pierde sus características

clastas para transformarse en grupos de campesinos más bien orientados hacia la reivindicación de la diversidad local y del desarrollo local. Así, registramos la fundación de diferentes organizaciones campesinas que actúan como movimientos sociales locales en su área de intervención. La unidad y la totalidad del movimiento campesino histórico fueron sustituidas por la diversidad y la parcialidad de los movimientos campesinos contemporáneos.

Dentro de este contexto, es necesario interpretar dialécticamente la situación de la globalización capitalista actual, a fin de adaptarse al legado histórico de libertad plena de la revolución haitiana de 1804. Por lo tanto, un encuentro filosófico y cultural con esta última será determinante para dejar atrás las contradicciones sociales globales que hicieron avanzar al movimiento campesino haitiano hacia la colaboración con una forma determinada de capital que es el desarrollismo local.

El desarrollo comunitario y la agrupación campesina: la cuestión del proyecto de desarrollo o de absorción de tecnología adecuada

La agrupación campesina es la nueva forma de lucha campesina en Haití, tendiente a mejorar las condiciones de vida y trabajo en el medio rural. Como forma social, tiene un significado socio-político que se descubre al intentar encontrar el sentido de la organización. En este caso, un doble enfoque diacrónico y sincrónico parece importante para, a la vez, proyectar la organización en el tiempo y abandonar el lugar local que ocupa hoy en el mundo global.

1948 o génesis del desarrollo comunitario en Haití

En Marbial se implantó el proyecto de la 8ª Sección Comunal de Cochon Gras (Jacmel). La Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargada por designación de las potencias dominantes de la legitimación de la nueva división internacional del trabajo —en especial mediante las instituciones de Bretton Woods, 1944—, pretendió con este proyecto lograr la alfabetización funcional de los campesinos, la difusión de tecnología de higiene corporal y la popularización de técnicas agrícolas más eficientes (Rémy Bastien, 1983). La extensión agrícola fue la pedagogía utilizada para difundir la modernización de las prácticas sociales campesinas consideradas atrasadas desde el punto de vista del progreso, entendido como desarrollo de las fuerzas productivas dentro de una sociedad determinada².

Dieciocho años más tarde, la Iglesia católica fundaría el Instituto de Desarrollo Comunitario Haitiano (DCCCH), planteando la ecuación: desarrollo = nuevo nombre de la paz. En realidad, el 4 de septiembre de 1965, el papa Paulo VI pronunció un discurso delante de la Asamblea General de la ONU a fin de participar de la conmemoración del vigésimo

aniversario de la instancia supra-estatal. El deseo expresado de transformar las estructuras de la doctrina social de la institución en organismos de desarrollo no podía contrariar el proyecto del presidente John Fitzgerald Kennedy de detener el avance de la revolución cubana en América Latina. El bautismo tardío del Proyecto Alianza para el Progreso selló entonces el pacto entre el cáliz y el M-16 a favor la dictadura, a pesar de que el discurso y el documento del proyecto pusieran el acento en la democratización.

En este sentido, el DCCH trabajó por la difusión de paquetes tecnológicos agrícolas supuestamente apropiados y la evangelización de los campesinos en la diócesis del sur. Así se expandió la práctica organizacional del Consejo de Acción Comunitaria (CAC)³, como forma de difusión tecnológica y de evangelización masiva.

1965-1975 o la extensión del desarrollo comunitario como forma de intervención social

Durante el largo reinado de la dictadura duvalierista (1957-1986), la Iglesia católica fue la única institución autorizada para intervenir en el país. Este privilegio se obtuvo como resultado del éxito de las negociaciones entre François Duvalier y el Vaticano: el dictador obtuvo el derecho de nombrar a los obispos. Este triunfo diplomático fue conocido con el nombre de *indigénisation* del clero o de lucha contra el comunismo⁴.

Teniendo en cuenta esta excepción, la Iglesia católica abrió otros centros de formación destinados a la evangelización de los campesinos y la difusión de adelantos agrícolas. Podríamos citar, por ejemplo, el Centro Emaús de Papaye (Hinche, 1973), el Centro San Martín de Porres (Jean Rabel, 1973), el Instituto de Desarrollo y Educación para Adultos (Cap, 1975), el Centro Vin Moun (Bassin Bleu, 1971) y el Instituto de Tecnología y Animación (Gressier, 1976). El nombre de estos centros dice mucho sobre ellos.

Todos estos centros formaron y siguen formando jóvenes campesinos instruidos que trabajan en el desarrollo comunitario. El resultado puede observarse mediante el control de la animación rural dentro de estructuras no estatales que intervienen en el medio rural. Conscientes de su fuerte posición en cuanto a la disputa por la hegemonía que poseen los *grandons-bourgeois*⁵, los animadores fundaron su propia organización; por ejemplo, en Papaye, la Asociación de Animadores del Desarrollo (ASSAD) y, en La Gonâve, la Asociación de Animadores por el Desarrollo de La Gonâve (AAPLAG), las dos orgánicamente ligadas al Movimiento Campesino de Papaye (Jean Anil Louis-Juste, 1993; 1998b; 1999).

En estas circunstancias, un grupo de sacerdotes y laicos comprometidos fundó en París, en 1972, la organización política revolucio-

naria de tendencia maoísta *En Avant*. Ésta se infiltró dentro de las estructuras desarrollistas de la Iglesia para difundir el maoísmo dentro del medio rural haitiano; en aquel entonces, la visión de la educación popular de Paulo Freire se convirtió en el método principalmente utilizado. En este sentido, el equipo misionero de Jean Rabel alentó la fundación del Movimiento Tèt Ansanm⁶.

Cualquiera que haya sido el espíritu que guió la formación de los campesinos, las agrupaciones funcionaron como canales de transferencia de la “modernidad” dentro del medio rural:

Las agrupaciones de campesinos reciben el paquete tecnológico en sesiones de formación organizadas por técnicos y animadores. Así, los agentes encargaron a los campesinos la responsabilidad de distribuir este paquete dentro de las comunidades. Este trabajo comunitario se verá ilustrado mediante tareas de desarrollo específicas o acciones comunitarias para satisfacer las necesidades inmediatas en educación, salud, nutrición, etc. El discurso y las acciones de los agentes, contruidos sobre la base de programas, proyectos y actividades de desarrollo, formaron el pensamiento desarrollista que transformó las agrupaciones en canales de transferencia de la modernidad al campo (Louis-Juste, 1999: 169).

Como veremos más adelante, la masacre de campesinos de Jean Rabel (23 de julio de 1987) no implicó cambios en la estrategia desarrollista que significaran hacer más hincapié sobre la falta de tecnología adecuada como fundamento del subdesarrollo (Louis-Juste, 1999: 168).

Esta forma de intervención social utiliza pues las agrupaciones campesinas como soporte de la interacción social. Mientras los animadores afirmaron haber trabajado en la concientización de los campesinos, el desarrollo comunitario sobre el que se apoyan está orientado por una visión de carencia social y tecnológica como explicación de los problemas sociales (Louis-Juste, 1999: 170). La puesta en práctica de la pedagogía freireana no sirvió para ayudar a superar la contradicción entre la educación popular y el desarrollo comunitario.

Las agrupaciones campesinas se transforman en un espacio de interacción social disociativa. En efecto, la pedagogía de los oprimidos utilizada en el seno de desarrollismo de Haití bebe de la fuente, juzga y actúa según Paulo Freire. Cuando los animadores buscan ayudar a una “población” para ver los problemas a los que se enfrenta, el objetivo de la intervención

es tomar en cuenta el sentido común que domina el espíritu de la “población” inmersa en su cotidianeidad y realidad profunda (Louis-Juste, 1999: 170).

Sin embargo, la combinación ecléctica de la educación popular y el desarrollismo comunitario produjo mentalidades desprovistas de conocimientos acerca de la totalidad histórico-dialéctica de los problemas sociales locales. Dicho de otra forma, esta praxis social bastarda inhibió el germen clasista de desigualdades sociales en favor de la comunicación o la interacción intersubjetiva.

Resumiendo, el desarrollismo comunitario como modo de penetración del capital en el campo haitiano contribuyó a reforzar la visión parcial y parcializada sobre los *grandons* como únicos enemigos de los campesinos. Ahora bien, la forma de subsunción de la pequeña producción mercantil del país al capitalismo global está asegurada por medio del mercado de productos agrícolas y manufacturados. De esto resulta una confusión entre la personificación del capital en el medio rural (los propietarios de comercios, medios de transporte público, etc.) y la estructuración de mecanismos de explotación, dominación y humillación vigentes en el país.

1978-1987: tentativa de encuentro entre el movimiento campesino contemporáneo y el Proyecto de Libertad o Muerte

A partir de 1973, la rebelión de los campesinos-granjeros de Bocozelles (4º Sección Comunal de Saint-Marc) contra la pesada carga territorial aplicada por los *grandons-bourgeois* sobre los arroceros de Artibonite inició el despertar del movimiento campesino haitiano. Este impulso se intensificaría con la Guerra del Arroz en Artibonite y el Centro (1986). Los primeros cierres de empresas por parte del muy discutido Lesly Délatour, Ministro de Economía y Finanzas durante la presidencia del Consejo Nacional de Gobierno, sirvieron de *leitmotiv* para unificar al movimiento popular alrededor del objetivo Rache Manyòk⁷.

La Federación Nacional de Estudiantes Haitianos (FEDEH), la Central Autónoma de Trabajadores Haitianos (CATH), la Confederación de la Unidad Democrática (KID, en créole), la Federación de Comités de Barrio (FEDKKA, en créole), la organización Kay Fanm, etc. se aliaron a la lucha de las organizaciones campesinas contra la desestructuración de la agricultura campesina, ya iniciada durante la dictadura de Jean-Claude Duvalier⁸.

Cuando el Consejo Nacional de Gobierno (CNG) se dispuso a alentar el *dumping*, ya sea mediante ayuda alimentaria o mediante el contrabando, el movimiento popular interpretó la acción gubernamental como una operación política duvalierista. Se produjeron huelgas, manifestaciones

callejeras, peticiones, hasta el famoso discurso del obispo de Jérémie, monseñor Willy Romélus, que exclamó: "Rache Manyok nan Eleksyon"⁹. Y el 29 de noviembre de 1987, el Frente Nacional por el Cambio asistió, de manera impotente, a la masacre de los electores de todo el país. Así esta coalición política supuestamente de izquierda fue privada de una victoria electoral casi asegurada. El CNG organizó elecciones a favor de François Lesly Manigat de la Unión de Demócratas Progresistas Nacionales (RDNP), que fue depuesto seis meses más tarde, en junio de 1988.

«La señal fue clara: las clases dominantes no aceptaban modificar el modelo de explotación y humillación de tantos y tantos trabajadores, ni estaban dispuestas a detener la depredación de la riqueza forestal»

La derrota por las armas no hizo reflexionar a los propagandistas del eslogan de transición democrática sobre el límite de la fórmula tríplica Estado de derecho, ciudadanía y sociedad civil, condensada en el pacto del nuevo contrato social. La tesis de Marcel Gilbert, "*Peuple historique contre brasseurs d'affaires*" ("Pueblo histórico contra los hombres de negocios"), reveló, sin embargo, toda su congruencia.

En realidad, el resultado frustrado de las urnas ya había sido anunciado en julio de 1987: los *grandons-bourgeois* de Jean Rabel, apoyados por la jerarquía de la Iglesia católica y la embajada estadounidense, masacraron 130 campesinos. La señal fue clara: las clases dominantes no aceptaban modificar el modelo de explotación y humillación de tantos y tantos trabajadores, ni estaban dispuestas a detener la depredación de la riqueza forestal. La fórmula de transición democrática no iba más allá de una búsqueda de libertad política. La oposición a la apropiación arbitraria de tierras fiscales en el noroeste se enfrentó pues a la reafirmación de la propiedad privada servo-capitalista como lógica del metabolismo social¹⁰ en Haití.

Así, la brutal reacción de las clases dominantes no supo llevar a los agrupamientos campesinos a radicalizar la lucha. Siguieron creyendo en la posibilidad de desarrollo por medio del proyecto de desarrollo comunitario.

El elevado grado de empobrecimiento de las masas populares haitianas dio lugar a una necesidad enorme de recursos materiales y financieros para las agrupaciones campesinas; y las instituciones que las acompañaban aparecían como organizaciones administradoras de recursos escasos. Dentro de esta relación se estructuró la dependencia ideológico-política. Los campos haitianos fueron entonces invadidos por la ideología de la sociedad civil como instancia democrática virtuosa. Afirmar que el medio rural haitiano no está realmente bajo el control de los medios de comunicación masivos es considerar la interfase ONG-agrupación campesina como plataforma de difusión de este pensamiento mistificador.

En conclusión, se perturbó el sueño del movimiento campesino haitiano: una nueva forma emergió bajo la dominación de la falsa solidaridad desarrollista propagada a fines de la Segunda Guerra Mundial. En lugar del Pacto Colonial, las potencias de la época pusieron por delante la cooperación para el desarrollo. Los ministerios coloniales fueron sustituidos por agencias internacionales para el desarrollo. La extensión agrícola se transformó en el mecanismo de control de las masas campesinas del sur. En ese momento de privatización de la Ayuda Pública para el Desarrollo (APD), que se inició dentro del marco de la rearticulación de las inversiones de capital en los años setenta, las ONG del norte, como administradoras de la beneficencia internacional, se unieron a las ONG del sur, que ocupaban la función de procesadoras de las carencias sociales. Si la APD servía para hacer posible el funcionamiento del Estado-proveedor del norte, era porque había legitimado la continuación de la explotación de recursos y de trabajadores del sur. En este contexto el bienestar de las clases trabajadoras del norte se obtuvo mediante el fordismo-keynesiano al precio del malestar de los del sur, una vez que en los Estados del sur se habían instituido regímenes dictatoriales desarrollistas, es decir, absorbedores de capital y difusores de tecnología, administradores de empresas capitalistas periféricas y distribuidores de asistencia social precaria¹¹. De allí surgen el populismo del sur y el control de las masas populares dentro del marco de la división internacional del trabajo, puesta en práctica inmediatamente después de terminada la guerra y dirigida por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el GATT.

1990-2004: el corto reino del Consenso de Washington y la permanencia del servilismo haitiano

En Haití, el neoliberalismo desarrollista tuvo su apogeo durante la primera presidencia de René Garcia Préval (1995-2000). Se la bautizó como la modernización democrática de las empresas públicas. En este período se privatizaron tres empresas públicas: el cementerio, la industria molinera y la de

oleaginosas. Únicamente el Kolektif kont FMI ak Plan Neyolibereal¹² intentó movilizar a las masas populares contra esta manipulación lavalasiana. Efectivamente, el gobierno exiliado del presidente Jean-Bertrand Aristide había adherido al Consenso de Washington (1990) al firmar el Acuerdo de París (1994), justo antes de su vuelta al poder. Posteriormente, su sucesor aplicó la política de ajuste estructural al entregar el patrimonio al capital transnacional. Hoy, de vuelta en el poder, Préval pretende profundizar su obra de liquidación, comenzando por cesantear a los trabajadores de la TELECO.

Durante el corto reinado del breve Consenso de Washington en América Latina, se pudo observar en Haití el celo del líder del Movimiento Campesino de Papaye, Chavannes Jean-Baptiste, en la propagación de la política neoliberal de su gobierno. Por poco fue linchado en el norte debido a esta propaganda perniciosa. Hasta ese momento, la pesadilla del Cap Haitien no le había enseñado nada, ya que en 2006 volvió a la carga para apoyar al Grupo 184 que representa el proyecto de sociedad civil más antipopular del país.

Mientras tanto, el Movimiento Tet Kole no hizo más que mantener un silencio cómplice: la mayor parte de sus fundadores se alinearon en la posición lavalasiana; y sus mandos locales ocuparon funciones políticas subalternas en el gobierno o sirvieron de correa de transmisión entre el gobierno y las masas populares locales.

Efectivamente, el movimiento social campesino haitiano no contribuyó a la derrota del neoliberalismo en Latinoamérica. Si hoy la Alianza Bolivariana de América hace retroceder significativamente el avance del Acuerdo de la Zona de Libre Comercio en América, el triunfo se debe a la fuerza de la Revolución Cubana y a la audacia del movimiento social transformador venezolano. El Mouvement Paysan Papaye (MPP) está instalado en una posición reaccionaria; el Tet Kole apenas logra liberarse del anillo impuesto por la orfebrería lavalasiana, mientras que las masas populares urbanas tardan todavía en despertarse del opio lavalasiano que las ilusionó con el espejismo de la relación directa paternalista y la gestión patrimonialista de favor como formas de participación política popular.

El servilismo es lo que mejor caracteriza al gobierno haitiano en esta coyuntura de retroceso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): mientras que el régimen actual aprovecha los acuerdos preferenciales como mecanismos de integración en el seno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), es incapaz de dar la espalda al Consenso de Washington, prefiriendo en cambio mantener una posición ambigua que roza el oportunismo. Lo peor es que la aventura política de las organizaciones campesinas en el pasado reciente representa el mayor obstáculo para la movilización de este sector contra el juego de

avestruz del presidente Préval: el paso a la derecha del MPP y la alineación lavalasiana del Tet Kole, en combinación con el control político de la ideología desarrollista, reducen la posibilidad de empujar al actual gobierno hacia la izquierda bolivariana.

El asesinato de Dessalines y la masacre de Jean Rabel o el aplazamiento del acceso a la propiedad de la tierra y el autocontrol del trabajo campesino

La historia rural de Haití está hecha de expropiaciones arbitrarias, de luchas y de reivindicaciones sociales campesinas. Estas se desarrollaron al compás de las crisis mundiales y la miseria generalizada de las masas populares. En realidad, dicha historia está constituida por el movimiento de lucha por la propiedad privada campesina contra la propiedad privada de los *grandon-bourgeois*. Cooptaciones, asesinatos y masacres son los principales medios utilizados por las clases dominantes para neutralizar la voluntad de los campesinos en su lucha por la reivindicación agraria.

17 de octubre de 1806 o el asesinato de un proyecto de reforma agraria pro-campesina

Ya el 1º de enero de 1804, Jean Jacques Dessalines había expresado en su primer discurso a la joven nación independiente su intención de unir la libertad duramente conquistada con la felicidad generalizada de las masas. La tarea de organizar el país iba a realizarse alrededor de este eje. De allí la construcción de fuertes militares, la fundación de patrimonios nacionales, etcétera.

Según el historiador Michel Hector, la creación de patrimonios nacionales del Estado representa el comienzo de prácticas socialistas en Haití¹³. Dentro de esta perspectiva se inserta el significado socio-político del famoso discurso del emperador: "Cuando combatimos a los franceses, nadie reclamó la herencia de su padre. Ahora que nos hemos liberado, vienen a adueñarse de los bienes sin dueño. Aquellos cuyos padres están en África no tendrán nada".

La reacción no tardó en ponerse en marcha. Comenzó en el sur, pero en realidad estuvo coordinada por el oeste, con la complicidad del norte. Así pues, Pétion, Christophe, Gérin, Yayou participaron activamente en el asesinato del portador del proyecto de reforma agraria pro-campesina.

1807-1820: Una forma de contrahegemonía establecida en Grande-Anse

El asesinato del emperador provocó inmediatamente la movilización en el sur. En Grande-Anse, los campesinos conducidos por Goman, Malfèt y

Malfou se separaron del resto del país durante trece años (1807-1820). Semejante respuesta política podría identificarse con una forma de construcción contrahegemónica, pero, lamentablemente, la historiografía haitiana no ha mostrado hasta aquí ningún interés en la marcación de las líneas de gestión del territorio liberado.

De todas formas, es probable la hipótesis de que las rebeliones contra el asesinato de Dessalines se opusieron a la *grandonarquía* durante el

desarrollo del oeste y el norte. Más aún cuando no había estallado ningún conflicto interno en el seno de la comuna campesina de Grande-Anse. Ésta fue simplemente diezmada por la represión generalizada del gobierno de Jean Pierre Boyer.

La mejor hipótesis sigue siendo la idea del desarrollo autónomo y libre de los campesinos que son los verdaderos depositarios de la libertad

plena conseguida por los esclavos de la isla de Santo Domingo. Asimismo, el autocontrol del trabajo campesino representaría la utopía más compartida por las prácticas comunitarias campesinas.

«La mejor hipótesis sigue siendo la idea del desarrollo autónomo y libre de los campesinos que son los verdaderos depositarios de la libertad plena conseguida por los esclavos de la isla de Santo Domingo»

1843 o la reanudación de la lucha por la democracia campesina

La crisis del capitalismo a fines de los años treinta repercutió sobre el movimiento de las fuerzas sociales en Haití, cuando las clases dominantes haitianas, en su búsqueda del disfrute con tranquilidad, se aliaron al capital francés para imponer la “castración de la economía nacional” (Joachim, 1979), aceptando pagar como indemnización por la independencia 150 millones de francos-oro (reducidos, es cierto, a 90 millones, pero equivalentes a más de 33 veces el presupuesto de Francia en ese momento)¹⁴. La miseria causada por la alianza del *bourgeois-grandon* haitiano con el capitalismo francés contra el trabajo campesino parece contribuir a la reanudación de la tradición de búsqueda de libertad instaurada por la lucha de los esclavos de

Santo Domingo. Jean Jacques Acaau asume el liderazgo de la insurrección, y formula reivindicaciones sobre el acceso a la tierra, la educación escolar destinada a los hijos de campesinos, la justicia comercial en las relaciones entre la ciudad y el campo y la representación política mayoritaria negra en instancias supremas del Estado.

La alianza *grandon-bourgeoise* presiona sobre la ofensiva campesina del sur que terminó siendo neutralizada por el ejército de la cooptación. Tal neutralización fue posible por la confusión entre el determinismo del tinte epidérmico y la realidad de los intereses objetivos del individuo o de un grupo de individuos. Con amargura, Acaau se daría cuenta de esto, al pronunciar la frase-manifiesto: "*Neg rich se milat. Milat P'v, se nèg*"¹⁵.

Tal superación ideológica tardía de la determinación socio-melanínica, la explotación, la dominación y la humillación de las masas populares por parte de la alianza servo-capitalista precedió el famoso Manifiesto del Partido Comunista, publicado por primera vez en 1848. Sin embargo, la cooptación del movimiento político de los campesinos del sur ya había subordinado la voluntad de la democracia agraria a la realidad de la *grandonarquia* haitiana.

1915-1920: Otro fracaso de una clase social en el fondo nacionalista

La nación haitiana se gestó primero en las plantaciones de caña. Para obtener el tiempo necesario para la reproducción de su capacidad de trabajo —que se había vuelto deficitario para los colonos en su relación con los comerciantes de Burdeos, El Havre y Lyon— los esclavos inventaron el *coumbite*¹⁶ como práctica de trabajo comunitario; para superar el obstáculo a la comunicación colectiva representado por la mezcla de diversas tribus africanas dentro de una misma plantación, forjaron la lengua créole. La religión vudú acompañó al famoso Congreso del 14 y 15 de agosto de 1791, presidido por Boukman, acompañado por Toussaint Louverture.

Los esclavos de Santo Domingo crearon la nación haitiana mediante diversas luchas orientadas hacia el horizonte único de la libertad. Los campesinos, grandes herederos de este proyecto de realización de la libertad, se transformaron en feroces defensores de dicha libertad. Si las rebeliones campesinas contra el asesinato de Jean Jacques Dessalines y la implantación de la *grandonarquia* oscurantista de Jean Pierre Boyer no hubieran estado connotadas por reacciones de defensa de la libertad conquistada en la revolución de 1791, habría sido difícil ocultar el nacionalismo de los campesinos conducidos por Charlemagne Péralte y Benoît Batravaille en la primera ocupación militar de 1915.

Mediante la traición, los invasores estadounidenses llegaron a asesinar a los jefes rebeldes. Como consecuencia, expulsaron a los

campesinos de las tierras ocupadas para plantar allí productos necesarios para la economía estadounidense, organizaron la emigración de campesinos hacia la República Dominicana y Cuba para ser contratados como cortadores de caña semi-esclavos¹⁷, controlaron las finanzas¹⁸ y la administración e instauraron la dictadura de los mestizos reformando el ejército indígena.

Allí también la clase campesina fracasó en su intento de merecer la Patria. Este fracaso puede imputarse al aislamiento del movimiento. El regionalismo predominó demasiado en los levantamientos armados campesinos.

1987 o el recuerdo brutal del asesinato de Dessalines

Las fuerzas tácticas de Dessalines vencieron la resistencia de los campesinos en rebeldía de Bocozelles en 1973. Qué ironía de la historia: los perros guardianes del Manifiesto contra la “opresión” fueron soltados desde una institución militar que lleva el nombre del emperador para ir a asesinar a otros portadores del ideal dessaliniano.

La derrota de los campesinos de Bocozelles no fue el fin del movimiento campesino por la libertad y el autocontrol del trabajo rural. En 1986, los campesinos del Movimiento Tet Ansanm de Jean Rabel intentaron recuperar las tierras en manos del Estado expropiadas por las familias Lucas y Poitevien gracias a la primera ocupación (Louis-Juste, 1998a). Asistida por el clero local, el Consejo Nacional de Gobierno y la Embajada estadounidense, la *grandonarquía* local masacró 130 campesinos el 23 de julio. El alcance del macabro acontecimiento sugirió a un representante de la *grandonarquía* la ilusión de haber derrotado mil comunistas.

La matanza, perpetrada dentro de la coyuntura de la inauguración política de la transición democrática, puede ser interpretada como una represión brutal de la memoria del pensador de la democracia agraria en Haití. Esto se diría de la trágica victoria de los consejos de acción comunitarios¹⁹ apoyados por la ONG estadounidense CARE sobre las agrupaciones campesinas del equipo misionero.

Del movimiento social campesino a los movimientos sociales: el abandono del proyecto de libertad de los esclavos y la incorporación de su forma de vida comunitaria subordinada a la reproducción ampliada del capital global

La modernidad se desarrolló en Haití a la manera del colonialismo. Desde la invasión de 1492 y el genocidio de los nativos de Haití por parte del capital español emergente, la forma colonial representa el modo de dominación del capitalismo europeo en América. Una vez destruidos los taínos y los caribes de Haití Kiskeya Boyo, la tierra de los hombres y mujeres libres

se transformó en un lugar de intenso tráfico de negros donde el esclavo era en primer lugar una mercancía cuya venta aportaba un lucro a la compañía de Indias en el comercio triangular, antes de ser reducida a una fuerza de trabajo forzado en las plantaciones (Martins, 1996; 1981).

La vida comunitaria que los esclavos de Santo Domingo iban a inaugurar con la construcción del *lakou* (institución de trabajo cooperativo y de desarrollo cultural autónomo) representó pues, en cierta medida, una negación de la vida y del trabajo esclavos. Dicha vida comunitaria simboliza una forma social de libertad colectiva contra la esclavitud. Asimismo, la inteligencia política de Jean Jacques Dessalines demostró toda su agudeza en la elección de la Libertad o la Muerte como lema nacional²⁰. En conclusión, el comunitarismo de los esclavos de Santo Domingo alimentó el deseo de liberación del trabajo y el proyecto de cambio de las condiciones de vida en la colonia.

La lucha de las agrupaciones campesinas por mejorar sus condiciones de vida

Hemos visto que las agrupaciones campesinas contemporáneas representan una especie de evolución de las agrupaciones polivalentes de las 4C (corazón, cooperación, coraje y comunidad) fundadas en los años cuarenta durante el lanzamiento de la primera campaña de alfabetización en el país. Más tarde, la dictadura de François Duvalier las institucionalizó por medio de la Oficina Nacional de Educación Comunitaria (ONEC), y su hijo y sucesor amplió su dominio en la Extensión Comunitaria para la Alfabetización y la Acción Comunitaria (ONAAC) en 1978, poniendo la institución bajo control del Consejo Nacional de Acción Jeanclaudiste (CONAJEC), y por medio también de las masas populares a través de los Consejos de Acción Comunitaria (CAC). Para comprenderlo sólo basta recordar que los campesinos adultos son supuestos miembros *de jure* de un CAC. La forma de las agrupaciones de campesinos dependientes sustituyó entonces a la forma armada del campesino autónomo que se movilizaba y luchaba por la realización del proyecto "Vivir en libertad o morir".

Dentro de esta estructura geopolítica, las agrupaciones campesinas surgieron en forma de cooperativas, cajas populares y/o grupos de catequesis con vocación agrícola. Muy rápidamente, estos últimos se enfrentaron con la hostilidad de los presidentes de los consejos comunitarios, principalmente constituidos por personalidades locales, que los tildaron de comunistas y, por lo tanto, los consideraron pasibles de ser juzgados como criminales²¹; mientras que la ideología de progreso inspirada en la Revolución de 1789 siguió moldeando las acciones comunitarias. Dicho de otra forma, la lucha contra la masacre de cerdos haitianos y el aumento del

costo de la vida siguió el patrón de desarrollo comunitario, considerado como absorción del capital y difusión de la tecnología adecuada en las comunidades locales. De modo que las movilizaciones campesinas que contribuyeron a la caída de Baby Doc estuvieron sutilmente animadas por la confusión entre el Estado y el gobierno, por un lado, y entre la forma-Estado y la forma Estado capitalista dependiente, por otro lado, parafraseando al economista brasileño Flávio Bezerra de Farias (2001).

«El deseo de cambiar de las masas populares cumple también un papel de medio de movilidad social para un séquito de técnicos y de universitarios»

Sin embargo, a pesar del predominio del contenido capitalista de las acciones comunitarias y las movilizaciones políticas subsiguientes, la forma-agrupación de campesinos traduce, en realidad, la necesidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo de las masas campesinas, al tal punto que el desarrollo se convirtió en el reclamo social más

inmediato expresado en el medio rural. Así, los especialistas en descalificación de la naturaleza capitalista de las carencias sociales, provistos de su ingeniería social –supuestamente neutra–, transformaron la calidad de estos problemas sociales en cantidad de proyectos técnicamente bien preparados y susceptibles de desatar las billeteras de las fundaciones y de empresas transnacionales. Por supuesto, por medio de la garantía de lealtad de los diseñadores del proyecto comunitario aprobado por las instituciones administradoras de la beneficencia internacional²². En este sentido, el deseo de cambiar de las masas populares cumple también un papel de medio de movilidad social para un séquito de técnicos y de universitarios que, de otra forma, irían a aumentar las filas de rebeldes contra la reestructuración productiva del capital transnacional que produce la desocupación en masa.

Ruptura en la organización campesina o el paso de la lucha de clases a la cooperación desarrollista

Acabamos de ver que la utopía social de mejora de las condiciones de vida campesina continúa estando

presente en las agrupaciones campesinas. Sin embargo, esta continuidad está garantizada bajo el control del desarrollismo comunitario. Asimismo se observa una ruptura profunda con la orientación clasista del movimiento campesino tradicional. La forma-agrupación representa la expresión más visible de esta ruptura orgánica. En efecto, la agrupación campesina, como canal de transferencia de tecnología y medio de interacción social, hipostasió el fundamento clasista de las desigualdades sociales bajo la forma de problemas comunes vividos por el conjunto de seres humanos ligados a una localidad. La dimensión temporal está completamente desterrada de la intervención comunitaria, como lo prescribe la Ayuda Pública para el Desarrollo (APD) desde su concepción como forma de control de países antiguamente colonizados. En lugar de la solidaridad campesina derivada de las prácticas de los esclavos contra la explotación, la dominación y la humillación operadas por la modernidad colonial, la cooperación internacional para el desarrollo hace de la solidaridad un espectáculo ya que, en realidad, en el proceso de financiamiento de los proyectos de desarrollo, las masas populares figuran como objetos hablantes que enuncian los primeros elementos estructurantes del proyecto. En conclusión, son sólo pacientes bajo tratamiento por el mal del desarrollo, ya que no disponen del arte de modificar la estructura del modo de intervención social mediante proyectos de desarrollo. Tal condición de espectadores contrasta con la movilización activa de las masas campesinas de Port de Salut, de Camp Perrin, etc., durante el estallido de la Révolte de Piquets: éstas no estuvieron desde un principio bajo el control de los *grandons-bourgeois* del lugar. La forma-agrupación simboliza pues una ruptura dentro de la organización de las luchas campesinas en Haití, constituidas por movilizaciones populares armadas y animadas por el proyecto autónomo de “Vivir en libertad o morir”, es decir, el autocontrol de los productores sobre sus vidas y trabajos.

Por una reafirmación campesina del proyecto “Vivir en libertad” en el contexto de la tercera ocupación militar del país

La idea de movimientos sociales, ya sea como organizaciones de identidad, de oposición y de totalidad con vistas al control de la historicidad (Touraine, 1980), o como instituciones administradoras de recursos escasos (Alberto Melucci citado en Gohn, 1998), fue propagada como bandera de una sociedad civil desconectada de su base material de trabajo alienado en el capitalismo global. Así pues, un nuevo contrato social, una nueva concepción de ciudadanía, una nueva constitución estructuran los modos de acción virtuosamente democráticos de los nuevos movimientos sociales que sustituirán, según los defensores de esta ideología, la centralidad fundamental del trabajo dentro de las organizaciones de lucha política. Entonces, ob-

servamos el movimiento campesino, movimiento de homosexuales, movimiento feminista, etc. Los movimientos sociales se definen por el criterio de identidad, olvidando que toda identidad determina también su negación, a tal punto que la totalidad está formada de partes dialécticamente opuestas (ver Hegel, 2005a; Marx, 1993; 2000).

En otras palabras, la unidad dialéctica de una formación social determinada se sacrifica en la conceptualización de los movimientos sociales en aras de la diversidad formal. Ahora bien, el movimiento Libertad o Muerte fue el primer movimiento social en América que comprendió la unidad dialéctica constituida por el disfrute en tranquilidad de los comerciantes de Burdeos, El Havre, Lyon, etc. y por la vida inhumana de los esclavos en las plantaciones de Santo Domingo. Este movimiento práctico de superación de las contradicciones sociales de la época fue realmente tan expresivo que pudo inspirar a Hegel su dialéctica del reconocimiento entre el amo y el esclavo (Hegel, 2005b; Buck-Morss, 2005).

En el momento en que el país vive su tercera humillación directa, condicionada por su creciente valor geopolítico –dado que el Golfo de Môle Saint Nicolas baña con un brazo de mar las costas de Cuba y Venezuela–, y que conoce la crisis ecológica más severa de su historia (menos de 2% de forestación, lo que equivale a un déficit forestal de más de 28%), parece necesario un resurgimiento filosófico y cultural. Dado el fracaso evidente de todos los programas de reforestación por parte del proyecto de desarrollo, debido al control territorial ejercido por los *grandons-bourgeois* y al mantenimiento de su sistema social de depredación y explotación desvergonzada, se hace ineludible una reforma agraria pro-campesina como condición objetiva de la resolución de la crisis agraria. Asimismo, los campesinos se transforman en agentes centrales de una lucha social por la libertad. La recuperación de su condición socio-objetiva de clase social es un prerequisite subjetivo también fundamental.

No obstante, esta posibilidad seguirá siendo letra muerta mientras que las masas urbanas no busquen provocar reformas en las ciudades. En este sentido, deben liberarse de la influencia lavalasiana que los considera como masas de maniobra en el proceso de enriquecimiento ilícito del gran bonete lavalasiano.

Una reforma agraria pro-campesina constituye el modo de reconstruir el tejido vegetal y la textura pedológica de las cuencas degradadas del país, es decir, de recrear las condiciones agronómicas, jurídicas y subjetivas necesarias para la reconquista de la soberanía alimentaria, premisa para la reconstrucción de la autonomía política del país.

En conclusión, la reafirmación del Proyecto de Libertad o Muerte en este contexto de la tercera ocupación militar destinada a ga-

rantizar la dominación del capital global en Haití pasa por la ruptura del esquema desarrollista de intervención social que caracteriza las movilizaciones campesinas. Es el momento de poner a prueba la solidaridad desarrollista tan cara al brazo ideológico del capital en los países del sur. Los campesinos deben reasumir la posición de clase social mayoritaria a la cual el capital le ha negado la calidad de dignidad humana en Haití.

Bibliografía

- Bastien, Rémy 1983 *Le paysan haïtien et sa famille* (París: Karthala).
- Buck-Morss, Susan 2005 *Hegel y Haití* (Buenos Aires: Grupo Editorial Norma).
- Duvalier, François 1969 *Mémoires d'un leader du Tiers Monde* (Puerto Príncipe: Editorial del Estado).
- Farias, Flávio Bezerra de 2001 *A globalização e o Estado cosmopolita. As antinomias de Jürgen Habermas* (San Pablo: Cortez).
- Gohn, Maria da Glória 1998 *Os movimentos sociais na América Latina* (San Pablo: Cortez).
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 2005a *Enciclopedia de las ciencias filosóficas* (Madrid: Alianza).
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 2005b *Fenomenologia do espírito* (San Pablo: Cortez).
- Joachim, Benoît 1979 *Les racines du sous-développement en Haïti* (Puerto Príncipe: Henri Deschamps).
- Louis-Juste, Jean Anil 1993 *Entè-OPD. Kalfou Pwojè* (Editorial II).
- Louis-Juste, Jean Anil 1998a *Masak Jan Rabèl. Pari ak Defi* (Puerto Príncipe: Editorial II).
- Louis-Juste, Jean Anil 1998b *Sociologie de l'animation de Papaye* (Puerto Príncipe: Facultad de Ciencias Humanas).
- Louis-Juste, Jean Anil 1999 "Crise agrária e desenvolvimento da comunidade. As metamorfoses do movimento camponês no Haití", Disertación de Maestría, Universidad Federal de Pernambuco.
- Martins, José de Souza 1981 *Os camponeses e a política no Brasil* (Petrópolis: Vozes).

- Martins, José de Souza 1996 *O cativo da terra* (San Pablo: HUCITEC).
- Marx, Karl 1993 *The Grundrisse. Foundations of the critique of political economy* (Londres: Penguin Classics).
- Marx, Karl 1994 *El Capital. Crítica de la economía política, I* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Marx, Karl 2000 *El Capital. Crítica de la economía política, I* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Marx, Karl 2004 *Manuscritos económico-filosóficos* (San Pablo: Cortez).
- Marx, Karl y Engels, Friedrich 1970 *L'idéologie allemande* (París: Ediciones Sociales).
- Mészáros, István 1995 *Beyond capital. Towards a theory of transition* (Londres: Merlin Press).
- Pierre-Charles, Gérard 1973 *Radiographie d'une dictature: Haïti et Duvalier* (Montréal: Éditions Nouvelle Optique).
- Touraine, Alain 1980 *Critique de la modernite* (París: Éditions du Seuil).

Notas

- 1 N. de la T.: esclavo fugitivo.
- 2 La filosofía iluminista, que pudo con el feudalismo, está basada en esta ideología de progreso. Los enciclopedistas, como por ejemplo Diderot, Condorcet, D'Alambert, etc., difundieron este pensamiento, a pesar de la denuncia de la esclavitud que hizo posible concretar esta visión. Y los primeros contractualistas que teorizaron sobre el liberalismo político desarrollaron la tesis del Estado de derecho o la sociedad civil/política a partir de la premisa del estado de naturaleza como fenómeno humano global que tuvo un principio de civilización sólo en Europa.
- 3 El CAC no fue un invento de la Alianza para el Progreso, debido a que ya acompañaba a los rechazados bajo la forma de comités de fábrica que reunían a las principales personalidades de una parroquia o una comunidad. La primera campaña de alfabetización de 1942-1943 también utilizó esta estructura para llegar a los campesinos.
- 4 Leer Gérard Pierre-Charles (1973) y François Duvalier (1969).
- 5 N. de la T.: latifundistas-burgueses.
- 6 En 1986, la organización evolucionó convirtiéndose en el movimiento de *petits paysans* ("pequeños campesinos") y recibió el nombre de Tèt Kole.
- 7 N. de la T.: Expresión créole que literalmente significa arrancar la mandioca y como expresión política se utiliza po-

pularmente en el sentido de extirpar la oposición política.

8 En efecto, mediante la masacre de los cerdos criollos haitianos (1979-1981), el capital –representado en esa circunstancia por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto de Investigación y Cooperación Americana (IICA) y los gobiernos haitiano y estadounidense– expropió brutalmente a los campesinos haitianos de un medio fuerte de producción: el cerdo criollo, utilizado como tracción animal, libreta de ahorro y principal ingrediente culinario.

9 “Soluciones radicales, no elecciones”, en créole.

10 Por metabolismo social entendemos el proceso de intercambio entre el hombre y la naturaleza, por un lado, y entre mismos los hombres, por otro. El resultado es la producción de más valor absoluto y relativo. De allí surge la tesis de István Mészáros sobre la incontabilidad del capital. Ver Mészáros (1995), Marx y Engels (1970) y Marx (2004; 1993; 1994).

11 Esta forma de colonización existe todavía hoy. Después de haber inventado la crisis del Estado para justificar su política agresiva contra las conquistas sociales históricamente obtenidas contra el capital, los ideólogos de las clases dominantes también propagaron la idea bajo la forma de Estado en quiebra o Estado débil o fuerte. En realidad, esta tentativa de legitimación de las ocupaciones militares como forma de intervención supuestamente humanitaria intenta ocultar la ontología de la forma-

Estado y la historicidad de las formas de Estado o del Estado, necesarias para la reproducción aumentada del capital dentro de un espacio determinado y en un momento específico. Para darse cuenta, sólo hace falta observar que los Estados dependientes son siempre fuertes para reprimir las masas populares y débiles frente al capital. Dicho de otra forma, el Estado como ser social particular del capital –como lo son hoy en día las ONG– se adapta, en un lugar y tiempo determinado, a la forma requerida para la continuación del orden metabólico del capital. El problema no tiene nada que ver con la abstracción del déficit de ciudadanía. Al menos la “re-inención” de la ciudadanía participa de la construcción del fetichismo del Estado en quiebra, ya que, en última instancia, desde la Conferencia de Westfalia (1648) no existe el Estado sin ciudadanos; y la revolución de 1789 fijó formalmente el vínculo entre el Estado y los ciudadanos. Los que continúan difundiendo, por una razón u otra, la ideología del Estado en quiebra demuestran que no han comprendido nada del alcance revolucionario de la lucha de los esclavos y *marrons* de Santo Domingo que supieron sobrepasar en espíritu la Revolución de 1789, al proyectar la realización de la libertad plena, es decir, la construcción de la Libertad, Igualdad y Dignidad.

12 Movimiento contra el FMI y el neoliberalismo, en créole.

13 En *Mobilisations populaires et sortie de crise en Haïti* 2000 (Montréal: CIHDICA).

14 Según los simpatizantes del gobierno Lavalas, el valor actual de la "Deuda por la Independencia" habría sobrepasado los 21 millones de dólares.

15 "El negro si es rico es mulato y el mulato si es pobre es negro", en créole.

16 N. de la T.: palabra créole que se refiere al trabajo colectivo.

17 Debe aclararse que la revolución cubana permitió que los hijos de los trabajadores haitianos se desarrollaran de forma multilateral, mientras que la "democracia dominicana" los mantiene todavía en una situación de apátridas, al tiempo que sus padres y madres siguen trabajando como semi-esclavos.

18 Es significativo que el primer acto de los invasores fuese retirar la reserva del Banco Nacional para depositarlo en las arcas del City Bank de Nueva York. Hasta hoy, no fue devuelta a Haití.

19 Esta tradición organizativa proviene de las prácticas de extensión agrícola heredadas de fines de la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades locales organizaron todo el territorio bajo su control en forma de consejos comunitarios. No se diferenciaba a los *grandons-bourgeois* de los campesinos.

20 Le correspondió a Alexandre Pétion modificar el primer lema nacional por el de Libertad, Igualdad y Fraternidad para mostrar su alineación política sobre la incorporación subalterna de la ideología feudal-cristiana de fraternidad a los ideales abstractos de libertad y de igualdad de la burguesía emergente.

21 La ley anticomunista del 28 de abril de 1969 ponía sobre la cabeza de estas agrupaciones una espada de Damocles. Sin embargo, el apoyo internacional a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que acompañaron la fundación de dichas instituciones desaconsejó el uso de esta ley por parte de las autoridades gubernamentales. Estas habían elegido aflojar la presión de la Internacional Comunitaria obligando en 1982 a las ONG acompañantes, mediante la primera ley de regulación de sus actividades, a presentar un plan de intervención y presupuesto ante la unidad de coordinación de las actividades de las ONG, servicio bajo la autoridad del Ministerio de Planificación y Cooperación Externa.

22 La evaluación del proyecto como momento terminal e inaugural funciona como mecanismo de control puesto en marcha por dichas administradoras para garantizar la vigilancia.

El proceso democrático y la ocupación

Marc-Arthur Fils-Aimé

Director del Instituto Cultural Karl Levêque.

Traducción: Gabriela Cabantous.

Resumen

El artículo recuerda el papel de los movimientos sociales y de los revolucionarios en la apertura del camino a la democracia y sostiene que el actual régimen electoral perpetúa los 200 años de exclusión política de las clases populares.

Abstract

The article highlights the role of social movements and revolutionaries in the opening of the road to democracy and maintains that the current electoral system perpetuates 200 years of political exclusion of the working classes.

Palabras clave

Democracia; Ocupación; Revolución; Partidos Políticos; Izquierda.

Keywords

Democracy; Employment; Revolution; Political Parties; Left.

Cómo citar este artículo

Fils-Aimé, Marc-Arthur 2008 "El proceso democrático y la ocupación" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 23, abril.

La dictadura de los Duvalier duró casi treinta años, más exactamente veintinueve. Las fuerzas democráticas burguesas y revolucionarias intentaron, por razones e intereses distintos y hasta incompatibles, varias formas de lucha para combatirla. Sin embargo, los esfuerzos de estas dos corrientes no son apreciados de la misma forma. Con mayor frecuencia, la opinión general tiende a poner de relieve las invasiones planeadas por la CIA, organizadas por las fuerzas de derecha, la tercera de las cuales fue la de Bernard Sansarique, cuando fallece el gran periodista Richard Brisson. La clase política tradicional y los historiadores de derecha, entre los cuales podemos contar hoy una camada de renegados, intentaron subestimar e incluso negar la valentía, el coraje y la inteligencia de los camaradas que sacrificaron su porvenir y sus vidas. El único objetivo que anhelaban fue sacar a Haití de la encrucijada del subdesarrollo. La historia de los últimos veinte años, especialmente en Haití, como así también en los países latinoamericanos y caribeños, para mantenernos dentro de nuestra esfera geográfica, demostró claramente que la revolución es el único camino que nos queda para salir de la crisis estructural.

Nos reservamos el nombrar a todas las organizaciones revolucionarias que se dedicaron, en la más estricta clandestinidad, a la tarea de contribuir a la formación de una conciencia política e ideológica crítica en los jóvenes intelectuales, en la clase obrera, los pequeños agricultores y las masas populares rurales y urbanas en general. Los miembros de estas organizaciones no buscaban su poder personal. Su noble objetivo era ver brillar el gran día, tocar con los dedos la gran utopía de la liberación real y verdadera. No obstante, parece oportuno aprovechar esta gran ocasión, la de la inauguración oficial de la Fundación Gérard Pierre-Charles, para homenajear la memoria de Gérard, la del Partido Unificado Comunista Haitiano (PUCH) y la de todos sus camaradas, o mejor dicho todos nuestros camaradas torturados y asesinados. Instruyeron a muchas generaciones sucesivas sobre el deber y el honor revolucionarios. Nos peleamos entre nosotros, pero fueron peleas fraternales y no fratricidas, en búsqueda de la línea justa. Proclamamos en voz alta que las últimas arremetidas populares que arrastraron al exilio, el 7 de febrero de 1986, al jefe de los "macoutes", Jean Claude Duvalier, y a algunos de sus más fieles compañeros, fueron en gran medida la obra paciente de muchos militantes comunistas y progresistas haitianos. Deberemos dedicar un momento a la autocrítica sincera, para analizar por qué nuestra victoria nos fue robada con tanta facilidad, sin ninguna dificultad, por la derecha misma, inclusive con injerencia de potencias imperialistas, principalmente Estados Unidos y Francia. La colaboración tradicional de la burguesía oligárquica y de la alta jerarquía de las Iglesias católica y protestantes les allanó, sin duda, el camino, ese camino que se nos viene escapando desde el voto de la Constitución, el 28 de marzo de

1987, el de la democracia representativa. Esta última, ha legitimado hoy la formación social haitiana que siempre ha sido eminentemente exclusivista.

¿Cómo hablar de democracia en la coyuntura actual?

El 16 de diciembre de 1990, Haití tuvo las primeras elecciones libres de su historia. Las anteriormente conocidas como elecciones directas e indirectas que llevaron al poder a todos los presidentes anteriores a Aristide emanaron siempre del poder de las armas. A pesar de todas las sucias maniobras de todas las fuerzas oscuras, la voluntad popular supo esta vez imponer su voz. Desgraciadamente, una gran parte de la izquierda revolucionaria que analizó muy mal la coyuntura, apoyó por completo a un hombre, en vez de esforzarse por construir un programa concreto y coherente que respondiera a los deseos de la gran mayoría de los desheredados del sistema socio-político y la economía dominante, esencialmente injusta y no igualitaria. La movilización popular se prestó a la posibilidad de tomar el poder real y sus principales aparatos, teniendo en cuenta la dimensión de las batallas que en casi todos los frentes libraron los estudiantes, los jóvenes de los barrios populares, los hombres y mujeres intelectuales progresistas y la clase pobre del campo. La masacre de los campesinos en Jean Rabel, llevada a cabo por los "grandons", tuvo lugar el 27 de julio de 1987. La sensibilidad prevaleció sobre la razón. Hoy pagamos muy cara nuestra inconsecuencia.

El golpe de Estado sangriento dirigido por el Estado Mayor del ejército de entonces, detuvo esta nueva experiencia democrática salida de las urnas, que ya comenzaba a escapársele a la gran mayoría. Aristide mostró ciertos signos de debilidad que inquietaban a quienes seguían de cerca el proceso. Aproximadamente tres años después, la comunidad internacional nos presentó otro perfil de aquel que decía ser la encarnación de las reivindicaciones seculares de las masas. Con el acuerdo de París, por el contrario, Aristide utilizó su popularidad para asentar el neoliberalismo, iniciado por Jean-Claude Duvalier, y reforzado tras la caída de este último, por el Consejo Nacional de Gobierno, por uno de los partidarios de los Chicago Boys, en este caso Lesly Delatour. La segunda ocupación del país por las fuerzas yanquis, infiltradas en una supuesta fuerza internacional de Naciones Unidas, no sólo puso nuevamente en el Palacio Nacional a un presidente depuesto en forma violenta e ilegal sino que también impuso un proyecto antinacional cuyo elemento fundamental fue la privatización de los recursos naturales y del patrimonio público.

Desde entonces, Haití se embarca en una movida electoralista que extiende los dos siglos de exclusión de las masas populares. Las elecciones nos cuestan muy caro, favorecen a contrabandistas y traficantes de droga de cualquier calaña. Muchos candidatos y candidatas se presentan

«La carrera electoral, extraordinariamente despilfarradora, en general, deja de lado a los menos ricos y más pequeños que para su desgracia no tienen la capacidad o la voluntad de dejarse llevar por traficantes, contrabandistas y embajadas hegemónicas»

para puestos electorales solamente para aparentar, para poder calificar de persecución política cualquier acción legal en su contra. Esta plutocracia fue impulsada por la Constitución que exige que los candidatos a los cargos electorales más altos posean bienes inmuebles. Esto no deja a los electores ninguna posibilidad, ni espacio para destituir a un candidato electo que no respeta sus promesas o abusa de su confianza. Una vez instalado en la reducida clase de la élite, ese elegido tan sólo tiene

que rendirle cuentas a sus pares. En la actualidad, la democracia representativa cayó en una doble trampa en Haití. Primero, con la ocupación, los poderes públicos y estatales se vieron obligados a actuar según los dictados de las potencias internacionales que responden a sus propias agendas y son fieles a sus poderes, y no están a favor del pueblo sino a favor de las consideraciones neoliberales ciegamente impuestas dentro del marco del totalitarismo de mercado

del tonto pensamiento único. La carrera electoral, extraordinariamente despilfarradora, en general, deja de lado a los menos ricos y más pequeños que para su desgracia no tienen la capacidad o la voluntad de dejarse llevar por traficantes, contrabandistas y embajadas hegemónicas. Los gastos por candidatura exigidos en los distintos consejos electorales provisorios, los CEP, son tan elevados que los de menores recursos se ven obligados a enarbolar banderas de un partido político con el que, a veces, no tienen ninguna relación orgánica. Los espectáculos anárquicos en municipios, Cámara de Diputados y el Senado son síntomas de los falsos representantes de los partidos políticos.

¿El movimiento se desarrolla paralela o independientemente de los partidos políticos?

Los políticos tradicionales se quejan de la falta de apoyo de las masas populares. Es cierto que estas últimas siguen cayendo en las redes de los candidatos reac-

cionarios en el momento de las elecciones, debido a la ausencia evidente de una fuerza revolucionaria de izquierda estructurada y responsable. Una cantidad considerable de militantes controla las organizaciones populares rurales y urbanas. Estas todavía se organizan en forma de agrupaciones, demorando el momento de unirse para ofrecer una alternativa a esta situación de miseria espantosa e indignante en un país donde el agua se desperdicia teniendo al lado llanuras secas. Sin embargo, a pesar de cierto impulso exclusivamente electoral, la falta de confianza se nutre de razones objetivas. Las campañas electorales son adornadas con toda clase de promesas, aun por parte de quienes no dependen de las funciones constitucionales de los candidatos en carrera. Al escuchar a un candidato a diputado o senador, pareciera que no hay nada que éste no pueda emprender o ejecutar una vez electo. Sin embargo, cuando consiguen ganar el puesto, la mayoría se contenta con sumarse al gran número de depredadores del tesoro público. De todas formas, la dirección bicéfala del gobierno, que tal vez tenga algún mínimo margen de soberanía y autonomía, depende del dinero de la llamada comunidad internacional para financiar los proyectos que encajan en el plan de dicha comunidad manteniendo así la relación de dependencia del Estado haitiano para con ella. ¿De qué manera podrían las masas populares librarse, en cuerpo y alma, de este tipo de clase dirigente que desde el día siguiente a la proclamación de la Independencia, el 1 de enero de 1804, jamás dejó de engañarlos?

Contrariamente a ciertas ópticas que sostienen que las organizaciones populares mantienen una existencia paralela a los partidos que ocupan la delantera de la escena política, creemos en cambio que las organizaciones buscan de manera independiente su camino para romper la cadena humillante de explotación y dominación. La ausencia de una estructura revolucionaria que acompañe al pueblo en sus batallas cotidianas hace que esta gestión sea más difícil. El movimiento popular sufre enormemente por esta carencia. La oposición de izquierda sufre aún la caída del sector socialista, a pesar de los inconmensurables errores de este último, como el alineamiento precoz de más de uno al reino del presidente Aristide, la represión salvaje de los militares y de todos sus esbirros, y la decapitación de las organizaciones populares mediante la emisión deliberada de visas por parte de la embajada estadounidense a sus militantes más combativos. El sector revolucionario se encerró en sí mismo. El conjunto de elementos muy brevemente expuestos en este coloquio nos hacen admitir que el porvenir de la democracia representativa en Haití no parece ser muy alentador. La incompatibilidad entre la elección de las élites dirigentes –sujetas al proyecto antinacional de los “grandons”–, la de todas las fracciones de la burguesía y la voluntad popular debe desembocar en una situación en la que el

mercado y uno de sus corolarios –el dinero– no tengan más fuerza de ley. Las necesidades de todos serán la principal prioridad de los responsables locales, regionales y nacionales, ya que se someterán a la voluntad popular. La ayuda internacional incondicional nos servirá de apoyo para la construcción revolucionaria, pero dicha ayuda no podrá volver a ocupar un lugar fundamental en el presupuesto nacional como lo hizo en el presupuesto del año fiscal 2008. Los fondos prometidos, si no llegan, como lo hemos constatado desde la caída de Aristide en febrero de 2004, no podrán detener nuestro desarrollo. El pretendido subdesarrollo que nos asfixia proviene de una elección política de la dominación más que de la falta de recursos naturales. El despegue será resultado de decisiones políticas sabias, tomadas junto con las masas populares de las ciudades y del campo. Como bien lo señaló Fritz Deshommes en su libro titulado *Haiti, la nation écartelée* (Haití, la nación descuartizada), la población haitiana se ve enfrentada a dos visiones socio-económicas opuestas: el plan estadounidense y el plan nacional. Estas dos ópticas han demostrado ser irreconciliables a través de toda nuestra existencia como pueblo. Toda tentativa de fundirlas en un solo proyecto no es otra cosa que demagogia y está condenada al fracaso.

América Latina: una transición entre la ruptura y el establecimiento de un modelo

Roody Edme

Educador. Editoralista del periódico *Le Matin*.

Traducción: Gabriela Cabantous.

Resumen

El artículo expone la necesidad de considerar la cuestión haitiana en el contexto regional y, sobre todo, a la luz de la tendencia a dar un carácter social a la democracia.

Abstract

The article presents the need to consider the Haitian question within the regional context, above all in light of the trend towards the creation of a social democracy.

Palabras clave

Izquierda Latinoamericana; Relaciones con Estados Unidos; Partidos.

Keywords

Latinoamerican Left; Relationships with USA; Parties.

Cómo citar este artículo

Edme, Roody 2008 "América Latina: una transición entre la ruptura y el establecimiento de un modelo" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

En los últimos treinta años, el proceso de transición de América Latina experimentó el regreso con fuerza en el campo de lo político de la cuestión social. Después de la paz de cementerio instaurada por las dictaduras militares, el continente asistió a la llegada del neoliberalismo siguiendo la estela del capitalismo triunfante de los años noventa.

La desilusión se instaló rápidamente cuando los mejores “alumnos del FMI”, como Argentina y Uruguay, cayeron en la depresión. Otros países que tuvieron cierto crecimiento gracias a su riqueza en hidrocarburos o cobre, no vieron repartidos razonablemente los beneficios de dicho crecimiento para disminuir la exclusión. La democracia neoliberal no cumplió sus promesas, y el movimiento social y de identidad (indígena en Bolivia) se afirmó hasta tomar el poder.

A partir de 2002, un poderoso movimiento social permitió cambios encabezados por los principales países del Cono Sur: Brasil, Uruguay, Argentina, mientras que Venezuela asiste a la profundización de la revolución bolivariana, a la que muchos observan con esperanza e inquietud.

La nueva izquierda instalada en el poder en varios países de la región se muestra “más administradora que revolucionaria”, intentando combinar cierta eficiencia con una mayor solidaridad. Pero aunque esta nueva situación esté llena de promesas y de generosidad, deberá recorrer mucho camino antes de conseguir la plena adhesión de los excluidos del crecimiento. Los indigentes esperan que se materialicen las promesas de la democracia. Debido a esto, en ciertos países como Argentina y Uruguay existen tentativas por parte de algunos grupos de base de tomar distancia o ser autónomos con respecto a las estructuras de poder del Estado. En Argentina, ciertos fragmentos del movimiento de piqueteros buscan desarrollar nuevas prácticas políticas, crear nuevas relaciones de cogestión en las fábricas o directamente innovar en la administración de las comunidades locales. Pero estos intentos innovadores son localizados y limitados, y estas agrupaciones son demasiado diversas en cuanto a su tendencia y mantienen relaciones demasiado ambiguas con los partidos del poder como para poder hablar en este momento de una verdadera alternativa. Esto no quita que su experiencia no demuestre la voluntad creadora de los pueblos del subcontinente que intenta movilizar el espacio social y dejar de lado dogmatismos de todo tipo.

Un primer balance de las experiencias de la izquierda latinoamericana muestra distintos enfoques sobre los problemas de integración regional y las complejas relaciones con los Estados Unidos. Cada uno de estos países, fuera de cierto acercamiento debido a simpatías ideológicas, exige guardar un margen de maniobra en el terreno de las ambiciones nacionales y de la política extranjera. La revolución bolivariana tiene ambi-

ciones continentales encuadradas en una lucha abierta contra la influencia de los EE.UU., mientras que el Brasil de Lula quiere un lugar en el Consejo de Seguridad y ya asume cierto liderazgo en cuanto al mantenimiento de la paz y la estabilidad en Haití.

Esto no es razón suficiente para que de una capital a otra difieran los enfoques sobre la cuestión de la integración regional y las relaciones con los EE.UU., o sobre la aplicación de mecanismos del liberalismo. Fuera del socialismo del siglo XXI, preconizado de manera más o menos frontal en Venezuela, los otros gobiernos de izquierda adoptan una economía de mercado muy mezclada con política social.

La problemática haitiana

En Haití, las elecciones de 2006 dieron lugar a una estabilización progresiva, pero frágil. El problema de la precariedad se plantea con poca intensidad, teniendo en cuenta nuestra situación de pobreza acumulada.

Los esfuerzos del gobierno y de los principales partidos políticos por alcanzar un nivel mínimo de estabilidad han permitido cierta recuperación del crecimiento y una base moderada de la tasa de inflación por debajo del 8%.

Desde hace un año y algunos meses atrás se desarrolla una experiencia de gobierno plural con la participación de los principales partidos políticos. Aunque este gobierno no deje conforme a muchos desde el punto de vista pedagógico, este ejercicio de pluralidad no es en vano en un país donde las oposiciones son generalmente fatales y la inestabilidad es crónica.

Una de las dificultades más grandes del proceso de transición en Haití es la debilidad de los partidos políticos y su dificultad para articular un proyecto de desarrollo nacional. Esta falla organizativa es la que conduce al populismo y a los conflictos, muchas veces sangrientos, entre personalidades.

Debemos decir que después del 7 de febrero de 1986, cierta desconfianza con respecto a la política no ha estimulado la estructuración de los partidos políticos que nunca pudieron, a lo largo de estos veinte años de transición, encarnar el sueño de cambio del pueblo haitiano.

Algunos esfuerzos notables aquí y allá por parte del partido socialdemócrata o la izquierda renovada se vieron frustrados por la tentación totalitaria y caótica de los años 2000.

El impulso de la búsqueda popular y democrática fue detenido por el golpe de Estado de septiembre de 1991, recibiendo el golpe de gracia cuando una forma brutal de clientelismo criminalizó y corrompió las organizaciones populares transformándolas en fuerzas de choque del poder Lavalas.

También en Haití el problema de una alternativa al esquema neoliberal sólo se plantea en términos discursivos, y los acentos ultramundialistas registrados en Puerto Príncipe son sobre todo el eco solidario de las redes internacionales.

Por ahora, la sociedad haitiana, exhausta después de veinte años de inestabilidad y precariedad acelerada, presenta las características de una sociedad en ruinas de posguerra y ya sin aliento.

Es necesario aunar la energía vital de la totalidad de los sectores democráticos. La necesidad de un esfuerzo por teorizar el deseo de cambio del pueblo haitiano es lo mínimo que se requiere para señalar el camino de una transformación real de la sociedad haitiana.

Para entrar en la modernidad sin dejar a un costado al “pueblo que reclama”, los sectores políticos y las organizaciones de base deben hacer una limpieza profunda, trabajar con los sectores económicos y el movimiento social con renovada creatividad, para brindar al pueblo agotado utopías movilizadoras que le permitan reconquistar su dignidad de pueblo libre de América.

La cuestión de la transición en Haití debe encararse dentro de un contexto regional, pero sobre todo teniendo en cuenta las particularidades haitianas que son las de una sociedad con carencias generalizadas y en descomposición acelerada, las de una formación social vacía de sustancia, sin los valores cardinales de ayuda mutua y solidaridad. Penetrada hasta los huesos por la miseria y sobre todo por el tráfico ilegal que busca llenar el vacío del Estado débil, la formación social haitiana es dramáticamente arrastrada al fondo de la inestabilidad.

La salida de la crisis pasa por una movilización institucional y organizativa, una refundación de nuestros instrumentos políticos para poner en marcha, más allá de todo dogmatismo, la transformación del Estado tradicional haitiano. Toda una pedagogía de diálogo nacional en vistas a una estabilización necesaria para vivir en sociedad y producir.

Este pueblo necesita entender cómo vamos a hacer para volver atrás la catástrofe ecológica y volver a hacer habitable la tierra de nuestros ancestros. Además cómo vamos a hacer para quitarnos la etiqueta de la nación más pobre de América después de haber sido la madre de todas las libertades.

Mundialización e integración económica en el Caribe y en particular en Haití

Henri Bazin

Doctor en Ciencias Económicas.

Traducción: Gabriela Cabantous.

Resumen

El artículo trata los desafíos planteados a Haití y a la región caribeña por la mundialización y, en forma particular, por la actual crisis financiera, y sugiere algunas urgentes medidas socioeconómicas.

Abstract

The article deals with the challenges posed to Haiti and the Caribbean region by Globalization and, in particular, by the current financial crisis and suggests some urgent socio-economic measures.

Palabras clave

Mundialización; Integración; Fondos Soberanos; Divisas; CARICOM.

Keywords

Globalization; Integration; Funds; Currencies; CARICOM.

Cómo citar este artículo

Bazin, Henri 2008 "Mundialización e integración económica en el Caribe y en particular en Haití" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

Introducción

Cada vez que se vuelve a tratar la problemática de la globalización y la integración económica de manera sistemática, tal como queremos hacer en esta ponencia, o al leer las actas del coloquio sobre mundialización organizado en Puerto Príncipe, conjuntamente por la Asociación Haitiana de Economistas y la Universidad Quisqueya, entre otros, o también al participar, como lo he hecho hace cinco años en una conferencia sobre mundialización realizada en La Habana para economistas caribeños y latinoamericanos, no se puede evitar el quedar impactados por la rápida evolución que se registra en el tono e inclusive en la esencia de las discusiones. Se percibe que análisis o conclusiones que parecían pertinentes en una época más o menos reciente, merecen ser corregidos o, al menos, revisados y completados.

En verdad, lo que cambió, y continúa cambiando, no es sólo la realidad de la mundialización y de la integración regional, tal como se va desarrollando ante nuestros ojos, sino también y sobre todo, la percepción que unos y otros tenemos en distintos momentos. Paralelamente, las ventajas, supuestas o reales, y los peligros derivados de dicho fenómeno, a los que grupos de países o países tomados individualmente, se ven expuestos por su causa.

En el marco de esta presentación, tendremos un triple propósito. En primer lugar, aceptar el hecho de que se impone cada vez más la necesidad de una nueva clasificación de los países frente a la globalización. En este contexto, intentaremos poner en perspectiva qué es lo que está en juego y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los distintos grupos de países frente a la mundialización. Después de evaluar la importancia y calidad de la respuesta que les ofrece la integración, si en verdad existe alguna. Lo haremos prestando especial atención a la región del Caribe y en particular a Haití.

Finalmente, en tercer lugar, recordaremos algunas de las políticas o medidas, de orden interno y a la vez externo, que se podrían llevar adelante para acompañar la mundialización y la integración en el caso de Haití. Se apuntará a dar mayor importancia a las ventajas que pueden eventualmente obtenerse y minimizar los aspectos negativos.

A modo de conclusión, haremos algunas reflexiones de orden general sobre el alcance del ejercicio realizado y las lecciones que pueden aprovecharse.

Nueva clasificación de los países frente a la mundialización y perspectiva de lo que está en juego y los desafíos a los que se ven enfrentados los distintos grupos de países en el contexto de la mundialización-integración

Antes de seguir avanzando, parece indispensable precisar el contenido y significado de los conceptos que utilizamos y, en especial, los relacionados con la integración y la globalización.

Definiciones

Por integración, entendemos el proceso por el cual dos o más países se comprometen a acercar gradualmente sus economías, poniéndose de acuerdo sobre las diversas etapas y el recorrido a realizar, y que puede ir desde una cooperación sectorial o intersectorial o el establecimiento de una zona de libre comercio hasta una unión monetaria y/o unión económica o inclusive una unión total de los países en cuestión.

En cuanto a la mundialización, como saben, no son pocas las definiciones que existen. Entre las que tenemos disponibles, quisiera proponer una.

Para el FMI, como lo recuerdan Patrice Borda y Jean Gabriel Montauban, en un artículo que se titula "Mondialisation entre rejets et sanctuarisation: où se situe la vérité?"¹, la mundialización se define de la siguiente manera.

Interdependencia económica del conjunto de países del mundo provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transnacionales de bienes y servicios, así como del flujo internacional de capitales y *la difusión acelerada y generalizada de tecnología*.

Dicho esto, hoy es más importante que nunca, sin duda mucho más que en 2004, fecha en que se organizó el coloquio en cuestión, tomar conciencia de la multiplicidad y diversidad de tipos de mundializaciones que no se incluyen en la definición que acabo de citar.

Mundialización de las finanzas y de las crisis financieras, como la inmobiliaria que vivimos actualmente, mundialización de la tecnología, pero además mundialización de las transferencias de la que ésta es objeto, eventualmente, mundialización de los conocimientos y de la formación en el sentido amplio del término. Mundialización también de la cultura, por supuesto, sin olvidar la de las migraciones. Sin embargo, es esencial entender qué es precisamente la convergencia y la interacción de todas estas *mundializaciones* o *globalizaciones* como las llaman los anglófonos y algunos francófonos².

Más allá de las cifras con las que contamos, nada puede dar una mejor idea de lo que es dicha convergencia e interacción que el eco que tiene hoy la publicación periódica de la Universidad de Shangai, de una lista de las mejores universidades del mundo, lista realizada sobre la base de un sistema de *rating* que responde a criterios bien específicos. Lo más impactante no es descubrir que las universidades estadounidenses o suecas están a la cabeza de esta clasificación o que las universidades francesas vienen bastante más atrás, sino que el sistema de *rating* en cuestión tiene prácticamente unanimidad en el mundo universitario, y, más aún, que pretender esto de cualquier universidad china veinte años atrás, hubiese suscitado sonrisas, y hasta franca hilaridad.

Hoy las cosas son distintas, obviamente, porque la universidad emisora de dicha lista goza de buena reputación en el campo científico. Pero ¿cómo no ver también, que dicha reputación deriva un poco o incluso mucho del hecho de que se trata de la universidad de un país cuyo peso a escala planetaria es sin duda alguna considerable y creciente, no sólo en el plano demográfico sino también económico? ¿Cómo no observar también una de las manifestaciones más elocuentes de cierta mundialización del conocimiento?

Dicho esto, frente a este fenómeno de la mundialización, que es antiguo y moderno a la vez, y sobre el que muchos están de acuerdo que tuvo y seguirá teniendo incidencias positivas y negativas, o ambas a la vez, sobre el bienestar de la población, podemos distinguir tres grandes grupos de países.

Un primer grupo está formado por los países industrializados hace ya tiempo, es decir, los países occidentales, a los que debemos, por supuesto, agregar Japón.

Como todos sabemos, al menos en esta sala, el crecimiento económico mundial se incrementó un 5,4% en 2006, y dicho crecimiento beneficia prioritariamente a los países de los que estamos hablando ahora. En un informe de fines de julio de este año, el economista en jefe del Fondo Mundial Internacional había previsto que el índice de crecimiento mundial se ubicaría en 5,2% para 2007 contra 2,08 y 4,9% para los dos años anteriores respectivamente.

Teniendo en cuenta la crisis financiera relacionada con los créditos hipotecarios y de bienes inmuebles estadounidense, pero que se extendió a otros países —me refiero a la famosa crisis del *subprime*—, es probable que las previsiones para 2008, tal vez también las de 2007, deberán ser revisadas y reducidas, en especial para Estados Unidos, esto a pesar de las medidas tomadas por la Reserva Federal.

Sin remontarnos a la gran crisis de 1929, podríamos decir que estos países también sufrieron crisis especulativas y financieras que

marcaron los últimos años y que siguen afectando a algunos más que a otros. Y es muy cierto que en cuanto a la Unión Europea, por ejemplo, el índice de desempleo medio de 6,9% para la zona del euro, enmascara mucha disparidad entre los países y las regiones en particular. Seguimos oyendo en Francia, como también en Bélgica y Estados Unidos, que responsables de los sindicatos y políticos se quejan de la pérdida de empleo ocasionado por la relocalización de empresas. No obs-

«En cuanto al flujo financiero, en primer lugar, se observa que en Rusia, gran productor y exportador de petróleo, un Fondo llamado de ‘las Generaciones Futuras’ deberá gestarse en febrero de 2008»

tante, la realidad es que para este grupo de países los efectos positivos superan ampliamente los negativos, aunque algunos puedan hablar de una “mundialización feliz, pero golpeada” (*Le Monde*, 4 de agosto de 2007), para ellos al menos.

Una segunda categoría de países es el grupo BRIC (es decir, Brasil, Rusia, India y China), al que se le podrían agregar algunos otros, especialmen-

te países del Golfo Pérsico y otros como Singapur, Corea del Sur, México, Chile, Argentina y Sudáfrica, los que integran lo que se ha dado en llamar países emergentes. Lo que caracteriza a este grupo, entre otras cosas, es la importancia de su flujo financiero —es el caso en particular de los países del BRIC y los del Golfo Pérsico— y su creciente capacidad para competir legítimamente con los países del primer grupo, al menos en cuanto a ciertas exportaciones.

También se destacan por la audacia de su intervención en materia de adquisición de activos extranjeros, incluso fusiones con empresas extranjeras.

En cuanto al flujo financiero, en primer lugar, se observa que en Rusia, gran productor y exportador de petróleo, un Fondo llamado de “las Generaciones Futuras” deberá gestarse en febrero de 2008. Cada año contará con alrededor de 40 mil millones de dólares que permitirán al país adquirir los bienes y servicios que pueda necesitar del extranjero.

Con respecto a China, este país tiene el propósito de dedicar 300 mil millones de dólares

a inversiones en el extranjero. Como sabemos, ya que la noticia tuvo un fuerte eco mediático, China invirtió últimamente 3 mil millones de dólares en la compra del 10% de los fondos de capital de riesgo estadounidenses conocidos con el nombre de Blackstone. En cuanto a los fondos de los emiratos del Golfo Pérsico, muchos de los cuales existen hace más de cuarenta años, se fortalecieron recientemente: administran hoy cerca de 25 billones de dólares estadounidenses.

Lo que sigue siendo motivo de preocupación para Occidente es que se trata de fondos llamados "soberanos", por lo tanto, actúan directamente por orden de gobiernos extranjeros, con todas las consecuencias que puede esto acarrear, en especial desde el punto de vista de su capacidad de apoderarse de industrias de interés estratégico.

Esta preocupación se duplica cuando a la acción de los fondos soberanos se agrega la de empresas privadas de estos países, cuyo apetito por adquirir, total o parcialmente, empresas extranjeras, parece no tener límite. Así, la india Mittal presentó en enero de 2006 una OPA (oferta pública de compra) sobre Arvelor, una importante compañía europea de capitales principalmente franceses, la cual ganó. Por su parte, Tata Steel recompró Corus, vieja joya de la industria británica, y el mismo grupo tiene la intención de convertirse próximamente en comprador de la fábrica de jeeps, también inglesa, Land Rover. Sobre el tema de las exportaciones, señalaremos que China acaba de arrebatarse a Alemania el título de primer país exportador, convirtiéndose también en la tercera potencia económica mundial después de EE.UU. y Japón, con un PBI de 3,1 billones de dólares contra menos de 3 billones del antiguo poseedor del título, Alemania. Brasil, a su vez, se posiciona, desde hace por lo menos dos años, como la sexta potencia económica mundial. Queda claro que todos estos países seguidos de cerca por otros como México, Chile y Argentina, quieren jugar cada vez más en la cancha de los grandes y recoger algunos de los efectos positivos de la globalización. Esto no impide que la globalización se muestre significativamente desigual en mucho de ellos, en primer lugar en los asiáticos, en los que el coeficiente de Gini, que como sabemos mide la desigualdad de ingresos entre hogares, alcanzó el 47,2% en 2006, contra un 40,7% tres años atrás.

En América Latina y África, donde el mismo coeficiente es superior a 50%, pareciera en realidad que las masas rurales, que en los países del sur integran una gran mayoría de la población, no reciben más que una porción muy limitada del crecimiento globalizado.

Para los países en vías de desarrollo (PVD) en su conjunto, esta desigualdad que se refiere a disfrutar de los frutos del crecimiento es mucho más impactante aún.

Esto aun cuando, de acuerdo a las estadísticas disponibles, la cifra total de pobres parece haber descendido debido especialmente a la revaloración del precio de las materias primas en los últimos dos a tres años. A esto debemos agregar, salvo algunas excepciones –conformadas por los países con importantes reservas de petróleo u otros minerales–, que su atractivo como destinatarios de inversiones ha sido bastante limitado, en comparación con los países del segundo grupo. Es en particular el caso de los países menos avanzados (PMA), no obstante que la mayoría de ellos forma parte de agrupaciones integracionistas como por ejemplo la Comunidad Económica de Países de África del Oeste (CEDEAO) de la Comunidad Económica de África Central (CEAC).

Aunque para el grupo de países más industrializados, los resultados registrados en los últimos dos a tres años, especialmente en los últimos dos, parecieran ser, vistos de afuera, globalmente satisfactorios, se puede percibir cierta inquietud entre algunos de ellos. Es en particular en el caso de Francia, cuyo presidente, recién elegido, se toma el trabajo, apenas instalado en el poder, de confiar a un antiguo ministro de relaciones exteriores, Hubert Vedrine, una misión con información y propuestas sobre la mundialización. El informe en cuestión, que no fue hecho público hasta ahora, pareciera presentar cierto pesimismo de los franceses con respecto a la globalización y les propone cambiar de postura y asumir una actitud de “dinamismo ofensivo” (*Le Monde*, 6 de septiembre de 2007).

Unos y otros, Francia, Alemania y sobre todo Estados Unidos, se quejan de la subvaluación del yuan chino, con relación al euro y al dólar norteamericano, preocupados por lo que les espera en el futuro, especialmente en el campo de las exportaciones, si se prolongase tal situación.

Pero es interesante destacar que los europeos tampoco ven con buenos ojos la debilidad cada vez más marcada del dólar frente al euro, y por más o menos las mismas razones que los norteamericanos, los europeos y los japoneses están en contra de la subvaluación del yuan.

En estas circunstancias, podríamos decir que lo que está en juego principalmente para este grupo es, sin duda, mantener por lo menos la posición dominante que ocupa en la economía globalizada, tratando especialmente de situarse en los primeros lugares en la carrera tecnológica manteniéndose bien en punta, permitiendo a los países emergentes marchar a la zaga y continuar siendo mercados interesantes para sus productos. Esto hasta un punto tal que no se comprometan seriamente sus principales intereses.

De allí la tentación cada vez más fuerte, tanto en los europeos como en los estadounidenses, tal vez menos en los japoneses, de recurrir al proteccionismo, sin querer utilizar ese nombre, en forma de

medidas no tarifarias o estableciendo nuevas reglas de juego, para frenar todo lo posible el avance de los países emergentes como así también la capacidad perjudicial de los “fondos soberanos” que provocan un temor cada vez más intenso.

La impresión que domina, en definitiva, es que aún un mecanismo integracionista tan eficiente como el de la Unión Europea, a veces tiene sus limitaciones, ya que la concertación se realiza entre 27 estados, con todas las dificultades que pueden tener para ponerse de acuerdo sobre un texto y, en particular, conciliar diferencias que existen dentro de la misma Unión, entre los miembros más antiguos y los nuevos, lo que da lugar al deseo cada vez más fuerte de los miembros más importantes de defender, en otro recinto, por sí mismos, sus propios intereses nacionales.

En cuanto a los países emergentes, especialmente los BRIC, aunque es cierto que algunos forman parte de grupos regionales intervencionistas como el MERCOSUR para el caso de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que China e India no forman parte de ningún grupo, salvo excepciones, no pareciera –según datos disponibles– que la pertenencia a estos grupos les sirva en forma significativa para sacar provecho de las oportunidades que ofrece la globalización, pero tampoco les impide aprovecharlas. Asimismo, de paso, debemos hacer notar el dinamismo nada despreciable del comercio intrarregional del MERCOSUR, que, en 2006, aumentó 21% contra 16% en 2005³.

Para los países-continentes, como Brasil, India, China y Rusia –que en un principio contaban ampliamente, o que hace poco cuentan, con recursos humanos calificados, infraestructura, mercados internos bastante importantes como para explotar las oportunidades en cuestión– o que como Singapur pudieron posicionarse en los primeros lugares, contrariamente al caso de la mayor parte de los PVD, el desafío que enfrentan es el de mantener un ritmo de crecimiento razonable, dentro del marco de un desarrollo sustentable a largo plazo. En realidad, el riesgo al que algunos de ellos, en primer lugar China, están expuestos permanentemente es el del recalentamiento y la inflación. Por tanto, deben hacer todo lo posible para seguir teniendo un desarrollo realmente durable, es decir, que respete absolutamente el medio ambiente. Si no se tratara nada menos que de un problema planetario tan importante como el recalentamiento climático, resultaría curioso ver cómo Occidente insiste tan enfáticamente en algo que hace tiempo se negó a hacer, que es procurar reducir al máximo las emisiones de gas carbónico que provocan el efecto invernadero.

Situación de la región del Caribe y en particular de Haití, dentro del contexto de la globalización-integración

Para lo que es más específicamente la región del Caribe, y en especial los agrupados en el seno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), la impresión que se desprende de las estadísticas con que contamos es que la situación económica del conjunto no ha mejorado en absoluto en los últimos años. Lo contrario es lo cierto, si le debemos creer a mi amigo y colega Edwin Carrington, secretario general de la CARICOM, que en diciembre de 2006 en su alocución a la 30ª Conferencia de la Acción Centroamérica y Caribe (CCAA), llevada a cabo en Miami, declaró lo siguiente: "El índice de crecimiento económico pasó de 4,3% en la década del setenta, a 2,1% en la del ochenta y 1,7% en la del noventa". Siempre según Carrington, pareciera que la tendencia en baja sigue manifestándose durante la década actual. La única excepción a esta tendencia sería Trinidad y Tobago, gran productor y exportador de petróleo y que, dicho sea de paso, espera alcanzar el estatus de país desarrollado en 2020.

Edwin Carrington señaló también que la parte relativa a los servicios en la economía caribeña va en aumento contrariamente a lo que ocurre con el turismo, cuya importancia en la economía caribeña es sabida la porción que le corresponde de la industria turística mundial pasó de 0,91% en 1990 a 0,69 en 2002.

En lo que se refiere al intercambio comercial, la situación no es mucho mejor ya que el porcentaje de CARICOM en el comercio con el mercado estadounidense pasó de 0,71% en 1985 a 0,27 en el año 2000. En otras palabras, el porcentaje disminuyó más de un 50%.

Peor aún es la situación del intercambio con Europa. Esto refleja en gran medida el impacto que tuvo la reducción del acceso preferencial acordado hasta la constitución de la Unión Europea a los productos del Caribe, incluyendo la banana y los productos derivados del azúcar, de interés vital para los anglohablantes.

En cuanto al índice de desarrollo humano, un estudio de PNUD demuestra que a pesar del ingreso per cápita bastante elevado de ciertos países como Bahamas, Trinidad y Tobago y Barbados, el estancamiento económico que vive la región, la importancia del desempleo, el nivel de endeudamiento y la existencia de una pobreza sumamente arraigada, hacen que el conjunto de países de la CARICOM haya sufrido una baja de varios puntos en el plazo de 30 años, con excepción de Santa Lucía, cuyo índice mejoró en este período.

Asimismo, con relación a la consolidación institucional, en virtud de limitaciones e insuficiencias de orden coyuntural en ciertas ocasiones, pero sobre todo estructural, pareciera evidente que si las cosas

«Entonces, surgió la idea de crear el mercado y economía únicos de la CARICOM porque comprendieron que, a partir de la década del ochenta, la comunidad para tener la repercusión que ambicionaba sobre el desarrollo común y solidario de los estados miembros debía someterse a profundos cambios estructurales»

continúan así, a pesar de la comunidad que los agrupa, cada país insiste en cabalgar solo e intenta salir del apuro sin considerar los intereses de los otros países miembros y hasta en detrimento de dichos intereses. Los países de la región, en su conjunto, seguirán estando muy desprotegidos frente a la globalización e imposibilitados de explotar alguna de las oportunidades que esta les pueda llegar a ofrecer.

Entonces, surgió la idea de crear el mercado y economía únicos de la CARICOM porque comprendieron que, a partir de la década del ochenta, la comunidad para tener la repercusión que ambicionaba sobre el desarrollo común y solidario de los estados miembros debía someterse a profundos cambios estructurales. El mercado único se creó, en efecto, el 1 de enero de 2006. Dentro de este contexto, la novedad a partir de esa fecha es que no sólo los productos originarios de la comunidad seguirán beneficiándose con un acceso libre e ilimitado al mercado de los países

miembros, como sucedió desde la institución de la zona de libre comercio del Caribe en 1968, sino que además los factores de producción, como el trabajo y el capital a partir de los cuales se obtienen dichos productos, también podrán circular libremente entre los países miembros.

Para ser más claros, la cuestión aquí y ahora es el libre movimiento del capital, si un empresario así lo quiere, tiene derecho a establecerse donde sea e incluso a traer consigo al personal calificado que interviene en el funcionamiento de la empresa.

La economía única tendrá comienzo a partir de 2008, su principal propósito es levantar la competitividad internacional de la región y de sus productos, que actualmente están fabricados por pequeñas empresas incapaces de realizar investigaciones

apropiadas para mejorar los productos que ofrecen al mercado internacional, respetando las normas y estándares en uso casi en todo el mundo.

Finalmente, en Washington, hacia mediados de julio de este año, se celebró una reunión cumbre de los Jefes de Estado y Gobiernos de la CARICOM, con la participación del Presidente Préval y de varios de sus ministros. Este encuentro debía realizarse, en realidad, entre los Jefes de Estado y Gobiernos de la CARICOM y autoridades estadounidenses. Pero, por razones que no hace falta analizar aquí, se transformó en una reunión de Jefes de Estado y Gobiernos de la CARICOM.

Ocurrió que, al margen de esta cumbre, se reunió un foro de expertos cuyas deliberaciones dieron como resultado recomendaciones específicas de gran importancia. Nuestro amigo y colega Kesner Pharel nos las comunicó en grandes líneas (*Le Matin*, 3 al 5 de julio de 2007), pero dichas recomendaciones son demasiado extensas para reproducirlas tal cual son. Bastará con decir que esencialmente se trata de los medios más prácticos para garantizar o reafirmar la competitividad internacional de los productos del Caribe, y sacar ventaja de las oportunidades que ofrece la globalización.

Políticas y medidas para acompañar a Haití en cuanto a la problemática de la globalización-integración

¿Dónde se encuentra Haití en todo esto?

¿Cómo y en qué condiciones se está renovando el diálogo con una comunidad que, durante el período del Gobierno Interino, fingió ignorar la existencia de un gobierno porque no reconocía la legitimidad de sus dirigentes?

Único país menos avanzado (PMA) de América –ubicado en último lugar o ni siquiera allí, por lo que se refiere a la calidad de sus instituciones, con un puntaje de 10 estaba lejos de países que tienen instituciones consideradas de un nivel medio (puntaje 40), calificado muy lejos de todos los países de la región en cuanto a las telecomunicaciones, acceso a la electricidad, agua potable, en fin, en cuanto a todo lo relativo a infraestructura en general– Haití no deja de ser un eslabón inevitable en la cadena caribeña. No sólo por su peso demográfico, sin el cual la CARICOM perdería más de la mitad de su población total, sino también porque a pesar de lo ínfimo de sus ingresos per cápita, comparado con los otros miembros, constituye un mercado interesante para algunos productos de la zona, pero además por su peso político y cultural, por su capacidad de perjuicio, es decir, de emigración brutal hacia las otras islas.

Dicho esto, nuestro país, por más marginal que sea, no sólo tiene mucho para dar sino que también mucho que ganar si se profundiza su integración a la CARICOM.

Pero, para ello, hace falta que esté dispuesto a hacer frente a una serie de desafíos.

- Aumentar la producción de algunos productos alimenticios, no sólo para responder a las necesidades del consumo sino para tener un excedente para exportar. Se podrían considerar también algunos productos manufacturados no tradicionales que podrían encontrar en la CARICOM una especie de banco de pruebas antes de explorar el mercado internacional, o incluso productos que podrían aprovechar favorablemente las economías de escala que aporta el mercado caribeño para hacerse más competitivos, ya que no podrían hacerlo de otra manera.
- El desafío de la formación, de la tecnología, del respeto a las normas y estándares internacionales, el desafío de los estímulos a prodigar, a la vez para colaborar con la diversificación de nuestra producción, tanto agrícola como industrial, y para que nuestros empresarios, incluso los micro-emprendedores, técnicos y obreros sean alentados a innovar y ser creativos.
- Otro desafío importante reside en la distribución muy desigual, en el plano interno de los ingresos provenientes de la globalización. Brasil, para nombrar un solo caso, puso en marcha un sistema destinado a ayudar a la población más pobre a acceder a la educación de sus niños. Pero, hace falta mucho más, que a este ejemplo le sigan otros, de una u otra forma. Si como lo dijimos anteriormente, países-continente como Brasil, China, India, Rusia o países pequeños como Singapur o Taiwán pudieron ubicarse en los primeros lugares; ninguno poseía en principio una masa de recursos humanos calificados, recursos en cuanto a infraestructura o financieros, para estar en situación de sacar partido de la economía globalizada, tampoco es obviamente el caso de los PVD y en particular los PMA.
- La necesidad de que todas las partes involucradas, es decir, el Estado, el sector privado, las cámaras de comercio, pongan énfasis de una manera mucho más sistemática que la tradicional en el conocimiento, la adquisición de capacidades y técnicas apropiadas, y no sólo

- sobre el costo reducido de la mano de obra haitiana, para así fortalecer el atractivo de nuestro país con respecto a otros miembros de la CARICOM.
- La necesidad de prestar especial atención al sector de los servicios que está en neto crecimiento.
 - La necesidad, también, de hacer que el centro nacional de facilitación y promoción de las inversiones, cumpla bien con su rol otorgándole los medios para llevar a cabo su misión.
 - La necesidad, igualmente, de pensar en crear, a su debido tiempo, un centro nacional de promoción de las exportaciones, paralelamente al aumento esperado de nuestra producción nacional, siguiendo el ejemplo de nuestros vecinos dominicanos y de otros países.

Muchos de los puntos mencionados figuran en la lista de recomendaciones formuladas para el conjunto de la CARICOM por los expertos reunidos en el Foro anteriormente citado. Adaptados al contexto haitiano y combinados con los que acabo de recordar⁴ y otros más, podrían formar lo que se llamaría un proyecto de Hoja de Ruta, a poner en práctica *antes* de nuestra reinserción efectiva en la comunidad de la CARICOM.

Obviamente, esto no significa que la ejecución de todas estas medidas deba concretarse antes de que se efectúe la reinserción efectiva, siempre y cuando muchas de ellas sean aplicadas a mediano o largo plazo.

Pero, más allá de este micro plan, existe una importantes cantidad de medidas a tomar no s{olo por parte del Estado haitiano sino también por la sociedad civil y las fuerzas vivas de la nación, sin las cuales las posibilidades de tener éxito con el proyecto CARICOM y, lo que es más importante todavía, con nuestro propio desarrollo a largo plazo, corren peligro de verse comprometidas seriamente.

Finalmente, ¿cómo sacar el mayor provecho de nuestra pertenencia a la CARICOM, de la globalización y de las distintas globalizaciones sectoriales en las que estamos comprometidos con la cabeza gacha, por así decirlo, si, desde un principio, no tenemos una idea lo más precisa posible de lo que estamos buscando, de lo que podemos conseguir y, agrego, de lo que podemos conseguir que vaya en el sentido de lo que estamos buscando?

En otras palabras, ¿cómo podemos tener éxito si no tenemos una *estrategia de desarrollo* claramente formulada para los próximos 20 a 25 años, y planes quinquenales, por ejemplo, mediante los cuales plasmar de a poco esta estrategia?

Es momento de recordar que desde hace casi un año estamos embarcados con la ayuda especial del Banco Mundial en la preparación del Documento de Estrategia Nacional para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (DSNCRP, Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté), etapa obligatoria en el marco del programa que deberá conducir, especialmente, a la eliminación progresiva de nuestra deuda externa y al que nos someteremos después de muchos otros países, que se encuentran en circunstancias parecidas a las nuestras. El ejercicio es ejemplar desde muchos puntos de vista. Es necesario reconocer que el gobierno, y en particular al ministro de Planificación y de Cooperación Externa, ha conducido la totalidad del proceso eficazmente, de manera muy participativa.

Cuando se llegue a la fase final, que es la de la ratificación nacional, sólo se puede esperar que los resultados estén a la altura de lo deseado.

No dudaremos en admitir que el documento, tanto en sus principios –combate contra la pobreza, promoción del crecimiento– como en la elección de los ejes programáticos sobre los cuales está construido, es una herramienta de gran valor.

Pero tampoco podemos dejar de señalar que de ninguna manera ocupa el lugar de una estrategia nacional de desarrollo. Además, tenemos que ser justos con sus principales inspiradores, quienes nunca dijeron que el documento fuera tan ambicioso. Ante un auditorio tan instruido y formado de personas tan competentes como el que tenemos hoy aquí, no necesito nombrar en detalle las razones por las cuales ambas cosas no deben confundirse.

Otra medida que deriva de la primera sería la definición de una *política de empleo*, en un país con 70% de la población desempleada.

Si comúnmente se considera que el sector privado es el principal creador de empleo, ¿qué puede hacer el Estado para elaborar una política digna de este nombre? ¿Qué estímulos puede proporcionar a las empresas para alentarlas a generar empleos en determinados sectores? ¿Qué función debe desempeñar en la generación de empleo un banco de desarrollo que suministre préstamos a las pequeñas y medianas empresas, sobre la base de proyectos reconocidamente solventes, pero sin garantías tan importantes como las reclamadas por los bancos comerciales? ¿Qué relación privilegiada deberá tener este banco tanto con el Banco Interamericano de Desarrollo como con el Banco Caribeño de Desarrollo del que somos también miembros?

Una tercera medida fundamental a tomar es la relacionada con la coordinación de las políticas. Casi diría, sin hacer un juego de pa-

labras, una verdadera integración de las políticas que pongamos en práctica en nuestras relaciones económicas y financieras con el extranjero, es decir, con la totalidad de la comunidad internacional, ya sea se trate de nuestros vecinos caribeños, la Unión Europea, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o los bilaterales como Estados Unidos de América, Canadá, Francia, etc. Ahora bien, todo sucede o parece suceder como si la mano izquierda ignorara lo que hace la derecha.

Tantas cuestiones, tantas medidas importantes a tomar en el futuro nos vuelven a traer todas a nuestra preocupación central. ¿Cómo sacar mejor partido tanto de la o las globalizaciones como del movimiento de integración regional en el que estamos inmersos? Por mi parte, estoy convencido de que el tipo de respuesta que demos o no a todas estas preguntas, y nuestra capacidad de poner en práctica estas medidas, en un plazo lo más cercano posible, serán determinantes para el futuro de este país, a corto, mediano y largo plazo.

Observaciones finales

A modo de conclusión, se me ocurre una serie de observaciones, a partir de lo que hemos podido constatar, a medida que fuimos avanzando con este trabajo.

- Lo primero que hemos comprobado nos remite a la cuestión del posicionamiento de la integración con respecto a la globalización. Lo más importante es saber si se trata de una integración "abierta o cerrada", como preguntara F. Saszwald y otros. O de una "desconexión" con respecto a la economía neoliberal, como pensaba Samir Amin. Frente a una o varias globalizaciones tan invasoras como las que vivimos ahora, incluyendo un movimiento de liberación de intercambios muy grande, la cuestión ya no se plantea de la misma manera.
- La integración económica se concibe cada vez menos como una respuesta a la globalización; tampoco como una "alternativa". Este tampoco es el caso de los grupos en los que se desarrolla el mercado intrarregional como el MERCOSUR, menos aún para la CARICOM.
- Salvo Brasil, México y Chile, los países emergentes que más se benefician con la globalización no forman parte necesariamente de movimientos integracionistas. Tal es el caso, por ejemplo, de Taiwán, Hong Kong y, por supuesto, China e India.

- Aun en el caso de Brasil, Chile o México, que pertenecen todos a grupos regionales –México con vecinos tan poderosos como Estados Unidos y Canadá, en el marco del TLCAN–, no queda demostrado aún, especialmente en los dos primeros casos, que el hecho de pertenecer a un movimiento de integración haya sido el factor determinante para su éxito dentro de la economía globalizada.
- Difícilmente se puede negar que dicha pertenencia haya desempeñado un papel importante, hasta fundamental, en el éxito en cuestión. Pero ¿fue más importante que la disponibilidad de recursos humanos calificados, de infraestructura vial y telecomunicaciones, las que estos países ya tenían incluso antes de formar parte de una agrupación integracionista? Otra manera de hacer la pregunta, ¿estos países hubieran podido tener el éxito que tuvieron si no hubiesen estado dados o garantizados de antemano estos factores, o al menos una parte significativa de ellos?
- Todo esto no quita que ciertos productos de un país determinado puedan beneficiarse en particular por medio del comercio intrarregional, por pertenecer a una agrupación de integración que sirve de banco de prueba, de alguna manera, antes de la exploración del mercado mundial.
- Podemos, sin embargo, destacar que todos los productos comercializados dentro de una agrupación, por su misma naturaleza, están destinados a uno o dos países, y no necesariamente a los otros que integran el mismo grupo, por antiguas costumbres. También es posible que los productos aceptados en algunos países de un mismo grupo no lo sean en los demás. Es el caso de los neumáticos reacondicionados provenientes de Uruguay, cuya venta Argentina no acepta dentro de su territorio, a tal punto que este asunto está ahora ante la justicia, ya que los mismos neumáticos son aceptados en otros lugares dentro del MERCOSUR.
- Ni “respuesta”, ni alternativa en el estado actual de cosas, salvo tal vez para determinados productos, pero la integración económica regional constituye una necesidad vital en este momento, especialmente porque per-

mite, entre otras cosas, aprovechar las economías de escala que hacen generalmente la diferencia, entre la competitividad y no competitividad, pero también porque otorga voz a los sin voz, aumentando a veces de manera decisiva el poder de negociación con respecto a países pudientes.

- Nuestro país tiene mucho que ganar con la integración a la CARICOM. Pero para esto hace falta que se cumpla con una serie de condiciones de antemano, algunas de las cuales fueron esbozadas en esta presentación. Asimismo, es indispensable que la opinión pública nacional, los hombres y mujeres de negocio, incluso los "*Madan Sara*"⁵, tan activos en los intercambios con el resto del Caribe, se asocien a estos preparativos, a estas condiciones para la inserción, para evitar que el país no se encuentre otra vez ante un hecho consumado como en 1994.

Notas

1 "Mundialización entre rechazo y sacralización: ¿dónde está la verdad?", Actas del Coloquio Internacional sobre impacto económico y político de la globalización, Puerto Príncipe, Haití, septiembre de 2004.

2 N. de la T.: Según la RAE, la globalización es más una tendencia económica, mientras que mundialización es un término recientemente incorporado que se refiere a todo aquello que alcance dimensión mundial.

3 Ver Inter-American Development Bank, *Integration and trade in the Americas. A*

preliminary estimate of 2006 (Banco Interamericano de Desarrollo: Integración y comercio en América. Estimación preliminar del 2006) en <<http://idbdocs.iadb.org>>.

4 *Le Secteur Privé Haitien: à l'orée du troisième millénaire: défis et nouveaux* (El sector privado haitiano: a orillas del tercer milenio: desafíos y nuevos roles, 2002, Henri Bazin).

5 En créole, pequeño comerciante ambulante.

Movimientos sociales: nuevas formas de liderazgo comunitario

Nilsa Medina Piña

Profesora de la Facultad de Estudios Generales de
la Universidad de Puerto Rico.

Resumen

El texto analiza la construcción de los movimientos sociales en Puerto Rico y la creación de liderazgos comunitarios y plantea algunas reformas económicas.

Abstract

The text discusses the construction of social movements in Puerto Rico, the creation of community leaders and suggests some economic reforms.

Palabras clave

Descolonización; Nuevos Movimientos Sociales; Democracia; Liderazgo Comunitario; Autogestión.

Keywords

decolonization; new social movements; democracy; comunitary Leaderships; selfadministration.

Cómo citar este artículo

Medina Piña, Nilsa 2008 "Movimientos sociales: nuevas formas de liderazgo comunitario" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

El problema de la construcción de los movimientos sociales como objeto de estudio nos introduce a nuevos retos de producción teórico-conceptual para analizar una amplia gama de prácticas sociales, con manifestaciones muy diversas en la vida económica, política y cultural puertorriqueña. Partimos de una perspectiva metodológica que privilegia el análisis de las experiencias y procesos frente a los esquemas preconcebidos de interpretación social. Ello nos remite a la identificación de los sujetos que protagonizan el movimiento social, a la explicitación del conjunto de demandas sociales y las condiciones que las provocan, lo que necesariamente nos conduce a rescatar su trama histórica.

En ese andamiaje histórico se albergan los asuntos referidos a la identidad nacional puertorriqueña, en tanto el proceso de formación nacional en Puerto Rico quedó trunco por el colonialismo, primero de España y luego de los Estados Unidos. A pesar de no haber logrado la constitución formal y legal de su Estado-nación, los puertorriqueños han constituido de facto una nación con identidad, cultura e instituciones propias. Al igual que otras naciones caribeñas, los poderes coloniales estructuran la dominación económica y social mediante la importación de mano de obra esclava y el establecimiento de una economía de plantación basada en la producción azucarera. Su capacidad de resistir creativamente, con fuerza de pueblo, se encuentra hoy en una encrucijada crítica, y el país ha comenzado a cruzar el umbral de la ingobernabilidad y, sin duda, a mostrar la inviabilidad de su relación actual con los Estados Unidos. Puerto Rico es una sociedad que recorrió el camino de la indigencia y las carencias básicas hasta niveles inimaginables de consumismo capitalista. En los años cincuenta, con grandes inversiones de capital privado se logró el llamado “milagro de Puerto Rico” mediante el programa Manos a la Obra llamado de puertorricanización, plan que fue presentado como una vitrina de la democracia, una alternativa que le serviría a los Estados Unidos como un modelo de expansión del ámbito de su influencia en el Caribe y el resto del mundo.

Las bases de este modelo están en las políticas económicas, militares y educativas impulsadas por el poder estadounidense en Puerto Rico, las cuales provocaron resistencias por parte de los hacendados, trabajadores y población en general, ante el deterioro de las condiciones de vida. La cuestión nacional cobró un espacio importante en el debate público y surgió con fuerza un movimiento nacionalista reivindicativo, que cuestionó el poderío estadounidense en la isla. Otras expresiones de resistencia se forjaron en el ámbito de la lucha obrera, con la formación de sindicatos, en la gestación de un movimiento cooperativista, la creación de sociedades de ayuda mutua y otras formas de organización ciudadana en las cuales se iban moldeando las resistencias y forjando las estrategias de

lucha. Los movimientos comunitarios que hoy ocupan nuestra atención son en gran medida herederos de aquella lucha social. Estos asuntos, junto a las aspiraciones de una participación en todas las esferas de la vida siguen dominando el debate cultural, social y económico hasta la actualidad.

A todos los niveles, es una señal de los tiempos que la democracia participativa cobre fuerza, reconocimiento y prestigio. En una histórica decisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas se aprobó una resolución abriendo el camino para elevar la causa de la descolonización a la Asamblea General. En este marco se hizo también presente la sociedad civil por medio de organizaciones como el Colegio de Abogados, y el liderazgo de la lucha más emblemática en las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, las que dirigirán el país.

¿Quién desafía al Estado y para qué?

Podemos hablar en primera instancia de lo que se ve: dónde están, quiénes son, qué piensan estos nuevos actores sociales que van reconstituyendo y redefiniendo la sociedad civil, y la relación entre sociedad civil y Estado, y el problema del poder en la sociedad. Irrumpen en el escenario socio-político y definen sus cauces de luchas a partir de ámbitos sectoriales de interés.

A partir de finales de los años sesenta, el deterioro económico fue generando transformaciones en la organización social en la isla. Al igual que en otros países de la región, las instituciones políticas tradicionales como los partidos y las uniones obreras no alcanzaron a canalizar el creciente descontento social ni lograr vías de recuperación económica y de democracia social. Aunque ha experimentado una democracia formal durante el siglo XX y lo que va del actual, su sistema político ha estado plagado de prácticas clientelares, numerosos casos de corrupción, pobreza y desigualdad. Se fue convirtiendo en una partidocracia cuestionada por la sociedad de múltiples maneras, incluyendo cambios en los patrones electorales. Cada vez más los votantes eligen candidatos de los tres partidos que en toda la historia electoral se han disputado el poder desde tres ideologías correspondientes a las definiciones de estatus político de la isla: Estado 51, Estado Libre Asociado (ELA) e Independencia. A pesar de que la participación electoral ha sido significativamente alta (las elecciones se consideran un deporte nacional), la misma ha mostrado una tendencia a disminuir y particularmente el electorado joven va reduciendo su participación relativa. Las uniones obreras y los partidos políticos mayormente se han marginado de la esfera del accionar comunitario, en el cual se han ido articulando las respuestas colectivas al deterioro, donde se ha ido construyendo ciudadanía, nuevas formas de representación ciudadana. Los sujetos tradicionales se fueron haciendo ajenos a las experiencias de poder local y así abonaron la conformación de una cultura política jerárquica y autoritaria.

«Desde este período de erosión del pacto social, en el que se observan fisuras en el mismo, identificamos nuevos desafíos al Estado por parte de diversos organismos de la sociedad civil»

Desde este período de erosión del pacto social, en el que se observan fisuras en el mismo, identificamos nuevos desafíos al Estado por parte de diversos organismos de la sociedad civil: los grupos ambientalistas, que libran luchas por el rescate del ecosistema y la protección de los recursos naturales; el nuevo sindicalismo independiente que confronta la afiliación a centrales estadounidenses; el movimiento estudiantil, que adopta como eje de lucha la oposición al servicio militar obligatorio y la denuncia frontal al modelo de universidad neoliberal; el movimiento feminista impulsando la ampliación de los derechos de la mujer en las esferas pública y privada y que se proyecta transversalmente a todas las luchas sociopolíticas; los rescatadores de terrenos, que han confrontado la política estatal de vivienda y la especulación con la tierra y, más recientemente,

los afanes de expropiación para el desalojo de las familias residentes en comunidades pobres; el movimiento para el desarrollo económico comunitario (establecimiento de empresas colectivas); el movimiento de los trabajadores de la cultura, en especial la música, y el movimiento por la paz, con amplias redes a nivel caribeño; el movimiento cooperativista, en cuyo interior se lucha contra el tutelaje estatal; el deporte como espacio de lucha para el reconocimiento de la identidad puertorriqueña a nivel internacional, entre otros. En estas esferas de expresión ciudadana se observa una multiplicidad de prácticas colectivas que a diversos niveles confrontan al Estado colonial. En efecto, son formas de acción colectiva que implican la existencia de conflictos a los que se enfrentan desde una conciencia e interpretación que relaciona ese conflicto con determinaciones políticas ejercidas desde el poder. En nuestra realidad, el tema de los movimientos sociales se inserta en una matriz de cuestionamiento al sistema colonial, pero no se agota su riqueza y complejidad en esta esfera de lucha. Hasta los años ochenta, el liderazgo de la lucha sindical,

ambiental, feminista, entre otros, provenía de las filas del independentismo y de la esfera anticolonial de las luchas sociales, fuertemente reprimidas y desarticuladas por las agencias policíacas estadounidenses. Sus organismos de coordinación, sus formas de representación, se ejercían desde el ideario de la emancipación política y social. Ocurre entonces un amplio proceso de organización popular que asciende marcadamente en las siguientes décadas. Ese periodo corresponde a lo que podríamos llamar “época de constitución de los movimientos sociales”.

De tal forma que la deslegitimación de los partidos políticos abrió el cauce a la expansión de toda una gama de iniciativas ciudadanas que desde los ámbitos rurales y urbanos defienden derechos, claman por servicios, se oponen a medidas gubernamentales, construyen redes que desempeñan un papel clave en la construcción de significados sociales compartidos, y expresan voluntad creciente de intervención en el proceso de cambio social. Se constituyen en espacios de socialización que refundan o producen identidades colectivas y nuevos sujetos colectivos que disputan la hegemonía del Estado.

Si bien resulta evidente el impacto de estos movimientos que inciden en el ámbito social, cultural y político desde una diversidad de demandas, la temática es un tema emergente en las ciencias sociales en Puerto Rico. Los enlaces entre lo social y lo político es la formación de una cultura ciudadana con ejes de estudio que han generado una producción teórica significativa en la región latinoamericana. A medida que la acción colectiva fue ganando terreno en la escena pública, la academia se fue interesando en procesos sociopolíticos que estos movimientos generaban.

En los últimos años, el tema de la democracia política y su defensa se ha convertido en una cuestión central para diversas corrientes de pensamiento latinoamericano.

Estamos de acuerdo con Lechner en que si la problemática de la revolución fue el foco iluminador de las sociedades latinoamericanas en la década del sesenta (digamos desde la Revolución Cubana en 1959 hasta el derrocamiento de Allende en 1973), el leitmotiv del actual período es la democracia. El tema es celebrable por las potencialidades que contiene. La recuperación de los valores democráticos abre la posibilidad de contrarrestar la tradición autoritaria de los partidos y del qué hacer social y político como conjunto y de reformular objetivos y prácticas de las distintas organizaciones. En Puerto Rico, la creciente insatisfacción con los partidos tradicionales ocasionada por su inoperancia para implantar soluciones y por la ausencia de democracia sirve de plataforma para la emergencia de nuevos actores sociales operando en un contexto novedoso por la articulación de luchas locales, sectoriales, nacionales y

globales que combinan un cierto principio de globalidad con la referencia a una identidad particular. En los setenta se produjeron estudios comparativos, en gran medida inspirados en los aportes de Alain Touraine, quien investiga sobre los movimientos sociales en su relación con la democracia y la política especialmente en el marco latinoamericano. También desde la óptica latinoamericana, autores como Manuel Garretón nos ilustran sobre las transformaciones de las nuevas formas de acción y la resignificación de los nuevos ejes de la acción social colectiva y los conflictos sociales (Mirza, 2006). Por otra parte, Boaventura de Sousa Santos nos advierte que pese a la unidad que se proyecta en la oposición de los movimientos sociales al neoliberalismo, se observa entre los estudiosos del tema que existen desencuentros entre teoría y práctica, las teorías sobre la transformación social actualmente disponibles no dan cuenta adecuada de esa actividad política y cultural. Coincidimos con Wallerstein en que los movimientos sociales nos plantean un desafío ético y político. Actualmente, los movimientos están buscando el apropiado equilibrio entre las batallas inmediatas y la lucha para transformar el sistema en algo más moral, más igualitario y más democrático.

Para el análisis de los movimientos sociales en Puerto Rico, y en particular las nuevas formas de liderazgo comunitario, partimos de una corriente teórica que vincula al movimiento social con la matriz democrática, que supera la visión estrecha de la democracia formal con sus prácticas elitistas alejadas de la cotidianidad de la trama social de las mayorías. Exploramos la pregunta central acerca de si es posible reconstituir la ciudadanía a partir de la resignificación de los nuevos ejes de la acción social colectiva. ¿Será que los movimientos sociales están generando una nueva concepción de la democracia y una nueva manera de construir el terreno político? ¿Se desplazan los conflictos al campo de lo cultural? ¿Quiénes son los protagonistas de estos nuevos movimientos sociales y hasta qué punto pueden proyectar sus aspiraciones desde el escenario comunitario hacia una esfera más global de representación?

En todo caso, del acopio informativo que hemos ido abordando se desprende que los movimientos de base comunitaria en Puerto Rico tienen una doble naturaleza: se encuentran fuertemente enraizados en los reclamos de base comunitaria y se proyectan al espacio público nacional e internacional, más recientemente mediante su participación en redes internacionales.

Últimamente un grupo de investigadoras sobre movimientos sociales y comunitarios ha conformado un grupo de estudio para trabajar dimensiones teórico metodológicas que pudieran contribuir a un abordaje integral que permita afrontar la complejidad del tema.

Partimos pues de un enfoque que indaga acerca de cómo los puertorriqueños, por medio de su liderazgo en espacios de organización comunitaria y local, confrontan la fragmentación de la vida social, los problemas de la ingobernabilidad, la corrupción, el incumplimiento con las leyes y reglamentos que puedan proteger sus derechos, la protección de sus derechos sociales, de sus recursos naturales, en fin, cómo vinculan en sus prácticas la esfera de lo social y lo político partiendo de una perspectiva de cambio social profundo, en un afán de reconstruir las condiciones sociales en que se hacen, deshacen y rehacen estos sujetos históricos. Se trata, en efecto, de determinar la especificidad de los antagonismos de los que surgen y los cambios en las formas de la política que su presencia ha generado.

Condiciones sociales en que se construyen los sujetos históricos

Condiciones económicas

En los últimos 40 años, Puerto Rico ha vivido una transición veloz de un modelo de desarrollo de corte agroindustrial a otro basado en la industrialización independiente y la modernización institucional que se expresó en el programa Manos a la Obra. El economista Richard Weiskoff, en su libro *Fábricas y Cupones* caracteriza el nivel económico de Puerto Rico como uno de "bienestar para las transnacionales". Lo resume en "mercancías, capital y transferencias, hacia adentro; productos, ganancias y gente hacia fuera".

Economistas como Francisco Catala y el Brookings Institution y el Centro para la Nueva Economía destacan que el modelo de Puerto Rico basado en transferencias federales ha creado una cultura de dependencia que le inhibe y descarta la exploración e invención institucional de la cual el desarrollo económico debe apoyarse para impulsar alternativas. La inercia ha permeado toda iniciativa para cambiar los modos de hacer las cosas, las normas de articular procesos de producción, tratados comerciales, etc. De un Estado colonizado pero emprendedor, de un capitalismo de Estado de la década del cincuenta cuando Puerto Rico apuesta a traer inversión de EE.UU. y exportar hacia allá, fue pasando a un único horizonte en el plano de su política económica —el modelo de transferencias federales que ha perdido toda vigencia en esta era de la globalización en la que aquel privilegio de acceso al mercado estadounidense ya no es lo que era entonces. Los paquetes de incentivos ya lo ofrecen otros países. Ahora, el capital estadounidense está más interesado en invertir en otros países para explorar nuevos mercados, si bien Puerto Rico tiene un caudal de recursos humanos que exporta a raudales. Por otro lado, la cultura laboral en Puerto Rico, amparada en la lógica de las transferencias federales y los cheques de alimentos, cercena la conciencia y socava las bases para ampliar el espacio económico al interior de su economía nacional y tras-

cender hacia un espacio multidimensional de la autogestión económica, lo que contrasta con la agilidad institucional de otras economías. Nuestra gran limitación es la Carta de Poderes para desarrollar un modelo económico de avanzada, para establecer nuevas redes de interdependencia, aumentar el poder de negociación, reducir la vulnerabilidad, para establecer políticas de migración, de cabotaje, de diplomacia económica para el diseño de contactos comerciales, ignorar o rechazar esta interdependencia, darle la espalda a la dinámica institucional regional y global, postular como ideal la subordinación política a un centro imperial y favorecer la dependencia como eje de la estrategia de descomposición social.

Puerto Rico tiene un ingreso nacional bruto de 50 mil millones de dólares, el cual no creció en 2006; a diferencia de Singapur, el modelo de competencia perfecta es una ficción histórica que significa renunciar al desarrollo y optar por la dependencia.

Este modelo no ha logrado en la actualidad hacer avances significativos en la reducción de los niveles de pobreza que se han mantenido muy altos. De acuerdo con los estándares de medición del censo de Población y Vivienda de los Estados Unidos del año 2000, en Puerto Rico, el 48% de la población vive bajo niveles de pobreza, cifra muy superior a los niveles de pobreza de los Estados Unidos, y que duplica los niveles de los lugares más pobres como Washington (20%), Mississippi (19,9%) y Louisiana (19%). La pobreza en Puerto Rico está ligada a altísimas tasas de desempleo y subempleo que siempre superan el 12% formal. Frente a esta realidad, muchos optan por salir del mercado de trabajo y acogerse a los diversos beneficios que ofrece el gobierno federal a las personas de bajos ingresos. Las altas tasas de desempleo se producen a pesar de que hay una elevada propensión a la emigración a EE.UU., por lo que la población actual de Puerto Rico es de 3.800.000 y ya viven 3.400.000 en EE.UU.

Condiciones políticas

A partir de los años sesenta, se evidencian replanteamientos políticos y nuevas fisuras en la relación Estado-sociedad civil. Con la derrota electoral del Partido Popular Democrático en 1968, después de veinte años de indisputado triunfo electoral, se torna evidente la pérdida de legitimidad del Estado colonial que había asumido un corte populista, y que desde entonces los dos partidos mayoritarios, Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático, se han turnado en el poder sin haber logrado, mediante una amplia mayoría, impulsar y sostener un proyecto de sociedad. Este cambio de patrón en la cultura política desemboca en una fragmentación de la acción política y desencadena una explosión de la sociedad civil. Esta división en la sociedad ha estado acompañada de una sostenida crítica a los par-

tidos por su obstaculización de las reformas a las que estos movimientos apuntan. “Los partidos políticos que han compartido el poder público en este país se han convertido en fósiles irrelevantes y en estorbos públicos o históricos” (*El Nuevo Día*, 7 de septiembre de 1990).

Paralelamente a este proceso la gente se organiza adoptando nuevas formas asociativas y un nuevo liderazgo comunitario enraizado en la comunidad.

Mediante el estudio del liderazgo comunitario como sujetos del movimiento por el apoderamiento y la autogestión, pretendemos arrojar luz sobre el papel de estos nuevos sujetos sociales en la redefinición de los espacios de lucha en el contexto socio-político puertorriqueño, donde tradicionalmente se han definido su espacio de lucha en términos de la fórmula de estatus político: Estado Libre Asociado, Estatidad o Independencia. La selección del tema propiamente parte del reconocimiento de las potencialidades de estas nuevas prácticas sociales como portadoras de estilos alternativos de desarrollo y de nuevas maneras de gestión organizativa para responder a una crisis que afecta todos los órdenes de la vida socio-política puertorriqueña y caribeña.

Estado colonial y lucha social

El análisis del tema movimientos sociales en la formación social puertorriqueña exige precisiones conceptuales respecto a la naturaleza del Estado colonial y sus vínculos con el Estado federal norteamericano. Desde 1898 Puerto Rico se desenvuelve dentro de la estera política de los Estados Unidos en una relación donde, jurídicamente, forma parte del territorio de dicho país. Su estrecha vinculación define su campo de interacción como una esfera de análisis insoslayable para la comprensión de las condiciones y alcances de la relación Estado-sociedad civil.

La articulación entre la esfera federal y colonial puntualiza la especificidad del espacio político donde de los antagonismos surgen los movimientos sociales. La compleja red de mediaciones institucionales que elabora el Estado colonial incide sobre todos los campos del quehacer social. Cuando se avizoran conflictos que pudiesen culminar en crisis política, la esfera federal de la dominación estatal adquiere preeminencia en la reestructuración del ordenamiento político. Tal ha sido el caso en la crisis del treinta, con las medidas asistencialistas, y recientemente en el primer lustro de los setenta, cuando la magnitud de la crisis económica amenazaba las bases de la dominación, que el Estado federal recurrió a solventar la disminución inaudita en todos los renglones de la actividad económica mediante una inyección masiva de fondos federales, haciendo extensivo a Puerto Rico los programas federales de asistencia nutricional.

Democracia política

La democracia es participación decisiva de las mayorías en los asuntos políticos, tanto en la sociedad como en los partidos, pero también en cuanto al acceso garantizado, para todos, a los satisfactores materiales y los bienes de la educación y la cultura, es decir, en el sentido de libertad ligada a igualdad. Las reformas democráticas han sido históricamente el resultado de largos años de esfuerzos y enfrentamientos contra los dueños del poder.

En Puerto Rico la creciente insatisfacción con los partidos tradicionales ocasionada por su inoperancia para implantar soluciones y por la ausencia de democracia y pluralismo en su interior ha impulsado una gran diversidad de esfuerzos organizativos a nivel local, regional, sectorial y nacional, trascendiendo líneas partidistas. Sus propuestas de democracia participativa puntualizan la necesidad de elevar la participación de todos los componentes de la sociedad en los procesos decisionales.

Es de reconocimiento generalizado que los procesos de legislación y formulación de políticas públicas en Puerto Rico se encuentran sumamente centralizados y definidos principalmente por consideraciones burocráticas e intereses partidistas estrechos. Las propuestas van dirigidas a promover la descentralización de los poderes gubernamentales mediante mecanismos que permitan la participación ciudadana en todos los asuntos decisionales de política pública que la afecta, por ejemplo, mediante la mayor autonomía para los municipios, juntas escolares, ciudadanas, etc. Asimismo, postulan la necesidad de promover la participación democrática en todos los niveles de la sociedad civil (asociaciones de comerciantes y de agricultores, organizaciones profesionales, culturales y deportivas, juntas vecinales, organizaciones políticas, cooperativas, sindicatos, etc.). Otros mecanismos como legislación directa por petición, iniciativa ciudadana, revisión de mandato, residenciamiento, voto por candidatura o voto directo, entre otros, han sido promovidos como expresión de afanes de democratización de nuestros procesos decisionales.

Democracia económica. Movimientos para la autogestión económica

La característica fundamental de la economía de Puerto Rico es su dependencia y, en consecuencia, su fragilidad ante los vaivenes de la economía estadounidense y mundial. El modelo económico actual se caracteriza por su orientación para el bienestar de las corporaciones transnacionales a expensas del debilitamiento de las nativas. Se resume en movimiento de mercancías, capital y transferencias hacia adentro, productos, ganancias y gente hacia afuera. Gran parte de la actividad económica está bajo el control de intereses extranjeros engranados a una economía mundial inestable, contraria a los intereses de las grandes mayorías.

«Una de las importantes limitaciones del modelo, que ha provocado la mayor organización ciudadana, es la carencia de una perspectiva ecológica»

Una de las importantes limitaciones del modelo, que ha provocado la mayor organización ciudadana, es la carencia de una perspectiva ecológica. Desde principios de los años setenta se ha intensificado la confrontación con la degradación y el deterioro del ambiente provocado por el modelo puertorriqueño de desarrollo económico. A muy diversos niveles de la sociedad civil se ha desarrollado una labor de defensa de los recursos naturales renovables y no renovables

del país. Igualmente, se han desarrollado múltiples luchas comunitarias que han comenzado a conformar un movimiento ecológico popular y autónomo. Especialmente, a partir de los años setenta se ha visto un mayor compromiso con el impacto de la política de desarrollo económico en Puerto Rico y el per-

juicio ambiental, destrucción de los recursos naturales y daño a la salud creado en nombre de un progreso que ha estado desequilibrado y ajeno a proyecciones y estructuras autónomas.

Estas iniciativas de corte ambientalista confluyen en una corriente de pensamiento que recoge una práctica social de dimensión más global, tendiente a la ampliación de la base democrática de nuestra sociedad en el plano económico. Es producto de una amplia gama de experiencias organizativas y formas asociativas que en distintos contextos nacionales han demostrado su viabilidad y han servido de instrumento para impulsar la democracia económica. Representa, además, en Puerto Rico, un esfuerzo genuino por atacar el problema estructural del desempleo, abriendo el cauce para la gestación de empresas asociativas y el fortalecimiento de otras figuras legales ya existentes, como cooperativas, corporaciones sin fines de lucro, organizaciones sindicales y otras que componen el llamado sector social de la economía.

La búsqueda de la equidad como valor social está arraigada en la historia de nuestro país. Esto se evidencia en la tradición de formas asociativas, como

son las cooperativas creadas en el siglo XIX en los sectores de producción (como la de los artesanos creada en 1889), de mercadeo agrícola, de albañiles, carpinteros, panaderos, zapateros, sastres y otros, y las sociedades de socorro mutuo; y, en este siglo, las formas asociativas creadas bajo la Ley de Reforma Agraria (esfuerzo propio y apoyo mutuo) y el auge de las cooperativas de ahorro y crédito, consumo y servicios fundamentalmente, las empresas y proyectos comunitarios, principalmente incorporados como corporaciones sin fines de lucro. En cada etapa histórica su composición social y características varían. La historia social del Puerto Rico de los cuarenta da muestras de una amplia base y fuerza social autora de prácticas de autogestión comunitaria. La experiencia organizativa de los trabajadores del campo fue transformándose ante la virtual disolución de la actividad agrícola como fuente de ingreso y de reproducción del campesino como sujeto social, y la ascendencia de un gobierno de corte populista que absorbió las demandas inmediatas de los sectores populares. El impulso del modelo de desarrollo con hegemonía del capital monopólico bajo el programa Manos a la Obra es el marco económico del debilitamiento progresivo de aquel movimiento social. Recientemente, los proyectos comunitarios van adoptando nuevas formas de lucha económica como respuesta a la crisis, y a una tendencia mundial hacia la redefinición de las relaciones entre la sociedad y el Estado, implicando nuevas relaciones entre el sector público y el aparato productivo.

Las nuevas propuestas en el ámbito de la democratización económica pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

- Impulso a la formación de capital puertorriqueño, dando estímulo y apoyo al capital de tipo colectivo como las cooperativas, las empresas comunitarias y otras de interés social.
- Fomento a la creación de empresas democráticas donde los trabajadores sean propietarios.
- Promoción del desarrollo rural integrado de la agricultura para que los aumentos en la producción logren abastecer la demanda interna y nuestra producción agrícola logre proyectarse al exterior.
- Fomento de las actividades económicas no contaminantes que sean compatibles con nuestra condición geográfica.
- Coordinación de esfuerzos para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, procesos industriales, productos y servicios que puedan ser producidos en Puerto Rico y exportados a otros países del Caribe.

- Conservación energética mediante la promoción de la utilización de la energía solar y otros medios de producción de energía como el reciclaje de desperdicios.
- Apoyo a las pequeñas y medianas empresas de capital puertorriqueño en su lucha contra el capital transnacional.
- Impulso al desarrollo de un marco legal favorable a nuevas iniciativas autogestionarias de producción.

Bibliografía

Mirza, Christian Adel 2006 *Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina. La construcción de nuevas democracias* (Buenos Aires: CLACSO). En <<http://bibliotecavirtual.clacso.org>>.

Nota

1 Ver el tema de la diversidad de apoyo y el papel de un organismo de sociedad civil como lo están haciendo en todo el mundo, en que la democracia cobra fuerza, reconocimiento y prestigio (El Colegio de Abogados de Puerto Rico, 21 al 27 de junio).

Las relaciones entre Cuba y Haití: un modelo ejemplar de cooperación Sur-Sur

Milagros Elena Martínez Reinoso

Investigadora, Cátedra de Estudios del Caribe,
Universidad de La Habana.

Resumen

El texto resalta la importancia para Cuba de su cooperación con los países de la región caribeña, el papel que han tenido las migraciones haitianas en la historia de Cuba y en la formación de la cultura de la isla, la importancia del aporte africano para América Latina y destaca el gran apoyo cubano a Haití en el campo de la sanidad y de la educación.

Abstract

The text highlights the importance of Cuban cooperation with the countries of the Caribbean region, the role played by the Haitian migration in Cuban history and the formation of this island's culture, the importance of the African contribution to Latin America and underlines the great Cuban support to Haiti in the fields of health and education.

Palabras clave

Cooperación Sur-Sur; Migraciones; Solidaridad; Cultura Africana; Salud; Alfabetización.

Keywords

South-South Cooperation; Migrations; Solidarity, African Culture; Health; Education.

Cómo citar este artículo

Martínez Reinoso, Milagros Elena 2008 "Las relaciones entre Cuba y Haití: un modelo ejemplar de cooperación Sur-Sur" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

Una introducción necesaria

El Caribe¹ es el entorno, el escenario natural e inmediato de la isla de Cuba, al cual ésta pertenece por múltiples y legítimas razones geográficas, históricas y culturales. En ese conjunto de islas ubicadas en el Mar de las Antillas, un país del Caribe no hispano ha dejado una huella indeleble en la formación de la nacionalidad y de la cultura cubana. Ese es el caso de Haití. De hecho, para muchos historiadores cubanos, fue la revolución haitiana y no la norteamericana la que más impactó a la Cuba del siglo XIX, a pesar de la solidez de las relaciones que existían entre las islas y las colonias recién convertidas en la República de Estados Unidos (Martínez Heredia, 2005: 20).

Este trabajo aborda de manera resumida los nexos históricos que unen a Cuba y Haití, un país cuya historia, además de conmovernos, nos revela muchos secretos y realidades de nuestra América, e inserta una breve reseña de las relaciones de cooperación entre las dos naciones, por considerar que las mismas son un verdadero ejemplo de la cooperación Sur-Sur.

Llegaron de Haití a Cuba

Como es conocido, las migraciones han sido una constante en la historia de la región caribeña. Originadas por motivos políticos o económicos, estos contactos que comenzaron a fines del siglo XVIII crearon estrechos nexos entre los habitantes de las poblaciones de nuestras islas a lo largo del tiempo.

Cuba, obviamente, no estuvo exenta de ello, y si bien estas corrientes migratorias en repetidas ocasiones se vieron interrumpidas como consecuencia de los frecuentes enfrentamientos de las potencias coloniales asentadas en las diferentes ínsulas, ello no afectó para que este tránsito de personas provenientes de las islas caribeñas fuese una de las principales fuentes de recepción de migrantes de la mayor de las Antillas, principalmente hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, cuando en 1886 se abolió la esclavitud en Cuba.

En 1791 comenzaron las revueltas de los esclavos haitianos que llevaron a que el 29 de agosto de 1793 se aboliera la esclavitud; en 1801 Toussaint Louverture se convirtió en gobernador de Haití y el 1 de enero de 1804 Jean Jacques Dessalines proclamó la Independencia. Estos

hechos implicaron que desde principios del siglo XIX empezaran a llegar a Cuba colonos franceses –muchos de ellos acompañados por sus esclavos– quienes se asentaron fundamentalmente en la región oriental de Cuba, al producirse la revolución que condujo a la independencia de Haití y que fue el primer y magno acontecimiento en que el Caribe apareció por completo como actor en el planeta, y que fue sin duda también el pórtico de independencia de nuestra América.

Entre 1791 y 1804 llegaron, entonces, en sucesivas oleadas, miles de prófugos blancos –franceses y españoles–, esclavos, prisioneros franceses, militares negros que sirvieron a España, mulatos opuestos a la revolución. Este flujo migratorio sentó las bases del intercambio cultural entre ambas naciones, al decir de Fernando Martínez Heredia:

La huella cultural de esa primera inmigración de Haití –en el idioma hablado en Cuba, la composición étnica, la relación con el medio y la producción, la música, la religión– es uno de los elementos de la acumulación constitutiva de la que ha salido la nación cubana.

La revolución haitiana, cuya trascendencia traspasó los límites del vecino país, repercutió no sólo en el Caribe, sino también en los planos continental y universal, pero sin duda, influyó de manera especial en el destino de Cuba. Baste recordar que fue decisivo para que, al desaparecer la producción y la comercialización del azúcar haitiano, se abrieran para la isla los mercados en tiempos de aumento sostenido de la demanda, posicionándose Cuba como el primer exportador mundial de azúcar. Otros productos cubanos, como el café, como consecuencia de la desestabilización de la producción agrícola haitiana, lograron ocupar posiciones privilegiadas en el mercado internacional.

Tampoco puede soslayarse que también ello favoreció el incremento de la introducción de la mano de obra esclava en la isla, y que durante décadas se esgrimiera el ejemplo de lo que allí había ocurrido, como pretexto para postergar la abolición, “el llamado miedo a Haití”, o para decirlo de manera más clara, “el miedo al negro” fueron factores que influyeron, tanto interna como externamente, en que se retrasara la independencia de Cuba.

Pero, no deja de ser admirable que a fines del siglo XIX, y en la medida de sus magros recursos, Haití cooperase con los revolucionarios cubanos que preparaban la guerra de 1895, y en su territorio tuvo José Martí una cálida acogida, incluyendo el apoyo del presidente Florvil Hyppolite.

En el siglo XX, durante sus primeras décadas, miles de braceros haitianos fueron traídos para cortar caña en Cuba; este movimiento migratorio, generalmente eventual, si bien disminuyó posteriormente, se mantuvo hasta los años cincuenta.

Muchos de aquellos braceros se instalaron definitivamente en Cuba, donde constituyeron un núcleo poblacional importante, cuyos descendientes forman hoy inequívocamente parte integrante de nuestra nación, aunque tratan de mantener vínculos con sus raíces, de lo que da fe la creación el 5 de mayo de 1928 de la Asociación Caribeña de Cuba con el fin esencial de “hacer perdurar costumbres y cultura de sus respectivos países”. Por razones obvias –y que no es menester analizar en este trabajo– este flujo migratorio cesó después del triunfo de la Revolución Cubana.

Esa influencia de Haití en Cuba ha sido fuente de inspiración para destacados intelectuales cubanos. Alejo Carpentier viajó por vez primera a Haití en 1943 y quedó sencillamente deslumbrado. En ese memorable viaje encontró los fundamentos para escribir *El reino de este mundo*, publicada en 1949, novela de profunda conciencia histórica que introdujo lo real maravilloso en las letras hispanoamericanas y universales. Carpentier descubrió en Haití que la realidad de América estaba naturalmente colmada de prodigios y portentosos elementos mágicos de gran valor poético que se proyectaba desde el pasado sobre el presente tanto en la naturaleza como en las prácticas religiosas de ese pueblo.

Posteriormente, Carpentier escribió *El Siglo de las Luces*, publicada en 1962, también una versión dramática de los hechos de la revolución haitiana. Otro de nuestros grandes escritores, Nicolás Guillén, publicó en 1948 su fuerte y delicada *Elegía a Jacques Roumain en el cielo de Haití*, sobre esa admirable figura de la intelectualidad y la política haitianas. El excelente caribeñista cubano José Luciano Franco publicó en 1966 una *Historia de la Revolución de Haití*.

Finalmente, debe recordarse que en el discurso de Dessalines, el día del triunfo de la revolución haitiana, este dijo Independencia o Muerte, “que estas palabras sagradas nos vinculen, y sean señales de combates y de nuestra reunión”, de manera que, como dijera Roberto Fernández Retamar, nuestra expresión de Patria o Muerte tiene antecedentes muy evidentes en el caso haitiano, y para aún mayor coincidencia histórica, que hecho tan curioso, esa revolución triunfa el 1 de enero de 1804 y la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, con un lapso de tiempo de casi siglo y medio, exactamente 155 años después.

En Cuba reconocemos que es mucho lo que le debemos a Haití y estamos conscientes del altísimo precio que ese pueblo ha tenido que pagar por su precoz hazaña.

Cuba en el Caribe

El Caribe es un área de interés político-estratégico, vinculada además al factor de seguridad para la política exterior cubana.

Por diversos y muy conocidos motivos que escapan al interés de este trabajo, Cuba, en su condición de isla geográficamente situada en el centro del Mar Caribe —bloqueada además por los Estados Unidos— se vio obligada a modificar sustantivamente su estrategia de inserción internacional durante la década de los noventa.

En los replanteamientos estratégicos de estos años, América Latina, y de manera particular el Caribe, devinieron áreas priorizadas. Es así que, entre el decenio de los noventa y los inicios del presente siglo se crean las bases para la articulación, por vez primera, de una estrategia coherente, armónica y concertada que reconoce la real importancia de la región para los objetivos de la política exterior cubana, convirtiéndose la política de Cuba hacia el Caribe en una de sus grandes prioridades en materia de política exterior. Tal es así que podemos calificarla como la más dinámica y efectiva en la proyección externa de la mayor de las Antillas durante la segunda mitad de la década de los noventa y los primeros años del siglo XXI.

Cuba es considerada por los caribeños como parte inequívoca de la región. Se le reconoce su activa y solidaria proyección hacia el Tercer Mundo, sus posiciones contra el racismo y el colonialismo, sus amplias relaciones con los países africanos; amén de la sensibilidad mostrada por la presencia del factor etnoracial —la común raíz africana— como elemento integrante de la nacionalidad cubana y sobre lo que ya hemos hecho referencia anteriormente en este trabajo.

A la mayoría de los países caribeños les resulta novedoso e interesante que los cubanos desarrollen un proyecto social diferente, alternativo y que, a pesar de los múltiples y complejos problemas que ha tenido que enfrentar, Cuba exhiba indicadores socioeconómicos que atestiguan sus éxitos múltiples. Por ello siguen con atención creciente el desarrollo de la isla. Es así como sus relaciones con la mayor de las Antillas están marcadas también por sus deseos de beneficiarse de los logros cubanos, paradigmas reconocidos en las áreas de la educación, la salud, los deportes, la ciencia y la tecnología. Es precisamente este interés el que sustenta, en gran medida, las bases de una activa cooperación entre la isla y la región caribeña de la que ella también forma parte.

La política de Cuba hacia el Caribe

Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, las relaciones cubanas con su entorno caribeño han sido una de las más exitosas gestiones que en materia de relaciones internacionales puede exhibir hoy la isla. No podría obviarse

que en la propia Constitución, en su artículo 12, inciso 3, se reconoce que “[Cuba] reafirma su voluntad de integración con los países de América Latina y del Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica de avanzar juntos hacia la integración económica y política para lograr la verdadera independencia, nos permitiría alcanzar el lugar que nos corresponde en el mundo”.

La cooperación Sur-Sur o la solidaridad y la cooperación como fundamentos

Es un hecho que en la proyección externa de Cuba, toda su experiencia social está a disposición de los pueblos del Sur. La mayor de las Antillas parte de la premisa de que este tipo de cooperación constituye un importante instrumento para estimular y fortalecer la independencia económica y avanzar hacia el verdadero desarrollo (Alín, 2006: 46-47).

La cooperación Sur-Sur ha devenido el elemento troncal o el principio rector en las actuales relaciones de Cuba con el Caribe, ratificado en la Declaración de Bridgetown, documento aprobado en la II Cumbre Cuba-CARICOM celebrada en diciembre de 2006. Estas relaciones constituyen un ejemplo de lo que los Estados pequeños y menos favorecidos pueden alcanzar sobre la base del respeto mutuo y la voluntad política de sus gobiernos. Su comprensión se evidencia en los momentos actuales cuando ha perdido fuerza la percepción caribeña, prevaleciente en parte de la década de los setenta y especialmente de los ochenta, en la que Cuba priorizaba la ayuda bilateral por razones de afinidad ideológica.

La cooperación Sur-Sur ya estaba presente en las relaciones de Cuba con el Caribe desde la década del setenta. La cooperación civil con Guyana en 1961 fue la primera experiencia de este tipo, si bien durante los últimos años ha sido significativa la sostenida colaboración de Cuba en materia de políticas sociales, particularmente en las áreas de la salud, la educación y el deporte. Igualmente sobresalen acuerdos en el tratamiento de problemas comunes que forman parte del concepto de seguridad nacional ampliada, tales como el narcotráfico, los desastres naturales, los peligros medioambientales, las fronteras marítimas y las migraciones.

Por su importancia, habría que destacar el decidido apoyo de Cuba a la región en el área de la colaboración médica, mediante el diseño y aplicación del inicialmente llamado Plan Integral de Salud (PIS). La mayor de las Antillas ha enviado decenas de médicos cubanos a las zonas más deprimidas del Caribe, ante la ocurrencia de los cada vez más frecuentes desastres naturales en la región.

Un ejemplo de ello, en el caso de Haití, ante la emergencia de las inundaciones de Gonaïves en septiembre de 2004, Cuba

donó 22 toneladas de alimentos, medicinas e insumos médicos; abrió el centro de salud de Raboteau, equipado con servicios de emergencia, terapia intensiva, salones de partos, ultrasonido, laboratorios clínicos, esterilización, cirugía y otros servicios. A la brigada médica cubana que había en Haití en aquel momento, integrada por más de 400 profesionales y técnicos, se unió un grupo de 64 cooperantes altamente especializados en situaciones de emergencia. Todo ello permitió atender

«La Habana tuvo la iniciativa de proponer una novedosa acción, lamentablemente aún no materializada, para colaborar en la lucha contra el VIH/SIDA en el Caribe»

a más de 69.000 pacientes, visitar a más de 9.000 familias, realizar más de 500 intervenciones quirúrgicas y más de 400 partos, en fin, salvarse más de 700 vidas.

En la reunión de Cancilleres de Cuba-CARICOM en el verano de 2004, La Habana tuvo la iniciativa de proponer una novedosa acción, lamentablemente aún no materializada, para colaborar en la

lucha contra el VIH/SIDA en el Caribe. Esta enfermedad constituye una verdadera pandemia en la región, que es la segunda más afectada del mundo después del África subsahariana, con más de 500.000 enfermos de SIDA o portadores del VIH. Concretamente, Cuba brindó su disposición para crear centros encargados de formar especialistas en el tratamiento de los enfermos en las naciones del CARICOM y ofreció becas de nivel medio y superior para profesionales caribeños relacionados con el tratamiento a esta enfermedad, así como su voluntad de suministrar medicamentos y tecnología para paliar y diagnosticar el VIH.

En materia de salud pública, Cuba y Venezuela desarrollan la llamada "Operación Milagro", una acción de colaboración médica para devolver la vista a enfermos sin recursos en la subregión, que ya se reconoce paradigma dentro de las acciones de cooperación Sur-Sur. En el caso de la educación, la sistemática formación de profesionales en Cuba y las más recientes campañas masivas de alfabetización con el método cubano "Yo sí puedo", también se suman al conjunto de prácticas ejemplares.

Estas acciones han contribuido a consolidar los principios de solidaridad y amistad como base para una sólida colaboración y unión entre los países caribeños.

Haití en el centro de la cooperación Sur-Sur

Haití, considerado entre los países más pobres del planeta, y el más pobre del continente americano, exhibe los indicadores de desarrollo humano más negativos de la región caribeña. Con una esperanza de vida de sólo 51,6 años, una alfabetización del 51,9% de sus habitantes; un promedio de únicamente 25 médicos por cada 100.000 habitantes; el 5,6% de su población entre 15 y 49 años es portador del VIH-SIDA; la mortalidad infantil es de 76 por cada 1.000; la mortalidad materna alcanza la cifra de 680 por cada 100.000 y la mitad de su población activa está desempleada.

Esa dramática realidad socioeconómica unida a los históricos nexos entre ambos pueblos, son razones más que suficientes para que Haití ocupe el lugar privilegiado en el historial de relaciones de colaboración y solidaridad que por más de 33 años ha desarrollado hacia los pueblos del Caribe. Una muestra de esta atención diferenciada es que sea precisamente un miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC-PCC), Esteban Lazo, quien le dé un seguimiento especial a la proyección externa de Cuba en Haití. Este miembro de la alta dirección política cubana expresó categóricamente durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores y Culto de la República de Haití, Jean-Rénald Clérismé, a La Habana el pasado 25 de abril que "el pueblo haitiano no merece seguir sufriendo, por eso esta cooperación la hacemos con tanto amor y tanto cariño", a lo que podría añadirse que esa cooperación se hace con total respeto a la soberanía del Estado y el pueblo haitianos.

Una rápida revisión de las estadísticas de los programas de cooperación que la mayor de las Antillas opera en la nación haitiana también refleja el interés del gobierno cubano porque la colaboración entre los dos países se acelere y sea cada vez más fructífera. Así, tenemos que, en materia de programas de salud y educación, las cifras son realmente impactantes:

- De un total de 1.359 colaboradores cubanos en el Caribe, el mayor número está en Haití: 491, ellos se desglosan de la siguiente manera: 380 en programas de la salud, 22 en educación, 2 en la construcción, 23 trabajadores sociales y 54 en otras esferas.

- Desde 1961 se han graduado en Cuba 2.418 jóvenes del Caribe, también la cifra más alta es para Haití con 472, 16 en el nivel de técnico medio y 456 en el superior, significándose que junto con las brigadas médicas cubanas laboran ya 266 médicos haitianos graduados en la mayor de las Antillas.
- Actualmente estudian en Cuba 3.070 jóvenes caribeños, de nuevo Haití ocupa el primer lugar de procedencia de estos estudiantes, con 856, y de ellos 625 estudian Medicina, 15 carreras relacionadas con la salud y los restantes 216 otras especialidades.
- En lo relativo a Enfermería hay actualmente 480 estudiantes del Caribe, y de ellos sólo 7 proceden de Haití.
- Está propuesta la creación de 10 Centros de Diagnóstico Integral (CDI), dos ya están en fase de rehabilitación y se trabaja en la localización de otras 8 instalaciones para su habilitación.
- Se han dado más de 13 millones de consultas, fueron vacunadas casi un millón de personas y se han salvado más de 200.000 vidas humanas.
- Como parte de la "Operación Milagro" se han realizado en el Caribe, 30.098 operaciones y, de ellas, el mayor número corresponde a Haití: 7.172, de estas fueron realizadas en Cuba 921, mientras que en el propio Haití, en el Centro La Providence se hicieron 2.890 operaciones en 9 meses y en igual período de tiempo en el Centro Renaissance, 3.361, lo que significa que 1 de cada 521 haitianos ha sido beneficiado con este programa.
- En lo referente al método de alfabetización "Yo sí puedo", creado por la profesora cubana Leonela Inés Relys Díaz y que posibilita que los iletrados aprendan a leer y escribir en 65 días, se crean las bases para su ejecución en Haití. Este programa tiene como objetivo enseñar a leer y a escribir a 3 millones de haitianos.
- Finalmente, en el programa de la llamada revolución energética, específicamente en el cambio de las lámparas por los llamados bombillos ahorradores, ya han sido beneficiadas 436.134 familias, instalándose 1.945.150 bombillos, lo que ha implicado un considerable ahorro de capacidad de generación y de combustible.

«Cuba podría también desempeñar un papel, y ser uno de los vértices del triángulo de cooperación Cuba-Venezuela-Haití, en el que el gobierno bolivariano podría poner el capital, mientras que la mayor de las Antillas podría continuar aportando –incluso en mayores cantidades que hasta ahora– el capital humano»

Y en eso llegó el ALBA

Toda la actividad de cooperación y de ayuda que brinda Cuba al noble pueblo haitiano podría ser tremendamente potenciada por el surgimiento y desarrollo del ALBA. Acorde a sus documentos fundacionales, la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) se basa en la creación de mecanismos para implementar ventajas cooperativas entre las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio.

Es una propuesta para construir consensos que reconsideren los acuerdos de integración con el fin de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida en los pueblos.

En este entendido, y amén de las buenas relaciones entre Venezuela y Haití –recordemos la acogida que el pueblo haitiano hiciera a Hugo Chávez en su viaje a ese país en marzo de 2007–, Cuba podría también desempeñar un papel, y ser uno de los vértices del

triángulo de cooperación Cuba-Venezuela-Haití, en el que el gobierno bolivariano podría poner el capital, mientras que la mayor de las Antillas podría continuar aportando –incluso en mayores cantidades que hasta ahora– el capital humano. Esta es una línea de trabajo en el área de la cooperación con Haití, aún poco explotada, pero que, sin duda, pensamos va a crecer en un futuro no lejano.

De hecho, Venezuela otorgó a Haití en marzo de este año –sin que este sea miembro del ALBA– un fondo de ayuda humanitaria de 20 millones de dólares para proyectos de cooperación en salud, educación, electricidad, agua potable, seguridad alimenticia y combustibles, y el presidente René Préal es siempre invitado y –lo que aún es más importante– asiste a las reuniones cumbres del ALBA.

Otro elemento a considerar es que en la III Cumbre Presidencial de Petrocaribe, celebrada en Caracas del 10 al 11 de agosto de 2007, y a la que también asistió Préval, se materializó el ingreso formal de Haití en ese pacto energético. Dicha iniciativa, liderada por Venezuela, creada el 29 de junio de 2005, consiste en el suministro de casi 200.000 barriles diarios de petróleo a 13 países del Caribe mediante formas de pago altamente preferenciales y ha reportado a los países del Caribe que en ella participan desde la entrada en vigor de Petrocaribe a fines de 2005 un ahorro de unos 450 millones de dólares.

Consideraciones finales

A 34 años del establecimiento de las relaciones de Cuba con las naciones de la región caribeña, el gobierno de la mayor de las Antillas percibe que esas relaciones son una muestra madura y fehaciente de vínculos entre naciones en desarrollo. También reconoce y estima el nivel de independencia y acción concertada que caracteriza a sus hermanas más pequeñas en la zona.

En el caso particular de la hermana nación haitiana, por la que el Gobierno y el pueblo cubano sienten un afecto especial, la valoración de los vínculos existentes la retomamos de las palabras del propio Canciller haitiano quien, durante su ya citada visita a La Habana en abril de 2007, planteó:

La colaboración entre Cuba y Haití puede ser un ejemplo para el mundo: desinteresada, solidaria y animada por la fraternidad que nos une. El pueblo haitiano agradece esa colaboración, pues los colaboradores cubanos no sólo llevan la ciencia y la técnica sino que transmiten un cambio en la mentalidad del pueblo y siembran los grandes valores humanos.

Por la parte cubana, definitivamente, puede afirmarse que la isla ha apostado por pensar el porvenir de una nación como la haitiana sobre la base del respeto y la solidaridad, no por la variante de la colaboración militar sino llevando un ejército de médicos, enfermeras, maestros y profesores.

En esta perspectiva de solidaridad y amistad como base para la colaboración y la unión entre los países caribeños es que puede nacer, crecer y consolidarse ese Gran Caribe, que ya va siendo una realidad irreversible para nuestros pueblos hermanos.

En un artículo aparecido en la revista *Bohemia* el 8 de diciembre de 2006, el periodista Damián Alín (2006) señalaba:

Los pensamientos de Nicolás Guillén nunca pudieron ser más premonitorios cuando planteó que algún día los caribeños, colonizados por distintas potencias europeas y herederos de disímiles lenguas y costumbres, sabríamos superar barreras y buscar los cimientos comunes para otorgarles la más absoluta prioridad.

Al recuperar esa visión del poeta nacional cubano, y caribeño por excelencia, reconocemos los retos que enfrenta la proyección externa cubana hacia el área. En el contexto actual de dicha proyección, encontrar un espacio para el Caribe en los planes de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), si bien es una acción priorizada, no está exenta de complejidad, atendiendo especialmente a la visión que de Venezuela han tenido históricamente muchos países caribeños, pero que felizmente no es aplicable en el caso de Haití. De manera especial habría que analizar y reflexionar sobre las iniciativas venezolanas y su receptividad en la región caribeña, las que por cierto en el caso haitiano han funcionado muy bien hasta la fecha.

Así las cosas, se presenta un interesante escenario para la proyección externa cubana en el Caribe, región por la cual el presidente Fidel Castro manifiesta una especial admiración. Así lo demuestran sus palabras pronunciadas en la II Cumbre Cuba-CARICOM de Bridgetown, cuando señaló que "sentimos cada vez más cariño, más amor, por los pueblos de estas islas y sus excelentes líderes, son ejemplos para este hemisferio y para el mundo"², y en las reiteradas afirmaciones del presidente cubano cuando ha catalogado las relaciones de Cuba con el Caribe como ejemplares.

Haití mantendrá el espacio privilegiado que el gobierno y el pueblo cubano le ha concedido, y la región caribeña continuará siendo un área de especial atención para Cuba, pero ahora con el nada fácil objetivo de concretar "una unidad caribeña de nuevo tipo", propósito que recibe la amenaza de las presiones de Washington, desde donde se articula una ofensiva hacia el área con el fin de dividir y dominar el Caribe.

Bibliografía

- Alín, Damián 2006 "Cuba-CARICOM. Por el mar de las Antillas. Una relación que no cesa de crecer" en *Bohemia* (La Habana) Año 98, N° 25, 8 de diciembre.
- Martínez Heredia, Fernando 2005 "Influencias de la revolución haitiana en Cuba" en *En el horno de los 90* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales).

Notas

1 El Caribe al que me referiré en este artículo comprende al conjunto de países insulares ubicados en el mar del mismo nombre más Belice, Guyana, Surinam y Cayena. Son un grupo de países con marcadas diferencias, determinadas por sus respectivas características geográfico-poblacionales, por las metrópolis coloniales que se repartieron esta parte del mundo y por la evolución socioeconómica propia de cada nación en el presente siglo. Este conjunto abarca países con una gran diversidad étnica e idio-

mática; colonias y países independientes; naciones con diferentes regímenes económicos y formas de organización política; con diversos grados de desarrollo y potencialidades económicas y extensiones geográficas.

2 Mensaje a los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Comunidad del Caribe en la II Cumbre Cuba-CARICOM, 8 de diciembre de 2005.

Geopolítica y medio ambiente: el Corredor Biológico del Caribe

Néstor Sánchez

Biólogo y especialista en derecho internacional ambiental.

Resumen

El artículo plantea las oportunidades que podría tener Haití mediante una utilización imaginativa de la construcción del Corredor Biológico del Caribe.

Abstract

The article presents opportunities which Haiti could have with the construction of the Biological Corridor of the Caribbean.

Palabras clave

Biodiversidad; Ambiente; Ecología.

Keywords

Biodiversity; Environment; Ecology.

Cómo citar este artículo

Sánchez, Néstor 2008 "Geopolítica y medio ambiente: el Corredor Biológico del Caribe" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

Introducción

La historia de los pueblos del Caribe ha estado matizada por intercambios étnicos, culturales y políticos que han dejado profundas huellas. El recientemente establecido Corredor Biológico del Caribe entre Cuba, Haití y la República Dominicana puede erigirse en acontecimiento clímax que dé inicio a otro gran proceso; uno que, manejado con sagacidad y cautela por parte de los tomadores de decisiones haitianos, podría ofrecer invaluable oportunidades para la protección de la biodiversidad de Haití.

En efecto, con la firma de la Declaración de Santo Domingo en junio de 2007, los gobiernos de estos tres países acordaron un Corredor Biológico definido como un “espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados, y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos”¹.

La iniciativa de estos gobiernos pone al descubierto debilidades y fortalezas institucionales que trataremos de caracterizar en este ensayo con la intención de contribuir a que esta decisión de política transfronteriza y trinacional facilite la mayor colaboración entre las comunidades ambientalistas de los tres países y sus respectivos gobiernos.

Primer reto: acordar un marco conceptual común

No es suficiente contar con una definición genérica de Corredor Biológico. Los elementos de significación biológica que serán incorporados en este corredor son igualmente importantes. Por ende, los gobiernos deberán acordar previamente un marco conceptual que ayude a identificar “los paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados” entre una vasta nomenclatura de objetos de conservación. La siguiente tipología básica de recursos naturales compartidos, por lo demás no exhaustiva ni excluyente, constituye un ejemplo de la tarea a realizar.

- Ecosistema o ecorregión: complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos, y su medio físico, interactuando como una unidad funcional.
- Área protegida: porción de terreno y/o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de elementos significativos de biodiversidad y de recursos naturales y culturales asociados (como vestigios indígenas) manejados por mandato legal y otros medios efectivos.
- Hábitat: lugar o ambiente donde existe naturalmente un organismo o una población.

- Cuenca hidrográfica: territorio cuyas aguas convergen en un mismo río, lago o mar.
- Especies: conjunto de organismos capaces de reproducirse entre sí.

Equipos de especialistas tendrán la difícil tarea de identificar estos recursos compartidos y sus diferentes formas de conectividad, con lo cual se beneficiará enormemente el conocimiento científico disponible en los tres países. La discusión conceptual no tiene un propósito únicamente técnico, sino que sienta las bases para la construcción de una metodología de negociación sobre elementos aparentemente neutrales pero que, analizados con detenimiento, revelarán percepciones distintas por las diferencias culturales, políticas y sociales de los actores involucrados.

Segundo reto: construcción de una política trinacional para el manejo de los recursos compartidos

El ejercicio anterior no puede limitarse a un simple listado de objetos con significación ecológica, sino que debe brindar pautas para decidir criterios y mecanismos de colaboración entre los tres países. El problema central de formulación de política será decidir el arreglo institucional que permita que “dos o más actores sociales negocien, definan y formalicen roles y responsabilidades compartidas sobre la administración de un territorio o conjunto de recursos naturales” (García Cartagena, 2007: 5). Según un estudio reciente, se cuenta con cinco modalidades de comanejo que han probado su eficacia.

- Coadministración: este modelo combina mecanismos de protección y vigilancia con el mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades en las zonas de amortiguamiento, apoyándose en la participación social y comunitaria para proteger los recursos naturales.
- Delegación total de la gestión. Se conocen dos formas: un acuerdo de fideicomiso cuando el actor social es responsable de gestionar el financiamiento de todas las actividades que se desarrollan; y un convenio negociado entre las partes que establece el uso, la duración y los compromisos que asume el actor social frente al Estado para la gestión del área.
- Participación programática: este modelo no delega jurisdicción sino que acuerda la colaboración puntual en la elaboración de instrumentos normativos y de gestión como los planes de manejo de áreas protegidas.

- Asistencia técnica: en este modelo, la protección, la vigilancia y/o la investigación se efectúan de manera coordinada y en lo posible compartida entre el Estado y el actor social mediante la firma de un convenio.
- Iniciativas privadas de conservación (fincas o reservas privadas): este esquema requiere del interés de empresarios y/o dueños de tierras en desarrollar actividades de conservación cedidas a perpetuidad o con temporalidades acordadas con los gobiernos (García Cartagena, 2007: 13).

No contándose con antecedentes que hayan sentado jurisprudencia en la materia, los tres gobiernos deberán ensayar opciones múltiples según la naturaleza y características de los sitios incluidos en el Corredor.

Tercer reto: actualizar las bases legales para la cooperación transnacional

Los tres países son signatarios de acuerdos de cooperación binacionales mediante las llamadas Comisiones Mixtas. La eficacia de estas Comisiones todavía está por comprobarse dadas las cambiantes circunstancias políticas que impiden que se reúnan con regularidad. A ello se agregan las agendas de discusión que, como en el caso de la Comisión Mixta entre República Dominicana y Haití, están cargadas de temas candentes que dificultan, cuando no imposibilitan, ensayar metodologías de advenimiento.

Los tres países son, sin embargo, signatarios de la mayoría de los convenios internacionales, entre los cuales se destaca la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD), que establece sistemas nacionales y regionales eficazmente gestionados y ecológicamente representativos de áreas protegidas en zonas terrestres para el año 2010 y en zonas marinas para el año 2012. Como se verá más adelante, muchas de las zonas contempladas dentro del Corredor Biológico del Caribe constituyen áreas protegidas o por proteger que demandarán algún acuerdo de conservación transfronteriza o trinacional.

Cuarto reto: reducir brechas institucionales para la cooperación en materia ambiental

El cuadro siguiente destaca aspectos significativos para la implementación del Corredor Biológico del Caribe.

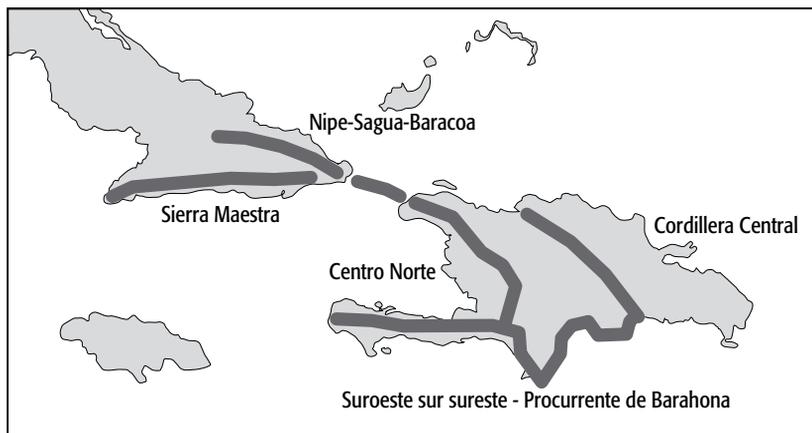
Condiciones comparativas entre Haití, República Dominicana y Cuba

Concepto	Haití	República Dominicana	Cuba
Cuenta con Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)	No	Sí	Sí
Número de Áreas Protegidas	3	86	226
Cuenta con Ley General de Medio Ambiente	Desconocido	Sí	Sí
Cuenta con Ley Sectorial de Áreas Protegidas	Desconocido	Sí	Sí
Cuenta con Base de Datos sobre Biodiversidad	Parcialmente	Sí	Sí
Cuenta con recursos humanos e instituciones adecuadas	Parcialmente	Sí	Sí

Resulta evidente que Haití deberá agilizar la declaración de su Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para lo cual cuenta ya con la identificación preliminar de un conjunto de sitios estratégicos de gran concentración de biodiversidad en adición a los Parques Massif de la Selle, Pic Macaya y la Citadelle². Deberá también promulgar la Ley General de Medio Ambiente o su equivalente, así como una Ley Sectorial de Áreas Protegidas tan pronto sea declarado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). La igualación de las bases institucionales redundará enormemente en el fortalecimiento de la institucionalidad del sector ambiental haitiano.

Quinto reto: definir los ecosistemas compartidos

La Declaración de Santo Domingo señala las siguientes áreas que serán incluidas en el Corredor Biológico del Caribe.



Con base en este mapa, hemos realizado un ejercicio de identificación de las áreas que podrían incluirse en este corredor y que serían objeto de algún tipo de acuerdo de administración multilateral. El ejercicio revela tres grandes ecorregiones potenciales entre las dos islas, a saber:

- Corredor ecológico Fôret des Pins/Massif de la Selle/Pic Macaya con Sierra de Bahoruco/Biosfera Enriquillo y Pedernales.
- Corredor ecológico Montagnes Noires con Sierra de Neiba y Savannette/Plateau Central con Parque Nalga de Maco.
- Corredor ecológico noroccidental que incluye parte del oriente de Cuba, Mole Saint Nicole y el Massif du Nord de Haití junto a la Cordillera Central de la República Dominicana (Sánchez, 2007: 69-72).

Áreas que podrían formar parte del corredor

<p>Reserva Biosfera Enriquillo Massif de la Selle Pic Macaya</p>	<p>República Dominicana: Parques Nacionales Jaragua y Sierra de Bahoruco, Lago Enriquillo y Laguna de Oviedo, entre otros</p> <p>Haití: Lac Azuei* y Trou Caiman, La Visite*, Fôret des Pins* y Pic Macaya</p>
<p>Sierra de Neiba Montagnes du Trou d'Eau Montagnes Noires</p>	<p>República Dominicana: Sierra de Neiba, Monumento Natural Las Caobas</p> <p>Haití: Bois Rouge y Morne Boeuf</p>
<p>Región Oriental Chaînes du Nord Cordillera Central</p>	<p>Cuba: Sierra Maestra, Nipe, Sagua, Baracoa</p> <p>Haití: La Citadelle*, Presqu'île du Môle Saint Nicole, L'île de la Tortue, Petit Paradis, Baies de Lacul du Nord, Mont Organise (Libon), Caracol</p> <p>República Dominicana: Parques Nacionales Nalga de Maco, Juan B. Pérez Rancier, José del Carmen Ramírez y Armando Bermúdez</p>

* Propuesta como área protegida.

Conclusiones

En un mundo globalizado, las debilidades relativas a la falta de datos, recursos humanos e instituciones adecuadas en Haití pueden ser compensadas con acuerdos de asistencia técnica e intercambios de tecnologías y de per-

sonal especializado. Por lo que las ventajas para Haití que se desprenden de la Declaración de Santo Domingo deberán ser tomadas muy en cuenta por su equipo de negociadores.

Si se acuerda de inmediato un Plan de Acción entre los tres países, la República de Haití podría contar en poco tiempo con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas para la parte terrestre en el año 2010 y para la parte marina en 2012, cumpliendo de esta manera con los compromisos de la Convención de la Diversidad Biológica (CBD).

La República de Cuba y la República Dominicana, por su parte, brindarían la asistencia científica y técnica requerida mediante acuerdos de cooperación vigentes o a ser firmados para resolver los siguientes retos:

- Intercambios técnicos entre las comunidades ambientalistas de los tres países incluyendo sus ministerios de Medio Ambiente para el análisis de vacíos biológicos en las áreas protegidas de Haití:
 - Vacíos de representación: cuánto se debe proteger.
 - Vacíos ecológicos: si lo que se desea proteger está en buenas condiciones.
 - Vacíos de gestión: si lo que se desea proteger se administra correctamente.

- Intercambios técnicos entre las comunidades ambientalistas de los tres países incluyendo sus ministerios de Medio Ambiente para la formulación del Plan de Gestión del SNAP de Haití, que contempla:
 - Análisis de fortalezas y debilidades del sistema de gestión.
 - Formulación de objetivos de protección de la biodiversidad.
 - Formulación de estrategias de gestión.

- Intercambios técnicos entre las comunidades ambientalistas de los tres países incluyendo sus ministerios de Medio Ambiente para la formulación del Plan Financiero del SNAP de Haití que contempla:
 - Identificación de necesidades de financiamiento.
 - Identificación de fuentes de financiamiento.

Una última reflexión

Haití, Cuba y la República Dominicana han estado ligadas desde siempre por la geografía y el medio ambiente compartiendo especies, procesos climáticos y conectividades ecológicas con independencia de la voluntad de sus pueblos. El Acuerdo de Santo Domingo ofrece la oportunidad de descubrir en la biodiversidad compartida los fundamentos para diseñar una agenda ambiental común que permita ensayar, tal vez por primera vez, políticas de desarrollo trilaterales.

Bibliografía

- García Cartagena, Carlos M. 2007 "Potencial de Comanejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana" en *The Nature Conservancy* (Santo Domingo), Serie Cuadernos Técnicos.
- Sánchez, Néstor 2007 "República Dominicana, Haití y Cuba: hay fronteras ambientales?" en Dilla Alfonso, Haroldo y de Jesús Cedano, Sobeida (coords.) *Frontera en transición. Diagnóstico multidisciplinario de la frontera dominico-haitiana* (Santo Domingo: Ciudades y Fronteras).

Notas

1 "Declaración de Santo Domingo", Ministerios de Medio Ambiente de Cuba, Haití y la República Dominicana, Santo Domingo, junio de 2007.

2 En el año 2005, un grupo de científicos haitianos y dominicanos se reunió en la Universidad Notre Dame de Haití bajo los auspicios de *The Nature Conservancy* para identificar los sitios que potencialmente serían incluidos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Haití. El siguiente listado de sitios fue depurado para identificar información biológica y

socioeconómica, a saber: Savannette, Île de Navase, Peligre, Camp Pérrin, Saut-d'Eau, Savanne Désolée, Sources Chaudes, Source Zabeth, Bois Fraîche, Morne Chien, Mornes Puilboreau, Île à Vache, Macaya, La Visite, Forêt des Pins, Aquin, Cahos Bois Rouge, Morne Bœuf, Baradères, Presqu'île du Môle St. Nicolas, L'île de la Tortue, Lac Azuei, Etang de Miragone, Dubedou, Petit Paradis, Mont Organisé, Caracol, La Gonâve (Nan Café y costa), Haut Borgne, Rivière Grande Anse, Côte des Arcadio, Baie de l'Acul du Nord y Fort Picolet.

La democratización de América Latina en las tendencias regionales y hemisféricas

Darío Salinas Figueredo

Profesor-investigador del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, México.

Resumen

La ponencia se propone abordar la problemática de algunos factores, internos y externos, que inciden en la lucha por la democracia en la historia política reciente de América Latina y el Caribe. Al hacerlo, además de replantear algunos alcances de la categoría de democracia que se proyecta con posteridad al predominio de la visión transitológica, quiere colocar el acento en la experiencia política y económica que se ha venido desarrollando en medio de importantes tendencias y contratendencias, incluso en el terreno estrictamente electoral. Con algún grado de reiterabilidad se insiste en la emergencia de un "nuevo mapa político regional". Si hubiera razones para ello, conviene preguntarse cuáles son los énfasis analíticos que demanda ese "mapa", tanto para la comprensión de los procesos como para evaluar su contenido democratizador desde el punto de vista del impacto en las relaciones hemisféricas, especialmente consideradas estas desde aquellos criterios que se relacionan con la actual política estadounidense hacia la región, tanto en asuntos comerciales como de seguridad.

Abstract

The paper addresses the problem of a number of internal and external factors, affecting the struggle for democracy in the recent political history of Latin America and the Caribbean. In doing so, in addition to rethinking the scope of democracy that is projected with posterity to the predominance of the logical movement

vision, the paper tries to emphasize the economic and political experience that has been occurring in the midst of major trends and counter trends, including on strictly electoral ground. With some degree of reinforcement it emphasizes the emergence of a "new regional political map". If there are reasons for doing so, the question of what analytical emphasis demanded by that "map" is should be asked, both to understand the process and to evaluate the content of democratization from the point of view of the impact on hemispheric relations, especially when considering the criteria related to the current American policy towards the region both in terms of trade and security matters.

Palabras clave

Democracia; Gobernabilidad; "Flexibilización" Laboral; Revocación de Mandato.

Keywords

Democracy; Governance; Labor "Flexibilization"; Mandate Revocation.

Cómo citar este artículo

Salinas Figueredo, Darío 2008 "La democratización de América Latina en las tendencias regionales y hemisféricas" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

La perspectiva de análisis

Encarar actualmente los problemas de la democratización no se limita a un debate sobre cómo están operando los mecanismos destinados a absorber las tensiones y conflictos. Las señales derivadas de los procesos no pasan por evitar estallidos sociales modernizando viejos esquemas de control ni abriendo válvulas momentáneas de distensión, sino en preguntarse principalmente sobre los factores condicionantes de los procesos políticos en curso. El punto de intersección de la experiencia neoliberal en sus resultados con la otra línea, en cuyo trazo se pueden reconocer aquellos procesos impulsados por expectativas democráticas y populares, instala un ángulo de visibilidad que ofrece otras perspectivas para la comprensión y el análisis. Porque inmediatamente después del fatídico ciclo de regímenes dictatoriales o autoritarios se han recompuesto, bajo modalidades muy diversas, varias de las reglas del juego político para el ejercicio de la democracia en el que se inscriben procesos electorales que fueron dejando un saldo de avances importantes.

Pero más allá de esto, también siguen vigentes o abiertas muchas preguntas, de naturaleza social, económica, política y cultural, todas ellas relevantes en la medida que involucran resultados políticos que

apuntan al reconocimiento de la continuidad de un modelo social actualmente en crisis. Y estas preguntas van colindando con ciertas formas de análisis que, sin desprenderse del horizonte democrático liberal, buscan teorizar las recientes experiencias sin mayores proyecciones explicativas. Por ello es importante afinar el sentido de las preocupaciones para saber en qué estamos pensando cuando se habla de “consolidación de la democracia”, “calidad de la democracia”, “rendimiento legislativo”, “eficacia gubernamental”, “rediseño institucional”, etc., e incluso algunas tentativas que se empeñan por hablar en términos de “el fin de la transición”. En gran medida, la prosecución de estas áreas de referencias sobre la democracia y la democratización terminan, muchas veces, en reducir el ámbito de los conflictos y el debate mismo en la problemática de los medios o procedimientos de la política con el consecuente oscurecimiento de los fines y objetivos estratégicos en pugna.

Parece poco plausible cualquier respuesta a estas cuestiones si no se va construyendo un ángulo comprensivo que oriente el foco de atención mucho más allá del supuesto de que la democracia es el campo de “incertidumbre”, como si los intereses contrapuestos dispusieran de las mismas “oportunidades” y, consecuentemente, en teoría, la movilización de sus propuestas y sus luchas fueran a darse en igualdad de condiciones. Si nos colocáramos ante las certezas de un modelo de sociedad vigente, hegemónico, aunque con señales de crisis, los desafíos de la democratización nos colocarían delante de un conjunto de elementos vinculados inevitablemente con los soportes internos y externos de la dominación.

Crisis del modelo mercadocéntrico de sociedad

Llegado a este punto conviene introducir otro ángulo de reflexión. Aunque la heterogeneidad social y productiva puede ser cada vez mayor, América Latina y el Caribe, como noción, sigue teniendo un significado histórico, político y cultural. La afirmación no es secundaria frente al hostigamiento que la lectura conservadora de la globalización produce, en ocasiones, frente la noción de Estado-nación, o espacios nacionales en cuya extensión han habido expresiones que incluso han puesto en tela de juicio el concepto de América Latina.

No es fácil omitir el hecho de que estamos viviendo un período muy agresivo de la globalización capitalista y que la región, en ese contexto y a la luz de la articulación de los intereses hegemónicos, se dinamiza como un gran segmento de la periferia que “ofrece”, en aras de un realismo político, al movimiento del capital sus “ventajas competitivas”. Pero por sobre la retórica y las envolturas ideológicas, puede advertirse un conjunto de dinámicas emergentes que, a su vez, son parte de una matriz de cambio

y que a nuestro entender no ha tocado fondo y que tiende a mantener vigente la caracterización de la nueva etapa del devenir histórico de la región y que a su turno sigue acumulando problemas y desafíos comunes¹.

Con los resultados de la experiencia de las últimas dos décadas, inscritas en la dinámica mundial que se desata entre 1988 y 1990, recién hoy parece percibirse mejor que nunca aquella conocida percepción de Marx según la cual el mundo entero sería un gran sistema interconectado de mercados. Una especie de “aldea global” donde los capitales, el trabajo y, en general, todas las mercancías, legales e ilegales, gozarían del espacio necesario y de las garantías suficientes, explícitas o implícitas, para circular con unas condiciones de libertad nunca antes vista².

El ingreso a esta fase tuvo implicancias profundas en diferentes direcciones. Por un lado, el proceso difícil de desmontaje de la estructura previamente existente y que en América Latina significó una fuerte arremetida intrasistémica en contra del llamado “Estado benefactor”. Por otra parte, el desarrollo de los mercados en favor de las nuevas formas de acumulación, cuya dinámica, junto con imponer una ampliación de la esfera mercantil en detrimento de las garantías públicas, supuso la implementación de profundas reestructuraciones en el ámbito de las relaciones sociales (Fernández, Güemes y Vigil, 2005-2006).

La apertura regional hacia los mercados internacionales de estas economías periféricas, subdesarrolladas, en parte modernas y en parte tradicionales, a la luz de su configuración histórica y estructural, ha planteado onerosas exigencias endógenas de competitividad que, en casi todas partes, se han visto enfrentadas a los requerimientos de un aumento de la tasa de explotación, precarización del trabajo, informalización del empleo y a muy diversas formas de exclusión y expropiación de los derechos sociales conquistados.

Esto significa que, junto con la globalización de los mercados, el nuevo modelo que logró imponerse trajo aparejado, tempranamente, la exigencia imperativa de flexibilizar la estructura contractual e institucional de relaciones laborales, con el consiguiente debilitamiento de la capacidad de negociación y de representación de la ancha franja social donde se reconoce a quienes viven del trabajo. La dinámica mercadocéntrica y de competitividad se ha caracterizado por presentar difíciles conciliaciones con organizaciones políticas sustentadas en fórmulas que han implicado algún esquema de participación ciudadana. En este sentido, es útil replantearse nuevamente lo que en Lechner (2002) aparece bajo la descripción de cómo estas sociedades, bajo el protagonismo del mercado y la mercantilización, fueron desplazadas desde el mundo del trabajo para domiciliar a sus ciudadanos en el mundo del consumo.

La preservación y reproducción de la estructura económica sobre la cual descansa este modelo no ha podido preservar ni siquiera las condiciones mínimas de gobernabilidad democrática. Y es que lo que por regla general concentra y polariza, difícilmente puede generar consensos sociales y políticos estables. Esto, que se ha dado en llamar también “proceso de modernización”, ha sido en realidad el proceso de constitución de un nuevo modelo de capitalismo, radicalmente distinto al anterior. El sometimiento a brutales exigencias de competitividad en los mercados ha sido su tónica, y en la experiencia de América Latina ha producido una dinámica de ahondamiento incomparable de las históricas desigualdades de clases, de regiones, culturales y étnicas.

Las políticas que se impulsaron para apuntalar el enraizamiento de este modelo con las llamadas reformas de “primera generación” que, como en el caso de Chile se aplicaron “sin anestésicos” bajo dictadura militar, se orientaron al desmontaje de las empresas estatales, la privatización y apertura al exterior para vincular la organización de las economías al ciclo exportador, eliminando o jibarizando el funcionamiento de los controles reguladores sobre el mercado. Las siguientes reformas, las de “segunda generación”, impulsadas en contextos de democracias electorales, buscaron introducir mecanismos y variantes de financiamientos en la capacidad institucional del Estado, con campos de afectación en la salud, la educación y la seguridad social. Más allá de las formulaciones y decisiones queda claro, en todo caso, que todas las reformas subsecuentes a las primeras se hicieron manteniendo incólumes los fundamentos sistémicos de privatización, apertura y desregulación financiera.

El voto *democrático* de los mercados

Los procesos políticos de las dos últimas décadas han estado marcados por el predominio indiscutible de los grandes intereses articulados alrededor del capital financiero en el desenvolvimiento de la economía mundial. La circulación de los capitales sin controles ni restricciones constituye el motor del modelo vigente. La globalización de los mercados ha venido ocurriendo en correspondencia con los procesos de desregulación del sistema financiero internacional sobre una base principalmente especulativa.

Dentro de esa dinámica, los movimientos de capitales se han autonomizado, en gran medida, de las variables reales de la economía. Estos movimientos, que operan prácticamente fuera de la definición política y el control institucional por parte de las autoridades monetarias nacionales, formatean los ya de por sí estrechos márgenes de autonomía de las políticas de los países coadyuvando con ello a que se incremente el riesgo sistémico de crisis³.

Convertido este férreo marco en sistema, es a él que las autoridades nacionales suelen referirse cuando expresan su incomodidad o preocupación sobre el “entorno difícil”, como si se tratara de una variable virtualmente fuera de control y más allá de los espacios nacionales. No obstante la dosis de eufemismo o inexactitud conceptual, esta expresión política no es tan descabellada. Las sociedades de la periferia, como las nuestras, en efecto, no disponen totalmente de su capacidad estatal para ejercer de manera cabal el principio político de autodeterminación, ni siquiera para decidir integralmente sobre sus recursos fundamentales, como tampoco sobre el modo en que se definen los contenidos u orientaciones principales de sus políticas.

Más allá del espejismo que secreta la dominación neoliberal, especialmente en el campo de la democracia electoral, los criterios que fundamentan las decisiones políticas son predefinidos lejos del movimiento real de las necesidades del desarrollo de nuestros países. Sigue siendo muy ilustrativo a este respecto lo que en pleno apogeo de la hegemonía aperturista y desregulacionista señalara el profesor Ferrer (1996):

El sistema es gobernado por las expectativas y decisiones de los operadores privados y no por el poder político. Periódicamente, en los sistemas democráticos los electores eligen a sus gobernantes, pero los mercados votan todos los días. Estos son, en definitiva, los que deciden.

Afirmación que de paso alcanza a mostrar la inutilidad de un régimen cuando reduce la democratización al simple procedimiento ritual de depositar un voto cada cierto tiempo, en cuyo mecanismo las decisiones fundamentales que conciernen al proyecto de un país se van alejando cada vez más del ciudadano, convirtiendo el otorgamiento soberano del mandato político en una sistema de representación socialmente desencadenada y sin movimiento de retorno.

El “entorno internacional” como factor de ingobernabilidad

En el transcurso de la historia reciente, podemos constatar que no existe un solo foro o reunión en los que no se proclamen los “beneficios” del mercado que se concretarían siempre que se hayan creado las condiciones previas necesarias para terminar de convertir a la región en un “área de libre comercio”. El impulso constitutivo de tal predicamento arrancó con la “Iniciativa para las Américas”, aquel 27 de junio de 1990 bajo el mandato del entonces presidente Bush⁴. Mas tarde, ya durante la

presidencia de Clinton en 1994, en la Cumbre de las Américas celebrada en Miami, avanza la iniciativa con el formato de un "Acuerdo de Libre Comercio para las Américas", propuesta cuya expresión de mayor solvencia tuvo desde el punto de vista de sus fundamentos en la formulación del llamado "Consenso de Washington"⁵. La proyección política predominante que desde allí en adelante se fue desplegando hizo que tal concepto fuera ocupando una notable centralidad en la articulación de los mecanismos económicos, comerciales, financieros y políticos de los países de la región. Los resultados esperados se proyectaron, teóricamente, hacia un mejor y mayor desarrollo de las economías, así como en el incremento en las exportaciones

«Los gobiernos de la región en un principio aceptaron los objetivos generales de la política estadounidense sin avizorar alternativa alguna»

del comercio intrarregional e internacional.

del comercio intrarregional e internacional.

Los gobiernos de la región en un principio aceptaron los objetivos generales de la política estadounidense sin avizorar alternativa alguna. La respuesta predominante asumida fue más bien en términos de cómo cumplir con los requisitos, demandas y condicionalidades de la política de integración formulada mediante la "oferta" para el impulso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)⁶.

Más allá de las dimensiones técnicas, la política predominante tuvo en estos referentes su trasfondo de integración. Las tendencias incubadas en el que se apoyaron los proyectos de tratados y convenios bilaterales han venido forjando desde el Norte todo un esquema de relación, cuyo despliegue se produce en términos abiertamente hegemónicos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En efecto, sus concepciones estratégicas en materia de seguridad y la política económico-comercial constituyen actualmente un todo de componentes inseparables, más aún cuando hacia finales de 2001 se integra a esa política el ingrediente de la lucha "contra el terrorismo", engrosando la oferta de exigencias para un compromiso regional. Existe una proyec-

ción encaminada a homologar el desenvolvimiento del mundo con los criterios que rigen la configuración económico-política de la principal potencia mundial. La expansión del comercio internacional es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos. A contrapelo de una construida creencia a favor de la "prosperidad", las políticas de integración que impulsa la Casa Blanca no se relacionan exclusiva ni primordialmente con cuestiones comerciales o acuerdos de inversión.

El ALCA, que más allá de sus empantanamientos y metas cronológicas incumplidas y cuestionadas, especialmente notorios después de la Cumbre de Mar del Plata, no ha sido abandonado en sus fundamentos, y los Tratados de Libre Comercio (TLC) que lo acompañaron o sucedieron deben ser encarados dentro de una mayor perspectiva como engranajes de los mecanismos geopolíticos destinados a apuntalar la trayectoria de un proyecto de dominación de amplio espectro (Estay, 2003). El peso mediático que sobredimensiona la competitividad como un mundo de "oportunidades", suele oscurecer esta perspectiva, cuando en realidad lo que se busca englobar se extiende desde los aspectos estrictamente económicos hasta los concernientes a la legislación laboral, pasando por la reforma del Estado, criterios para leyes sobre propiedad intelectual, el medio ambiente y los recursos naturales y energéticos, los conocimientos y la cultura. Los TLC suscritos con Chile y aquellos firmados entre Estados Unidos y Centroamérica, y los registros diferentes de cuestionamientos que al respecto afloran hoy en la sociedad de la región andina y en algunas del Cono sur, refuerzan la vigencia de los desafíos derivados de su carácter totalizante⁷. Desde hace un buen rato que a propósito del "libre comercio" América Latina se encuentra enfrentada a desafíos que no se limitan al antiguo arte de comerciar en las condiciones del actual proceso de globalización económica neoliberal, ni sólo a las ofertas de integración (Acosta y Falcón, 2005).

Se trata, justamente, de garantizar por todos los medios la instrumentación de una estrategia totalizante, es decir, el control del territorio regional desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Un paso fundamental en ese proceso ha sido el intento de enraizar sus ingredientes dentro de las expectativas de las políticas nacionales, como si esa oferta de integración hegemónica fuera un destino por sobre cualquier otro camino posible. A contrapelo de aquellas creencias según las cuales la política estadounidense hacia nuestra región había perdido importancia después de 1989, todos los planes involucrados en la política hemisférica provenientes del Norte secretan señales muy diferentes y muy lejos de una consideración irrelevante. Tanto interesa esta región a Washington que está enteramente dispuesto no sólo a aplicar su política sino a impedir el desarrollo de estrategias alternativas incubadas, especialmente en aquellas franjas de la región donde han

triunfado electoralmente gobiernos que, aunque de signos ideológicos distintos, han coincidido en concepciones y políticas afines en la perspectiva de un desarrollo y de integración diferentes. Un aspecto sustantivo de esa práctica orientada a garantizar la subordinación regional se ratifica en la política de bloqueo que mantiene contra Cuba desde hace más de cuatro décadas.

El surgimiento del proyecto Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) es, en este sentido, un desafío importante para los intereses que determinan la estrategia y los planes de Estados Unidos. No debe olvidarse que la hegemonía comercial es una dimensión importante para la seguridad estadounidense. Más aún cuando frente a los criterios de la "libre elección", la ganancia privada y la integración subordinada se anteponen referentes vinculados a la solidaridad, la cooperación y la soberanía. Es exactamente a partir de este ángulo el lugar desde el cual se puede apreciar mejor el núcleo constitutivo de una estrategia más general que se ha vuelto compacta al articular sus proyecciones con el principio de la "guerra preventiva" o el "golpe anticipado".

América Latina ante la "nueva" concepción de seguridad hemisférica

Con estricto apego a la lógica "amigo-enemigo" (si no recibo tu apoyo, concluyo que eres mi enemigo) formulada desde la extraordinaria concentración del poder económico, financiero y militar, la política estadounidense define su concepción de seguridad y, por extensión, lo que habrá de entender por terrorismo. Pero lo más importante es que sus ingredientes y sus invocaciones ideológicas hacen parte de una estrategia más general según la cual Estados Unidos al definir la amenaza a su seguridad, proyecta asegurarse fuera de sus fronteras a través de la defensa "anticipada" o "preventiva".

Esta definición descansa en el privilegio del "poder duro", es decir, en la capacidad derivada de la supremacía militar. En la lucha contra el terrorismo, dentro de esta concepción de seguridad, el principio de la soberanía territorial del otro pierde *ipso facto* toda legitimidad si existe la presunción de que bajo su resguardo se "cobija al terrorismo", se le brinda apoyo logístico de cualquier tipo o, en un registro diferente, si se construye la sospecha de que en determinado territorio hay o puede haber armas de destrucción masiva.

El tiempo transcurrido desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 arroja varios saldos en el sentido de nuestra reflexión, uno de los cuales constituye una ratificación muy importante. En efecto, después de la redefinición de la lucha contra el terrorismo por parte de la política de Estados Unidos, su presencia militar bajo distintas figuras que definen formalmente el carácter de la misión, la erogación presupuestaria y el esquema de cooperación con el gobierno anfitrión, se ha incre-

mentado notablemente en muchas latitudes del mundo⁸. Sin incluir las bases en Arabia Saudita, Kosovo y Bosnia, de acuerdo con los datos disponibles en 2007, su presencia militar posee una cobertura que alcanza más de cincuenta territorios. Esto significa un registro de 823 bases militares en distintos lugares del mundo⁹.

Desde una lectura que privilegia la geografía regional latinoamericana, interesa señalar primordialmente aquellas instalaciones o bases que se encuentran en Curazao, Aruba, Paraguay, Ecuador, El Salvador y Colombia, sin exentar desde luego la del Caribe. A todo lo cual conviene añadir el hecho de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) opera en gran parte de los países de América Latina y el Caribe. A este respecto no puede soslayarse que la presencia de la DEA en América Latina constituye un hecho dinámico y creciente, desde el punto de vista del incremento tanto en el financiamiento como en cuanto a la presencia del personal destacado para esta misión (Youngers y Rossin, 2005).

Más allá de estos datos de referencias, en sí mismos son trascendentes, existe consenso entre los estudios de estas materias en la región, en el sentido de que la ayuda de Estados Unidos en asistencia militar y programas antidrogas se ha incrementado, por sobre otros rubros, en forma importante, en el período reciente (Álvarez Veloso y Isenhour, 2005). Los resultados obtenidos en los planes estadounidenses, a la luz de los objetivos formalmente manifiestos, no son satisfactorios. Por ejemplo, no ha disminuido la cantidad de drogas que ingresa al mercado de Estados Unidos. También para América Latina hay consecuencias no deseadas.

La protesta social: entre la seguridad y la democracia

La inestable y precaria cuota de independencia de muchos gobiernos para definir una postura decorosa con relación al significado de la seguridad, favorece las condiciones para la intromisión, so pretexto de la cooperación para la "lucha global contra el terrorismo, con el consecuente debilitamiento de los espacios nacionales y, en última instancia, de los márgenes para el ejercicio de la soberanía.

Es necesario integrar en las preocupaciones relativas a los procesos de democratización una discusión sobre el campo de las amenazas. La teoría de la amenaza disponible no arroja luces para la región. Más bien el concepto amenaza en sus referencias predominantes constituye en sí mismo una amenaza para América Latina. Mientras no haya un avance sustantivo en esto, los remedios disponibles serán siempre peores que la enfermedad.

Entre la compresión restringida de la democracia y el impacto mediato de la caracterización conservadora de desestabilización vinculable a las concepciones de "amenaza" acuñadas desde la seguridad

«Un riesgo que potencialmente amenaza el ejercicio de la política democrática en América Latina es que la lógica antiterrorista se eslabone con un concepto de ‘seguridad regional’ y, en última instancia, su proyección alcance a trastocar asuntos que conciernen a la seguridad pública en los espacios nacionales»

estadounidense, puede haber sólo una frontera muy tenue. En este sentido, un riesgo que potencialmente amenaza el ejercicio de la política democrática en América Latina es que la lógica antiterrorista se eslabone con un concepto de “seguridad regional” y, en última instancia, su proyección alcance a trastocar asuntos que conciernen a la seguridad pública en los espacios nacionales. En un contexto de proliferación de la pobreza extrema y de desigualdades de todo tipo, asociado a

las múltiples consecuencias de los estragos de la era neoliberal, y otros fenómenos conexos más complejos de descomposición y putrefacción en el tejido social, gradual y peligrosamente viene planteándose el tema de la “criminalización de la protesta social” o la “judicialización del descontento”.

Creo que no se exagera si este asunto no resuelto lo inscribimos en la trayectoria de la discusión sobre la democracia y los procesos de democratización. Porque constituye un trasfondo social de la democratización y en vías de ahondamiento, dentro de un contexto

donde el control militar y policíaco tienden a confundirse bajo el influjo de leyes de inspiración antiterrorista. En un estudio realizado por especialistas en seguridad se concluye que, en ciertas áreas de la región centroamericana, en una serie de programas sobre violencia, conocidos bajo la denominación “Fuerzas de Respuesta Rápidas”, con ayuda de Estados Unidos, los papeles de las FF.AA. y la policía aparecían difusos y superpuestos (FLACSO, 2006). En esta misma línea de conclusión puede ubicarse el diseño general de la estrategia que contempla el Plan Colombia, cuando en uno de sus componentes adquiere proyección la asistencia a la Policía Nacional (Guedán y Ramírez, 2005: 83).

Aristas del terrorismo como amenaza

En el marco de los criterios que están operando en la estrategia político-militar estadounidense de "seguridad hemisférica", además de la realización de ejercicios militares conjuntos, cabe mencionar el Plan Colombia, la "Iniciativa Regional Andina", el fortalecimiento del Comando Norte y el desarrollo de la práctica político-mediática que, por la vía de la "certificación", influyen sobre la política de nuestros países tanto en materia de democracia y derechos humanos, como de lucha contra el narcotráfico. A esto se añade el riesgo potencial, siempre permanente, de que algún país latinoamericano caiga bajo la sospecha de ser considerado "país patrocinador" del terrorismo, en la consideración de alguna agencia vinculada con la política de Washington.

Tienen un peso específico dentro de estas coordenadas aquellos países que, como Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador o México, son proveedores importantes de petróleo o gas para los planes energéticos de Estados Unidos. Estos países son desde el punto de vista de sus recursos muy sensibles a los requerimientos de la economía estadounidense. Según el Plan Nacional de Energía, sin un incremento de la oferta agregada de energía, el país podría enfrentar en el futuro próximo una amenaza a su seguridad.

Los intentos de Estados Unidos de aumentar la extracción en los yacimientos de los países productores de petróleo no cuentan con todas las condiciones políticas requeridas para garantizar su viabilidad, especialmente con relación a Venezuela, cuya política energética se encuentra resguardada en función del desarrollo bajo criterios de independencia, además de la regulación estatal consagrada en la legislación para la participación de inversiones extranjeras. Una de las primeras decisiones consistió en la negativa a la autorización de los sobrevuelos en su espacio aéreo de aviones de guerra estadounidenses preocupados por ejercer el control militar sobre esa parte de la zona andina¹⁰. Todo ello sumado al renovado papel ejercido por el gobierno venezolano en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)¹¹.

Las apretadas consideraciones anteriores se entienden mejor en su dimensión reflexiva si son dadas dentro de los nuevos componentes que van ingresando a la agenda latinoamericana, generando a su turno un importante contrapeso a la hegemonía del Norte. El cuestionamiento profundo del ALCA y su rechazo en Mar del Plata no habría sido posible sin la relación de confianza y solidaridad entre los postulados del ALBA y los diversos movimientos políticos y sociales progresistas del continente, en cuya esfera de activación se incluyen algunos gobiernos. En esa misma senda se inscribe el surgimiento de TELESUR y PETROCARIBE, así como el proyecto destinado a encarar la problemática de la autonomía financiera para la región a través del Banco del Sur.

Cuando uno analiza este movimiento tendencial que se produce en la región, y que se extiende con grados diversos de articulación con otros proyectos electoralmente triunfantes, especial en Ecuador y Bolivia, y que perfila un nuevo mapa político regional, la perspectiva del “ataque preventivo” y la consideración del terrorismo como amenaza adquieren otros matices. De allí la importancia de preguntarse sobre el nada discreto interés estadounidense por seguir fortaleciendo sus vínculos con el gobierno colombiano, más todavía considerando que en las actuales circunstancias la Base de Manta en territorio ecuatoriano tiene sus días contados dado el consistente proyecto de otorgarle rango constitucional a la prohibición de albergar bases militares extranjeras.

Desde Maquiavelo, Clausewicz y Weber se sabe que el que vence impone. Y el que venció es aquel que supo imponerse, porque el contrincante, aunque hubiera querido, no pudo evitarlo. El Plan Colombia es un plan estadounidense, aunque lleve el nombre de Colombia. Aquí se asoma el Plan Colombia como problemática regional no resuelta y que constituye una buena muestra de lo que ocurre en otros registros de la relación hemisférica en el entidad de la gravitación insuficientemente asimilada de los planes de Estados Unidos para América Latina.

América Latina no llegó a tiempo a la hora de definir la lucha contra el terrorismo. Para el Estado colombiano, parte de los que actualmente son considerados pertenecientes a la trinchera del terrorismo fueron los que ayer quedaron en la caracterización de los objetivos de la otrora lucha subversivas o contrainsurgente. El contexto actual de post-guerra fría, o post 11 de septiembre, como es sabido no es igual al del pasado. Tampoco lo son las invocaciones ideológicas. Pero el aprendizaje, la experiencia institucional, el basamento doctrinario, la subordinación y los mecanismos de intromisión existen y seguirán existiendo mientras no se desarrollen las articulaciones de contrapeso. No deja de ser un hecho poderosamente llamativo el que desde la política regional no hayan surgido todavía expresiones antiterroristas vinculadas a diversas experiencia políticas. Si existiera la suficiente voluntad para una política regional a favor de un genuino posicionamiento frente al terrorismo, se podría disponer de un abundante expediente que va desde las numerosas “las acciones encubiertas” en prácticamente todas las latitudes, pasando por el “Plan Cóndor”, hasta los sabotajes, asesinatos e intentos de asesinatos que se encuentran en el acervo de las acusaciones que pesan sobre el terrorista de origen cubano utilizado por Washington Luis Posada Carriles, entre muchos y múltiples referentes.

Pero aquí lo más importante que interesa enfatizar es que quien llega tarde a la hora de las definiciones ya llega conceptualmen-

«Aquellos que se autoerigen en los campeones de la lucha contra el narcotráfico y establecen sus exigencias, siempre perentorias, son los que disponen del mayor mercado de consumo de drogas»

te en calidad de subordinado. Las principales definiciones, los criterios, ingredientes y escenarios nucleados frente a los episodios que involucran asuntos de seguridad pertenecen a las definiciones cuyo anclaje tiene su domicilio central en la “teorías de las amenazas”. La cooperación, o lo que ocurre en nombre de ella, en tales circunstancias y en ese terreno, no opera sobre la base de un diagnóstico compartido. Por regla general, la asimetría en este terreno exhibe su más execrable

dimensión, porque la dinámica en materia de seguridad está mucho más cerca del acatamiento que de la autodeterminación, toda vez que desde el norte se define lo que habrá de entenderse por seguridad o lucha contra el terrorismo, como si América Latina fuese un territorio de Estados Unidos.

La otra amenaza fusionada de facto es el narcotráfico, el cual sirve tam-

bién, aunque en otro registro, para revelar algo similar. Aquí, la política predominante y sus mecanismos tampoco involucran ningún cuestionamiento significativo de la política estadounidense, en cuyo espacio territorial se realiza el mayor consumo de estupefacientes. Sabemos que no sólo es un problema de mercado o de demanda. Pero allí se instala la extraña paradoja según la cual aquellos que se autoerigen en los campeones de la lucha contra el narcotráfico y establecen sus exigencias, siempre perentorias, son los que disponen del mayor mercado de consumo de drogas. Es el mismo esquema que en su lucha por el control, tráfico de armas y el trasiego de las mismas disponen de las principales condiciones de producción y rentabilidad mientras pregonan por doquier su lucha contra la delincuencia organizada.

Sea de todo esto lo que fuere, lo que queda claro es que cuando las exigencias de colaborar con Estados Unidos a partir de sus concepciones y planes se plantean bajo estas invocaciones, no estaría de más que se pudiesen formular preguntas sustantivas desde América Latina orientadas a conocer

cuáles son las verdaderas amenazas que se ciernen sobre nuestra región. Sin descartar, claro está, que la invocación de la “lucha común contra el terrorismo” sea también una coartada para enmascarar otros planes, que no tendrían seguramente en el respeto, en la diplomacia ni en la negociación sus puntos de mayor inflexión.

El populismo

Cuando los canales de información son exiguos y se advierte una notable pobreza en los sistemas de partidos, el hecho de repetirse ciertas afirmaciones, aunque sean de dudosa consistencia, terminan pareciendo verdades de Perogrullo, y pasan a formar parte de las creencias, de una especie de sentido común. Una de esas repeticiones convertida en lugar común consiste en las afirmaciones nada desinteresadas que atribuyen características “populistas” a algunos gobiernos o proyectos políticos que se desarrollan en la región.

Lo que esconde esa conservadora mirada es que cuando un gobierno se plantea proyectos que buscan enfrentar los problemas globales del país, de cara a las necesidades sociales, de la gente y de los requerimientos del desarrollo en una perspectiva integral, con decidida presencia estatal en la promoción y defensa de los recursos nacionales, entonces, ese proyecto *ipso facto* cae bajo el calificativo de populista.

Hay ciertas posturas interpretativas y, dentro de ellas, algunas incluso bien informadas que, en vez ayudar a clarificar los términos de la discusión, terminan abonando a favor de una mayor confusión, contribuyen con ello a que el populismo asuma el significado de una amenaza. Ante estas circunstancias no estaría de más volver a preguntarse acerca del origen de esa lectura que concibe al populismo como una amenaza.

La amenaza se orienta teóricamente contra la democracia o el régimen democrático. Sin embargo, a la luz de los elementos que configuran la correlación actual de fuerzas, la discusión sobre este asunto no pasa por la frontera entre una corriente supuestamente democrática y otra que no lo sería por haber incurrido en postulados “populistas”. La diferencia real, dentro de este farragoso debate nada desinteresado promovido desde el Norte, ocurre más bien entre una corriente política que busca congelar las aspiraciones sociales en el nivel preestablecido por la democracia neoliberal, o más abajo, y otra que no niega la democracia ni sus mecanismos, incluyendo los procesos electorales, sino que se empeña por elevar esas aspiraciones dentro de una proyección integral del desarrollo en la perspectiva de las transformaciones en la estructura económica, el régimen político, y hacia una inserción internacional no subordinada.

En el fondo, de lo que se trata es de evitar cualquier compromiso político gubernamental con el pueblo y con el principio de

autodeterminación y soberanía como país. Sin ser idénticas las señales más elocuentes a este respecto, se relacionan o están dirigidas a erosionar, deslegitimar, en lo posible, retrotraer las políticas que se asocian con el proyecto gubernamental de Bolivia, el de Ecuador, encabezado por el economista Rafael Correa, y principalmente con el gobierno venezolano.

Algunas conclusiones

Los puntos que hemos discutido hasta aquí han querido mostrar, desde una perspectiva relativamente heterodoxa, que la lucha por la democratización en América Latina, en sus posibilidades de profundización, requiere eslabonarse con estos desafíos que pertenecen a la agenda regional y hemisférica, y que en cada unas de las circunstancias particulares constituyen problemáticas propias de cada país.

Si al hacerlo hemos trabajado con el presupuesto de que hay una tendencia política en desarrollo, frente a la hegemonía estadounidense en este período, es porque un conjunto de países ha alcanzado victorias electorales, cuyos contenidos programáticos vienen perfilando el desarrollo de una nueva situación regional, distinta a la que prevaleció en las décadas anteriores. Los gobiernos progresistas, unos más avanzados que otros y en algunos casos con fuerzas de izquierda en la correlación gubernamental, pero todos con más posibilidades de coincidencias que divergencias insalvables, lo cual es especialmente notorio cuando no es tan evidente la práctica injerencista, son el resultado de una larga cadena de batallas contra el neoliberalismo y las ofertas de integración subordinadas en sus consecuencias y visualizaciones múltiples.

Existe en esta trayectoria un proceso complejo de recuperación del protagonismo social y político de los movimientos y la búsqueda histórica de reconfigurar las articulaciones políticas. Este trazo va desde el aquel "Caracazo" de 1989, ante la imposición del paquete fondomonetarista que marcó agudamente la erosión de los planes neoliberales de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que a la postre ha sido derrocado, hasta el también derrocado Lucio Gutiérrez en abril de 2005 en Ecuador, como consecuencia del desarrollo de un gran movimiento que supo amalgamar demandas sociales y políticas profundas. Dentro de este arco temporal y político, que incluye importantes revueltas populares de signos ideológicos diversos y composiciones sociales muy heterogéneas, que colocando la "revocatoria del mandato" en un lugar importante de la activación social, llegaron en muchos casos hasta el derrocamiento de gobiernos de corte o inspiración neoliberal en Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Argentina y Haití.

Es en la densidad de estas experiencias de lucha, resistencia, oposición y estructuración de alternativas en la historia reciente,

el lugar analítico de donde surgen las referencias para entender el significado de los gobiernos electoralmente triunfantes, que en su conjunto van dibujando un nuevo mapa político en la región. Sin embargo, el reconocer en este juego complejo de tendencias y contratendencias la parte benéfica que se viene configurando en el escenario político regional de América Latina en favor de la democracia, no es para sacar cuentas alegres. Conviene desde todo punto de vista tener en un lugar prioritario de la discusión el hecho de que en la correlación actual de fuerzas, la política de Washington, más allá de su cuota de desprestigio internacional y los signos de su crisis económica, conserva la supremacía militar, los instrumentos de coacción económica y financiera internacionales, y una gran capacidad para el control de las mentes y para incidir en las conciencias a través del poderío mediático de que dispone.

Bibliografía

- Acosta, Alberto y Falcón, Fander (eds.) 2005 *TLC: más que un tratado de libre comercio* (Quito: Friedrich Ebert Stiftung/ILDIS/FLACSO).
- Álvarez Veloso, David y Isenhour, Michelle 2005 "Transferencia y ayuda norteamericana hacia América Latina: las prioridades que refleja el presupuesto", Observatorio N° 2, Área de Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Santiago de Chile, mayo.
- Cademartori, José 2004 *La globalización cuestionada* (Santiago de Chile: Editorial Universidad de Santiago).
- Estay, Jaime 2003 "El ALCA: su avance y los contenidos de la negociación" en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela) Vol. 9, mayo-agosto.
- Estay Reyno, Jaime 2005 "América Latina en las negociaciones comerciales multilaterales y hemisféricas" en Estay Reyno, Jaime (comp.) *La economía mundial en América Latina: tendencias problemas y desafíos* (Buenos Aires: CLACSO).
- Fernández, Víctor Ramiro; Güemes, María Cecilia y Vigil, José Ignacio 2005-2006 "Estado y desarrollo en los discursos del Banco Mundial" en *Problemas del Desarrollo* (Buenos Aires) Edición Cono Sur, Vol. 1, N° 1.

- Ferrer, Aldo 1996 "Desarrollo y subdesarrollo en un mundo global: los problemas de la América Latina" en *El Trimestre Económico* (México DF: Fondo de Cultura Económica) N° 252.
- Ferrer, Aldo 2006 *Hechos y ficciones de la globalización. Argentina y el MERCOSUR en el sistema internacional* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- FLACSO 2006 "Boletín del Programa de Seguridad y Ciudadanía", Santiago de Chile, N° 4, 4 de julio.
- Guedán, Manuel y Ramírez, Rubén Darío 2005 *Colombia, ¿la guerra de nunca acabar?* (Madrid: Trama Editorial).
- Klare, Michael T. 2005 "Sangre por petróleo: la estrategia energética de Bush y Cheney" en Panitch, Leo y Leys, Colin (eds.) *Socialist Register 2004 El nuevo desafío imperial* (Buenos Aires: Merlin Press/CLACSO).
- Lander, Luis E. (coord.) 2003 *Poder y petróleo en Venezuela* (Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela/PDVSA).
- Lechner, Norbert 2002 *Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política* (Santiago de Chile: LOM).
- Martin, Hans-Peter y Schumann, Harald 2000 *La trampa de la globalización. El ataque contra la democracia y la libertad* (México DF: Taurus).
- Minsburg, Naúm 2004 "Transnacionalización, crisis y papel del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial" en Boron, Atilio A.; Gabina, Julio C. y Minsburg, Naúm *Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Vidal, Gregorio (coord.) 2006 *ALCA: procesos de integración y regionalización en América* (México DF: UAM/Porrúa).
- Williamson, John 1990 "What Washington means by policy Reform", *Latin American Adjustment. How much has happened?* (Washington DC: Institute for International Economics).
- Youngers, Coletta y Rosin, Eileen (eds.) 2005 *Drogas y democracia en América Latina. El impacto de la política de Estados Unidos* (Buenos Aires: WOLA/Biblos).

Notas

- 1 Una buena crónica de la globalización se encuentra en Martin y Schumann (2000).
- 2 Para un análisis de la globalización en los ámbitos del comercio internacional, las corporaciones internacionales, las corrientes financieras y la liberalización del marco regulatorio es útil referenciarse en el libro de Aldo Ferrer (2006).
- 3 Un sugerente análisis sobre el rumbo económico y político de la globalización y sus contradicciones se encuentra en el trabajo de José Cademartori (2004).
- 4 Publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Washington DC, junio de 1990.
- 5 Para un análisis del "Consenso del Washington" en su formulación original ver Williamson (1990). Para un análisis crítico de esta estrategia, puede consultarse Minsburg (2004).
- 6 Para una discusión más amplia puede consultarse Jaime Estay Reyno (2005).
- 7 Con relación a esta discusión, ver Vidal (2006).
- 8 Base Structure Report, 1999, 2005, 2007, Secretaría de Defensa, en <http://www.dod.mil/pubs/basestructure1999.pdf>; http://www.defenselink.mil/pubs/20050527_2005BSR.pdf; http://www.defenselink.mil/pubs/BSR_2007_Baseline.pdf.
- 9 Base Structure Report, 1999, 2005, 2007.
- 10 Venezuela está entre los primeros cuatro proveedores de petróleo de Estados Unidos, después de Arabia Saudita, Canadá y antes de México. Ver Michael T. Klare (2005: 221).
- 11 Para colocar en perspectiva la problemática del petróleo en Venezuela es importante revisar el conjunto de aportes que se encuentra en el trabajo coordinado por Luis E. Lander (2003).

Análisis de casos



Entrevista a Jorge Eduardo Rulli:
"El modelo sojero da una agricultura
sin campesinos y contra los campesinos"
Claudia Korol y Guillermo Almeyra

Entrevista a Jorge Eduardo Rulli

Coordinador del Grupo de Reflexión Rural, Argentina

«El modelo sojero da una agricultura sin campesinos y contra los campesinos»

Claudia Korol

Guillermo Almeyra

Palabras clave

Soja; Ecología; Pequeños Productores; Transgénicos; Universidad.

Keywords

Soya; Ecology; Small Peasants; Transgenics; University.

Cómo citar esta entrevista

Korol, Claudia y Almeyra, Guillermo 2008 "Entrevista a Jorge Eduardo Rulli, coordinador del Grupo de Reflexión Rural, Argentina: 'El modelo sojero da una agricultura sin campesinos y contra los campesinos'" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

Jorge Eduardo Rulli nació en 1939 en Buenos Aires, de padres obreros y artesanos. Por su resistencia a las dictaduras que se sucedieron en la Argentina desde 1955 hasta 1983 estuvo preso durante muchos años en la cárcel de Viedma, en la Patagonia, fue torturado y debió exiliarse. Ecologista y pionero en la lucha contra los transgénicos es un promotor incansable de la soberanía alimentaria y del desarrollo local como base de la ruptura de la Argentina con su dependencia de las grandes empresas transnacionales. Vive con su esposa y sus seis hijos en una pequeña granja ecológica cercana a Buenos Aires y es el principal referente del Grupo de Reflexión

Rural (GRR) que extiende su acción a Brasil y Paraguay, en donde colabora con los respectivos movimientos campesinos y ecologistas. Ha publicado *Diálogos en el exilio*, junto a Envar el Kadri en los años ochenta, *Estados en construcción y Estado de gracia*, con Ignacio Lewkowicz y el Grupo de Reflexión Rural y, últimamente, bajo el título de *El libro de los editoriales. Globalización y resistencia* (Buenos Aires: Corregidor, 2008), la recolección de sus importantes editoriales dominicales en Radio Nacional.

La entrevista es al inicio del largo paro rural de más de 20 días dirigido por las transnacionales sojeras en protesta contra las llamadas retenciones a la exportación de soja (en realidad, un impuesto a los exportadores) pero habíamos decidido pedirle su opinión respecto a la situación de los campesinos en la Argentina y al peso de las transnacionales precisamente porque era visible que la disputa de éstas con el gobierno en torno a la distribución de la riqueza producida por el sector rural iba a conducir a un duro choque político. Su análisis sobre el fondo del problema arroja luz sobre el conflicto que estalló en abril y que continuará durante meses y, al mismo tiempo, plantea, en nombre de los pequeños campesinos, algunas vías a más largo plazo para escapar de la dependencia de las transnacionales y de los *pools* de siembra, que agotan la tierra.

¿Cómo te presentarías?

En los últimos cuatro años, he descubierto el ser comunicador social. Con algunos amigos, he tratado de combinar la ecología con los desafíos antiglobalización, aprovechando la experiencia de grupos de jóvenes, en especial de Europa y también de Canadá, con los cuales nos hemos vinculado.

Hemos explorado una serie de nuevos activismos muy interesantes, porque abren a una conciencia más planetaria, al descubrimiento de nuevas formas de innovación, de creatividad y, sobre todo, del cambio social. En este camino, hace mucho que venimos hablando del tema de la soja, en el sentido de que la soja es parte de un sistema global, de un sistema planetario, que implica la apropiación de las sociedades y las cadenas productivas y comerciales por los agronegocios, con una idea de que el campo es el *agro-bussines*, y a partir de ahí se pierde la posibilidad del arraigo, la sacralidad y los fundamentos de las diversas culturas con la tierra.

En la Argentina, debido en buena medida a las crisis políticas que nosotros arrastrábamos desde los años '70 y luego a la dictadura militar, el genocidio y sus consecuencias y también a la enorme

deuda externa, parece que fue bastante fácil a los agronegocios imponer un nuevo modelo, que implica la producción de *commodities* en el campo, reemplazar la calidad por la cantidad, plantear como un tema prioritario la disminución de costos, establecer cadenas agroalimentarias que procesen e industrialicen los alimentos, establecer mercados centrales y, sobre todo, cadenas oligopólicas, como las de la leche, e impedir las ferias locales y todos los procesos que relacionan a los pequeños productores con su público consumidor, al estilo de lo que hemos aprendido en otros países, sobre todo en el sur de Brasil, donde las ferias de pequeños productores son normales. Esto, en Argentina, no solamente no existe sino que también este tipo de iniciativas ha sido perseguida.

La instalación de los agronegocios corresponde a una etapa en la cual los gobiernos democráticos buscan divisas para pagar la deuda, pagar los intereses, y se va instalando la soja gradualmente, en particular a partir de que la soja transgénica (RR), acompañada de un herbicida de Monsanto, el herbicida Roundup, descubre que se complementa con la siembra directa, una antigua práctica ecológica, y estos tres elementos juntos pueden provocar un salto en la producción porque facilitan las labranzas, el control de las malezas, y evitan el tener mano de obra por parte del productor.

¿Qué efectos tiene sobre el campo la visión predominantemente urbana de políticos y gobernantes?

En los años 1996-1997 se inicia un proceso, que se podía anticipar que se iba a profundizar e iba a adquirir las escalas monstruosas que tiene ahora. Pero la dirigencia política argentina no lo supo ver, porque hay una mirada urbana imperante en la Argentina, muy excluyente de otras dimensiones.

Éste es un mal argentino. Sentimos que se vive sobre el asfalto, cultivando el tango, la nostalgia y los sentimientos propios de la ciudad. Nos hemos puesto de espaldas al campo, y el campo nos ha condicionado, y nos ha cambiado la vida totalmente.

En este momento, el país está casi paralizado por la insurgencia de unos productores, que son los beneficiarios de este modelo, pero que lo que quieren es participar de las decisiones sobre su modo de producir.

Lo que vemos es que realmente ha habido un cierto abuso por parte del gobierno que siente que los sojeros son la vaca lechera de un país parasitario.

¿Cómo comenzó a imponerse el modelo sojero y el agronegocio?

Durante más de diez años la soja comienza a extenderse, surgen unas empresas que se llaman *pools* de siembra, que son gerenciadoras, que van a aprovechar las prácticas de comprar en los grandes mercados, de disponer de maquinarias de siembra directa, que a veces costaban 200.000 dólares o más, y que también podían disponer de equipos técnicos altamente profesionales para moverlos de un lado a otro. Estas empresas lo que hacen es arrendar grandes cantidades de campos, a veces de a dos, tres o cinco cada uno de 500 hectáreas, hasta redondear cifras de 5.000 o 10.000 hectáreas. En este caso, entonces, lanzan el proceso productivo de soja pero con una gran disminución de costos, que dificulta mucho que los restantes productores puedan competir con ellos.

Se fue imponiendo esta idea del *pool* de siembra, y surgieron voces lúcidas como la de Gustavo Grobocopatel, el "rey de la soja", presidente del grupo Los Grobo, que planteaba que él era un "sin tierra" en Argentina, porque más que tener tierras él las arrendaba. Es interesante la lucidez de los que abrieron el camino de los agronegocios.

Casi todos vienen de la izquierda, gente muy lúcida. Grobocopatel fue director de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires durante ocho años. Ellos han moldeado ahí una generación de agrónomos, y han cumplido a rajatabla un plan que tenían, que fue concebido con Huergo, con Vilela, con Héctor Ordóñez, que fue el profesor de la cátedra de Agronegocios de la UBA, con Burachik, de la CONABIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología de Agronomía, de la Secretaría de Agricultura, con Esteban Hopp, que fue el director de Biotecnología del INTA, además de profesor en Ciencias Exactas. Ellos prácticamente se adueñaron de la Facultad de Ciencias Exactas, la convirtieron en un coto personal.

Todo esto es un proceso que se fue dando a lo largo de los últimos diez años, donde se instalaron muy fuertemente como orgánicos de un proyecto que el gobierno nunca tuvo en claro. Me llamaba la atención cómo muchos sectores de izquierda seguían hablando de la reforma agraria cuando en realidad estos empresarios no trepidaban en decir que el problema no era la propiedad de la tierra sino su tenencia para el uso. No necesitaban comprar tierras, porque el negocio estaba en arrendarlas. Esto últimamente lo ha reconocido la Federación Agraria Argentina (FAA), que representa a los pequeños productores, por medio de su abogado estrella, el doctor Casella, ex juez y abogado muy importante de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, que plantea esto justamente, que el tema de la propiedad de la tierra ha sido reemplazado por el de su uso.

Hoy estos *pools* de siembra han ido creciendo en agresividad, porque están recibiendo la influencia y el apoyo de los fondos de inversión. A partir de la llegada de los fondos de inversión a la Argentina, que vienen generalmente de Europa, aunque hay fondos de inversión también de Brasil, la situación cambia radicalmente porque empiezan no sólo a arrendar campos sino a comprar estancias en grandes cantidades.

«Los dueños de estas compras muchas veces ni siquiera vienen al país, y lo que hacen es manejar equipos que asumen la titularidad de estos campos mediante la demolición de los antiguos cascos. El primer gesto es la demolición de los antiguos cascos y el levantamiento de los antiguos montes»

Los dueños de estas compras muchas veces ni siquiera vienen al país, y lo que hacen es manejar equipos que asumen la titularidad de estos campos mediante la demolición de los antiguos cascos. El primer gesto es la demolición de los antiguos cascos y el levantamiento de los antiguos montes. Es una señal muy firme de que el campo no es un lugar para vivir porque el lugar donde se vive es en las ciudades, y de que no les importa el valor de los antiguos cascos levantados alguna vez por la oligarquía. Para ellos, dichos cascos reducen la tierra en la que pueden

sembrar *commodities*. Nada más. Por ejemplo, el monte de los padres de Atahualpa Yupanqui no existe más. La casa es apenas una ruina, sin techo, porque quitar el techo es una de las primeras medidas que toman para que nadie las ocupe. Las ruinas están en medio de un sojal. Esto es grave porque nunca más va a nacer un Atahualpa Yupanqui. O sea que no estamos hablando solamente de un problema económico, sino también de un problema cultural. Porque la cultura en Argentina, como en cualquier otro lugar, proviene de la cultura rural. Cuando la cultura rural muere, la cultura urbana tiene patas cortas. Nos han cortado las raíces. Gustavo Grobocopatel es uno de los folkloristas más importantes. Tiene un equipo, pone mucho dinero para apropiarse de lo que queda del folklore, pero éste es un folklore fantasma, porque es un folklore que pertenece a una realidad que ya no existe, que él mismo destruyó.

El agronegocio, ¿cómo se integra en la economía mundial actual?

Lo que nosotros hemos ido viendo de este proceso que avanza a pasos agigantados es que, al principio, la soja era forraje para Europa y para China, pero rápidamente se instala el tema de la crisis energética, que no sabemos hasta dónde es verdadera. Lo que es cierto es que los pozos pasaron su cenit, están produciendo menos que antes.

O sea que es mentira que el petróleo se haya terminado o vaya a terminar en corto plazo. Lo que va a haber por delante es un encarecimiento del petróleo, que afecta a esta sociedad, la sociedad del petróleo, que nace de la derrota de Hitler, que había apostado a la hulla. En realidad, la Segunda Guerra Mundial es una guerra entre el petróleo y las antiguas economías. Todo lo que nos rodea está hecho en base al petróleo, a veces hasta la ropa, los muebles, los utensilios, los teléfonos.

La carestía creciente del petróleo, y quizás otras razones que voy a mencionar después, llevó a las grandes corporaciones a comenzar a hablar de nuevos combustibles surgidos de la agricultura. Concretamente, Europa ya hace un corte del 10% para el año 2010. Argentina igual. Lo que les asegura a los productores de agrocombustibles una clientela cautiva.

¿De qué se trata esto? De poner una parte de la agricultura del mundo al servicio de la producción de combustibles para alimentar los automóviles. Esto va en desmedro de los alimentos, más allá que ellos lo nieguen. De hecho, hay un encarecimiento mundial de los alimentos. En el Grupo de Reflexión Rural lo que hemos analizado es que, más que un problema de energía, para las grandes corporaciones, la producción de agrocombustibles les da en esta época la enorme oportunidad de sentarse y aliarse o llegar a acuerdos con corporaciones que estaban en otros temas. Así se empiezan a combinar de una manera muy llamativa las petroleras con las cerealeras, con los exportadores, con las empresas biotecnológicas, y se va dando una combinación muy extraña, que diría que les permite entrar en una etapa de rediseño del planeta, donde lo que menos importa es el gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de poderes mucho más importantes. Lo que uno ve, tanto en España como en Argentina, donde hay una empresa de combustibles como Repsol, es que, al lado, la misma empresa está construyendo un silo de agrocombustibles, o una planta de biocombustibles. En Argentina, en cada puerto donde hay una cerealera, al lado se está levantando una gran planta de agrocombustibles, por ejemplo, para hacer etanol en base a maíz. Pero además, al lado de la planta de biocombustibles, están

construyendo inmensos corrales de engorde de hacienda, para alimentar con los desechos industriales del biocombustible a estos animales. Entonces, lo que vemos es una integración vertical de los negocios, que está anunciando un futuro corporativo, planetario, integrado, donde ellos pueden trabajar perfectamente con el Partido Comunista de China, donde pueden trabajar con mucha gente que era radical en los años '70 y que ahora vemos reciclada como ejecutivos de sus compañías. Mientras nosotros nos trabajamos en los temas ideológicos, ellos están haciendo negocios globales, que implican la integración de grandes producciones de carnes... Por ejemplo, ahora, se acaban de cerrar convenios con Venezuela, de una empresa argentina que produce 330 mil pollos por día. Esos pollos están alimentados a soja y maíz, que estas corporaciones le compran al productor o al *pool* de siembra, a un precio 40% menor porque le están descontando las retenciones. Sin embargo, utilizan esto para hacer alimento balanceado y después van a vender el pollo con apenas 5, 10 o 20%, a lo sumo, de retenciones. Realmente, el Estado en todos estos años ha permitido un robo y un abuso del campo, en la medida en que han permitido que los exportadores y las corporaciones reemplacen al Estado en el cobro del tributo de exportación ante el productor.

Es bueno recordar el papel del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), cuyo monopolio del comercio exterior permitía que el Estado se quedara con una ganancia importante destinada a educación, industrialización o a otras cosas que hoy quedan en las grandes transnacionales.

¿Qué cambios sociales ha provocado la sojización del campo?

Esto que el gobierno llama retención en realidad no lo es. Porque retención es cuando yo retengo algo y luego te lo devuelvo de alguna manera. Esto es un impuesto a la exportación que, en realidad, quien lo maneja es una de estas transnacionales cuando compra el cereal al productor porque le descuenta ese dinero.

La ley de retenciones es un impuesto a la exportación, no a la producción. Por supuesto que el sojero igual gana, igual compra una 4x4 para cada miembro de la familia, no saben qué hacer con tanta plata, y gastan, como nunca se gastó, en prostitución. Por esto todo el tráfico de niñas y las muertes de prostitutas, la trata de mujeres. Todo

«¿Qué lugar queda para la Argentina en la nueva configuración mundial? Totalmente subordinado, porque nosotros estamos dependiendo de Monsanto por la biotecnología, de Cargill, Dreyfuss y Bunge por las exportaciones, de Repsol por el petróleo»

esto tiene que ver con la soja, con el exceso de dinero en determinadas oportunidades del año, donde los productores necesitan emociones fuertes. Van a buscar el dinero al puerto y tienen que salir a festejar, y hoy en la Argentina se festeja con muchas mujeres. Igual que con los marineros de los barcos. Por eso, ahora, en vez de bajar del barco para los prostíbulos, les llevan el prostíbulo al barco. Estamos hablando de 10.000 barcos por año. No hay lugar para todos los

marineros. La ribera del Paraná se llena de caritas coreanas, chinas, lo que en los barrios marginados ya es común. Todo un ensamble.

De todas maneras, me parece que el gran delito es la ausencia del Estado, que permite que otros operen en el mercado y que los más fuertes instalen su ley. Mientras tanto, todo un sector de gente ligada al gobierno sigue gritando contra la oligarquía vacuna, como el tero que grita donde no están los huevos, porque los

años 1997-1998 fueron los de mayores transferencias de propiedad en la provincia de Buenos Aires en toda su historia. Y lo que pasa, pasa de la vieja oligarquía o del viejo patriciado a las nuevas gerencadoras o administración de las nuevas empresas que van a hacer soja, donde a veces algunas de las viejas familias patricias se integran, pero en un esquema empresarial que no tiene nada que ver con lo que era antes. A lo sumo, algunas de estas familias, por razones emocionales, se quedan con lo que era el casco, y hacen turismo rural, para un nivel de alto poder adquisitivo.

Es cierto que es el mismo nicho, pero ya no es la misma oligarquía. Porque la palabra oligarquía implica que tienen algún tipo de poder. Y estos ganaderos, contra los cuales el gobierno embiste hoy, ni siquiera pueden imponer el precio a los frigoríficos, que en realidad son la cadena de los agronegocios, y que son los que los explotan.

¿Qué consecuencias tiene la expansión de la frontera de la soja para los pequeños productores y los campesinos pobres?

Cuando la soja termina de instalarse en lo que se llama la zona núcleo, la pampa húmeda, empieza a desplazar a los perdedores de esta batalla, a los más pequeños.

Muchos, entonces, dejan de ser ganaderos. ¿Qué hacen con las vacas? Dejan los animales en grandes empresas que los reciben, los engordan.

Hay un reportaje a Grobocopatel, en el que él dice que éste es un sistema perfecto, que no se puede parar, pero que lamentablemente, deja perdedores. Lo que él dice es que el gobierno se tiene que ocupar de los perdedores del modelo de la soja. Dice: tenemos que evitar que caigan en el fundamentalismo, y para eso está el gobierno.

¿Qué lugar queda para la Argentina en la nueva configuración mundial? Totalmente subordinado, porque nosotros estamos dependiendo de Monsanto por la biotecnología, de Cargill, Dreyfuss y Bunge por las exportaciones, de Repsol por el petróleo. Con una dirigencia política que, más allá de sus niveles de corrupción, creo que no entiende esto. Hace mucho que dejó de comprender lo que está pasando.

¿Cómo afecta este modelo al medio ambiente?

Este es un modelo que nos puede anticipar situaciones de catástrofe muy graves. A mí una de las cosas que más me ha impactado es el relato de un profesor de la Facultad de Agronomía en el sur de Santa Fe, que lleva a sus alumnos al campo un día que llueve y les pregunta si sienten algún olor. Le dicen que no. Les pregunta: ¿No les llama la atención que no hay olor a tierra mojada? Es cierto, hay que experimentarlo. Ya no hay más olor a tierra mojada en la Argentina. ¿Por qué? Porque la vida biológica del suelo está absolutamente deprimida. No hay más colonias de bacterias. Está, según él, al 20% de lo que es la vida biológica de un suelo.

Gustavo Grobocopatel fue profesor de Suelos en la facultad durante ocho años. Formó ocho camadas. Pero los que lo sucedieron piensan igual que él. El ingeniero agrónomo te dice: "¿qué importa? Si el suelo es un soporte, le ponés fertilizante, fósforo, urea". Pero eso no es cierto. Además podrías hacerlo si fueras EE.UU. Pero este país es Argentina, donde la urea sale también del petróleo, que se supone que se está terminando. Estos son los entrampamientos, que yo no sé cómo los van a resolver. Además, la fumigación es lo que afecta la vida biológica del suelo.

Hay una gran pérdida de fósforo del suelo, que es alarmante. Alguna gente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) venía hablando de esto, pero el gobierno les llamó la atención para que no hablen más. Es una de las formas que tiene el gobierno de evitar lo que viene: callar al mensajero. El ingeniero Casas, que era el experto de suelos del INTA, hace unos años anticipó que no había más de 15 años de suelos para la Argentina, en promedio, considerando que los suelos de Buenos Aires podrían durar 30 años, mientras que el suelo de Chaco ya entró en colapso, se está convirtiendo en arena.

¿Cuál es el peso de la ideología en la sojización?

Hay una deformación del profesional argentino, porque los que pusieron en práctica este modelo del agronegocio, primero construyeron un entramado en las universidades. De ahí partieron.

En Europa, los cuestionamientos más fuertes frente a los riesgos de la biotecnología vienen de las ciencias exactas. Aquí es lo contrario. Aquí donde te permiten hablar es en Sociología, en Filosofía, porque no molestan. Pero en Exactas, quien habla de esto se tiene que ir. Los han ido expulsando de la Facultad, hasta instalar una línea tecnofundamentalista. En realidad, no son científicos. Y hay un sector progresista, que viene de los años '70, que sigue reverenciando estas prácticas tecnológicas. Que les fascina la gran escala. Nosotros hemos discutido esto también con gente de Venezuela. En algún momento Chávez se ha hecho una autocrítica, pero vuelve a caer. Con una empresa que produce 300 mil pollos por día, no se puede resistir. Porque es la idea de que hay que darle de comer al pueblo. Y si vos querés dar a la gente de comer, no importa si sos marxista o sos de Cáritas. Estás tratando a la gente como niños. A la gente no hay que darle de comer, hay que dejar que coma. Y hay que ayudar a crear situaciones para que pueda comer. Además están dando de comer comida chatarra, que no es la comida sana que comían nuestros abuelos. Están dando soja, que ha sido la causa del despoblamiento del campo, y del desempleo rural, de esta gente que ahora vive en villas o en zonas de tugurización de la ciudad globalizada, le están dando soja transgénica que provoca daños.

Ya en el año 2004-2005 aquí hubo reuniones gubernamentales, donde fueron todos los directores del Estado, de proyectos alimentarios, estuvimos reunidos dos días –yo en ese momento estaba en un cargo importante en la Secretaría de Agricultura de la Nación– y fue unánime la opinión de que la soja no podía darse como comida para niños, y estaba absolutamente prohibido para niños de menos de dos años, sin

embargo, esto nunca se cumplió. Se sigue dando soja en los comedores infantiles con las consecuencias de adelantamiento de la madurez en las niñas, formas femeninas en los niños, que suelen generar mamas, osteoporosis en los jóvenes, que antes era una enfermedad de los ancianos y ahora se instala en los jóvenes. Cuando entramos en el modelo del agronegocio, comemos comida basura.

Aquí también entra el supermercado en la cadena del agronegocio.

Claro, porque son cadenas agroalimentarias. Una empresa lo mismo puede embotellar jugos de fruta que hacer preservativos, porque le ponen el mismo sabor a fruta, es increíble. La única manera de comprar es la góndola, porque el pequeño comerciante va desapareciendo. Y no hay con quién hablar acerca de las cosas que uno compra. En la Argentina, quizás por la lejanía de las zonas de producción, porque las ciudades son inmensas, no hay mucho contacto con el campo. En Europa se han fomentado las redes que aseguran compras colectivas al campesino. Eso aquí se da muy poco, y la mayor parte de la gente está absolutamente inerte en una sociedad que no alcanzan a comprender.

Con un discurso antiguo. Los discursos políticos en la Argentina se han quedado 20 años atrás.

¿Cuáles políticas públicas podrían contrarrestar esta tendencia?

El gobierno aplica el mismo rasero a pequeños y grandes productores, a los campos buenos y a los campos malos, a los que están lejos o cerca del puerto.

Es una gran injusticia. Lo que se ha logrado es juntar a las víctimas con los victimarios dentro del campo. En lugar de buscar discriminar el frente rural, lo que ha conseguido es juntarlos a todos. Esto es una bomba de tiempo que no sé cómo la van a desactivar. Si el gobierno retrocede con las retenciones se va a crear el frente de la pobreza urbana, que está mantenido con ese dinero.

La propuesta debería ser dominar el mercado de exportación. Volver a una especie de IAPI, o una presencia del Estado; y, por otro lado, algún tipo de regulación del modelo del campo, que va a ser difícil si el campo gana esta batalla. Yo veo muy difícil el futuro.

Una solución parcial, que yo le decía a los intendentes, sería que se recupere desde el catastro la zona de chacras y quintas que los

españoles habían establecido en cada ciudad, que ahora están ocupadas por la soja. Y que se establezca que en esa zona no van a hacerse cultivos industriales, para que la fumigación no llegue a los vecinos. Y que tiene que producir comida para el pueblo. Viveros, cría de animales, producción de alimentos para el pueblo. Se establece una feria en el pueblo, y produce alimentos para el pueblo. Y en la zona de límite con la soja, hacer una triple cortina forestal. Pero esto se logró en pocos lugares. Esto debería ser una política nacional: situación verde en todas las ciudades. No cambiás el modelo, pero avanzás.

¿Es posible subsidiar a los pequeños agricultores o eso es una herejía?

Con el dinero de la soja, el gobierno, además de alimentar pobres, ¿no podría instalar un precio sostén?

En la Argentina siempre hubo precio sostén, no lo inventó Perón. Los gobiernos conservadores también tenían precio sostén. ¿Quién lo sacó? Menem. ¿Por qué lo sacó? Porque instaló la doctrina de los libre mercados. Por eso, el problema de la Argentina no es el Fondo Monetario Internacional (FMI). El problema de la Argentina es la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La Argentina está contra los subsidios que Europa le paga a sus propios productos. Y por lo tanto, para poder mantener ese discurso contra los subsidios, nosotros tampoco queremos subsidiar en el campo interno. Éste es el padrenuestro de este gobierno. En cualquier foro del mundo, cuando alguien habla de subsidios, cualquier persona de Cancillería tiene que hablar en contra.

Entonces, nos quedamos sin lino, cuando con un subsidio podríamos tenerlo.

Y de todas maneras se subsidia con el suelo, con las enfermedades que provocan los tóxicos de la agricultura. Es un problema de doctrina.

Cuando entrás a analizar estas cosas, ves la perversión de este modelo. Se habla mucho de derechos humanos, y en el fondo es de una sumisión a las nuevas prácticas globales tremendas. La Argentina ha sido el país que más peleó a favor de las corporaciones biotecnológicas en un encuentro donde se aprobó el protocolo de Cartagena, de Bioseguridad, en Montreal, Canadá. A último momento, en la negociación del protocolo que aprueba la ONU, se cambió "principio precautorio" por "enfoque precautorio". Argentina luego arguye que el enfoque precautorio incluye, además de los principios precautorios, los criterios que aquí son vigentes de "equiva-

lencia sustancial". Es un obsoleto criterio de la época que a ellos les permite decir que una soja transgénica es equivalente a una soja cualquiera. Un criterio que se establece en muy pocos países. En la Argentina, el principio precautorio, en la práctica, no se cumple, y tiene que ver con los tóxicos de la agricultura. Este criterio no permite ver sus consecuencias en el tiempo.

Lo malo es que nosotros tenemos una regla que es antigua, que no sirve para esto. Pasan los gobiernos de la democracia, y esto no cambia, porque responden a un esquema profundo, que es el esquema de supeditación a la formación ideológica de los técnicos y los universitarios. Es un conflicto de clases en el que nosotros hemos perdido. Hemos perdido a los sectores medios. Como también perdimos esa batalla con la Sociedad Rural. Estamos perdiendo batallas ideológicas. En la Universidad, en varios lugares.

¿Cuál es el peso de los sojeros en Brasil y en Bolivia?

En Brasil son muy importantes. La soja entra de contrabando desde Argentina. La Argentina va a ser el portaaviones de Monsanto. Cuando Rio Grande do Sul se declara "territorio libre de transgénicos", ellos empiezan a entrar soja de forma clandestina. Estamos hablando de caravanas de camiones, que la gendarmería no podía dejar de ver. Huergo escribía de esto en *Clarín Rural*, diciendo que todo el mundo en Brasil sembraba la "soja Maradona". Lo cierto es que tienen una gran cantidad de tierras sembrada con soja.

Lula ganó las elecciones, pero llega ya con el brazo torcido. Hizo una excepción a la ley, y Brasil tuvo finalmente que aceptar la soja transgénica. Esa fue la estrategia de los gerentes de Monsanto.

Paraguay es la zona más en carne viva de América del Sur, porque ahí el sojero está representado abiertamente por el sojero brasileño. Incluso hay intendentes brasileños, tipos con cinco años de radicación. Es una pérdida de territorio soberano para Paraguay. Pero además, el paraguay es un campesino que cultiva cosas diversas, pero el 99% de los sojeros son brasileños. El enfrentamiento es muy fuerte. No hay grandes latifundios, entonces hacen soja de retazos entre poblaciones campesinas o indígenas. Los impactos de las fumigaciones son terribles. Antes que empiece la siembra, la gente mata todas sus gallinas y se las come, porque sabe que después no van a poder tener. Hay épocas en que de noche se escuchan caer de los árboles las gallinas muertas. Dos, tres gallinas por noche. Van muriendo lentamente. Por eso la situación en Paraguay es desesperada. El Ejército interviene a favor de los sojeros y pone tropas para que la gente no detenga las siembras.

En el caso de Bolivia, en Santa Cruz, la soja entró por Argentina. De sojeros de Córdoba que entraban directamente con sus aviones, e ingresaban allá donde tenían socios locales. Ellos llevan la semilla, la tecnología. Creo que la soja está en la base de la secesión de Santa Cruz. De todas maneras, también hay soja minifundiaria.

Éste es uno de los problemas. La soja es un cultivo a escala que tiende a una agricultura sin agricultores. Esto discutimos con la Federación Agraria. No se puede revertir esto. En un mar de soja no se puede vivir en el campo. Aquí hay una política para que esto no pueda volver atrás. Que si cambia el gobierno no se pueda volver atrás fácilmente. La migración de fauna del campo es tan grande como la de población. Esa fauna lleva su propio mundo bacteriano a las ciudades. Por eso están apareciendo nuevas enfermedades, e incluso muertes de personas, por causas no aclaradas. Porque tampoco hay dinero para que las universidades investiguen estas cosas.

Algunos datos elocuentes

Comparando el Censo Nacional de 2002 con el anterior de 1998, el número de pequeños productores del campo ha disminuido en casi 100 mil unidades (según dicho censo ascienden a 317.866, cifra que muy probablemente se ha reducido en los últimos años).

Sobre 170 millones de hectáreas cultivadas, según la Federación Agraria Argentina, organización de dichos pequeños productores, 74,3 millones están en manos de 4.000 grandes productores. En la pampa húmeda (la zona con mejores tierras) 4,11 millones de hectáreas están en manos de 116 propietarios. En escala nacional, el 69% de los productores posee menos de 200 hectáreas y tiene el 7% de la tierra contra el 78% de la misma que está en manos de los dueños de 1.000 o más hectáreas, sector que representa sólo el 10% de los propietarios.

Experiencias de los movimientos sociales



Las luchas indias, sus intelectuales
y la Universidad Intercultural de
los Pueblos del Sur (México)

José Joaquín Flores Félix y
Alfredo Méndez Bahena

I Concurso Latinoamericano
de Documentales Otras Miradas
Programa de Comunicación Audiovisual
CLACSO

Documento
Dictamen del Jurado

Las luchas indias, sus intelectuales y la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (México)

José Joaquín Flores Félix*

Alfredo Méndez Bahena**

* Doctor en Antropología por el CIESAS, México. Profesor investigador, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Docente en el Posgrado en Desarrollo Rural, UAM, Unidad Xochimilco. Miembro del Colegio Académico de la UNISUR.

** Maestro en Ciencias Biológicas por la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México. Subdirector de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la UAG, Guerrero, México. Profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Ciencias Químico Biológicas. Miembro del Colegio Académico de la UNISUR.

Resumen

En el presente artículo se narra el proceso de gestación y creación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, UNISUR, que nace como resultado de la necesidad de los pueblos originarios asentados en el estado de Guerrero, México, de formar sus propios intelectuales para poder generar y controlar sus propios procesos de desarrollo local. El marco conceptual desde el que se formula la UNISUR es un diálogo intercultural que conduzca a espacios de creación y recreación de las culturas y visiones de mundo, en la perspectiva de abrir horizontes de descolonización. La UNISUR es el resultado de la confluencia de diversos procesos y luchas sociales que los pueblos nahua, mixteco, tlapaneco, amuzgo y afromexicano han dado por el reconocimiento de sus derechos y por gestionar de manera autónoma sus proyectos de futuro.

Abstract

The present article narrates the process of gestation and creation of the Intercultural University of the Southern People, IUSP, which was born as a result of originary people necessity to form their own intellectuals, to be able to generate and control their own process of local development. Those people are settled at the Guerrero state, Mexico. The conceptual framework from where the IUSP is formulated is an intercultural dialogue to lead to spaces of creation and recreation of cultures and world's visions, in perspective to open horizons of decolonization. The IUSP is the result of the confluence of diverse processes and social struggles that Nahua, Mixteco, Tlapaneco, Amuzgo and Afromexican people have given for their rights recognition and to arrange, in an autonomous way, their projects for the future.

Palabras clave

Intercultural; Pueblos Originarios; Intelectuales; Colonialidad.

Keywords

Intercultural; Original Peoples; Intellectuals; Colonialistic Approach.

Cómo citar este artículo

Flores Félix, José Joaquín y Méndez Bahena, Alfredo 2008 "Las luchas indias, sus intelectuales y la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (México)" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

En el estado de Guerrero, México, entidad a la que, por su ubicación, se la reconoce como el sur, a lo largo de la última década del siglo XX y de los años que van del presente siglo los pueblos indios originarios de la entidad han dado diversas luchas por el reconocimiento de sus derechos como Pueblos Originarios. Una de ellas es la que reseña el presente artículo y se refiere a la creación de una institución de educación superior para los cuatro pueblos originarios y los pueblos afromexicanos que habitan en la entidad.

La Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, UNISUR, es el resultado de un proceso de convergencias y luchas sociales protagonizadas por las comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Guerrero. A lo largo de las movilizaciones sociales que dichas comunidades han realizado por el derecho al reconocimiento como sujetos por el Estado mexicano, también han aflorado otras necesidades como las que se narran a continuación y que tienen que ver con la premura que tienen los pueblos originarios por formar sus propios intelectuales. A su vez, se perfila otra dimensión de la lucha social y es la que tiene que ver con el reconoci-

miento de la veracidad y objetividad de sus formas de pensar y de actuar; es decir, es una lucha por el reconocimiento de sus culturas como visiones del mundo capaces de dar explicaciones y soluciones a las necesidades de vida y de desarrollo de sus miembros.

El contexto

El estado de Guerrero, México, es un espacio pluriétnico y multicultural donde habitan los pueblos Naua (Nahua), Me'phaa (tlapaneco), Nu Savi (mixteco) y Na'mncue No'mndaa (amuzgo) que conviven con un número considerable de comunidades afromexicanas ubicadas en las costas del estado (principalmente en la región conocida como Costa Chica). Además, la entidad está habitada mayoritariamente por una importante cantidad de población mestiza. Adicionalmente a los cuatro pueblos indígenas mencionados que conviven en el estado, moran hablantes de 26 lenguas indígenas distintas que han migrado hacia el estado de Guerrero. La población indígena estatal asciende al 13,75%, y representa el 5,7% de la población total del país. El grupo nahua abarca el 40% de los indígenas guerrerenses y es el grupo indígena más numeroso del estado; lo siguen los mixtecos, con el 28%; los tlapanecos, con el 22%; los amuzgos, con el 9% y, por último, miembros de otros grupos indios que representan sólo el 1% de la población indígena total.

Las condiciones de vida de estos grupos socioculturales se caracterizan por las enormes desigualdades sociales y económicas, resultantes, en gran medida, de las políticas públicas dominadas por gobiernos sometidos por el caciquismo y el caudillismo, así como de formas de pensar el desarrollo que han excluido a los pueblos originarios.

El estado de Guerrero se ubica en los indicadores de bienestar al lado de los estados más marginados del país, sólo por encima de Chiapas y Oaxaca. Tiene un enorme rezago en servicios básicos, agua potable, luz, drenaje, vivienda, etcétera. Asimismo, presenta las peores condiciones sanitarias, educativas y de comunicaciones, entre otras.

La administración pública de la entidad se obstina en diseñar una estrategia de desarrollo acorde a los lineamientos del gobierno federal que privilegia las relaciones de mercado en detrimento de la producción campesina local, priorizando e impulsando una dinámica económica dependiente del sector de servicios, principalmente de la actividad turística, y dejando a las economías locales de las comunidades al amparo de los fondos de contención de la pobreza. Por lo anterior, priva la imagen de que el estado de Guerrero es sólo sus playas y centros turísticos: un Guerrero donde sus pueblos originarios no son visibles más que como cosa curiosa y como sirvientes.

La agricultura es una actividad esencial en la vida de las comunidades en la que se destacan el cultivo del maíz, el frijol y el chile. Se trata, sin embargo, de una actividad temporal y en condiciones precarias por el alto proceso de erosión de las tierras y el abandono de las políticas de apoyo, por lo que se ha convertido en una actividad de autosubsistencia o complementaria. Otros productos como el café, la copra, la miel y la jamaica, entre otros, están destinados a la exportación pero atraviesan una grave crisis. No se ha sabido aprovechar los minerales adecuadamente para el beneficio de las comunidades y se ha optado por entregarlos a las empresas extranjeras, lo que ha ocasionado luchas sociales por parte de los miembros de las comunidades donde se han asentado las empresas extractoras.

El descuido del sector primario, conformado principalmente por pequeños agricultores que son poco competitivos para el mercado global, ha dejado como resultado una honda crisis en el agro guerrerense, con un continuo proceso de marginación en el campesinado, compuesto principalmente por los miembros de los pueblos originarios. Esta situación los ha conducido a recrear estrategias de supervivencia como la migración hacia los campos de cultivo agroindustrial del norte del país para emplearse como jornaleros, el uso no sustentable de los recursos naturales, la explotación del trabajo infantil y la producción de cultivos ilícitos. Además, dicha situación ha provocado un éxodo continuo hacia los Estados Unidos en busca del “sueño americano”.

Aquello que se conoce hoy día como los territorios de los pueblos indígenas de Guerrero, en sus distintas configuraciones y delimitaciones (Montaña y Costa Chica), es el resultado de procesos sociales locales de largo alcance en el tiempo que marcan una continuidad histórica.

Los espacios fundantes son espacios étnicos elaborados por los pueblos originarios a lo largo de su permanencia en la región. Los pueblos se formaron con las sucesivas migraciones que poblaron la región, la Conquista y el período colonial, las luchas por la independencia y la construcción de los municipios junto con la creación misma de la entidad dentro de la Federación, hasta las luchas recientes por los derechos de diversidad y el poder local.

El atraso educativo en todos los niveles en la entidad es uno de los más altos del país y contiene un alto porcentaje de analfabetismo, rezago educativo y escasa eficiencia terminal. Veamos lo que dice el diagnóstico que dio origen a la UNISUR: “el 21% de la población de 6 a 14 años no sabe leer ni escribir; aproximadamente el 22% de la población de 15 años y más es analfabeta, cuando la media nacional es de 12% y 9,5% respectivamente. Estos porcentajes aplicados a los municipios con población predominantemente indígena llegan a alcanzar hasta el 60% o

«Con respecto al grado promedio de escolaridad, es de 6,1 años para el Estado pero, nuevamente, en los municipios con población indígena, se reduce hasta un 3,0 de promedio en grados de escolaridad»

más. Con respecto al grado promedio de escolaridad, es de 6,1 años para el Estado pero, nuevamente, en los municipios con población indígena, se reduce hasta un 3,0 de promedio en grados de escolaridad. Por otro lado, entre la población de 12 años y más, el 60% no tiene instrucción posprimaria y solamente el 19% tiene instrucción media superior y superior. Como se puede observar, el rezago educativo se empieza a hacer presente en la población de 15 a 19 años, pero

es más notorio a partir de los 19 años en adelante, edad promedio para ingresar al nivel superior. Esto puede tener varias explicaciones, entre ellas, la pobre cobertura del nivel superior en el estado que obliga a la población a desplazarse de sus lugares de origen, lo cual eleva el costo de los estudios que pocas familias pueden sufragar; la falta de diversificación de carreras, que hace

que las que se imparten estén sobrepobladas, o dejen de ser de interés para la juventud por la sobrepoblación de profesionistas; pero también la raquítica economía del estado hace que esta población se incorpore, a esta edad, al mercado de trabajo o emigre¹.

En el estado de Guerrero la oferta de educación superior a nivel de licenciatura tanto pública como privada se reduce a una universidad pública (la Autónoma de Guerrero) y a un gran número de escuelas privadas que han proliferado al amparo de las políticas neoliberales que impulsan la privatización de la educación. Estas instituciones educativas están ubicadas en unos cuantos puntos urbanos: las ciudades de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.

Para el resto de la entidad, en particular para la población rural y los territorios de los pueblos originarios, la oferta educativa se reduce a espacios creados para la capacitación laboral de la fuerza de trabajo y no para recreación del conocimiento, como el Instituto Tecnológico de la Montaña con sede en Tlapa, el Instituto Tecnológico Agropecuario con sede

en Ometepec, o instituciones creadas para el sector magisterial como son las subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional ubicadas en Chilapa, Tlapa, Cruz Grande, Ayutla, Ometepec y el Rincón. Esta universidad únicamente ofrece programas de actualización para profesores en servicio, por lo que la oferta se reduce en realidad a los dos institutos antes mencionados. Además, se puede mencionar que el estado de Guerrero es una de las entidades de la federación que menos centros de educación superior y de investigación tiene.

Por todo lo anterior, la visibilidad de los pueblos originarios y de sus territorios no ha sido fácil. Cuando se hace referencia a los pueblos originarios como sujetos, es decir como pueblos indios, pareciera que son un sujeto de reciente aparición porque sus demandas durante mucho tiempo fueron canalizadas por medio del partido político gobernante o se subsumieron en otras formas organizativas que, por la orientación asistencial de las instituciones del Estado nacional, no implicaron que se evidenciara la identidad india, como fue el caso de ser ejidatario, campesino, pobre o demandante de algún servicio municipal. No es que las comunidades hayan permanecido pasivas durante tanto tiempo; al contrario, su vida política como colectividades ha sido intensa.

Lo anterior produjo a la vez una cortina de humo que desdibujó la especificidad del ser indio o afromexicano ante los ojos de una población y un ejército de funcionarios que históricamente sólo se interesaron en lo indio para referirse al pasado o que, cuando se toparon con los indios actuales, los vieron con los ojos del indigenismo de incorporación, o con los de un racismo alimentado por la mestizofilia nacionalista en que se basaba la explicación de la identidad nacional de cuya fuente se nutrieron las ideas de los gobernantes locales.

En este contexto, el surgimiento de un sujeto indio o afromexicano –cuyas características emanan de un proceso organizativo basado en la convergencia de identidades culturales con profundas raíces en la historia, pero además con demandas autonómicas propias de una generación de derechos humanos en donde el reconocimiento de la diversidad de colectividades es el eje de la convivencia en sociedad– viene a poner en cuestionamiento la definición liberal de Estado y de democracia según la cual el ciudadano concurre individualmente a la plaza pública en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, para mostrarnos que la práctica de la democracia puede ser ejercida y entendida desde diversos sentidos.

Como proyecto para su inclusión dentro del Estado, los pueblos originarios del sur ponen énfasis en: una recomposición en el uso y disfrute de los bienes que se encuentran en los territorios donde habitan: tierra, bosques, agua, minerales, entre otros; una recomposición en las re-

laciones políticas, principalmente entre ciudadanos, Estado y partido; una redistribución del poder, donde la relación entre poder local y poder central sea más horizontal; el reconocimiento de otras formas de vida y concepciones sobre el mundo: de otras culturas y de sus criterios de veracidad; la búsqueda de un futuro distinto al escogido por los centros financieros internacionales. Lo anterior ha sido expresado en la demanda de autonomía y autodeterminación territorial, amparada legalmente en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales para países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, que las organizaciones indias han adoptado como su bandera de lucha en el marco normativo de una posible convivencia nacional a futuro.

Antecedentes: las luchas indias y el movimiento magisterial

En la creación de la UNISUR confluyen de manera fundamental dos procesos sociales, que a su vez son fundamentales para entender las luchas de los pueblos originarios del sur por el reconocimiento de sus derechos y por la orientación del Estado hacia una estructura social de carácter plural.

Dichos procesos sociales son, en primer lugar, el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia India, Negra y Popular que se fundó en 1991 y culminó sus actividades una década después; y, en segundo lugar, el movimiento magisterial del estado, en particular de los profesores del sector indígena, que desde inicios de los años ochenta se ha movilizado luchando por sus derechos como sector laboral.

El Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia fue el último de los consejos que se fundaron en el marco de la Campaña Continental 500 Años de Resistencia India, Negra y Popular, que en nuestro país coordinaba el Consejo Mexicano con el mismo nombre. La Campaña fue el resultado de la respuesta que dieron las organizaciones, comunidades y un grupo importante de aliados de los indígenas de América a la idea de conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al continente como un Encuentro de Dos Mundos, olvidándose de la rapiña y la explotación a las que fueron sometidos los pueblos originarios.

El Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia India, Negra y Popular fue el resultado de la confluencia de dos procesos organizativos: el primero tiene su origen en el agotamiento del modelo de organización que se gestó bajo la dirección del proceso autogestivo de la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (UNORCA) que, en el caso de la región Costa Chica y Costa Montaña, se nucleó alrededor del sistema de Abasto Comunitario cuya sede estaba en las instalaciones de la dependencia oficial para procurar el abasto a los sectores populares, la CONASUPO.

El segundo proviene de los movimientos de resistencia de las comunidades indígenas que se habían mantenido latentes sobre la base de una lucha subsumida por el peso de las demandas de carácter campesino y del protagonismo de los partidos políticos, pero que, en casos de extremo peligro (como sucedió con las comunidades del Alta Balsas que iban a desaparecer por la construcción de la Presa San Juan Tetelcingo), emergió como organización materializándose en el Consejo de Pueblos Nahuas del Alta Balsas que logró frenar la construcción de dicho proyecto hidroeléctrico.

De esta manera, la Campaña 500 Años de Resistencia y su secuela de discusiones y movilizaciones en torno a los derechos de los indígenas y su inserción en la Constitución (derechos que fueron difundidos masivamente por el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia) dotaron a los habitantes de las comunidades indígenas en el estado de un discurso y elementos de lucha para la estructuración de un movimiento indio local capaz de poner en el plano de la lucha política los derechos de los indígenas locales. Así, los miembros del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia fueron quienes introdujeron masivamente documentos como el Convenio 169 de la OIT y los Acuerdos de San Andrés, que son la base sobre la que sustenta la argumentación para la procuración de justicia por parte de sus autoridades y dirigencias.

Por su parte, el sector magisterial indígena, que desde años atrás venía luchando por liberarse del control estatal que se ejercía por medio de las direcciones sindicales afines a los intereses de la burocracia gubernamental (charros sindicales, se los llama), a principios de la década de los años ochenta inició un largo proceso de luchas y de resistencia por la democracia sindical, por mejoras en sus condiciones de vida y por mejoras laborales.

Estas movilizaciones lo llevaron a construir diversos instrumentos de acción, como fue el caso de las jornadas que realizaron durante los dos primeros años de la década del ochenta, cuando se insurreccionaron y crearon una instancia de coordinación distinta a la sindical a la que llamaron Consejo Central de Lucha de la Montaña, movimiento que marcó el inicio de una lucha magisterial a nivel nacional y que en lo local planteó el comienzo de una nueva forma de participar al interior de su sindicato, ya que posteriormente se creó la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEG, que desde entonces sería el espacio organizativo de las disidencias magisteriales.

En lo que respecta a sus intereses académicos como sector magisterial indígena, sus acciones se han orientado hacia la discusión y la creación de una política pública que atienda al sector indígena partiendo de sus atributos culturales. Hay que recordar que a nivel nacio-

nal el magisterio indígena ha sido pionero en este tipo de luchas. Por mencionar una, sólo se anotará aquí el papel de la Asociación Nacional de Profesionistas Indígenas, AC, que desde la década de los años sesenta ya insistía en luchar por el reconocimiento de los derechos culturales de los indígenas.

No obstante que en el año 1978 se creó, al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Subsecretaría de Educación Bilingüe y que desde ahí se formalizó la impartición de un modelo educativo bilingüe y bicultural, la crítica del sector se centró en el hecho de que, de todas formas, se seguía colonizando al estudiantado indígena desde criterios integracionistas que diferenciaban la cultura indígena de lo que para el modelo educativo debería ser la cultura a que se accedería para incorporarse a la nación.

«Se seguía colonizando al estudiantado indígena desde criterios integracionistas que diferenciaban la cultura indígena de lo que para el modelo educativo debería ser la cultura»

Por lo que el debate se centró en la forma de impulsar una pedagogía que reconociera la diversidad de matrices culturales y la multiplicidad de contextos en que se realiza. En esta trama los profesores indígenas inician la búsqueda de la transformación de sus instituciones de formación, como son las Escuelas Normales, para la adopción de un modelo pedagógico intercultural.

Por su parte, el sector indígena y afroamericano que ya estaba movilizado experimentaba una renovación de sus cuadros de dirigencia. En ésta, la característica principal fue que dichos cuadros estaban integrados por jóvenes profesionistas que se incorporaban a las movilizaciones asumiendo la encomienda de ser los intelectuales de sus organizaciones y sus comunidades. Estos jóvenes dirigentes en poco tiempo se dieron cuenta de que era fundamental capacitar a nuevos cuadros de dirección para asumir las tareas de dirección y de gestión de las demandas que abanderaban. Esto los llevó a reflexionar y a proponer al magisterio indígena la necesidad de crear nuevas instituciones para la formación de sus propios intelectuales.

tuales. Así surgió la propuesta de creación de una Universidad Intercultural para los Pueblos Originarios del Sur.

La historia

A partir de lo anterior se sucedieron reuniones, foros y congresos; así como procesos de negociación para elaborar la propuesta y unificar las diversas alternativas que para entonces empezaban a manifestarse. De igual manera, se buscó que el gobierno asumiera la responsabilidad de la institución que se estaba gestando.

Fue así como en el año 1999 se efectuó el Encuentro de Educación Intercultural en la ciudad de Chilapa de Álvarez. Entre las conclusiones del evento se propuso promover la creación de una instancia para formar y ofrecer posgrado a profesores indígenas. En el año 2002 se realizó el Encuentro Nacional de Intercambio de Experiencias Curriculares en Formación de Inicio de Profesores de Educación Indígena, en la ciudad de Acapulco, y es allí donde se propuso crear una universidad indígena.

Hacia el año 2003 existían por lo menos dos proyectos para la creación de una universidad indígena en el estado de Guerrero, por lo cual se sostuvieron algunas reuniones entre los miembros de los equipos promotores, que condujeron a la realización, en octubre de 2003, del Primer Congreso de Educación Intercultural Bilingüe en Guerrero, en la ciudad de Chilapa de Álvarez. Allí se acordó unificar ambos proyectos para crear la UNISUR. A la vez, se efectuaron reuniones con presidentes municipales y diputados locales y federales, con los que se acordó realizar foros regionales.

Posteriormente se efectuaron diversas reuniones, como la de marzo de 2004 en el municipio de Copalillo, a la que se denominó Cuarto Foro para la Creación de la UNISUR. Allí se resolvió formar una Comisión Académica y un Patronato promotor. Se acordó también que, para evitar disputas entre los pueblos, la Comisión elaboraría un estudio técnico para determinar con criterios objetivos la ubicación de la UNISUR.

Más tarde se entregó la petición oficial con el proyecto a diferentes instancias: Presidencia de la República, Secretaría de Educación Pública, secretario particular del gobernador del Estado, y se efectuaron diversas reuniones con las comisiones de Gobierno, Educación y Asuntos Indígenas del Congreso local. Así fue como en abril de 2005 el recientemente nombrado gobernador anunció en su discurso de toma de posesión la creación de la Universidad Intercultural.

Sin embargo, este propósito nunca se llegó a materializar ya que durante el transcurso de la elaboración de la institución afloraron las diferencias entre la propuesta de los pueblos originarios y el modelo que insiste en imponer el gobierno local, que no es otra cosa que la visión

neoliberal de lo que para el gobierno federal son los derechos indios y, en particular, la educación intercultural. De nuevo se desconocieron los derechos indios, la diversidad cultural y la inmensa gama de problemas locales, pero fundamentalmente se desconoció la diversidad de propuestas y alternativas locales para el desarrollo y se intentó imponer un modelo diseñado desde la esfera del poder que serviría tanto para los pueblos originarios del estado de Guerrero como para los pueblos del norte o de otras regiones del país sin considerar las especificidades locales, culturales, de historia o de condiciones ambientales.

En este marco de ruptura y de traición por parte de los funcionarios gubernamentales, el gobierno del Estado impuso en agosto de 2006 la creación de su Universidad Intercultural de acuerdo con el modelo creado por el gobierno federal.

Como respuesta, el 12 y 13 de octubre de ese mismo año se realizó en la ciudad de Chilpancingo el Segundo Congreso Estatal de Educación Intercultural. Allí se ratificó la voluntad de los pueblos de construir su propia Universidad y se ratificó la comisión que se había encargado de elaborar la propuesta, al tiempo que se le asignó la tarea de instrumentalizar la puesta en marcha del proyecto.

Por último, en los días 25 y 26 de mayo de 2007, en la comunidad de Santa Cruz el Rincón, municipio de Malinaltepec (comunidad que se designó como el lugar donde se instalaría la Rectoría de la UNISUR), se realizó el Tercer Congreso de Educación Intercultural. La resolución central consistió en aprobar el inicio de operaciones de la UNISUR para el 12 de octubre siguiente.

Es así como a partir del 12 de octubre de 2007 la UNISUR tiene actividades docentes a nivel de licenciatura en tres de sus cinco sedes que fueron diseñadas para atender a la población escolar de los pueblos originarios del sur del país. Dichas sedes están en Santa Cruz el Rincón, municipio de Malinaltepec, donde se atiende a población tlapaneca y mixteca; Xochistlahuaca, donde asisten estudiantes del pueblo amuzgo, tanto del estado de Guerrero como del estado de Oaxaca; y Cuajinicuilapa, para los estudiantes del pueblo afroamericano de la región de la Costa Chica, que abarca partes de los estados de Guerrero y Oaxaca.

La UNISUR

A la par de los procesos y luchas sociales que han dado como resultado el reconocimiento de las raíces plurales de nuestra nacionalidad como mexicanos, surge desde el interior de los mismos pueblos la necesidad de someter a debate la viabilidad y la instrumentalización de mecanismos que coadyuven en su inserción en la nación con plenos derechos y obligacio-

nes. Estas raíces sustentan la diversidad de culturas y trayectorias históricas de los grupos sociales que conforman la nación, en particular, constituyen los aportes que dieron los pueblos originarios.

Es decir, no basta con que en el capitulado de la Constitución aparezcan redactados los derechos de los indígenas del país, sino que es necesario también que vayan articulándose mecanismos que conduzcan a la creación de instituciones sobre las que se sustente la realización de estos preceptos constitucionales. Lo cual, a su vez, iniciará la transformación de nuestra vida republicana hacia la construcción de un Estado plural, sobre la base de una diversidad social, sin descuidar los criterios de universalidad que lo sustentan.

En este sentido, una de las instituciones que necesariamente se ha dado a la tarea de transformarse para dar cabida al principio de diversidad es la educación, la cual, desde su principio de universalidad, tendrá que aportar nuevas visiones de mundo y soluciones a los problemas sociales y así coadyuvar al bienestar de la población y a la creación de un pensamiento crítico.

Más allá de los atavismos y las inercias que desde el poder se generan para impedir el cambio, la educación, en particular entre los pueblos originarios, tiene la tarea de transformarse para pasar a ser el vehículo que conduzca a la creación de un tipo de ciudadano distinto al actual, cuyos atributos de ciudadanía están ya siendo reconocidos a partir de sus luchas, desde su trayectoria histórica y desde los contextos culturales en que se ha desarrollado.

En este sentido, la educación que se propone por parte de los propios sujetos es una educación que parta del seno de las mismas comunidades para que su matriz sea la misma que la de su cultura: una educación intercultural. Una educación intercultural que, en íntimo diálogo con el pensamiento de otras culturas que componen el pensamiento universal, recoja los aportes de las culturas originarias que se construyeron en el país y sustentaron la reproducción y la continuidad de los pueblos originarios, aun en las condiciones de rechazo y abandono en que se las mantuvo por siglos. Una cultura con una matriz de profundas raíces en el tiempo que a su vez, de manera dialogal, reconozca e incorpore lo mejor de la cultura universal en beneficio de los pueblos y comunidades originarias.

Cabe aclarar que la propuesta de interculturalidad que se gesta desde la UNISUR no desconoce las condiciones de subalternidad en que se construyeron los pueblos originarios desde la Colonia hasta nuestros días. Es más, el proyecto parte de esas condiciones adversas para proponer un diálogo intercultural distinto al que promueve el grupo hegemónico, para el cual la interculturalidad es una relación de culturas y de

buenas voluntades, es decir, una interculturalidad donde no hay intereses ni el ejercicio del poder de un grupo sobre otro, porque le interesa que no se develen los mecanismos de sujeción que producen dicha subalternidad.

Para la UNISUR, la interculturalidad es un proceso relacional atravesado por el ejercicio del poder en donde los sujetos subalternos se deben reconocer como producto de procesos históricos de colonialidad y explotación, para que desde allí partan al encuentro de puntos de convergencia hacia la construcción de nuevos bloques históricos.

De tal forma que, si se quiere que la educación entre los pueblos originarios cumpla coadyuvando al desarrollo y bienestar de las comunidades, sus objetivos estratégicos deben estar centrados en la solución de los problemas particulares de la población y las comunidades; es decir que, en el proceso terminal de la enseñanza, la formación de los educandos que reciben este tipo de educación deberá estar sustentada como proceso de construcción de conocimiento en la realidad misma, ya que los problemas a solucionar serán los propios. Así, en el nivel de educación superior, se hizo necesaria la creación de una universidad que se orientara a crear un tipo nuevo de profesionista destinado a abordar la realidad de las comunidades y los pueblos originarios. Es decir, una institución propia que se orientará a darles formación académica a los intelectuales que emergen desde las comunidades de los pueblos originarios.

En este sentido, su tarea es la formación de intelectuales que sean capaces, desde su propio universo y sustento cultural, de abordar la solución a los problemas propios de sus comunidades y sus sociedades. Por lo anterior, el criterio de ingreso para los estudiantes en el que más hincapié se hizo es el que tiene que ver con la vocación de servicio que se cultiva en las comunidades. De allí que se haya propuesto que cada solicitud de ingreso estuviera avalada por las autoridades comunitarias, municipales o bien de la organización en la que el educando realizaría sus tareas de investigación y de formación en las actividades relacionadas con su vocación profesional.

Asimismo, y dado que el programa académico exige que el estudiante y los profesores estén en contacto directo con la vida cotidiana de la comunidad, ésta se ha abierto a mostrar a los miembros de la UNISUR sus saberes, prácticas, valores, mitos, ritos, normas y un sinnúmero de conocimientos. A su vez, las comunidades han desempeñado un papel importante en el mantenimiento de los estudiantes pues, en la medida en que la UNISUR no cuenta con apoyos económicos por parte del gobierno, los gastos de alimentación y alojamiento corren por cuenta de aquéllas.

Los estudiantes que han ingresado a la UNISUR provienen de las comunidades que se ubican dentro del área de influencia

de cada unidad académica. En este sentido, actualmente se cuenta con un centenar de ellos repartidos de la siguiente manera: 60 estudiantes que provienen de comunidades pertenecientes a los pueblos tlapaneco y amuzgo se encuentran en la Unidad de Santa Cruz el Rincón; 20 en la Unidad de Xochistlahuaca, pertenecientes al pueblo amuzgo; y los 20 restantes, que son miembros del pueblo abromexicano, en la Unidad de Cuajinicuilapa.

En el momento actual, y dado que los recursos económicos son sumamente escasos como para poder convocar la contratación de profesores, la planta docente de la UNISUR está compuesta por profesores que provienen de universidades públicas como la Autónoma de Guerrero, el Instituto Politécnico Nacional, la Autónoma Metropolitana y la Autónoma de la Ciudad de México, que prestan sus servicios de manera voluntaria. Lo anterior no quiere decir por ello que su capacidad y formación sean mediocres; al contrario, la UNISUR cuenta con una planta docente compuesta por profesionistas con grado de maestría y doctorado; de allí que, de los 15 profesores que imparten docencia, solamente dos sean sólo licenciados. Además, como la propuesta es que los pueblos se apropien plenamente de la institución, también está participando un número importante de profesionistas locales, 25 aproximadamente, que se han ido incorporando a las tareas de docencia en un esquema de formación.

Las licenciaturas que se imparten tienen la característica de ser sustentadas por un cuerpo conceptual y de pensamiento cuyo origen es una matriz de pensamiento elaborada desde los pueblos originarios, con su profundidad histórica, visión de mundo y su eficacia producto de la práctica cotidiana y del conocimiento del entorno en que se construye.

Actualmente se trabaja en la elaboración de la currícula y de los planes de estudio de tres de las seis licenciaturas que la UNISUR se propone impartir. Dichas carreras son: Ciencias y tecnologías para el desarrollo sustentable; Gestión de municipios y territorios de los pueblos originarios; y Lengua y cultura de los pueblos originarios. Estas carreras tienen la característica de no abordar sólo las disciplinas tradicionales, sino de ser más bien producto de las necesidades propias de la vida cotidiana de los pueblos originarios. Por lo que cada una de las líneas de formación de los estudiantes se sustenta en las características propias de las regiones y de las comunidades y en la demanda de profesionistas que se aboquen a la tarea de resolver los problemas de bienestar y desarrollo de los pueblos.

Si bien es cierto que el énfasis en la formación de los estudiantes se da en torno al pensamiento originario, también es cierto que se busca un diálogo constante con el pensamiento de otras culturas, cuestionando los motivos que condujeron a la negación de los valores y conocimientos propios por parte de los grupos hegemónicos y la imposición de sus

criterios de veracidad del conocimiento para justificar la colonialidad del ser humano y de su pensamiento.

Una muestra de este proceso de descolonización la podemos encontrar en la forma en que se adoptó el nombre de la institución: las comunidades consultadas reivindicaron el concepto de *Pueblo* como el sujeto colectivo que da forma y esencia a la interculturalidad, pues para ellos la cultura sólo puede ser entendida como una construcción social históricamente

«Las comunidades consultadas reivindicaron el concepto de Pueblo como el sujeto colectivo que da forma y esencia a la interculturalidad, pues para ellos la cultura sólo puede ser entendida como una construcción social históricamente acotada»

mente acotada. Además, la adopción del concepto *Pueblo* está en concordancia con la legislación internacional que nuestro país ha suscrito, en particular el Convenio 169 de la OIT. En este sentido, se aceptó eliminar del nombre el concepto de *Indígena* para plantear una institución capaz de incluir tanto a la población Naua (nahua), Me'phaa (tlapaneca), Nu Savi (mixteca) y Na'mncue No'mndaa (amuzga), así como a la afroamericana, la mestiza y la perteneciente a otros pueblos. Asimismo, la referencia geográfica al *Sur* alude a una definición histórica y cultural que ha dado identidad a los guerrerenses, de manera que es un valor ético que da sentido de pertenencia a los pueblos originarios y también a los no originarios.

La amplia cobertura geográfica que pretende tener la UNISUR, se calcula, será de aproximadamente 22.000 km² del territorio estatal, ya que incluye a más de 50 municipios donde habita la población originaria. Es un contexto de accidentada topografía, escasas vías de comunicación y alta diferenciación cultural entre las regiones, que obliga al diseño de una estructura institucional que sea capaz de responder a las particularidades de la entidad. La UNISUR ha sido diseñada, pues, para operar en cinco diferentes Unidades Académicas (actualmente ya operan tres), ya que se parte del hecho de que existen regiones socioculturales históricamente determinadas por las comunidades y los pueblos originarios

La amplia cobertura geográfica que pretende tener la UNISUR, se calcula, será de aproximadamente 22.000 km² del territorio estatal, ya que incluye a más de 50 municipios donde habita la población originaria. Es un contexto de accidentada topografía, escasas vías de comunicación y alta diferenciación cultural entre las regiones, que obliga al diseño de una estructura institucional que sea capaz de responder a las particularidades de la entidad. La UNISUR ha sido diseñada, pues, para operar en cinco diferentes Unidades Académicas (actualmente ya operan tres), ya que se parte del hecho de que existen regiones socioculturales históricamente determinadas por las comunidades y los pueblos originarios

I Concurso Latinoamericano de Documentales Otras Miradas

Programa de Comunicación Audiovisual
CLACSO

En el marco de su 40° Aniversario CLACSO lanzó, a través del Programa de Comunicación Audiovisual, el I Concurso Latinoamericano de Documentales Otras Miradas. Mediante esta iniciativa se busca intervenir en el universo de la producción documental social y política independiente y, en términos más amplios, en el campo del lenguaje audiovisual, en tanto una de las principales vías de articulación de sentidos culturales, políticos e identitarios de carácter masivo. Desafiando los sentidos hegemónicos, en los intersticios de la industria cultural, son cada vez más los intelectuales y artistas que aprovechan las nuevas y más accesibles tecnologías para construir otros sentidos, a veces desafiando al propio sentido común, y así aportar *otras miradas*. Esta iniciativa intenta precisamente promover este tipo de intervenciones culturales y políticas.

Otras Miradas superó todas las expectativas, resultando uno de los concursos más convocantes en la historia de CLACSO, con la participación de un total de 276 documentales. Luego de la preselección, el Jurado Internacional integrado por Jill Friedberg (EE.UU.-México), Pablo Pacheco López (Cuba) y Afrânio Mendez Catani (Brasil) realizó una intensa tarea que sólo pudo ser llevada adelante en los tiempos pautados merced a la inmensa experiencia y profesionalidad de sus miembros. El Jurado, reunido entre el 10 y el 14 de marzo de 2008, otorgó dos primeros premios y nueve menciones honoríficas.

Películas ganadoras

Hartos Evos aquí hay. Los coccaleros del Chapare, la película publicada junto con el presente número de la revista *OSAL*, fue realizada por Manuel Ruiz Montealegre y Héctor Ulloque Franco en el año 2006. Esta producción colombiana aborda cómo, a partir de la defensa de la hoja de coca, los coccaleros del Chapare han consolidado una sólida organización sindical, en la cual Evo Morales se formó como dirigente político.

Corazón de fábrica, dirigida por Virna Molina y Ernesto Ardito, es una producción argentina realizada en 2008 que refleja el caso de una importante fábrica que logró llevar adelante una gestión obrera durante 4 años. La película será publicada junto con la próxima edición de esta revista.

Menciones honoríficas

Dirigida por Carlos Ruiz y realizada en Argentina en 2007, *Cielo abierto* relata la llegada de la empresa multinacional Barrick Gold a una localidad agrícola y la resistencia de sus pobladores, organizados en asambleas populares, alertados por las consecuencias de este tipo de explotación minera.

Jurua. Hombres de hierro, dirigida por Rodolfo Cesatti y producida en 2007, muestra cómo en Argentina una empresa donó a la Universidad Nacional de La Plata 6.500 hectáreas de monte nativo. En estas tierras vivían tres comunidades indígenas Mbya Guaraní. Es la historia de una lucha donde se enfrentan dos cosmovisiones.

La fuerza de la organización es la historia de la asociación de mujeres afrocolombianas "Vamos mujeres" del corregimiento de Ichó, en el Departamento de Chocó, Colombia, quienes se han convertido en estímulo y ejemplo para su comunidad. Este documental fue dirigido por Pilar Cecilia Mejía y Juan Carlos Orrego en 2007 y producido en Colombia.

Carlos Pronzato dirigió *La rebelión pingüina* en el año 2007. La película narra el surgimiento y la maduración del movimiento de estudiantes secundarios en Chile durante el año 2006, quienes configuraron un proceso original de lucha e inmensa fuerza con más de un millón de estudiantes movilizados en todo el territorio nacional.

Soberanía violada es una producción realizada en Paraguay, dirigida por Malu Vázquez en el año 2007. Muestra el violento avance de los agronego-

cios. Los intereses económicos de terratenientes y multinacionales arrasan con comunidades enteras, obligándolas a abandonar sus tierras, su cultura y a sus compañeros de lucha, perdiendo de esta manera su soberanía.

Tambogrande. Mangos, muerte, minería cuenta la historia de una ola de pioneros que transformó un desierto en un fértil valle de mangos y limones. El esfuerzo de sus vidas fue amenazado cuando se descubrió un yacimiento de oro bajo sus tierras. La película fue dirigida por Ernesto Cabellos Damián y Stephanie Boyd y realizada en Perú en el año 2007.

En una producción conjunta entre Alemania y Colombia, el Colectivo KanalB realizó en 2006 *Territorio pacificado*, a partir de los hechos del 21 de febrero de 2005, cuando el ejército colombiano asaltó dos caseríos de la comunidad de San José en el noroeste de Colombia matando a seis personas. Los campesinos se habían declarado actor neutral en el conflicto armado y decidieron no colaborar con ningún grupo armado, ni con el estado ni con los paramilitares ni con la guerrilla.

Vou Plantar Minha Terra muestra la confrontación y resistencia en el conflicto agrario brasileño de la mano de todos los actores implicados: campesinos Sin Tierra, gobierno, grandes propietarios, iglesia católica e investigadores. Fue realizado en Brasil en 2007 y dirigido por el colectivo español Mutirão.

Zé Pureza es un largometraje documental que da cuenta de las dimensiones y la complejidad de las cuestiones agrarias, explorando prácticas cotidianas, conflictos y contradicciones. El film acompaña a lo largo de cuatro años la trayectoria de familias movilizadas por el MST para una ocupación de tierras en el norte fluminense. Esta producción brasileña, concluida en el año 2006, fue dirigida por Marcelo Hernández.

***Un poquito de tanta verdad:* presentación del documental y mesa de diálogo**

En el contexto de la reunión del Jurado del concurso, se realizó en Buenos Aires, con el apoyo del IDEP-ATE¹ y del IEF-CTA², la presentación del documental *Un poquito de tanta verdad*, realizado por Jill Friedberg, seguida de una mesa debate. El documental muestra cómo los maestros y maestras de Oaxaca enfrentan al gobierno mexicano y toman los medios de comunicación como forma de quebrar la hegemonía gubernamental y resistir a las fuerzas represivas. Tal como afirmaba Afrânio Catani, citando un testimonio

del filme, “sin el aparato de los medios de comunicación los maestros estarían derrotados desde el principio. La radio fue responsable de que muchas vidas no fueran robadas”.

La mesa de diálogo posterior a la proyección, titulada “El cine documental independiente y la conformación de nuevas identidades sociales”, resultó un importante espacio de intercambio con el público, que tuvo la oportunidad de conversar con los miembros del Jurado.

La actividad fue realizada el pasado 13 de marzo en el auditorio Eva Perón, en la sede de la ATE nacional, y contó con la presencia de Claudio Lozano como coordinador del panel. El acercamiento que se produjo en la presentación entre científicos sociales, realizadores del mundo audiovisual y público en general permitió aproximar campos que no siempre se encuentran, aunque podrían ser complementarios, tal como el mismo Pablo Pacheco López dijera en la presentación: “Creo que las ciencias sociales en nuestros países tienen que lograr una mayor aproximación con los medios audiovisuales ya que tradicionalmente los científicos sociales no siempre han visto en este medio, en este instrumento [...] una opción óptima a efecto de que el resultado de las investigaciones [...] tenga también la perspectiva de llegar a una mayor cantidad de personas interesadas”.

En el mismo sentido, el primer concurso Otras Miradas es el comienzo de un camino en el que se procurará contribuir en la tarea de vincular, en la práctica, a las ciencias sociales con el cine documental independiente, aportando a la construcción colectiva de conocimientos, desde los diferentes lenguajes y experiencias. Promover y fortalecer estas “otras miradas” es también dar imagen a las luchas y procesos sociales que los medios audiovisuales hegemónicos comúnmente invisibilizan. Es dable esperar que éste sea un valioso aporte en la construcción de sujetos sociales críticos y políticamente comprometidos.

Notas

- 1 Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, Asociación de Trabajadores del Estado, Argentina.
- 2 Instituto de Estudios y Formación, Central de Trabajadores Argentinos.

Documento

Dictamen del Jurado del I Concurso Latinoamericano de Documentales

Otras Miradas

Luchas sociales y experiencias de autoorganización

Ciudad de Buenos Aires, 14 de marzo de 2008

En la sede del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 10 y el 14 de marzo de 2008 se reunió el Jurado del I Concurso Latinoamericano de Documentales "Otras Miradas. Luchas sociales y experiencias de autoorganización" para el otorgamiento de 2 (dos) primeros premios y 3 (tres) menciones honoríficas.

El Jurado estuvo integrado por:

Jill Friedberg (Estados Unidos, 1968). Cineasta documentalista, produjo los documentales *Un Poquito de Tanta Verdad* (2007), *Granito de Arena* (2005), y *This is What Democracy Looks Like* (2000), los cuales han sido presentados en más de 50 países. Ganadora de varios premios internacionales. Participó en la creación de la red mundial de medios independientes, Indymedia. Trabaja con radios comunitarias en México y los Estados Unidos desde 1997. Estudió antropología en la Universidad del estado de Oregon, y producción de cine en la Vancouver Film School, en Columbia Británica, Canadá.

Afrânio Mendes Catani (Brasil, 1953). Master (1983) y Doctor (1992) en Sociología, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo (USP), Brasil. *Livre-Docente* por la Facultad de Educación de la USP (2006). Profesor en la Facultad de Educación de la USP y en el Programa de Posgrado en América Latina (PROLAM), también de la USP.

Pablo Pacheco López (Cuba, 1945). Licenciado en Ciencias Sociales. Editor. Director de las editoriales Arte y Literatura y Letras Cubanas (1973-1981). Presidente del Instituto Cubano del Libro (1982-1995). Director del Centro de Investigación y Desarrollo

de la Cultura Cubana (1995-2005). En la actualidad, Vicepresidente para el Patrimonio del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y director de la revista *Cine Cubano*.

Se presentaron al Concurso un total de **doscientos setenta y seis (276) filmes documentales**. De los trabajos recibidos, doce (12) fueron descalificados por no cumplir con el requisito de tiempo mínimo exigido en las bases del concurso, o bien por haber sido realizados con anterioridad a la fecha indicada en dichas bases.

Dada la magnitud y calidad de la participación se convino con el Jurado ampliar la cifra de obras que se analizarían en la última instancia de calificación, aumentando el número final de candidatos de diez (10) (tal como se indicaba en el artículo 9 de las bases del concurso) a sesenta y cinco (65), que se distribuyen entre los siguientes países: Alemania-Colombia (1), Argentina-Brasil-Chile (1), Argentina-Chile (1), Argentina-Francia (1), Argentina-Venezuela (1), Argentina (25), Bolivia (2), Brasil (8), Chile (2), Colombia (12), Cuba (2), España (1), México-Francia (1), México (2), Paraguay (1), Perú (2), Puerto Rico (1), Uruguay (1).

Esta preselección atendió a requisitos técnicos y temáticos, de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria del Concurso y en concordancia con los criterios de relevancia establecidos por la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

A los efectos de fundamentar plenamente su dictamen, el Jurado tomó en cuenta la excelencia de los filmes, con base en los siguientes criterios:

- Enfoque sobre luchas sociales o experiencias de autoorganización
- Presencia protagónica de acciones colectivas
- Actualidad de los sucesos expuestos
- Autogestión financiera de las realizaciones
- Calidad técnica
- Creatividad y desempeño en la aproximación estética
- Guión y desarrollo narrativo
- Calidad global de la realización
- Distribución temática y equilibrio regional, sin demérito de la calidad de la obra.

Por sugerencia de los organizadores del concurso y del Jurado se decidió aumentar el número de menciones honoríficas a nueve (9).

Por Unanimidad el Jurado dictaminó

1° Proclamar como **Ganadores del Concurso** a los siguientes documentales y las/los siguientes realizadoras/res (enunciados por orden alfabético):

Corazón de fábrica (2008, 129 minutos)

Dirigido por Virna Molina y Ernesto Ardito

Idioma original: Español

Producido y filmado en Argentina

Hartos Evos aquí hay. Los cocaleros del Chapare

(2006, 50 minutos)

Dirigido por Héctor Ulloque Franco y Manuel Ruiz Montealegre

Idioma original: Español y Quechua

Producido en Colombia, filmado en Bolivia

2° Otorgar **Menciones Honoríficas** a los siguientes documentales y las/los siguientes realizadoras/res (enunciados por orden alfabético):

Cielo Abierto (2007, 98 minutos)

Dirigido por Carlos Ruiz

Idioma original: Español

Producido y filmado en Argentina

Jurua. Hombres de hierro (2007, 42 minutos)

Dirigido por Rodolfo Cesatti

Idioma original: Español

Producido y filmado en Argentina

La fuerza de la organización (2007, 36 minutos)

Dirigido por Pilar Cecilia Mejía y Juan Carlos Orrego

Idioma original: Español

Producido y filmado en Colombia

La rebelión pingüina (2007, 40 minutos)

Dirigido por Carlos Pronzato

Idioma original: Español

Producido en Brasil, filmado en Chile

Soberanía violada (2007, 29 minutos)

Dirigido por Malu Vázquez

Idioma original: Español

Producido y filmado en Paraguay

Tambogrande. Mangos, muerte, minería (2007, 85 minutos)

Dirigido por Ernesto Cabellos Damián y Stephanie Boyd

Idioma original: Español

Producido y filmado en Perú

Territorio pacificado (2006, 77 minutos)

Dirigido por el Colectivo KanalB

Idioma original: Español

Producido en Alemania y Colombia, filmado en Colombia

Vou Plantar Minha Terra (2007, 58 minutos)

Dirigido por el Colectivo Mutirão

Idioma original: Portugués

Producido en España, filmado en Brasil

Zé Pureza (2006, 97 minutos)

Dirigido por Marcelo Hernandez

Idioma original: Portugués

Producido y filmado en Brasil

El Jurado desea además hacer un explícito reconocimiento al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) por la valiosa convocatoria realizada y saludar la difusión y continuidad de esta iniciativa, como así también destacar la calidad y diversidad de las obras evaluadas.

Jill Friedberg

Afrânio Mendes Catani

Pablo Pacheco López

Reseñas bibliográficas y documentos



De la conservación "desde arriba" a la conservación "desde abajo". El interés supranacional en los saberes indígenas sobre ecología

por Guillermo Almeyra

El ocaso de una ilusión: Chile 1967/1973

por Julián Rebón

Declaración final. Todos unitariamente contra el neoliberalismo y la derecha

México DF, marzo de 2008

Manifiesto campesino

Manifiesto y llamamiento al Pueblo de México por la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas

Ciudad de México, 31 de enero de 2008

**La privatización de PEMEX:
un crimen de lesa patria**
México DF, marzo de 2008

Muchas manos y un solo corazón para luchar
Oaxaca, 1 de marzo de 2008

Reseña bibliográfica



De la conservación "desde arriba" a la conservación "desde abajo". El interés supranacional en los saberes indígenas sobre ecología

Alberto Betancourt Posada (coord.)

México DF: CeALCI-Fundación Carolina, 2006

Guillermo Almeyra

El libro es el fruto del trabajo de un equipo formado por 21 investigadores que, coordinados por Alberto Betancourt Posada, integraron el seminario "Globalización, ciencia y diversidad biocultural" que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y que contó con el apoyo de la Fundación Carolina, de Madrid, de su Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación internacional y de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de México. Entre los profesores involucrados en los trabajos se cuentan ecologistas de renombre como Víctor Toledo o Enrique Leff.

El libro presenta una visión multifacética, pero coherente, del tema expuesto en su título y contiene once ensayos sobre algunas investigaciones de campo o problemas teóricos.

A escala mundial –nos dice, por ejemplo, Efraín Cruz Marín en su ensayo sobre "Interacción entre biodiversidad y pueblos indios"– se desmontan anualmente 7,5 millones de hectáreas de bosques templados, es decir, una hectárea cada tres segundos, y en las selvas tropicales ese ritmo de deforestación es aún mayor pues se destruyen 20 millones de hectáreas boscosas por año, a razón de una cada segundo y medio. Cada 15 minutos se extingue una especie vegetal o animal y, si se mantuviese el actual ritmo destructivo, antes de fin de siglo habría desaparecido la mitad de todas las especies existentes actualmente. De allí, la relevancia y urgencia del estudio del papel de las comunidades indígenas en la resistencia a esta política del capital para las zonas rurales. Estas comunidades, agrega el autor citado, en efecto, "son capaces de lograr productos de alta

calidad manteniendo dos elementos claves en la conservación de unidades ambientales: la heterogeneidad espacial y la biodiversidad”, o sea, lo que Toledo denomina *Estrategia (inteligente) de usos múltiples*. Por el contrario, los planes de conservación oficiales son un mero calco de los elaborados y financiados por el Banco Mundial y aplicados por instituciones estatales o no gubernamentales supranacionales, y esos programas ven la presencia de las comunidades indígenas en la zona donde esperan actuar no como una riqueza sino como un obstáculo, un problema.

Además, Juan Manuel Sandoval Palacios, en su trabajo “Integración regional subordinada, saqueo de recursos estratégicos y pérdida de soberanía en el Continente americano”, destaca que en el artículo 8 del capítulo sobre Propiedad Intelectual del Proyecto de Tratado de Libre Comercio, entregado por el gobierno de Estados Unidos a los tres países andinos y cuyas negociaciones comenzaran el 18 de marzo del 2004, se afirma que “cada parte (cada país que firme el TLC) deberá permitir las patentes para las siguientes invenciones: a) plantas y animales; y b) procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos y animales”. Como se ve, se califican de “invenciones” a las plantas y animales domesticadas por el trabajo de las comunidades indígenas y se plantea la posibilidad legal de expropiarles a éstas sus conocimientos médicos y veterinarios tradicionales para beneficio exclusivo de los laboratorios farmacéuticos internacionales que los patentarían.

En las conclusiones del libro, que brevemente reseñamos, se hace un balance sobre las diversas filosofías conservacionistas, a partir de lo que sucede con el Corredor Biológico Mesoamericano, que parte de México y abarca vastas regiones centroamericanas. Bajo el subtítulo de “Ciencia neocolonial o ciencia de nación multicultural”, se infiere:

La estrategia de conservación de la biodiversidad del Banco Mundial en el Corredor Biológico Mesoamericano –de acuerdo a la investigación de Alberto Betancourt– es sumamente contradictoria: promueve las actividades y estudios sobre la conservación de la biodiversidad pero despliega actividades económicas que le provocarán un daño irreversible; rescata y universaliza algunas prácticas y conocimientos indígenas pero simultáneamente se los apropia, los destruye o los subordina a una lógica de producción transnacional que socava los derechos y las condiciones de supervivencia de las comunidades; alienta la investigación científica sobre ecología, pero auspicia un modelo de ciencia neocolonial que asigna tareas ínfimas a los científicos mexicanos y establece líneas de investigación

basadas en una lógica comercial en vez de una lógica de desarrollo social y conservación.

En una palabra, la visión de la Naturaleza, incluyendo en ésta también a las comunidades indígenas, como mera cantera de materias primas e instrumento para la valorización del capital, choca con otra concepción que fusiona la especie humana y el ambiente y coloca a ambos en un devenir común no regido por el mercado ni el lucro sino por la solidaridad con las generaciones futuras.

Reseña bibliográfica



El ocaso de una ilusión: Chile 1967/1973

Juan Carlos Marín

Buenos Aires: Picaso/INEDH/Colectivo Ediciones, 2007

Julián Rebón

Politólogo. Miembro del Colectivo Editorial del OSAL.

Extenso, dilatado, ramificado y en buena parte anónimo ha sido el aporte de Juan Carlos “Lito” Marín a las Ciencias Sociales y a la crítica teórico-práctica del orden social en Latinoamérica. Este libro presenta una de sus más sugerentes contribuciones. Se trata de dos avances de investigación que abordan el territorio rural de Chile durante el período 1967-1973. El primero de ellos, “Asalariados rurales en Chile”, formó parte del proyecto “La marginalidad en América Latina” dirigido por José Núñez y que contaba con Miguel Murmis y el mismo Marín como sus investigadores principales¹. Su primera edición fue en 1969 en el Volumen 69, N° 2 de la *Revista Latinoamericana de Sociología* que editaba el Instituto Torcuato Di Tella. El segundo trabajo, “Las tomas”, fue elaborado posteriormente durante el gobierno de la Unidad Popular y publicado en el primer número de la revista *Marxismo y Revolución*, dirigida por Ruy Mauro Marini, que dio a luz su único número en Santiago de Chile momentos antes que el gobierno popular fuera derrocado por el golpe cívico-militar². A estos trabajos se agregan como introducción desde el presente “La memoria que necesitamos”, la más reciente producción de Marín, y un interesante prólogo de Nelson Gutiérrez Yáñez, quien fuera durante el período analizado dirigente nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Las investigaciones referidas desentrañan con rigor el carácter social que asumían las formas socio-productivas y el carácter de clase de las confrontaciones sociales durante el período 1967-1973 en las zonas rurales de Chile. Mientras el estudio “Asalariados rurales” se centra en la primera perspectiva, “Las tomas” lo hace en la segunda. No obstante la gran importancia de estos trabajos para describir el período histórico

abordado, no reside aquí su principal valor. Dichos trabajos representan una estimulante fuente de sugerencias teórico-metodológicas para investigar el mundo actual en la perspectiva de una tradición que se funda en Karl Marx, pero que se nutre para su empresa de desarrollos científicos e intelectuales proveniente de diferentes tradiciones. No está en nuestro propósito presentar en estas páginas un análisis de dichas sugerencias: podríamos muy fácilmente al intentar "traducir", desde nuestro esquema de análisis, "traicionar" el pensamiento del autor. Sólo nos proponemos a continuación enunciar algunos nudos problemáticos de estos textos.

La primera parte del libro, "Asalariados rurales", avanza en desentrañar el carácter social de la forma productiva emblemática del agro chileno del período: el *fundo*.

Frente a las tesis que le atribuían un carácter de servidumbre a la relación entre la fuerza de trabajo y el fundo, y aquellos otros que le atribuían un carácter de arrendamiento a dicha relación, Marín demuestra cómo la misma asume una forma salarial. No se trata de "siervos" ni de "empresarios" o "arrendatarios"; son "asalariados". La *fuerza de trabajo* asume la *forma salario*, con la particularidad que la misma no se halla plenamente desarrollada. La unidad fundo es una forma capitalista cuya especificidad consiste en desentenderse parcialmente de la reproducción de la fuerza de trabajo. Le otorga a la fuerza de trabajo ciertas "regalías", derecho de uso de parcelas, por ejemplo, para que ella se haga cargo de su propia reproducción. De este modo, logra extraer un mayor sobretrabajo de dicha relación. Así, la forma fundo se nos revela como una unidad productiva orientada al mercado que tiene como elemento organizador la maximización de la ganancia utilizando para ello diferentes formas salariales. Que ellas se encuentren oscurecidas en su inteligibilidad por distintas relaciones adicionales, que no se hallen plenamente desarrolladas, no debe impedirnos entender el núcleo estructurante de la unidad productiva: el consumo productivo de *fuerza de trabajo asalariada*. Este esquema de análisis no deja de ser sugerente para entender el desarrollo del capitalismo actual que permanentemente apela a formas productivas en las cuales la forma salario aparece de modo encubierto e incompleto. Nos proporciona así claves para investigar la heterogeneidad de formas productivas y personificaciones sociales actuales desmitificando las apariencias de "cuentapropismo" de algunas de las formas que asumen los asalariados.

El texto logra, por otra parte, avanzar en desentrañar las distintas identidades de la fuerza de trabajo del fundo. Así, identifica asalariados permanentes, intermitentes y transitorios. Cada personificación guarda una inserción diferencial con la forma fundo. Las primeras personifican la fuerza de trabajo estable con regalías permanentes. Los segundos

tienen ciertas “regalías”, la vivienda por ejemplo, que los “obligan” como contrapartida a emplearse para el fundo cuando este lo requiera; de este modo se convierten en un reservorio de fuerza de trabajo monopolizado por la unidad productiva. Los últimos son la personificación del proletariado rural, articulado en ocasiones a producciones de infra-subsistencia, que permanentemente se encuentran en la necesidad de asalariarse. Expresan a lo más excluido y pauperizado del mundo rural, expropiados de condiciones de producción, que encuentran en la sobreexplotación transitoria parte de sus medios de subsistencia. Las distintas personificaciones nos expresan los efectos de la expansión del capitalismo, proceso en el cual la expropiación, y el empobrecimiento resultante, no asume en simultáneo un proceso de asalarización pleno. El orden sistémico produce más de lo que directamente consume productivamente. Pero esta fuerza sobrante es la consecuencia inmanente de un orden social; y como tal es útil y necesaria³.

Otra virtud es que al abordar las distintas identidades del mundo rural el autor no se reduce simplemente a la articulación sincrónica de la fuerza de trabajo y la unidad productiva, estudia y diferencia las historias ocupacionales permitiéndole arribar a la conclusión de que se trata de una estratificación consolidada del mundo rural. Se aproxima así al desentrañamiento de la existencia sociológica real de las identidades, no cayendo en la arbitrariedad clasificatoria de muchos estudios de la sociología actual. Asimismo, al estudiar el desarrollo de la forma productiva fundo no se reduce a un análisis sincrónico, aborda también diacrónicamente a la misma. De este modo, avanza en el camino de su explicación sociológica estableciendo la secuencia causal y las relaciones de implicación.

Pero si en “Asalariados rurales” encontramos el avance en el campo de las relaciones de producción, en “Las tomas” encontramos el despliegue de ese sistema socioproductivo en sus crisis en el campo de las confrontaciones.

Este último texto comienza con una famosa frase de Marx: “No se trata de lo que tal o cual proletariado considera como fin en el momento dado. Se trata de lo que es el proletariado y de lo que, conforme a su ser, se verá obligado a hacer históricamente”. Cualquier lector desprevenido, al ver el encabezado del texto podría pensar que se encuentra frente a un escrito que simplemente va a rendir un tributo secular a una profecía o al profeta mismo. Pero el camino es el contrario. Lejos de cualquier teleología, el trabajo intenta demostrar empíricamente cómo la crisis de un orden social va conformando en determinadas personificaciones sociales la necesidad y posibilidad de emprender determinadas acciones.

El autor nos relata cómo una iniciativa en el campo de las luchas al interior de las clases dominantes desarrolla un proceso de integración

corporativa de parte de los asalariados rurales. A través de la reforma agraria y la sindicalización se moviliza y comienza a incorporar ciudadanamente a los estratos de la fuerza de trabajo con inserción permanente en los fundos. Convocados pero excluidos del proceso quedan aquellos que personifican más plenamente el proletariado rural. La agudización de las confrontaciones en la sociedad chilena, en el marco de la asunción de un gobierno popular, van a conformar el contexto en el cual emerge el carácter clasista, desde la perspectiva proletaria, en los enfrentamientos sociales de las zonas rurales.

En el abordaje de este proceso, Marín nos brinda sugerencias teóricas y metodológicas. En el análisis del proceso de confrontación y movilización abordará distintos tópicos que posteriormente serán trabajados en otras latitudes por las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales. Pero a diferencia de algunos de estos marcos teóricos, Marín investiga desde una perspectiva que nunca pierde el desenvolvimiento de la totalidad concreta, en su mezcla y adición de relaciones, como horizonte de análisis.

Entre estos tópicos podemos nombrar el brillante análisis de las formas de lucha. Frente a las imágenes idealizadas de las formas de lucha, Marín propone un análisis relacional donde las configuraciones de acciones empleadas en una relación de lucha dejan de tener valor intrínseco. Lejos de todo *fetichismo tecnológico*, las mismas sólo pueden ser entendidas con relación a las fuerzas sociales histórico-concretas que están mediando. Elementos como el anclaje cultural de las formas de lucha, las condiciones materiales que posibilitan sus usos o los procesos de regulación social o institucionalización de estas configuraciones de acciones son desarrollados en el texto. Pero el mérito central es que el desarrollo se construye en base a un avance empírico que establece el enfrentamiento como operador metodológico que permite desentrañar las estrategias en juego. Los atributos observables de dichos enfrentamientos –formas de luchas, metas, personificaciones– permitirán establecer el carácter de clase que asumen las estrategias. Dicha metodología fue posteriormente una estimulante fuente de inspiración de un gran número de estudios sobre conflicto social en América Latina.

“Asalariados rurales” y “Las tomas” nos permiten entender cómo la crisis de una totalidad concreta construye condiciones para la emergencia de un proceso de autonomización, en el cual la disconformidad social entra en el territorio de la acción directa al vulnerar los canales corporativos de procesamiento del conflicto. Donde el contenido de la lucha asume embrionariamente, en el campo económico, un carácter de clase. No se trata de buscar explicaciones unilineales ni deterministas de los hechos. Pero tampoco plantearlos como meras contingencias o consecuencias de variables intermedias. Distintas dimensiones (políticas, sociales, economi-

cas, culturales), escalas (local, regional, nacional, mundial) y enfoques (diacrónico y sincrónico) son articulados para explicar, con una riqueza pocas veces observada, un hecho social en el campo de la confrontación.

Encontramos así un estudio sociológico que logra articular a elementos teóricos clásicos de la lucha de clases, provenientes en particular de Marx y Lenin, en función de la construcción de conocimiento. Dicha construcción no obedece a un mero desafío intelectual, tiene como objeto transformar la realidad. Quien investiga no es ajeno a los hechos que estudia. Forma parte de la expresión de ese malestar social, del campo de la disconformidad que enfrenta la inhumanidad de un sistema. Pero reconoce que tienen problemas. Que muchas representaciones ilusorias nutren la acción de quienes luchan. El deseo convoca al combate, pero al mismo tiempo parece nublar las condiciones para su inteligibilidad. El conocimiento, la investigación, viene a plantear el desafío de nutrir a la determinación combatiente de mejores condiciones para su desarrollo.

El trabajo termina preanunciando la etapa de guerra que se abre. Guerra que no será ajena al futuro del autor ni del texto. Pero he aquí la paradoja convocante. Se nos propone conocer *El ocaso de una ilusión*, pero el objetivo real no es otro que empezar a construir las condiciones para el amanecer de la esperanza.

Notas

1 Otros investigadores del proyecto fueron Ernesto Laclau, Néstor Dalessio, Marcelo Nowersztern y Beba Balvé. Entre los asesores se encontraban Eric Hobsbawm y Alain Touraine.

2 Una versión de ambos textos fue publicada bajo el nombre *Proceso de génesis, formación y desarrollo de un sistema productivo rural* por el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO), en 1978.

3 Una clave en la cual pueden leerse estos textos es en torno al debate de la marginalidad en América Latina. Marín

nos advierte que no puede pensarse el ejército industrial de reserva en los límites del estado-nación. El mismo sólo es inteligible si lo analizamos en términos de la totalidad concreta de articulaciones territoriales que constituyen el "sistema capitalista" real. ¡Qué importante se han convertido estos señalamientos hoy con la nueva fase de la mundialización capitalista! ¿Cuáles son los límites de una formación social? ¿Cómo se articulan y qué efectos funcionales producen las distintas localizaciones territoriales de los reservorios de fuerza de trabajo en la expansión capitalista mundial?

Documento

Declaración final Todos unitariamente contra el neoliberalismo y la derecha

México DF, marzo de 2008

Cómo citar este documento

OSAL 2008 "Declaración final. Todos unitariamente contra el neoliberalismo y la derecha" (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

1- Sobre la situación económica y política nacional

La llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de la República anunciaba graves conflictos sociales y políticos.

Su "toma de protesta" reflejó la forma ilegítima e ilegal, del modo en que fue impuesto en la silla presidencial mediante el fraude electoral. Por lo que era previsible la aplicación de la mano dura para contener y golpear a los movimientos sociales, cuestión que más adelante fuimos puntualmente corroborando con los casos de los Sindicatos Minero, de los Tres Poderes al Servicio del Estado de Querétaro, de la Vidriera del Potosí, General Tire, Magisterio y pueblo oaxaqueño, el movimiento social contra la minera San Xavier y un larguísimo etcétera.

Junto a ello, y derivado de la profundización del modelo neoliberal, se aplicaron a rajatabla dos reformas estructurales: la primera, a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) que contiene gravísimas afectaciones al magisterio nacional y a los trabajadores del sector público, y la segunda, al régimen recaudatorio y fiscal, que devino en mayores impuestos a la clase obrera y al pueblo trabajador.

Por otra parte, se incrementaron las tarifas de diesel, gasolina, electricidad y gas; de igual manera, aumentaron los precios de productos de primera necesidad como maíz, frijol, arroz, leche, huevo, azúcar, entre otros. Con el comienzo

del presente año, se han empezado a sentir los estragos de la política económica calderonista, sumándosele la entrada en vigor de la última fase del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que arruina ya a millones de campesinos, indígenas y trabajadores agrícolas, multiplicando la emigración hacia los Estados Unidos. A ello se agrega el miserable "aumento" a los salarios mínimos del 4%, el cual ha exacerbado la ira y el enojo de amplísimos segmentos sindicales, sociales y populares.

Además, al profundizar la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y para enfrentar el descontento popular, los neoliberales pretenden llevar adelante la llamada "Iniciativa Mérida" (de manufactura norteamericana) y aprobar la reforma judicial con el propósito de que las corporaciones policíacas y militares, so pretexto de la supuesta lucha contra el narcotráfico, combatan y desintegren a los movimientos sociales y populares.

Pero, la necedad de la derecha gobernante no conoce los límites del entreguismo, se aprestan a aprobar el siguiente paquete de "Reformas Estructurales"; dictadas desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, los "sicarios" del gobierno federal y los "jefes" parlamentarios prianistas pretenden imponer las Reformas, Energética y Laboral, con las cuales proyectan darle la puntilla a los derechos y conquistas más preciadas de los trabajadores y el pueblo, y liquidar la Soberanía Nacional y el Patrimonio Social de todos los mexicanos.

Para todos esos afanes, el presente año es clave para los neoliberales. Desde ahora mismo, articulistas, reporteros, locutores, "líderes de opinión", "intelectuales orgánicos", dirigentes empresariales, directores de empresas públicas, líderes charros y jercas eclesiásticas están descargando una ofensiva feroz contra los trabajadores y el pueblo, obsequiándonos su más acendrado odio y desprecio de clase, enderezando sus mentiras e insultos en contra nuestra. Ello tiene un sentido, aprobar las Reformas Estructurales, ellos sienten que éste es su año y su oportunidad, y no quieren desperdiciar tiempo, espacio ni recursos, es ahora o nunca.

Sin embargo, ahora la palabra es de los trabajadores y del pueblo. Como en 1936, la situación y condiciones

son inmejorables para propuestas de procesos unitarios, estamos en la posibilidad real de impulsar y concretar el FRENTE GRANDE Y DE TODOS. Los acuerdos y la movilización iniciales del 31 de enero pasado cobran una relevancia mayúscula, que deberemos valorar en sus justos términos, puesto que si cuidamos ese proceso convergente y unitario estaremos más cerca que nunca para detener las reformas estructurales, e incluso pasar a la ofensiva. Ello dependerá de mantener nuestra coherencia programática y una política de alianzas adecuada y flexible, para garantizar el rumbo de nuestro camino.

2- Balance sobre los procesos unitarios y la política de unidad y alianzas

La clase obrera y el pueblo hemos venido resistiendo en pequeñas y grandes luchas, pero de manera aislada, sin alcanzar aún la suficiente coherencia programática ni la necesaria sincronía política de acción unitaria.

El Diálogo Nacional es un espacio amplio, incluyente y plural, en donde convergen tanto el Frente Sindical Mexicano (FSM), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), el Movimiento Organizado Nacional "Aquí Estamos" (MONAE), el Movimiento la Esperanza se Respeta (MER), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), entre otros muchos referentes populares, sociales, indígenas y políticos. Hemos dado vida e impulsado importantes movilizaciones en defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores y el pueblo, entre ellas, la lucha por la abrogación de la ley del ISSSTE, por mayor presupuesto a las empresas e instituciones públicas, la defensa de las libertades democráticas y la libertad de los presos políticos, entre otras importantes luchas.

La situación social y política, abierta y expresada multitudinariamente por la ALIANZA CLASISTA, Obrera y Campesina del pasado 31 de enero, cobra una relevancia especialmente rica para la lucha de clases, tanto en las definiciones políticas como en las modalidades de la organización frentista y la movilización popular convergente, para lo cual se requiere que nosotros como Diálogo Nacional, realicemos los mayores

esfuerzos para pulir nuestra unidad programática y mejorar la eficacia en la actividad práctica.

Deberemos darle cauce a la organización sectorial y territorial, de alcance nacional. Estamos obligados a realizar esfuerzos extraordinarios para levantar las instancias frentistas en toda la República y acompañar los ritmos de la movilización para impedir que se sigan deteriorando los niveles de vida y trabajo, los derechos laborales, democráticos y políticos de la clase obrera y el pueblo, para frenar las reformas neoliberales, y conquistar el cambio de la política económica, para vivir con libertad, justicia y democracia.

En esta ruta, es necesaria la presencia de todos, sin protagonismos ni sectarismos. Seguirá siendo necesario insistir en la coordinación y acción conjuntas, trabajando con acuerdos que incorporen a nuestras bases, impulsando aquellos puntos en los que haya acuerdo, desde luego, en planos de igualdad y respeto mutuos. Llamamos a todas las organizaciones campesinas, sindicales y populares que se movilizaron el 31 de enero, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Convención Nacional Democrática y a todos los referentes pequeños y grandes del país, a discutir la construcción conjunta y unitaria de un plan de acción que haga posible la realización de una Huelga Política Nacional en contra de las reformas neoliberales en marcha. Nadie piensa ilusoriamente que la unidad es sencilla ó fácil, pero habrá que persistir en ella. Todos debemos comprender la necesidad de caminar juntos pues sólo así golpearemos fuerte y contundentemente a nuestros enemigos, y juntos hilar el complicado tejido de la urgente y necesaria UNIDAD POPULAR.

Es el tiempo de conjugar esfuerzos y fuerzas, de caminar juntos y sin dobleces, de actuar contundentemente a favor de los nuestros, los de abajo, los explotados y oprimidos, y en contra de los de arriba, de aquellos que nos someten y desprecian.

En una palabra, ES EL TIEMPO DE LA CONVERGENCIA CLASISTA, NACIONAL Y UNITARIA, es el momento de llegar a acuerdos y de concretarlos, de recorrer la República para levantar y organizar el descontento, la ira y el coraje, de caminar por y para la Patria, no hay tiempo que perder, la Soberanía Nacional se encuentra en grave peligro.

3- Ejes programáticos, formas organizativas y plan de acción

Por ello, el V DIÁLOGO NACIONAL levanta con toda convicción y firmeza “La Declaración de Querétaro” y el “Programa Mínimo No Negociable” como nuestras banderas ineludibles y acordamos movilizarnos de manera unitaria bajo los siguientes ejes programáticos:

I. POR LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL, ENERGÉTICA Y ALIMENTARIA

II. POR LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA Y LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

III. POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES, DEMOCRÁTICOS Y POLÍTICOS, DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO

IV. POR LA DEFENSA DE LA ECONOMÍA POPULAR, POR AUMENTO SALARIAL DE EMERGENCIA Y LA CREACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS

V. POR LA DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SOLIDARIA, INTEGRAL E INTERGENERACIONAL, Y POR LA ABROGACION DE LA LEY DEL ISSSTE

VI. POR EL RESCATE DEL CAMPO MEXICANO Y POR EL RESPETO A LOS DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

VII. POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, LAICA, CIENTÍFICA Y GRATUITA, ASÍ COMO LA DEFENSA DE LA UTILIDAD PÚBLICA Y EL CARACTER SOCIAL Y FEDERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

VIII. POR LA LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS

IX. POR UN FRENTE GRANDE Y DE TODOS, Y UN CONGRESO NACIONAL CONSTITUYENTE, POPULAR Y DEMOCRÁTICO

X. POR UN NUEVO PROYECTO DE NACIÓN, ALTERNATIVO AL NEOLIBERALISMO

Y con las siguientes acciones iniciales:

- 1- Del 1 de febrero al 30 de abril, declararnos en alerta y emergencia total, durante el período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, ante la posibilidad de la introducción y aprobación de las reformas energética, laboral y judicial.
- 2- Trabajar en el seno de nuestras organizaciones y con el resto de los referentes sindicales, campesinos, sociales, populares y políticos, la iniciativa de una huelga política general para frenar la política neoliberal y para avanzar hacia un nuevo proyecto de nación, en consecuencia proponemos a discusión y consulta:
 - a) La formación de una coordinación permanente de todos los referentes sociales y políticos en resistencia.
 - b) Emplazar políticamente a los poderes del Estado a que desistan de sus proyectos y reformas antipatrióticas y antipopulares.
 - c) Y la realización de tres paros escalonados para los días 6 de marzo, 10 y 11 de abril y 30 de abril, 1 y 2 de mayo.
- 3- Del 6 de febrero al 18 de marzo, campaña nacional de información y organización, estatal, municipal y delegacional, en defensa de la Soberanía Nacional y en contra del neoliberalismo.
- 4- Cobertura y Solidaridad a las Revisiones Contractuales y Salariales.
- 5- El 7 de febrero, Mitin-Plantón en la Cámara de Diputados de San Lázaro.
- 6- El 19 de febrero, marcha por una ley de amnistía, contra la reforma judicial y en apoyo a las viudas de Pasta de Conchos.
- 7- El 6 de marzo, Gran Marcha Obrera y Popular, contra las Reformas Energética y Laboral, por la independencia y autonomía sindicales y por la restitución del poder adquisitivo de los salarios.

- 8- El 18 de marzo, Gran Concentración en Defensa de la Industria Petrolera.
- 9- El 10 de abril, 2º Gran Movilización Campesina.
- 10- El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.

Fraternalmente

V Diálogo Nacional

Documento

Manifiesto campesino Manifiesto y llamamiento al Pueblo de México por la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas

Ciudad de México, 31 de enero de 2008

Cómo citar este documento

OSAL 2008 "Manifiesto campesino. Manifiesto y llamamiento al pueblo de México por la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas" (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 23, abril.

¡Ya basta! ¡Muera el TLCAN agrícola!

¡Por una política nacionalista, y un campo digno, sin hambre ni migración!

Al Pueblo de México

- 1- Ante la reiterada falta de voluntad política por parte del Gobierno Federal para discutir y resolver la grave e insostenible problemática del campo mexicano, desde el 1 de enero de 2008, las organizaciones campesinas, como parte fundamental del **Pueblo de México**, redoblamos la lucha por la recuperación de la soberanía alimentaria del país, en defensa de la sociedad rural, por un campo que supere la pobreza y otorgue expectativas de vida digna a las familias rurales, y por la construcción de un proyecto alternativo de Nación.
- 2- La **alimentación es la primera condición para la vida** de 107 millones de mexicanos, y cerca de dos millones de niños y niñas adicionales que debemos alimentar cada año. El sector primario es, además, la base para la

- supervivencia de 30 millones de mexicanos que radican y trabajan en el sector rural: **la comida es asunto de Seguridad Nacional.**
- 3- Los mexicanos debemos continuar en el siglo XXI la hazaña civilizatoria de nuestros antepasados indígenas, que lograron domesticar el maíz y otras especies, lo que equivale a la invención de la agricultura.
 - 4- La Nación mexicana tiene la responsabilidad ante su propio pueblo y ante la Humanidad, del uso sustentable de la Megadiversidad. México es una de las pocas naciones Megadiversas del mundo y el centro de origen y diversificación del maíz, el principal grano producido actualmente a nivel mundial. Durante milenios, este grano y el frijol han sido la base de nuestra seguridad y soberanía alimentaria en manos de la agricultura campesina.
 - 5- La soberanía alimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, y es un requisito indispensable para **mantener las libertades** de todas las personas y la **Autodeterminación de la Nación**, por lo que hacemos un llamamiento a todos los mexicanos de buena voluntad.
 - 6- Ante las amenazas a la vida humana, y a la apropiación y control de la alimentación del pueblo, de las riquezas genéticas, tierras, aguas, bosques y playas del país, por parte de empresas globales, continuamos en el siglo XXI la lucha por la **Tierra y Libertad** de nuestros antepasados, con la lucha por la **Soberanía Agroalimentaria, la Defensa de los Territorios Campesinos e Indígenas, y los Derechos plenos y Libertades Democráticas para todos los Mexicanos y Mexicanas.**
 - 7- La autodeterminación alimentaria es inseparable de la soberanía energética y ésta de la soberanía nacional. Nos solidarizamos con todos los mexicanos que trabajan y resisten por ellas.
 - 8- Es falso que hasta ahora estemos manifestando nuestros argumentos y propuestas:
 - a- Nos opusimos en 1992 a la contrarrevolución agraria que representó la modificación del Artículo 27 constitucional.

- b- Nos opusimos con propuestas y argumentos duros a la inclusión del sector agropecuario en el TLCAN entre 1991 y 1993.
- c- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpió al inicio de 1994, denunciando la injusticia del TLCAN para el país, para los pueblos indios, los campesinos y toda la población.
- d- Desde 1994 nos hemos opuesto sistemáticamente al manejo discrecional y corrupto de los cupos de importación para favorecer a las grandes empresas agroalimentarias y a los importadores.
- e- De 1998 a la fecha hemos participado activamente en la Cámara de Diputados para incrementar y mejorar la calidad del presupuesto rural.
- f- Propusimos y promovimos la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el año 2000, que fue vetada por el Ejecutivo Federal y que posteriormente fue aprobada, con la participación activa de los Diputados y Senadores, misma que es considerada un ejemplo para muchos países por su visión integral y nacionalista.
- g- La movilización de las principales organizaciones campesinas al grito de *¡El campo no aguanta más!* condujo a la histórica **Marcha Campesina del 31 de enero de 2003**, misma que obligó al gobierno federal a dialogar hasta negociar y firmar el **Acuerdo Nacional para el Campo** el 28 de abril de 2003.
- h- El 31 de enero de 2007, diversas organizaciones sindicales, campesinas y civiles agrupadas en el **Espacio Social Tripartito**, presentamos nuestra propuesta en el Zócalo de la Ciudad de México y en 17 capitales del país; mismas que se ampliaron el 10 de abril en el Monumento a la Revolución.
- i- Desde junio de 2007, un conjunto amplio de organizaciones campesinas, no gubernamentales y ciudadanos, promovimos ante la sociedad mexicana la **Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y por la Reactivación del Campo ¡Sin Maíz no hay País y sin Frijol tampoco!**

- j- En noviembre de 2007 se dio la batalla conjuntamente con los Diputados, por un incremento de más de 27 mil millones de pesos al presupuesto rural 2008, con relación al presupuesto rural de 2007.
 - k- En diciembre de 2007 propusimos ante el Congreso de la Unión la aprobación de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos 2008 para instruir al Ejecutivo Federal a efecto de que estableciera un mecanismo de administración del comercio exterior de maíz y frijol a partir del 10 de enero de 2008 para proteger la producción nacional, garantizar el abasto y contribuir a la seguridad alimentaria de la población, así como para crear una reserva estratégica alimentaria.
 - l- En diciembre de 2007, en el seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y de la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto, acordamos un método participativo de revisión y negociación de las Reglas de Operación de los Nuevos Programas para el campo mexicano, mismo que ha sido incumplido por los secretarios de la SAGARPA y SEMARNAT.
 - m- El primer minuto del 1 de enero de 2008, las organizaciones campesinas de la Campaña Sin Maíz no hay País, con la solidaridad de organizaciones de granjeros, trabajadores agrícolas y ambientalistas de Estados Unidos, tomamos el puente de Ciudad Juárez Córdoba-Las Américas para protestar contra las políticas anticampesinas y entreguistas del gobierno de Felipe Calderón y contra la entrada en vigor de la última etapa de liberalización de las importaciones del TLCAN para maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, y para proponer a la Nación el **Plan de El Chamizal para la Salvación del Campo y el Rescate de la Nación**.
 - n- Asimismo, con el inicio del 2008 arrancaron también numerosas manifestaciones y pronunciamientos campesinos como el de Morelos, Chiapas, Zacatecas, Veracruz y Estado de México, entre otros.
- 9- A lo largo de estos años, las demandas y propuestas de los campesinos y trabajadores de la ciudad, no han sido tomadas en cuenta por el Gobierno Federal: por el con-

trario, han aplicado políticas contrarias al interés nacional y a la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- 10- Los aumentos presupuestales promovidos y autorizados por la Cámara de Diputados en estos años, al aplicarse con políticas equivocadas, no han modificado las condiciones de producción y de vida de millones de mexicanos en el campo.
- 11- Ante esta situación, la sociedad rural, con la solidaridad de amplios sectores del país, se ve obligada a **exigir la necesaria modificación de estas decisiones, en el marco de la construcción de un Nuevo Pacto Nacional.**

Situación de la Nación y del Sector Rural

- 12- **A 25 años de políticas neoliberales y 14 del TLCAN, los resultados para el campo y el país están a la vista¹:**
 - a- Crecimiento del PIB agropecuario en el período TLCAN (1994-2006): 1,4% anual.
 - b- Disminución de la producción de alimentos per cápita durante estos años.
 - c- Déficit agroalimentario de 18 mil 600 millones de dólares, acumulado entre 1994 y 2007, con un déficit promedio anual de 2 mil millones de dólares².
 - d- La importación de carne de bovino aumentó 440%, la de aves 280%, de cerdo 210%, de huevo 50%, 85% maíz, 44% sorgo, en este período.
 - e- El valor de las importaciones de alimentos provenientes de Estados Unidos de 1994 a 2007, alcanzó la cifra de 110 mil millones de dólares.
 - f- Aumentó la dependencia alimentaria del 10% en 1994 al 40% en 2006: el porcentaje de importaciones en relación al consumo nacional, es de 33% en maíz, 55% en trigo, 95% en soya, 72% arroz, 22% cebada y 55% algodón.
 - g- De los 50 millones de toneladas de granos de consumo nacional, México importa 17 millones, además de las que se importan en forma de productos cárnicos.

- h- Las agroexportaciones las realizan sólo el 2% de las unidades de producción, en las que es frecuente la violación de los derechos humanos y laborales de cientos de miles de jornaleros, la sobreexplotación de mantos freáticos y contaminación con agroquímicos de hombres, mujeres y niños, así como de los suelos y aguas.
- i- El 80% de la agroexportación (cerveza, jitomate, aguacate, fresa, frambuesa, melón, mango, tequila, principalmente) está en manos de empresas extranjeras.
- j- La deforestación y erosión de bosques y suelos continúa incrementándose en la mayor parte del territorio nacional, con el consecuente agotamiento de los mantos freáticos, una mayor vulnerabilidad a fenómenos climatológicos y una mayor frecuencia de catástrofes socio-naturales como la inundación de Tabasco y el desgajamiento del cerro en San Juan de Grijalva, Chiapas.
- k- El crédito al sector Agropecuario en precios constantes, se redujo de 51.371 millones de pesos en 1994 a 5.204 en 2007, y se concentró en grandes y medianas empresas. Únicamente 15 de cada 100 productores tienen acceso al crédito de avío y sólo 5 de cada 100 puede obtener un crédito de inversión a largo plazo. El crédito al agro de la banca comercial representa 1,6 de su cartera y 0,3% del financiamiento de la banca de desarrollo. Además, las tasas de interés que se ven obligados a pagar los productores mexicanos es de 100 a 200% por encima de la que pagan sus homólogos estadounidenses.
- l- El presupuesto a precios constantes de la SAGARPA en 2007 (11.600 millones de pesos, aún no alcanza el nivel de 1994 (12.500 millones de pesos).
- m- De 1994 a 2006 los precios para los productores de maíz aumentaron 277% y el ingreso agrícola en 334%. Pero los costos de producción aumentaron 450% y el precio de la tortilla para los consumidores 739%.

- n- Se ha generado una concentración anticompetitiva en el mercado agroalimentario mexicano por 20 grandes corporaciones mexicanas y trasnacionales, que controlan las semillas, los insumos, la comercialización, el procesamiento y la distribución de alimentos. Así, 4 empresas controlan el comercio de maíz y 1 la producción de harina de maíz, 3 controlan el mercado del trigo, 3 la comercialización del frijol y 3 su industrialización, 3 el pollo y el huevo, 3 la leche y 1 el café.
- o- Los productores no han recibido apoyo público para una comercialización que les permita captar una mayor parte del precio pagado por los consumidores: el azúcar sale de los ingenios a 5,50 pesos por kilo y el consumidor lo compra a 12; los productores de cerdo reciben 12 pesos por kilo y en las tiendas de autoservicio cuesta 45; los productores de leche reciben entre 3,70 y 4,5 pesos por litro y cuesta en el supermercado hasta 12 pesos; el productor de frijol recibe 3,30 por kilo y el consumidor llega a pagar hasta 22 pesos³.
- p- Se pasó de una casi nula importación de fertilizantes en 1990 a la importación cercana de 1 millón de toneladas en 2006, a un precio que aumentó de 1.969 pesos la tonelada de urea en 2000, a 4.000 en 2006; a pesar de que contamos con los elementos para producir fertilizantes nitrogenados en el país a precios competitivos y a favor de la productividad y mayor ingreso de los productores, y con un dictamen positivo de la Cámara de Diputados sobre la *Ley de Gas Natural de Proceso, Amoníaco y Fertilizantes Nitrogenados*, que se encuentra congelado en la Cámara de Senadores.
- q- De 1994 a 2007 no hubo transición gradual a la apertura comercial total ni programa de inversiones para el sector de productores de maíz y frijol, ni para las regiones rurales marginadas. Estos dos hechos representaron un grave incumplimiento de los compromisos del gobierno federal con los campesinos de cara al TLCAN para enfrentar las asimetrías entre

México, Estados Unidos y Canadá, los subsidios estadounidenses crecientes y la descapitalización en el campo mexicano.

- r- Durante 25 años hubo ausencia de inversión pública y se dismantelaron instituciones, organismos, programas, presupuestos, y la red de protección del Campo Mexicano. A cambio de ello se entregó un PROCAMPO devaluado, a destiempo y previo pago de sobornos y que además deja fuera al 30% de los productores elegibles. Aunque el PROCAMPO es incluyente de la mayoría de los campesinos e indígenas, su diseño concentra el apoyo para los que más tierra posean, y su monto no es comparable con el nivel de subsidios por productor que otorgan los países desarrollados a sus productores.
- 13- Estados Unidos NO ha cumplido con el TLCAN, por lo que el Gobierno de México debe renegociar este tratado y gobernar con base en la Constitución y en beneficio del Pueblo de México, y no para atender decisiones e imposiciones de otros países:
- a- Es totalmente falso que el campo mexicano esté en igualdad de condiciones para competir con los productores estadounidenses; que la apertura ya se dio y que por ello no afectará más en el futuro, y que los peor para el campo y la seguridad alimentaria del país ya pasó.
 - b- El presupuesto anual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los subsidios de la Ley para la Seguridad e Inversión Rurales y otros fondos para atender desastres meteorológicos y de mercado, son cercanos a los 100.000 millones de dólares, contra 5.455 millones de dólares de la SAGARPA.
 - c- Con esos recursos, Estados Unidos refuerza su programa de apoyos directos, de incentivos a la calidad del ambiente, de respaldo al programa de acceso a mercados, del sistema financiero para la comercialización y continúa subsidiando la asistencia técnica, la investigación, la infraestructura y la bioenergía.

- d- El Gobierno Federal es irresponsable ante la Nación, por no hacer nada ante el hecho de que Estados Unidos, a través de su Departamento de Agricultura, tiene proyecciones para apoderarse en el 2015 del mercado de granos, oleaginosas y cárnicos del país, para lo cual ha redireccionado su nueva ley agrícola 2008-2012.
- e- Estados Unidos aumentó los subsidios agrícolas de 5 mil millones de dólares en 1994 a 30 mil millones en 2000, manteniéndolos en un promedio anual de 18 mil millones entre 2001 y 2007.
- f- En 1994, los tres países firmantes iniciaron el acuerdo con niveles aproximados de apoyos directos a los productores; pero todo cambió a partir de 1997. Durante los años 1997-2000, los apoyos directos en Estados Unidos subieron de 20.836 a 43.570 millones de dólares anuales, equivalente a un aumento del 109%. **El gobierno mexicano no hizo nada frente a estas prácticas desleales de comercio, mientras que gobiernos como el de Canadá y Brasil emprendieron demandas antidumping contra las exportaciones desleales de Estados Unidos de América.**
- g- El Gobierno Federal miente sobre el nivel real de apoyo a los productores estadounidenses, pues no contemplan los apoyos integrales y a la conservación que reciben. El aumento de los apoyos directos a sus productos fue desorbitado, mientras la Organización Mundial de Comercio y la Ronda de Doha, yacen muertas y sepultadas.
- h- El Estado Mexicano no tiene los recursos fiscales para competir con los recursos de los Estados Unidos, en donde se apoya tanto a los productores como a los consumidores.
- i- Con la apertura total, el maíz importado de Estados Unidos, en volúmenes sin límite y sin controles sanitarios suficientes, llegará con fuertes respaldos financieros y subsidios, principalmente al momento de su exportación y de las cosechas nacionales, lo que significará una competencia desleal.

- j- Las empresas transnacionales se están haciendo cargo de las importaciones y del mercado nacional agrícola, en el que compran barato al ofrecer pago inmediato a los campesinos (a precio castigado) y entregan el producto a sus clientes a lo largo de todo el año y a crédito.
- k- Las organizaciones de campesinos mexicanos, salvo contadas excepciones, por falta de apoyo gubernamental, no tienen la capacidad financiera y de almacenamiento para igualar los servicios de estas empresas extranjeras subsidiadas por su gobierno.
- l- Ante estos hechos, el Gobierno Federal ha decidido dar prioridad a los intereses de Estados Unidos de América y de sus productores, por encima de lo que le manda la Constitución mexicana, el interés nacional, el interés público y el bienestar de la mayoría de los mexicanos.
- m- En este contexto, se privilegian las importaciones alimentarias sobre la producción nacional, aunque estén subsidiadas, como medio para reducir la inflación y contener el precio de los bienes-salario. **Aunque esta estrategia se le ha revertido al gobierno mexicano en los últimos años con el incremento de los precios internacionales derivado del uso creciente de los alimentos para la producción de biocombustibles en Estados Unidos y en Europa.**
- n- Estados Unidos acudió, con la complicidad de Salinas-Serra Puche, a negociaciones paralelas ilegales para evitar la exportación de 650 mil toneladas de azúcar excedentes en México. Hoy el mismo equipo continúa, en esencia, en los principales puestos que determinan la política agropecuaria y comercial del país.
- o- Estados Unidos aplica barreras no arancelarias con el propósito de impedir el tránsito de productos agropecuarios. Con la complacencia del Gobierno Mexicano, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos realiza revisiones fitozoosanitarias asimétricas, sin criterios científico-técnicos y en ocasiones hasta dolosas, alejadas de la equidad y el enfoque de espejo previsto en el TLCAN.

- p- La negativa a la importación del atún mexicano y al paso del transporte mexicano, son ejemplos de que harán uso de cualquier tipo de barreras para proteger a sus empresas de transporte y pesqueras.
- q- Se prevé que los precios internacionales se mantengan altos en el futuro, por lo que necesariamente aumentarán los costos de las importaciones de granos y cárnicos.
- r- Es falso que los mayores precios internacionales se traduzcan en mayores ingresos para los productores primarios, debido a los aumentos de precio en los insumos de producción (semillas, fertilizantes, combustibles) y la falta de apoyo a los productores para el almacenamiento de las cosechas y su comercialización. Además, por el hecho de que el mercado está controlado por monopolios que imponen precios al productor y al consumidor a su arbitrio y que por si esto fuera poco, concentran los subsidios a la comercialización.
- s- Si los precios internacionales son mayores a los nacionales, ello afecta directamente a los bienes salarios de toda la población; y si los precios son menores, continuarán descapitalizando y quitando rentabilidad a los productores primarios.
- t- Es una irresponsabilidad ante la Nación, dejar que los intereses de la economía mundial y las políticas de otra nación, puedan reducir aún más el acceso a los alimentos a los más pobres del campo y la ciudad, y que se tenga el peligro de reducir aún más el menguado poder adquisitivo de la población, que precisamente es la que mayor proporción destina a los alimentos. Es inaceptable que la política salarial sea incapaz de restituir el aumento de los precios de los alimentos y los que se presenten en el futuro.
- u- Sin una política soberana en materia de comercialización agroalimentaria, es imposible dar racionalidad a las diferencias de precios entre productores primarios e industriales, y entre productores nacionales e importaciones.

- v- Es una irresponsabilidad histórica dejar en manos de un puñado de empresas globales el acceso a los alimentos de la población del campo y la ciudad.
 - w- El Estado Mexicano debe cumplir con la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la que México forma parte, que incluye el derecho a la producción y acceso de los alimentos como un derecho humano, y acatar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ha establecido la mayor jerarquía de los tratados que protegen los derechos humanos, sobre otros tratados, por ejemplo de naturaleza comercial.
 - x- Estados Unidos está construyendo un Apartheid en América del Norte, lo que incluye un muro infame y la criminalización de la migración, que contradice todo su discurso de integración.
 - y- Existen, por lo tanto, razones jurídicas, económicas, sociales, de justicia y de soberanía que exigen la inmediata renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.
- 14- **Las consecuencias sociales y económicas del TLCAN agudizaron los problemas estructurales existentes del campo mexicano, por lo que son irracionales, injustas, inhumanas, inaceptables en cualquier nación civilizada, e indignas de la Nación Mexicana:**
- a- El empleo en el campo se redujo de 10 millones en 1991 a 5 millones en 2006, sin que hubiera otras opciones de empleo o producción económica.
 - b- Se ha dado un despojo acelerado de las tierras y el patrimonio campesino, especialmente de los pueblos indios, en aras de un supuesto progreso energético, turístico, mineral o urbano, totalmente ajeno a los intereses y derechos de los poseedores originales de las tierras, como los casos de la Parota en Guerrero y el proyecto energético eólico del Istmo de Tehuantepec, en los cuales no fueron consultadas las comunidades afectadas.
 - c- Más del 90% de los productores están vinculados a los mercados locales y regionales y el mercado nacio-

- nal; y la mayoría no tiene apoyos para el desarrollo de sus capacidades productivas. Únicamente el 2% de los productores está en posibilidades de exportar.
- d- Los 20 productos liberados en el 2003 representaban el 15% de los productores nacionales; el maíz, el frijol, la leche y el azúcar de caña, involucran al 85% restante y ninguno de ellos exporta, pero sí son víctimas del TLCAN, porque les impidieron su transición a la competitividad.
 - e- Es absurda la idea de que todos los campesinos se trasformen en productores de hortalizas y frutales y que todos emigren a las ciudades o a los Estados Unidos.
 - f- El 70% de la población rural está en condiciones de pobreza.
 - g- En los últimos seis años se ha expulsado a los campesinos de manera masiva de sus tierras: de 29.000 migrantes anuales a Estados Unidos, durante los años 1960-1970, se llegó a 455.000 en el 2006.
 - h- Todos los días muere más de un mexicano al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. Durante la existencia del Muro de Berlín murieron 350 personas en su intento de cruzarlo. Han muerto más mexicanos en la frontera con Estados Unidos durante el período TLCAN, que los muertos en los ataques terroristas en la Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.
 - i- Se han destruido millones de familias en el campo, se ha fracturado gravemente el tejido social y comunitario, hay tres millones de mujeres más que de hombres en el país, y se ha feminizado y envejecido la mano de obra rural.
 - j- Los consumidores no se han visto beneficiados con menores precios: en 1994 se podían comprar 38 kilos de tortilla con un salario mínimo y 6 kilos en la actualidad; 8 kilos de frijol antes y 3 ahora; 16 litros de leche antes y ahora 5 litros.
 - k- Se ha dado un incremento sistemático de los precios de los alimentos básicos y ha aumentado la malnutrición de los mexicanos: 20 millones sufren desnutrición y anemia.

- l- Debido a la destrucción de la alimentación tradicional mexicana y al consumo de comida chatarra y refrescos, casi el 70% de los mexicanos (70 millones de personas) tiene problemas de obesidad (40%) o sobrepeso (30%). En 2018 México será el país con más personas obesas del planeta. La incidencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes entre 1999 y 2006 aumentó del 21,9% al 28,7%. México es el segundo país con mayor consumo de refrescos per cápita en el mundo. Por otra parte, se tiene una grave desnutrición entre la población indígena y con mayor pobreza del país⁴.
 - m- Lo anterior ha provocado ya un grave problema de aumento de enfermedades como la diabetes, que tiene un enorme costo personal y económico para la sociedad.
- 15- El paradigma de apertura comercial y a la inversión extranjera, sin política de desarrollo, es un gigantesco fracaso. Es falso que la economía nacional está bien, que se haya beneficiado del TLCAN y de las políticas neoliberales, y que el Campo sea una excepción:
- a- El crecimiento de la economía desde 1982, es de 2,4% anual, contra el 6,5% anual durante los cincuenta años de 1932 a 1982. México tiene el menor crecimiento de América Latina y el Caribe.
 - b- Con una población de 107 millones de habitantes y una población económicamente activa de 42 millones, sólo se tienen 18 millones de empleos formales con seguridad social y el resto de la población sobrevive en la informalidad, la precariedad, la infrasubsistencia y la extrema pobreza.
 - c- México es una potencia importadora, no exportadora: la última década, **de 1998 a 2007, el déficit comercial acumulado es del orden de 78.330 millones de dólares.**
 - d- Pero, **sin exportaciones petroleras y maquila, este déficit comercial hubiera sido de 475.000 millones de dólares.**

- e- En 2007 México tuvo un déficit comercial total de 11.183 millones de dólares. El superávit con Estados Unidos se explica por la exportación sin valor agregado del petróleo crudo, y por la mano de obra de 800 mil mujeres y 400 mil hombres en la maquila. Durante 30 años el valor agregado nacional de la maquila ha sido del orden del 2,5%.
- f- El aumento de los salarios mínimos de 1,90 pesos para el año 2007 y de 2 pesos para 2008, continúa la política de imponer a los trabajadores condiciones de vida indignas, con el objetivo de concentrar los beneficios en un puñado de empresas y personas. Esta política es inhumana, injusta e irracional, pues al reducirse en 70% el poder adquisitivo del salario en las últimas dos décadas, se ha profundizado la desigualdad, la pobreza y la inequidad en la distribución del ingreso nacional, afectando incluso la posibilidad de recuperación del mercado interno del país.
- g- El país se ha desindustrializado y se han perdido miles de empresas. La industria aporta sólo el 27% del PIB del país, cuando en Brasil llega al 38,4%; Argentina 34,6%, Chile 46,8% y China el 47,5%⁵.
- h- El gasto público se redujo en 25 años del 42% del PIB, al 24% del PIB, dejando un estado neoliberal raquítico e impotente para promover la creación de la riqueza y la disminución de la desigualdad social. Ninguna nación desarrollada tiene ese nivel de gasto público y el promedio europeo es del 42% del PIB.
- i- PEMEX aportó más de 250 mil millones de dólares de impuestos de 2000 al 2006. En 2006 aportó 40% del presupuesto federal, que representó cerca del 9% del PIB, mismo que se ha destinado de manera irracional e injusta al gasto corriente y no a la inversión que requiere el propio PEMEX para incrementar las refinerías, pues importamos el 30% de las gasolinas que se consumen en el país y para exploración y perforación en aguas profundas, pues nuestras reservas probadas alcanzan para los próximos 8 años. Adicionalmente, se ha perdido la posibilidad de destinar inversión pública para el desarrollo

industrial, científico, tecnológico y la infraestructura que requiere el país.

- j- **Con reservas probadas de petróleo para 8 años, México se acerca a un precipicio, pues el resto de la economía no puede aportar los impuestos y divisas que ha venido aportando PEMEX.**
- k- El total de las personas morales del país se estima que aportan tan sólo un 2,4% del PIB por concepto de Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores contribuyen con dos terceras partes del ISR del país.
- l- **Con este modelo de desarrollo es imposible crecer, generar los empleos formales que requiere el país y aumentar los salarios.**

La modificación de este pacto de subordinación a los intereses de acumulación de las empresas globales y las naciones más ricas es una necesidad histórica evidente, pues es insostenible, injusto e inviable. Su transformación requiere el pleno ejercicio de las libertades de todos los mexicanos, de la soberanía del Pueblo de México y de la democracia sustantiva y representativa, bajo la conducción de criterios de justicia de carácter universal definidos en los derechos y deberes humanos.

El parteaguas del 2008

- 16- Ante los hechos claramente expuestos y razonados durante más de dos décadas, el Gobierno Mexicano ha decidido continuar con este modelo económico, y se ha negado a dar respuesta a las demandas de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil. El gobierno federal sirve únicamente a una minoría de empresas y grandes corporaciones para quienes el modelo económico neoliberal y el TLCAN ha sido efectivamente exitoso y benéfico. Esta es la razón de fondo de la continuidad de políticas económicas, agrícolas y comerciales que han sido lesivas a la economía nacional y a la mayoría de la población. Quien decide en este país son la oligarquía y los poderes fácticos, no el Pueblo de México ni los poderes de la República.

- 17- Así se constata en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; en el Programa Sectorial Agropecuario y Pesquero 2007-2012 y en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012, que fueron elaborados sin la participación real de la sociedad rural y que sólo mantienen inercias que no modifican en nada la política pública para el sector rural.
- 18- Se ha mantenido la decisión injusta de avanzar en la desgravación prevista en el TLCAN, en el marco del modelo descrito, atendiendo más a la fe neoliberal, a los dictados geopolíticos de Estados Unidos y a los intereses de las grandes corporaciones mexicanas y transnacionales, que a la razón, los intereses nacionales, el interés público y la Constitución Mexicana.
- 19- A pesar de tener mayores recursos este año, que pudieran contribuir al cambio del modelo en beneficio de la mayoría de los productores mexicanos, **el Gobierno Federal, fundamentalmente a través de SAGARPA, ha impuesto Reglas de Operación** no consensuadas con las organizaciones campesinas, con una complejidad artificial que hace imposible el acceso de los pequeños productores a los recursos públicos, en tanto que permite, concentra y orienta el presupuesto rural 2008, fundamentalmente a los empresarios y oligopolios, bajo un esquema centralizado, en contra de las organizaciones campesinas, y con evidentes finalidades de operación política.
- 20- Ante esta imposición gubernamental, las organizaciones hemos decidido construir un frente común con propuestas unitarias; movilizar y convocar a otros sectores de la sociedad; construir alianzas para cambiar al país, y tener un plan de acción de corto, mediano y largo plazo, que nos permita revertir la situación actual.
- 21- Lo hacemos como parte una nueva etapa de resistencia y de lucha, pero también de elaboración de alternativas y propuestas que permitan la construcción de un **Nuevo Acuerdo Social** para las próximas décadas, en búsqueda de la incorporación de los que menos tienen al desarrollo nacional, basado en una nueva economía política y una mayor democracia capaz de traducir en políticas públicas y de Estado, los mandatos de la mayoría de la población.

Premisas de nuestra propuesta de Agenda Común

Para transformar la actual situación del Campo y de la Nación, hemos acordado las siguientes premisas:

- a- La salvación del campo es la salvación de México, por lo que haremos una defensa intransigente del campo mexicano, y lucharemos a lado de otros sectores del pueblo mexicano por el rescate de la Nación.
- b- Defender el carácter multifuncional del sector agroalimentario, forestal, pesquero y sus insumos para la producción, así como los recursos naturales del país que deben ser aprovechados de manera sustentable y por lo que representan para la soberanía y la seguridad nacional y para la historia y el futuro de la Nación.
- c- Recuperar y ejercer a cabalidad nuestra independencia y soberanía popular y nacional, para construir un verdadero Estado social y democrático de derecho.
- d- Defender las libertades democráticas y la vigencia de las garantías individuales y sociales.
- e- Exigir que las decisiones de política pública reconozcan la integralidad y unidad de los derechos humanos civiles, económicos, sociales y culturales del Pueblo de México. Por ello, haremos prevalecer los derechos humanos de la población campesina y rural en su sentido amplio, ante cualquier tipo de imposición y uso de la fuerza del gobierno federal. Frente a la política excluyente y represora, opondremos la defensa integral de nuestros derechos y nuestras libertades.
- f- Establecer al maíz y la milpa como fundamento de la cultura popular mexicana, como signo de identidad de los mexicanos y como un derecho cultural de los indígenas y campesinos.
- g- Enfrentar y modificar la política en contra de los campesinos mexicanos; que se basa en: la cesión de nuestra soberanía agroalimentaria a los Estados Unidos de América, la entrega de nuestro mercado agroalimentario a veinte grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y transnacionales; el establecimiento de un sistema de malnutrición e inseguridad alimentaria para la mayoría

- de los mexicanos y el incremento de los precios de los alimentos básicos en detrimento de toda la población.
- h- Impedir que el Gobierno Federal siga conduciendo las políticas públicas en contra de la letra de la Constitución y del Estado de Derecho, y dé cabal cumplimiento a sus mandatos, a las obligaciones contraídas en los Tratados de Derechos Humanos que han sido suscritos y que subordine los tratados comerciales a los intereses nacionales.
 - i- Democratizar las decisiones económicas fundamentales, para construir un **Nuevo Acuerdo Social** que modifique la política económica, que asegure la inclusión social, la equidad, la competitividad internacional, el empleo y la alimentación de todos los mexicanos, así como el control y la administración eficiente de la Nación sobre sus bienes básicos y estratégicos.

Agenda Común para el Rescate de la Soberanía Agroalimentaria y la Reactivación del Campo

Las organizaciones hemos acordado la siguiente Agenda para la Transformación del Campo Mexicano, misma que presentamos a la Nación, al tiempo que exigimos y emplazamos al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, a que le den una respuesta urgente y puntual:

I. Recuperar y fortalecer la soberanía nacional.

- 1- Exigir la **inmediata renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN**, a efecto de recuperar la soberanía agroalimentaria cedida en dicho tratado, lograr que el desarrollo sea el centro de la relación trilateral, asegurar el derecho de México a la protección de sus productos básicos y estratégicos para la seguridad y soberanía agroalimentaria, reconocer el derecho de la Nación sobre el patrimonio genético y natural; lograr la entrada temporal de los campesinos a los Estados Unidos y Canadá como "Personas de Negocios", de acuerdo a lo establecido en dicho tratado⁶; así como crear un Fondo Trinacional para la Eliminación de las Asimetrías entre los tres países.

- 2- Demandamos al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión una **inmediata moratoria al TLCAN *plus***, el llamado Acuerdo por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) por violar la Constitución, la soberanía nacional y derecho al desarrollo del Pueblo de México. Asimismo, rechazamos la mal llamada Iniciativa Mérida (Plan México) que pretende subordinar nuestra seguridad nacional a los planes y mando de Estados Unidos y exigimos al Gobierno Mexicano el rechazo de los recursos con los que se pretende subordinar las instituciones nacionales a la soberanía extranjera.
- 3- **Defensa irrestricta de los recursos energéticos nacionales**, petróleo, gas y electricidad; mantener la prohibición de la inversión privada nacional y extranjera en las actividades del sector energético; fortalecer, y considerar a las empresas públicas como instituciones de Estado, que deben contribuir a impulsar el desarrollo integral de la Nación y el campo.

II. Administrar el comercio exterior con base en la Constitución y en beneficio de los mexicanos.

- 4- Exigimos al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Legislativo expedir de manera inmediata un Decreto para instruir a la Secretaría de Economía para el establecimiento de un mecanismo de administración del comercio exterior del maíz y frijol, así como sus derivados y subproductos y la creación de una reserva estratégica alimentaria nacional con los campesinos organizados.

III. Modificación inmediata de la actual política de desarrollo productivo y rural, y establecer otra de acuerdo a la Constitución y la soberanía agroalimentaria y nutricional.

- 5- Exigimos que el poder ejecutivo federal, el poder legislativo y los gobiernos de los estados ratifiquen el Acuerdo Nacional para el Campo, mediante la firma

- del adendum ya aprobado en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable con las organizaciones campesinas.
- 6- Rechazamos categóricamente las Reglas de Operación que unilateralmente SAGARPA y SEMARNAT publicaron, y exigimos la negociación y consideración de nuestra propuesta alterna que fue definida y aprobada por todos los actores sociales del campo, de conformidad con los acuerdos del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Estamos en contra de la utilización discrecional, clientelar, electoral y corporativa de los programas públicos por el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios.
 - 7- Demandamos la inclusión de los siguientes programas estratégicos: a) *Programa multianual de inversiones estructurales y de fomento productivo*, como parte de los subsidios para el campo, en las regiones rurales y de agricultura campesina, con prioridad en la producción campesina de alimentos básicos y estratégicos para la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional, que incluya infraestructura hidroagrícola, equipos para análisis de suelos, construcción de centros de acopio y caminos; b) Programa Multianual de Erradicación del Hambre y la Desnutrición; c) Programa de Generación de Empleo Rural No Agropecuario, con énfasis en zonas expulsoras de mano de obra; d) Programa de sustitución de importaciones de granos, oleaginosas y leche; e) Constituir el sistema nacional de financiamiento rural, con mecanismos de adquisición de cosechas nacionales; f) Programa de Extensionismo Rural con base en Instituciones Públicas; g) Industrialización del campo; y h) programas multianuales de fomento productivo por rama de producción, que combatan la pobreza y propicien equidad, aplicando mayores recursos de inversión a los campesinos de bajos ingresos y regiones de muy alta y alta marginación.
 - 8- Reestructuración y reorientación, con la participación de las Organizaciones Campesinas, de las políticas

públicas agropecuarias, forestales, pesqueras y de desarrollo rural, de mediano y largo plazos y del presupuesto federal para el campo.

- 9- Establecer una política de Estado y una reforma legal que restituya, reconozca, garantice y desarrolle a los ejidos y comunidades agrarias, su reconocimiento como unidades económicas y sociales que les permita plenamente el usufructo, aprovechamiento, explotación, control y disfrute de sus recursos naturales y su incorporación y participación en cualquier proyecto de desarrollo e inversión, público, social o privado, en su territorio.
- 10- Reforma estructural de las instituciones del sector rural, reestructuración de SAGARPA, ASERCA, SEMARNAT y la banca de desarrollo rural y creación de la Secretaría de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, para que den atención eficaz al 95% de los productores y deje de concentrarse en atender el 5% de los productores comerciales.
- 11- Garantías del Estado mexicano para la provisión soberana de insumos productivos: agua, semillas, fertilizantes y energéticos; y de la infraestructura de almacenamiento, logística y comercialización para los productores organizados.
- 12- Desarrollo de una política energética pública en beneficio del sector rural que disminuya los precios de sus derivados como la energía eléctrica, diesel y gasolina para las actividades productivas del campo e impulse la producción nacional de fertilizantes nitrogenados. Asimismo, el fomento a la producción y uso de biocombustibles provenientes de las actividades agropecuarias y forestales, garantizando en primer lugar la producción de alimentos para consumo humano, en el marco de la política de soberanía energética del país.
- 13- Detener el sistemático y permanente despojo, deterioro y destrucción de los recursos y riquezas naturales de ejidos y comunidades, que promueven diversas empresas nacionales y extranjeras, con el apoyo del gobierno federal y local, de carácter turís-

tico, inmobiliarias, forestales, agroexportadores y de manejo de desechos tóxicos, constructoras y demás. Cierre de Minera San Javier, cierre del confinamiento de Zimapán. Alto a la destrucción de manglares, bosques y selvas. Castigo y cárcel a ecocidas.

- 14- Fortalecer el sistema educativo y de investigación rural público para formar profesionistas con visión nacionalista e innovadora y el desarrollo de una investigación científica y tecnológica acorde a la diversidad socioeconómica, tecnológica y ecológica del País, aumentando los recursos públicos para la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el INIFAP, principalmente.
- 15- Exigimos la prohibición a la siembra de maíz transgénico y el establecimiento de un programa multianual de fomento productivo y de mejoramiento tecnológico para la producción de maíces criollos, híbridos y orgánicos e efecto de proteger nuestra riqueza genética, la economía campesina y satisfacer la demanda nacional⁷.
- 16- Establecer una política de Estado de mediano y largo plazos para la protección, uso sustentable y resguardo jurídico por parte del Estado Mexicano de los recursos de la biodiversidad en beneficio del Pueblo de México y como garante de los mismos ante la humanidad; aplicación del principio precautorio en relación con los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) e impulso a su investigación en México, exclusivamente por instituciones nacionales; protección jurídica de variedades con la asociación de Organizaciones Campesinas, prohibición de la importación de productos alimenticios que incluyan OGM, y adecuación del marco jurídico a estos criterios.
- 17- Nos solidarizamos con la demanda de incremento salarial de emergencia del 30% y exigimos un control de precios de la canasta alimentaria básica y acciones contra los monopolios agroalimentarios, ampliando las facultades en la Ley Federal de Competencia contra las prácticas anticompetitivas.

18- Garantizar la vigencia de los derechos laborales y humanos de los trabajadores agrícolas y de los migrantes, y prohibición de la explotación de la mano de obra infantil en las empresas agrícolas.

IV. Restablecer la protección jurídica de la propiedad social y aprobar las bases normativas de la soberanía agroalimentaria.

19- Demandamos a la Cámara de Senadores la aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional y a la Cámara de Diputados la Minuta del dictamen al derecho constitucional a la alimentación.

20- Defensa del territorio, la propiedad social y los recursos naturales de los campesinos e indígenas, mediante cambios legislativos pertinentes; que reviertan las reformas al artículo 27 constitucional y la ley agraria; restituyan el derecho a la tierra como un derecho al trabajo; restablezcan a la parcela ejidal como patrimonio familiar; prohíban que las sociedades mercantiles sean propietarias de predios rústicos y restitución del derecho de preferencia sobre la explotación de los recursos naturales.

V. Respeto irrestricto de las libertades democráticas del Pueblo de México, amnistía a los presos políticos de movimientos y luchas sociales y democráticas, y eliminación de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo Federal.

21- Exigimos el reconocimiento y plena vigencia de los derechos de los pueblos indios de conformidad con los Acuerdos de San Andrés y la Declaración de la ONU correspondiente.

22- Demandamos al Gobierno Federal la concesión de un canal de televisión abierta de alcance nacional y una señal de radio de alcance nacional para la sociedad civil organizada y el respeto a las radios indígenas y comunitarios, para que sean operadas de manera

autónoma por estas instituciones y organizaciones, a efecto de contribuir al cabal cumplimiento del derecho a la información e impulsar la democratización de los medios de comunicación en México. Exigimos al Congreso de la Unión las reformas jurídicas necesarias para cumplir con este propósito. Asimismo, exigimos el acceso a los tiempos oficiales en los medios privados y a los medios públicos de radio y televisión federales y estatales, para la expresión de las voces del campo.

- 23- Demandamos el respeto a las libertades democráticas conquistadas por las luchas del pueblo mexicano, el cese a la represión de dirigentes y movimientos sociales en el país y suspender la criminalización de la protesta social. Cese de la represión contra los trabajadores y sindicalistas y pleno respeto a sus movimientos que proponen demandas legítimas, justas y legales, como en el caso de la Minera de Cananea; y cese de la represión contra las bases de apoyo del EZLN. Amnistía general para los presos políticos vinculados a las luchas campesinas y por las libertades democráticas; como los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas, entre otros. Por lo anterior, rechazamos categóricamente la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública que eleva a rango constitucional el allanamiento de domicilios, los arraigos y cateos, la incomunicación y el uso de comunicaciones privados, entre otros aspectos. Estas reformas lesionan nuestras garantías individuales bajo el pretexto de la lucha en contra de la delincuencia organizada, imponiendo un criterio policiaco para generar un régimen de excepción.

En suma, demandamos establecer un verdadero diálogo democrático y acuerdos con organizaciones campesinas en beneficio de todos los mexicanos para recuperar la soberanía agroalimentaria, mantener la soberanía energética, recuperar el poder adquisitivo de la población, aumentar y diversificar el ingreso campesino, promover empleos formales, recupera las instituciones públicas de seguridad social, respetar los derechos laborales, e iniciar la construcción de un **Nuevo Acuerdo Social**.

Plan de acción

Para lograr los objetivos anteriores, realizaremos las siguientes acciones:

- 1- Declararnos, de manera conjunta con la UNT y el Frente Sindical Mexicano, en resistencia y en propuesta alterna frente al gobierno federal y su política anticampesina, de subordinación a los intereses de Estados Unidos y de las grandes corporaciones mexicanas y transnacionales, y ante su intento de imponer un estado policíaco-militar en México.
- 2- Declarar 2008 como año del Movimiento Mexicano por la Soberanía Alimentaria y el Rescate del Campo.
- 3- Fortalecer el Movimiento Campesino, Sindical y Civil, mediante amplias alianzas en todo el territorio nacional, con un espíritu de unidad y pluralidad, que conduzca de la resistencia hacia la construcción de un nuevo Pacto Social.
- 4- Caravana Nacional Campesina a la Ciudad de México del 18 al 30 de enero, incluyendo entre otras, las siguientes acciones: tractorada de El Chamizal, Ciudad Juárez, a la Ciudad de México del 18 al 30 de enero; caravana campesina de Mérida a la Ciudad de México, entre otras.
- 5- Marcha Nacional Campesina del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México el 31 de enero de 2008, que será complementada por marchas, mítines y tomas de las Delegaciones de SAGARPA en todas las entidades Federativas del país, así como manifestaciones en Puentes y Puertos Internacionales. Estas acciones serán el punto de partida de otras acciones hasta la consecución de nuestros objetivos aquí planteados.
- 6- Emplazar a Felipe Calderón a un debate público sobre el TLCAN y las políticas gubernamentales hacia el campo así como a su gabinete y a sus representantes en las entidades federativas.
- 7- Impulso a la Campaña de Un millón de Firmas Contra el TLCAN.
- 8- Impulsar las articulaciones regionales de las organizaciones rurales, antes y después del 31 de enero, para lograr la participación de todas las comunidades rurales en todo

- el país, en la reflexión, deliberación y acciones para la transformación de la realidad del campo.
- 9- Hacer foros de análisis, reflexión, consenso y acción conjunta, a nivel comunidad, región y estados, para lograr la construcción de un gran acuerdo y consenso social, con mandatos claros para los gobernantes.
 - 10- Referéndum Nacional el 10 de Abril, desde las comunidades rurales, promoviendo debates, foros y brigadas, para establecer un nuevo Mandato para la Nación, por la renegociación del TLCAN y una nueva Política de Estado para la defensa de la soberanía agroalimentaria y la reactivación del campo, con acciones y pronunciamientos desde cada comunidad rural, municipio, congreso local y gobierno estatal.
 - 11- Encuentro Trinacional de Legisladores y Organizaciones de la Sociedad Civil.
 - 12- Convención Nacional de Legisladores del Sector Rural, para revisar los mecanismos legales de la renegociación y protección para los productores nacionales.
 - 13- Organizar un Congreso Nacional Obrero, Campesino, Indígena y Popular.
 - 14- Organizar, de ser necesario, un Paro Agrario Nacional.
 - 15- Relacionar nuestras acciones con otros movimientos sociales en defensa del petróleo, de la energía eléctrica, de los medios de comunicación, la transformación educativa, los derechos laborales, el estado laico, los derechos humanos y sociales, para avanzar en la construcción de un **Nuevo Acuerdo Social** para el país.
 - 16- Llevar a cabo una campaña de información y concientización a todos los niveles de la sociedad, que incluya los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de la situación del campo y del país.
 - 17- Promover las modificaciones al marco legal vigente rural, así como el pronunciamiento y compromiso de los Congresos estatales y del Congreso de la Unión, para la recuperación de la Soberanía Agroalimentaria, el derecho a la alimentación y por una Política de Estado nacionalista, debidamente consensuada y justa para el sector rural.
 - 18- Sumar nuestras fuerzas y articular los movimientos sociales en torno a una agenda a favor de un nuevo modelo económico, un Estado social y democrático de derecho,

la defensa de las riquezas nacionales, las libertades democráticas y los derechos individuales y colectivos de los mexicanos en el marco de una sociedad pluriétnica y pluricultural, y en defensa activa contra el ultraje de la globalización contra el Pueblo de México.

Llamamientos

Convocamos al Congreso de la Unión a que, en el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, reoriente las políticas, leyes, tratados y acciones que tanto daño han hecho al campo y al país en su conjunto. En su condición de depositario de la soberanía popular lo exhortamos a ejercer un eficaz contrapeso a un poder presidencial secuestrado por la oligarquía y obcecado por la defensa de los intereses externos y de una minoría de empresarios monopólicos y apátridas.

Convocamos a las Cámaras de Diputados y Senadores para que, con carácter de urgente, analice este Manifiesto Campesino y convenga con las organizaciones firmantes un Acuerdo para adecuar de manera integral el marco legal necesario a una nueva Política de Estado para el campo mexicano, que incluya, entre otros temas de la Agenda Legislativa, los siguientes:

- 1- Expedición de un Decreto por el que se mandate al Ejecutivo Federal a solicitar formalmente a los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá, la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.
- 2- Aprobación de una ley para establecer un mecanismo permanente de administración del comercio exterior del maíz, frijol, edulcorantes y leche, así como sus derivados y subproductos y la creación de una reserva estratégica alimentaria con campesinos organizados.
- 3- Aprobación por la Cámara de Senadores de la Minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional y por la Cámara de Diputados de la Minuta de reforma constitucional para incluir el derecho a la alimentación.
- 4- Aprobación por la Cámara de Senadores de la Minuta de Ley para el Desarrollo Sustentable de la Cafe-

ticultura aprobada por la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura.

- 5- Aprobación por la Cámara de Senadores de la Minuta de Ley de Gas Natural de Proceso, Amoníaco y Fertilizantes Nitrogenados.

Emplazamos al Ejecutivo Federal a establecer condiciones que manifiesten la voluntad política de dar respuesta a nuestro Manifiesto, como las siguientes decisiones:

- 1- Expresión pública del Titular del Ejecutivo Federal de su disposición a revisar y concertar, a través del diálogo con las organizaciones campesinas suscritas, el Capítulo Agropecuario del TLCAN y una nueva Política de Estado para el campo.
- 2- Asumir de manera directa y personal la responsabilidad de su Gobierno en un debate de cara a la Nación, en torno a los dos temas arriba enunciados.
- 3- Instrucción inmediata para que se revisen y modifiquen las reglas de operación 2008 de los programas de SAGARPA Y SEMARNAT, de conformidad con lo acordado en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
- 4- Cese inmediato de las campañas mediáticas en contra de las organizaciones campesinas

Llamamos al Pueblo de México:

A las organizaciones sociales y políticas
 Al Consejo Nacional Indígena
 A la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano y a los sindicatos agrupados en estas organizaciones
 Al Movimiento Urbano Popular
 A los trabajadores petroleros, de la industria eléctrica y nuclear
 A los mineros
 A las Maestras y Maestros de este país
 A todos los sectores económicos
 A las organizaciones de consumidores

A los movimientos sociales que defienden los recursos naturales y los territorios rurales
A las organizaciones de derechos humanos
A los estudiantes, académicos, intelectuales, científicos, artistas y ciudadanos
A los movimientos campesinos de América Latina y de pequeños productores de Estados Unidos y Canadá
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A las organizaciones cívicas y personas de buena voluntad en todo el mundo

A establecer una alianza nacional de movimientos y organizaciones progresistas y democráticos, para recuperar la nación y la soberanía nacional; articular nuestras luchas en torno a una agenda común de transformaciones económicas, sociales y políticas que permitan cambiar el rumbo del país.

¡Alianza Campesina por un Campo Moderno y Socialmente Justo!

¡Ya Basta! ¡Muera el TLCAN Agrícola!

¡No dejaremos la alimentación del Pueblo de México en manos de monopolios e intereses extranjeros!

¡Alianza Campesina e Indígena por nuestra riqueza territorial, cultural, de conocimientos y germoplasma nativo!

¡Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco!

¡El campo no aguanta más. El país tampoco!

¡Salvemos al campo para salvar a México!

¡Alianza Campesina por un Campo sin Pobreza!

Dado en el Zócalo de la Ciudad de México
el 31 de enero de 2008.

Atentamente

Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y por la Reactivación del Campo *Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco* (AMUCSS, ANEC, CNOC, FDCCH, RED MOCAF, UNOFOC, MAÍZ, CNPA, BARZÓN-ANPAP, COAECh); Consejo Nacional de Organismos

Rurales y Pesqueros-CONORP (CCC, CODUC, CIOAC, COCyP, CNPA-MN, BARZÓN POPULAR, UGOCM, UPAX, APNDRU, UFIC, FEPUR, STINCA); Confederación Nacional Campesina (CNC), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), UCIZONI.

Notas

1 Cámara de Diputados-LX Legislatura-Comisión de Agricultura y Ganadería, *El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá: su impacto en el campo de México*, 4 de enero de 2008.

2 *El Financiero*, 14 de febrero de 2008.

3 *El Financiero*, 14 de febrero de 2008.

4 Encuesta Nacional de Salud 2006 en *El Universal*, 14 de enero de 2008.

5 *El Financiero*, 13 de diciembre de 2007.

6 El Capítulo XVI del TLCAN permite la entrada temporal de "personas de negocios" entre los tres países.

7 "El Gobierno de Francia decidió el viernes suspender el cultivo de maíz

transgénico Mon810, en aplicación de un recurso preventivo de salvaguarda de la Unión Europea, informó la oficina del primer ministro, François Fillon. El gobierno acató de ese modo el parecer de la alta autoridad provisional francesa sobre los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), que el miércoles pasado señaló la existencia de 'nuevos elementos científicos' que plantean numerosas interrogaciones sobre el Mon810. Ese maíz es el único OGM cultivado actualmente en el territorio francés, con 22.000 hectáreas plantadas el pasado año, que representan apenas el 0,75% de los 2,8 millones de hectáreas de maíz cultivadas en Francia" (Agencia AFP, París, 12 de enero de 2008).

Documento

La privatización de PEMEX: un crimen de lesa patria

México DF, marzo de 2008

Cómo citar este documento

OSAL 2008 "La privatización de PEMEX: un crimen de lesa patria" (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

Grupo Sur

PEMEX es la empresa más rentable de México. Los ingresos derivados del petróleo representan alrededor del 50 por ciento del presupuesto federal. Se trata de una gigantesca fuente de riquezas que siempre ha despertado el apetito de intereses privados de dentro y de fuera. La expropiación de la industria petrolera decidida por Lázaro Cárdenas buscaba convertirla en un puntal del desarrollo del país. La riqueza petrolera bien empleada es una palanca para nuestro futuro y factor de nuestra independencia.

¿Si se privatizara PEMEX, a dónde irían estas cuantiosas ganancias? ¿De qué otra fuente obtendría el gobierno mexicano los formidables ingresos fiscales que dejaría de percibir? En verdad, la planeada "reforma" de PEMEX significaría la transferencia de fabulosas riquezas a manos privadas, principalmente extranjeras. Son incalculables los daños que se producirían al país. Debe decirse sin tapujos que quienes impulsan el despojo de la principal riqueza de México, conspiran contra la nación.

La historia reciente

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se optó por la venta de petróleo crudo en lugar de construir refinerías para elaborar nuestras gasolinas, mientras se desalentaron las ramas de la petroquímica que permiten mayores ingresos y menor

dependencia. Los sucesivos gobiernos priístas siguieron los dictados del Banco Mundial y de Estados Unidos: sabotear el desarrollo de PEMEX para ponerlo en punto de venta.

Lo lograron en parte al imponerle exacciones fiscales que ninguna empresa del mundo puede soportar, mientras se consiente al sector privado con una baja carga tributaria. Es por ello que en apariencia la empresa pública no gana y está en "crisis". Saqueando a PEMEX vía impuestos, escondieron su incapacidad para lograr una economía sana con un crecimiento sostenido. Correspondía a sus intereses seguir sangrando a PEMEX, en lugar de implementar medidas juiciosas y a favor de la nación. Asimismo, parte del guión para extenuar el sector energético fue el desmantelamiento de centros de investigación y desarrollo como los Institutos Mexicano del Petróleo, de Investigaciones Eléctricas y de Investigaciones Nucleares.

Con los gobiernos panistas esta vía llegó a su clímax. Vicente Fox y su pequeño grupo derrocharon los recursos adicionales que ingresaron al país gracias al alza internacional del precio del petróleo. Esos fondos no se utilizaron para fortalecer el sector productivo (incluyendo el campo y la propia industria petrolera); se fueron al gasto corriente y a algunos bolsillos.

¿Por qué les urge privatizar PEMEX?

Este manejo ineficiente y sesgado de sucesivos gobiernos, tiene hoy a la economía del país en grave trance. Por un lado, hay una fuerte deuda interna que proviene de los Proyectos de inversión diferidos en el gasto, PIDIREGAS; por otro, es un hecho que la crisis económica de Estados Unidos tendrá un fuerte impacto, pues habrá menos compras de nuestros productos, menos empleos para nuestros paisanos allá y menos remesas de estos, que son nuestra segunda fuente de divisas.

Ante esta perspectiva, a la pequeña oligarquía dominante, al PAN y a sus aliados en el PRI, les urge privatizar a PEMEX, alegando que está en crisis. Según creen, llegaría dinero "fresco" que, una vez más, tapanía sus ineficiencias y atenuaría la profundidad de los problemas. Y hasta sueñan que con ello podrían lograr en 2009 una votación que les permita acabar de saquear al país con leyes a modo dictadas en las cámaras.

Pero lo que está en crisis no es PEMEX sino el modelo socioeconómico que este grupo representa. Lo que quieren no es evitar una crisis al país, sino salvar el esquema económico y político que han impuesto, e incluso robustecer el régimen elitista mediante una nueva orgía de concesiones, negocios turbios y enriquecimiento fácil, mientras las mayorías se siguen empobreciendo.

Es evidente que el proceso de privatización impuesto desde hace 25 años no es el modelo a seguir. Carlos Salinas de Gortari reprivatizó la banca y vendió TELMEX, lo que trajo grandes flujos de capital (1991-1993); aún así, se dio la crisis a fines de 1994 y no hemos salido del estancamiento. El proceso de privatizaciones ha continuado en la industria del acero, la aviación, la minería, la infraestructura, incluyendo la participación creciente de la inversión privada en la CFE y PEMEX desde 1997 hasta la fecha (en el 2007, del total de la inversión realizada en PEMEX, el 95% fue privada). A pesar de ello, la economía y con ella la sociedad, van de mal en peor. Lo que se requiere es el cambio del modelo; y la sustitución de ese grupo en el poder, que se ha caracterizado por su incompetencia, corrupción y carencia absoluta de sensibilidad social.

Estados Unidos y las grandes corporaciones son parte del festín que se prepara. A estos les interesa intervenir directamente en la industria petrolera mexicana y ser rectores en el negocio. Los grandes yacimientos de petróleo fácilmente extraíble de Estados Unidos y de Arabia Saudita han llegado a su punto de declive. Apoderarse de los más importantes yacimientos es parte de su estrategia de dominio global. Estamos en grave peligro como país. Una vez que sus empresas se asentaran aquí, nada los detendría; pronto verían la manera de tener control, incluso militar, sobre nuestros yacimientos, plantas y gaseoductos.

Estimulados por el olor a negocios, desde el poder se ha comenzado a seducir o sobornar a funcionarios, legisladores, medios de comunicación y comunicadores para que se difundan mentiras o verdades a medias que impidan a la población tomar decisiones informadas. Falsedades como la carencia de recursos y de tecnologías propios para impulsar a PEMEX, campean cínicamente. Privatización y corrupción están indisolublemente hermanadas.

Los mexicanos no nos dejaremos engañar con galimatías para encubrir la privatización. Con la pretensión de ocultar su verdadero propósito, los traidores a la patria juran que no quieren privatizar a PEMEX, sino tan sólo “reformarlo”, “democratizarlo”, “sanearlo”, “modernizarlo” o promover “asociaciones” y “alianzas”. Estos términos no son más que parte del nuevo Diccionario de Sinónimos Privatizadores. El fondo del asunto es que se permita a manos privadas aprovecharse de un recurso vital que es y debe seguir siendo *público*. Llámese como se llame, eso es privatizar nuestra empresa estratégica.

¿Qué ocurriría si se permite la abierta participación de capital privado en PEMEX?

Los que adquieran acciones de PEMEX u otras concesiones “legales”, empresarios en busca de máximos rendimientos, muy pronto elevarían aún más los precios de los combustibles, presionarían al gobierno para que los impuestos con que hoy se sangra a PEMEX no se aplicaran a ellos. Finalmente, las ganancias volarían lejos de aquí, como ya ocurre. Como consecuencia, se reduciría aún más el presupuesto para la educación pública, el sistema de salud, el campo, la cultura; habría mayor deterioro y pobreza. Los impuestos que no ingresen vía PEMEX tendrían que salir de nuestros bolsillos; hasta un sector de los empresarios se vería seriamente afectado. Tendríamos un gobierno aún más débil y sin capacidad para defender los intereses de la nación.

Vulnerando la Constitución, ya se han dado pasos privatizadores en el sector energético. Se trataría ahora de violentar por completo el orden constitucional desde reformas secundarias. La privatización, no hay que olvidarlo, se haría contra la Carta Magna. En el momento en que Estados Unidos implementa medidas de protección desde el gobierno, Dinamarca fortalece la presencia del Estado en sus empresas de hidrocarburos y países como Holanda, Brasil y Argentina están dando marcha atrás con las privatizaciones, mientras Bolivia y Venezuela batallan contra la voracidad de las transnacionales petroleras, en México, a contracorriente, gobernantes obtusos y al servicio del gran capital, dan la espalda a la Constitución y se empeñan en privatizar lo que es de la nación.

Un gran peligro para la nación

Es un momento crucial. Con la privatización de PEMEX se cancelarían uno de los instrumentos fundamentales para proyectar nuestro futuro. Está en juego el porvenir de México como nación independiente y digna.

Vivimos uno de los momentos más graves de nuestra historia. Pero no nos cabe duda de que, con la Constitución en la mano, mexicanos y mexicanas de todas las edades, creencias y organizaciones, en todos los rincones del país, sabremos realizar una movilización nacional jamás vista para impedir este atropello, este descarado despojo. Levantaremos la meta combinada de impedir la participación privada en PEMEX e impulsar un cambio verdadero que logre desterrar el gran desorden económico, político, legal y social imperante. Que no se equivoquen los privatizadores. Si se aventuran a lanzar su iniciativa, el destino de PEMEX no se decidirá en las sombras de los gabinetes o los despachos, sino en las calles.

Guillermo Almeyra (político y periodista)

Cristina Barros (opinionista y periodista)

Armando Bartra (antropólogo, UAM)

Marco Buenrostro (opinionista y periodista)

Elvira Concheiro (cientista político, UNAM)

Héctor Díaz-Polanco (antropólogo, CIESAS)

Javier Flores (opinionista y periodista)

Víctor Flores Olea (cientista político)

Gerardo de la Fuente (filósofo, UNAM)

Rosa Elena Gaspar de Alba (antropóloga, UNAM)

Arturo Huerta (economista, UNAM)

Epigmenio Ibarra (guionista)

Massimo Modonesi (historiador, UNAM-UACM)

Lucio Oliver (sociólogo, UNAM)

Carlos Payán (director fundador de *La Jornada*)

Consuelo Sánchez (antropóloga, ENAH)

John Saxe-Fernández (sociólogo, UNAM)

Gabriel Vargas Lozano (filósofo, UNAM)

Sergio Zermeño (sociólogo, UNAM)

Documento

Muchas manos y un solo corazón para luchar

Oaxaca, 1 de marzo de 2008

Cómo citar este documento

OSAL 2008 "Muchas manos y un solo corazón para luchar" (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

Desde las comunidades que integramos el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón damos nuestra humilde palabra a esta Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO.

Un balance a güe. . . so

A un año del congreso constitutivo de la APPO somos poco de lo que nos propusimos ser. La realidad dice que, lejos de alcanzar mayor organización y otro nivel de conciencia de los participantes, sólo llegamos a estructura burocrática que expresa las contradicciones y lucha entre unos cuantos por imponerse y desde ahí visualizar sólo a quienes se apropiaron y lucran con el movimiento.

Con este proceso la gente se identifica cada vez menos. Y no es que se teman o nieguen las contradicciones, o los procesos normales del crecimiento, no, sino lo que no se está dispuesto es a continuar repitiendo formas que han probado su ineficacia para circunstancias concretas como las que actualmente vive nuestro país y Estado.

La APPO ha probado tener una estructura infuncional que fortalece la lucha fraticida. La concentración de decisiones en pocas manos: vocería, prensa, relaciones, etc.

Los muertos, heridos, presos, procesados y todo el dolor padecido se lo disputan algunos para lucrar con él y olvidan a los que no se sujetan a ellos. El nivel del debate y la lucha ideológica no tiene el ánimo para construir un movimiento sólido.

Se aprecian dos tipos de democracia: la de las barricadas y la de una estructura anquilosada. Se sigue con la vieja idea de la vanguardia que alumbra a los otros, que desprecia el potencial del pueblo y que marca una de las diferencias en el tipo de proyecto que se enarbola en el seno de la APPO. El problema no es que exista, sino que se imponga.

Desde el 25 de noviembre hemos estado sujetos a la lógica del Estado. Hemos sido incapaces de poner nuestro ritmo y recuperar la iniciativa en el proceso. Se piensa apenas en las acciones espectaculares, que si bien ayudan a no perder el ánimo, no garantizan la construcción del movimiento de abajo y a la izquierda y puede conducir a un desgaste.

Comisiones que no funcionan, representantes que abusan de su papel, falta de relación con el movimiento real y concreto. Administración del prestigio y de la fuerza que representa la APPO para escalar posiciones, negociar y aprovechar a los otros. El ejemplo concreto y real es el del Maestro Zenen Bravo.

No hemos ido más allá de los planes de acción. Sigue una facción con el control de los espacios, página, representación, voceros, etc., se centra el esfuerzo en la coyuntura y sólo trabajan de fondo los proyectos organizativos que están al interior de la APPO, pero como APPO sólo se hacen acciones mediáticas y de coyuntura, que si bien mantienen el ambiente de que la resistencia sigue, no será de este modo como se logre derrotar al tirano, quien comienza a mostrar signos de recuperación a partir de los acuerdos a que está llegando, dice él, con algunos grupos, que parecen ser verdad pues no han existido protestas para impedir su presencia en sus llamados informes regionales, salvo la acción de Putla, en muy pocos lugares.

Sólo hacemos llamados a la unidad que nuestra práctica descalifica, sólo se ha convertido en una pelea donde los protagonismos se imponen a las necesidades de construir. Hay tácticas diferentes: hay quienes apuestan a co-

par las posiciones de la estructura de poder y los medios de comunicación sacando provecho del trabajo que muchos, por el contrario, están haciendo desde abajo.

La estrategia de privilegiar los actos mediáticos y las acciones espectaculares es parte de un espejismo, mientras que, a medida que el desencanto de la gente crece y se hace cada vez más difícil articular la unidad, se requiere renunciar al protagonismo, y cambiar y hacer rotativa la representación.

Se tienen que dejar las banderas para que sumemos como uno solo, se tienen que hacer las aclaraciones necesarias, y dejar de una vez por todas las descalificaciones y las exclusiones que se hacen como práctica. Eso implica reconocer sus calumnias que han dañado y desacreditado el trabajo de todos y todas. Metidos en un espacio donde nuestros errores, las traiciones, el uso del movimiento para ocupar puestos, la manipulación de la información, el acaparamiento de la visibilidad, etc., han sido bien utilizados por el enemigo para que fomente la división.

El trato desigual a los problemas, pues mientras si se menciona lo que pasa con los desaparecidos de organizaciones guerrilleras se olvida denunciar las agresiones en las comunidades y la situación de los exiliados. Es decir, una política de hegemonizar y de querer forzar a que la gente se sume a una u otra posición o bloque de los considerados hegemónicos. Mientras otras organizaciones están en otra banda, jugando en más de una, negociando, teniendo interlocución, lo que le permite al gobierno asegurar que está hablando con todos.

En este sentido, tenemos que llamar a la reflexión sobre el tipo de organización que necesitamos porque está probado que la forma actual de funcionamiento y de práctica que tiene la APPO jamás nos llevará a la vida digna, justa y libre que soñamos.

Nosotros insistimos pues que lo que necesitamos es una organización en movimiento más que una estructura burocrática y hegemonizante. Una asamblea de los miles de rostros encapuchados y no encapuchados, sonidos y palabras distintas, variedad de miradas, diferentes colores, la diversidad de la vida caminando en cada lugar y rincón del

territorio y no sólo en la voz de los llamados voceros, consejeros, comisionados. Es decir, se requiere para estos tiempos UNA ASAMBLEA EN MOVIMIENTO.

Para lograr eso se requiere que todos sean voceros, o se retome una modalidad rotativa. La APPO y su consejo sean, de principio, espacios de coordinación de esfuerzos, pero se actúa con autonomía. Además, que la función será priorizar el trabajo de base y no sólo los mediáticos y que se atreva a ensayar las acciones de todo tipo, montar la radio móvil, cooperativas comunitarias e impulsar la desobediencia civil.

Además, que su funcionamiento no sea por consignas sino con demandas concretas de la gente y que todos los cargos sean rotativos.

Por la Reconstitución y Libre Asociación de los Pueblos

Oaxaca, ciudad de la Resistencia y la Rebeldía

Nuestros compromisos y retos

Organización burocrática vs organización de barricada

Pueden ser espacios complementarios no excluyentes, el problema es que se ha deslegitimado el segundo y sólo se valida el primero, lo que resta creatividad e involucramiento.

De nuestra parte seguimos y seguiremos fortaleciendo la APPO y respetando sus principios que le dieron origen desde el caminar de los pueblos, con sus tiempos y modos de resistencia y desde nuestra lucha por la autonomía.

Recrear lo que hasta ahora hemos logrado es el trabajo y será el quehacer cotidiano en lo individual y colectivo. Hay que recuperar y sistematizar la experiencia de la forma de organización de barricada, porque aprendimos que en ella hay un pleno ejercicio democrático, planteamiento de las necesidades concretas y solución comunitaria de ellas. La barricada es lo que se acerca según nuestro modo a la creación

de comunidad y es la construcción de comunidad la forma de resistencia que debemos consolidar.

Los caminos de la APPO

En el camino, los que los caminan piensan distinto y hablan diferente. Si en ese caminar queremos construir sólo lo que dicen unos y si rechazamos lo que piensan los y las otras caminantes, se equivocará el camino.

Pero esto implica también la discusión respecto de si la APPO es un proyecto de Poder Popular, de Gobierno Obrero, campesino y popular, o de construcción de autonomías. O bien, es todo junto y entonces lejos de competir, pero sin dejar la discusión nos vayamos ayudando en cosas concretas, y no porque no corresponde a nuestro proyecto los bloqueamos, silenciamos, calumniamos y demás.

Quienes concebimos al poder como una forma de controlar y no buscamos tener el poder por que no queremos ser como contra quienes luchamos ahora, queremos ser mujeres y hombres libres en esta tierra; los gobiernos sirven para proteger a los ricos por eso no buscamos ser gobierno, ni ser parte de la estructura del gobierno.

Pero lo que no queremos es ser parte de un sector al cual nos quieren reducir para pensar y actuar como obreros y campesinos solamente quitándonos nuestra identidad como pueblos y naciones primeras, por que los gobiernos nos quieren volver obreros, empleados de sus grandes hoteles, fábricas y empresas, robándonos y saqueando nuestros territorios a los cuales hemos y seguimos resistiendo para que esto no pase, pero si en la APPO se busca un gobierno obrero entonces harán el juego sucio a los gobiernos de exterminar a los pueblos y comunidades indígenas.

Por muchos años los gobiernos han pensado y actuado en exterminar a los pueblos indios de México y de Oaxaca, reducirlos a esclavos, en el mejor de los casos, a campesinos con una porción de tierra, desapareciendo la comunalidad; no buscamos ser gobierno, pensamos en la libre determinación de los pueblos y la autonomía tanto individual y colectiva del ser humano, como pensaban Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata, por eso los magonistas del CIPO RFM luchamos y soñamos por un mundo donde cada mujer,

niña, niño, hombre abuelo, abuela y la naturaleza vivamos felices, sin amos ni patrones.

La APPO será y seguirá siendo un movimiento sin líderes, un movimiento de valores, y no una estructura APPO que no deje caminar en el camino que quiera controlar todo lo que en ella se encuentre y desacreditar a otras luchas que también son justas. Tendremos que luchar no sólo por la caída de Ulises Ruiz, seguiremos luchando por acabar con el capitalismo, con los que se creen amos y dueños del mundo, por eso el camino de la APPO no es corto, es largo, y tendremos que prepararnos.

Los pueblos enfrentamos una lucha abierta a los intereses de los grandes señores del dinero, enfrentamos la lucha contra los proyectos neoliberales como el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área del Libre Comercio de las Américas (ALCA) que están destruyendo nuestro territorio y nuestra vida comunitaria. Esa es la lucha que hacemos, resistimos fortaleciendo y organizando nuestra autonomía, nuestra libre determinación, por todo eso hemos sido perseguidos y encarcelados, y hasta muertos hemos tenido.

Por eso decimos a los hermanos y hermanas que no nos engañemos creyendo que a través de la farsa electoral podremos lograr el cambio; si elegimos ese camino entonces estaremos legitimando a la estructura de gobierno asesino de Ulises Ruiz Ortiz y del sistema capitalista, quienes han asesinado y encarcelado y exiliado a muchos de nuestros hermanos y hermanas de Oaxaca.

Además estaremos negando nuestro derecho a la lucha pacífica en la calles para exigir nuestras demandas de justicia, de libertad, de democracia, y le estaremos entregando a una Cámara de diputados y a un hombre el destino de nuestras vida, y eso sería el fracaso de este gran movimiento social porque ningún hombre, por más bueno que sea, podrá abolir la pobreza: será el mismo pueblo quien tendrá que abolirla. Y toda lucha y demanda que sea realizada fuera de sus diputados y senadores serán llamadas ilegítimas y estarán legitimando la represión a estos movimientos y los llamarán los intransigentes, como siempre lo han hecho a lo largo de la historia, acusar a los magonistas.

Nuestra asamblea tiene que encontrar y entretejer los distintos colores, pensamientos y palabras que dan

vida al movimiento para que permita llegar a un acuerdo consensuado. Pero este acuerdo debe basarse en los valores y principios de la verdad, honestidad y respeto que sustentan al movimiento.

Por eso, para evitar que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sea aniquilada por el Estado, los hombres y mujeres tendremos que luchar no sólo contra los malos gobiernos y los ricos sino también tendremos que luchar contra nosotros mismos, es decir, contra nuestras miserias como humanos. Para lograr que APPO realmente sea el espacio donde la palabra y el actuar honesto sea el motor de la resistencia y de la lucha misma, tendremos que escucharnos los unos a los otros y trabajar en colectivo, tener los valores de la solidaridad, el apoyo mutuo, la guetza y construir la casa que queremos, la casa de los pueblos de Oaxaca.

**Por la Reconstitución y Libre Asociación de los Pueblos
Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón**